



A-5



FUNDACIÓN
JUANELO
TURRIANO

CATALOGADO

FUNDACION JUANELO TURRIANO
BIBLIOTECA



FUNDACIÓN
JUANELO
TURRIANO

R. 2802



FUNDACIÓN
JUANELO
TURRIANO

1

ESTUDIO
SOBRE EL
DESESTANCO DE LA SAL.



FUNDACIÓN
JUANELO
TURRIANO



ESTUDIO

SOBRE EL

DESESTANCO DE LA SAL

Y EL
RÉGIMEN LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO

MÁS CONVENIENTE PARA
LA INDUSTRIA SALINERA DE ESPAÑA.

MEMORIA PREMIADA

POR LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE MINAS

EN EL CONCURSO DE 1880,

Y PUBLICADA POR LA MISMA Á CUENTA DEL LEGADO GOMEZ PARDO,

POR EL

DR. D. JULIAN DE PASTOR Y RODRIGUEZ.



RAFAEL ARIZA

MADRID.

IMPRENTA Y FUNDICION DE M. TELLO,

IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.

Isabel la Católica, 23.

1880.

CATALOGADO

R. 2801
S. 4 ANT/18



FUNDACIÓN
JUANELO
TURRIANO

TEMA IV.

EXÁMEN DE LOS RESULTADOS QUE HAN PRODUCIDO LA LEY DE DESESTANCO DE LA SAL DE 16 DE JUNIO DE 1869, QUE EMPEZÓ Á REGIR EN 1.º DE ENERO DE 1870, Y LAS DISPOSICIONES POSTERIORES RELATIVAS Á LA EXPLOTACIÓN, FABRICACION Y VENTA DE ESTA SUSTANCIA.

QUÉ RÉGIMEN LEGAL, ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO ES MÁS CONVENIENTE PARA DESARROLLAR NUESTRA IMPORTANTE INDUSTRIA SALINERA AL MÁS ALTO GRADO POSIBLE, FACILITANDO AL ESTADO LOS MAYORES RECURSOS SIN DETRIMENTO DE LOS INTERESES GENERALES Y PARTICULARES.





PRÓLOGO.

Despues del extenso tema que precede, pocas palabras serán necesarias para mostrar cuáles son el objeto y propósito de la presente Memoria. Trátase de honrar la de un insigne patricio, el Sr. Gomez Pardo, cumpliendo á la vez su generosa y magnánima disposicion en pró del bienestar de su patria. La Escuela de Ingenieros de Minas, fiel é ilustrada ejecutora del benéfico legado que aquel hiciera para fomentar en nuestra nacion los estudios relacionados con el Instituto de aquella, ha propuesto importantes temas, destinados á procurar la solucion de problemas difíciles y utilísimos, y dar impulso á los trabajos científicos relacionados con la minería. Entre esos interesantísimos asuntos se encuentra el que tiende á determinar el régimen á que deberia sujetarse la industria salinera en nuestra nacion para que pudiese llegar al más alto grado de prosperidad.

El asunto no puede ser más importante ni más fecundo en provechosos resultados, una vez que se acierte con la verdadera solucion. Trátase, en efecto, de promover el desarrollo de una industria que cuenta en nuestra patria con las más ventajosas condiciones: las salinas, espumeros y salobrales encuéntranse prodigados de tal modo en nuestro suelo que, sobre todo de determinadas localidades, bien ha po-



dido afirmarse se hallan cubiertas por una inmensa capa de sal; la explotacion es en muchas ocasiones fácil y poco costosa; las cantidades que pueden obtenerse son susceptibles de abastecer extensísimos mercados; y su calidad la coloca fuera del alcance de toda competencia. ¿Cómo, pues, no ha de ser importante en sumo grado todo lo que se dirija á fomentar esta colosal riqueza? ¿Cómo no ha de interesar vivamente este problema, que tiende á la vez á suministrar al Estado recursos abundantísimos, fundados sobre la sólida base del acrecentamiento de la riqueza nacional?

He aquí, pues, la explicacion del presente trabajo que sometemos al benévolo juicio de nuestros lectores. Impelidos por nuestra aficion á esta clase de estudios, acometemos la difícil empresa de escribir sobre ese interesantísimo asunto, bien convencidos, sin embargo, de los graves obstáculos que hemos de encontrar en nuestro camino. El escaso número de obras consagradas á desarrollar la cuestion que nos sirve de asunto; lo encontrado de las opiniones, así en el órden teórico como en el práctico; y lo trascendental y difícil del problema, nos han empeñado en una larga série de investigaciones cuyo resultado nos proponemos consignar en el curso de esta Memoria. ¡Ojalá que el acierto corresponda á nuestro buen propósito y á la recta intencion que dirige nuestra pluma!



CAPÍTULO PRIMERO.

Necesidad de conocer los antecedentes de la legislacion relativa á la industria salinera.—Legislacion romana.—Estado del derecho hasta Don Alfonso X.—Derecho de Partidas.—Leyes dictadas por Alfonso XI y sus inmediatos sucesores.—Reforma introducida por los Reyes Católicos.—Indicaciones sobre el derecho vigente en Aragon.

El exámen de los resultados producidos por la ley de desestanco de la sal y las disposiciones posteriores que regulan el régimen administrativo de la misma, debe constituir el primer objeto de nuestro estudio. Podríamos dedicar nuestra atencion á él fijándonos exclusivamente en el período posterior al año 1869, prescindiendo en absoluto de la legislacion precedente; empero juzgamos que nuestro trabajo quedaria incompleto y falto de los antecedentes indispensables para formar concepto cabal y fundado de la materia. Las reformas, en especial si son de gran importancia y trascendencia, las innovaciones radicales, las leyes todas, no surgen sin razon ó motivo, ni repentinamente, ni sin relacion alguna con el estado anterior; sino que, por el contrario, viénense preparando desde tiempo más ó ménos remoto; la experiencia las madura, y el conocimiento de lo defectuoso ó absurdo de la situacion precedente allana el camino para la constitucion definitiva de las mismas. Esto es lo que sucede de ordinario y lo que ha acontecido tambien en la materia que nos ocupa; y no es posible, por tanto, que hagamos caso omiso de cuanto se refiere á la legislacion que precediera á la novísima de libertad, ni juzgamos



fuere otra la mente que presidió al redactar el tema objeto de nuestras investigaciones. Sólo de esta manera podremos apreciar debidamente y en toda su extension la nueva era que se inauguró diez años há y nos será dado descender hasta el fundamento y más profunda raíz de las disposiciones novísimas.

No traspasaremos, sin embargo, los límites que señalan á esta parte de nuestro trabajo las consideraciones que acabamos de indicar. Nos limitaremos á trazar un pequeño bosquejo de nuestro derecho relativamente á la explotacion, fabricacion y venta de la sal, aunque ascendiendo á los tiempos más remotos, en cuanto juzguemos indispensable para adquirir un conocimiento exacto de las vicisitudes por las que atravesará hasta llegar á nuestra vigente legislacion, y pueda ser necesario ó útil para el completo estudio de la misma.

No hemos visto que ninguno de los escritores, no muy numerosos por cierto, que se han ocupado de la historia de nuestra legislacion sobre la industria salinera, haya comenzado por exponer la que rigió en Roma; pero á pesar de esto, y de no ser propensos á separarnos de la opinion de los escritores respetables, juzgaríamos que dejábamos incompleto este estudio y que no habíamos penetrado hasta la base y fundamento de nuestro derecho, si relegáramos completamente al olvido el de Roma. Son, en efecto, tan numerosos é importantes los puntos de contacto que se notan entre el derecho romano y el español; obedecen ambos á principios tan perfectamente iguales, que no tememos afirmar que hasta la ley de 1869 España se ha regido por una legislacion informada ordinariamente por el mismo espíritu y vaciada casi en los mismos moldes que la romana.



El dato más antiguo que poseemos acerca de la legislación romana, relativamente á la materia que nos ocupa, se remonta á la época del cuarto de los reyes del pueblo legislador, de aquel pueblo cuya memoria apenas puede separarse de nosotros cuando nos dedicamos á investigaciones sobre el derecho de nuestra patria. Anco Marcio, segun el testimonio de Tito Livio ⁽¹⁾, despues de haber tomado á los de Veyes el bosque Mesia, extendido su dominacion hasta el mar y fundado á Ostia, á la embocadura del Tíber, estableció salinas alrededor de esta ciudad ⁽²⁾. Plinio, ademas de confirmar este dato, añade que Anco Marcio distribuyó al pueblo seis mil modios de sal, y fué el primero que estableció las salinas ⁽³⁾.

En los primeros años de la república se reservó el Estado el monopolio de la sal, segun consta del testimonio del mismo Tito Livio ⁽⁴⁾. Dos consideraciones á cual más importantes surgen de este dato: es la primera, que si bien no tenemos ningun documento que lo manifieste así expresamente, durante la monarquía el comercio de la sal debió ser completamente libre; y la segunda se refiere al motivo que impulsó al Estado á reservarse ese monopolio, el cual no fué

(1) Silva Mæsia Veientibus adempta, usque ad mare imperium prolatum, et in ore Tiberis Ostia urbs condita: salinæ circa factæ..... *Historia romana*, I-33.

(2) No conocemos testimonio alguno en que puedan fundarse algunos escritores, como el autor *De vir. illustr.* y Crinitius *De honesta disciplina*, para sostener que Anco Marcio fué el que estableció el primer impuesto sobre la sal; pues los documentos que poseemos y que aducimos dan á entender todo lo contrario.

(3) Ancus Marcius rex salis modios sex mille in congiario dedit pópulo, et salinas primus instituit. *Hist. nat.*, xxxi-41.

(4) Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, ni publicum omne sumptum, adeptum privatis.—Obra cit., II-9.



seguramente el propósito de aumentar los ingresos del Tesoro, como ha supuesto alguno ⁽¹⁾, sino el deseo de poner límite al alza artificial que habían conseguido imprimir al precio de este artículo los particulares. Corriendo los siglos veremos plantear en España el estanco fundándole en idéntica razón.

En el siglo vi se estableció un impuesto sobre la sal, ó, mejor tal vez, se aumentó el precio á que la misma se vendía. Este aumento ó recargo, impuesto por los censores M. Livio y C. Cornelio Neron, consistía en una cantidad variable, según las localidades, fuera de Roma, así como en las ferias y mercados; de suerte, que el precio de la sal, que antes era de un sextante en Roma y en el resto de Italia, aumentó en ésta según los lugares, subsistiendo sin alteración en la ciudad. Tito Livio refiere el gran disgusto que este recargo produjo en el pueblo, el cual buscando la razón de semejante proceder, creyó encontrarla en una venganza que del mismo se proponía tomar el censor Livio. Habiendo sido éste cónsul, junto con Paulo Emilio, y hecho ambos la guerra contra los ilirios, fueron sometidos á juicio al volver á Roma, por imputárseles una desleal distribución del botín entre los soldados; y como fuese condenado Livio, aunque injustamente en concepto general, concibió tal despecho que se retiró de la vida pública, dedicándose á cultivar sus tierras hasta que más tarde es reelegido cónsul y luego censor. Esto podía explicar la venganza que se atribuía á Livio y el consiguiente enojo del pueblo, el cual creía que las tri-

(1) Con fundado motivo censura Ihering, en su muy notable obra *L'esprit du droit romain* (trad. Meulenaere, tomo II), la conducta de los que, como Drackenborch, se esfuerzan por atormentar y atribuir equivocados sentidos, cual el que citamos en el texto, á un testimonio tan claro.



bus que habian contribuido á su condenacion resultaban más recargadas; empero, ¿no demuestra todo ello, en último término, la repugnancia con que se recibia el recargo de ese artículo de primera necesidad? Además de lo dicho, nos autoriza para juzgar así el mismo título de "Salinator," que, por befa, le dió el pueblo ⁽¹⁾, con el que ha pasado á la historia, y que se hizo hereditario en su familia ⁽²⁾.

Si hubiéramos de atender á los términos en que generalmente se refiere este hecho, deberíamos sospechar cuando ménos, que desde esta época cesó el monopolio de la sal, puesto que se habla de impuestos cuya existencia no se concibe en aquel estado, ó, acaso mejor, que habiéndose abolido aquel monopolio en época anterior, se habia recargado en ésta el tributo que se venia pagando por dicho artículo, pues existe quien interpreta las palabras del historiador romano en el sentido de que los censores establecieron un nuevo impuesto. Juzgamos, no obstante, que las palabras del texto aludido son suficientemente claras para excluir en absoluto la idea de la abolicion del monopolio. ¿Tuvo ésta lugar en tiempo posterior? En este punto encontramos divididas las opiniones. Alguno hay que afirma aconteció así ⁽³⁾, aunque acaso no pueda sostenerse de una manera tan abso-

⁽¹⁾ Smith.—*Diction. de biograph. mythol. et geograph. ancienne.*—Trad. Theil, tomo I.

⁽²⁾ He aquí las palabras textuales del notable pasaje de Tito Livio: «Sextante sal et Roma et per totam Italiam erat. Romæ pretio codem, pluris in foris in conciliabulis, et alio alibi pretio præbendun locaverun. Id vectigal commentum alterum ex consoribus satiscredebant, pópulo iratum, quod iniquo iudicio quondam damnatus esset: et in pretio salis maxime oncratas tribus, quarum opera damnatus erat, credebant. Inde Satinatoris Livio inditum cognomen.» (Obra cit. xxix-37.)

⁽³⁾ Ruperti.—*Andbuch.*



luta, sobre todo cuando no poseemos documentos en qué pueda apoyarse tal aseveracion de un modo sólido. Otros, por el contrario, niegan rotundamente que se llegara á abolir jamas en Italia el monopolio de la sal⁽¹⁾.

Por nuestra parte, no consideramos fácil resolver esta cuestion, atendiendo al reducido número de datos que poseemos. Dedicados los jurisconsultos romanos, casi de un modo exclusivo, al derecho civil desde el establecimiento del Imperio, apenas se han conservado en los grandes Códigos de Justiniano fragmentos referentes al administrativo, y acaso ninguno entre ellos que pueda ilustrar la presente cuestion. Procuraremos utilizar, sin embargo, los escasos antecedentes que conocemos y las deducciones que de ellos surjen. Desde luego no concebimos que la época del Imperio fuese la más á propósito para prescindir de los rendimientos que la venta exclusiva de la sal venia produciendo al Estado; harto conocidos son el aumento que experimentaron y la extension que adquirieron los tributos bajo la dominacion imperial, para que podamos presumir se aboliera esta fuente de ingresos. Tampoco es posible suponer que semejante reforma obedeciera al propósito de acrecentar los rendimientos por el mayor desarrollo de la industria salinera al encontrarse libre del monopolio del Estado, pues si á la altura que hoy alcanzan los conocimientos económicos, ese principio constituye una verdad fundamental y casi axiomática de la ciencia, no es compatible tal hipótesis con las ideas dominantes en Roma sobre la materia.

Parécenos, sin embargo, que, á traves de las tinieblas en que se halla envuelta esta parte de la legislacion roma-

(1) Tal sucede con Ihering que, en la obra citada, considera falta de fundamento la opinion de Ruperti.



na, dejan vislumbrar alguna luz ciertos textos de las Pandectas. Juzgamos, en efecto, como un hecho perfectamente comprobado, que las salinas existentes en terrenos de particulares eran de propiedad privada de los dueños de los mismos. Así vemos se establece que las salinas que se hallen en los predios, deben inscribirse en el censo⁽¹⁾; que si el pupilo tiene salinas, el tutor no puede enajenarlas⁽²⁾; y que si se dejase á la mujer el usufructo de las salinas, se comprende en él la sal existente en las mismas⁽³⁾.

Empero á la vez que de un modo tan terminante se declara que las salinas pueden ser objeto de propiedad privada, excluyendo el monopolio de la fabricacion y explotacion de las mismas, se comprenden entre las rentas públicas las procedentes de estas últimas⁽⁴⁾. Tomando, pues, como base estos dos principios, que juzgamos completamente ciertos, ¿no podria llegarse á una solucion aproximada á la verdad en el problema que estudiamos? Insistiendo en las consideraciones expuestas, nos atrevemos á aventurar una opinion á falta de otras más fundadas y exactas. El Estado conservó en Roma constantemente el monopolio de la venta de la sal; pero no el de la fabricacion ni el de la explotacion. Nótese que los testimonios de Tito Livio, anteriormente citados, se refieren única y exclusivamente á la venta; y que carecemos absolutamente de todo documento que pueda servir de base á otra suposicion. Si se admitiese la idea que acabamos de apuntar, juzgamos que la explicacion de los textos citados sería tan clara como satisfactoria. Se permi-

(1) § 7., ley 4.^a, tít. xv, lib. L. Dig.

(2) § 1, ley 5.^a, tít. ix, lib. XXVII. Dig.

(3) § 2 y 3, ley 32, tít. ii, lib. XXXIII. Dig.

(4) Ley 17, tít. xvi, lib. L. Dig.



tia á los particulares la libre fabricacion de la sal y la explotacion de las salinas; pero reservándose exclusivamente el Estado la facultad de venderla; y por tanto, se hallaba autorizado para expenderla al precio que él mismo fijase, y que podria ser tan elevado como lo consintieran las circunstancias y lo exigiesen las crecientes necesidades públicas.

Por lo demas, parece indudable, ya se atiende á la conducta que seguia Roma generalmente con los vencidos, ya á lo que consigna Tito Livio sobre la reforma introducida por los censores, que no todas las localidades gozaban de la misma condicion é idénticas ventajas en cuanto á la adquisicion de la sal; y que existian ciertas limitaciones más ó ménos extensas por lo que hace á la importacion ó compra de la misma. Así vemos que Paulo Emilio prohíbe á los macedonios la importacion de la sal ⁽¹⁾; y permite á los dardanos comprar sal á aquellos para dulcificar la negativa de la Peonia que aquellos solicitaban ⁽²⁾.

Tal es el límite á que han llegado nuestras investigaciones sobre el derecho romano relativamente á la industria salinera, límite á la verdad harto más reducido de lo que deseáramos, empero que acaso alcance á sacar algun tanto de la oscuridad esta no despreciable rama de la legislacion de Roma. Por lo que hace especialmente á nuestro objeto en este trabajo, constituyen las indicaciones hechas el punto de partida de la legislacion patria. Sometida nuestra nacion, tras guerra porfiada y sin ejemplo, al coloso romano, la hábil política del dominador y, tal vez, más aún, el reconocimiento de la perfeccion de su derecho, que ha llegado á de-

(1) «Et sale invecto uti vetuit.» Tito Livio, XLV-29.

(2) «Post non impetratam Pæoniam, salis commercium dedit.» Tito Livio, *lug. cit.*



nominarsen *la razon escrita*, hicieron que, si al principio las águilas romanas encontraron la más formidable resistencia, y sólo despues de grandes descalabros llegaran á posarse en nuestro suelo pasando por montes de ruinas y lagos de sangre, realizada la dominacion, fuese acaso el pueblo que más tenazmente se adhiriera al derecho de los vencedores. Este debió ser, sin duda, el que rigió en nuestra patria hasta el momento de la invasion de las tribus del Norte.

Sabido es que al formarse las nuevas nacionalidades con los restos de aquel vastísimo imperio, que estallara en mil fragmentos á impulso del violento choque con las armas de los bárbaros, España siguió rigiéndose por el derecho romano, derecho que obtuviera el raro privilegio de merecer le respetasen aún aquellos mismos que acababan de constituirse en dominadores y dueños absolutos. Consta asimismo, que si la condicion de las personas sufrió modificaciones más ó ménos extensas, respecto á lo que fuera anteriormente, no sucedió lo mismo con la del territorio. No encontramos, pues, motivo para suponer fundadamente que experimentara alteracion el derecho romano que regulaba la explotacion y venta de la sal. Ciertó es que tampoco puede citarse testimonio alguno que de un modo positivo lo confirme; mas en vano pretenderiamos alcanzar otra cosa que fundadas conjeturas, tratándose de época tan remota y vacía de monumentos históricos.

Una nueva invasion, de que presenta pocos ejemplos la historia, cambia por completo la manera de ser de nuestra patria y reduce á polvo en breves dias el magnífico edificio de la civilizacion visigoda, tan laboriosamente levantado. No es empresa fácil, ni casi posible por falta de datos, deslindar el estado de la legislacion española sobre la industria



salinera á partir de la época de desórden y trastorno producidos por los acontecimientos que sobrevinieron á la infausta rota de Guadalete. Por lo que hace á la parte de nuestro territorio ocupada por los fanáticos sectarios de Mahoma, ignoramos completamente las leyes que rigieran durante el triste período de su dominacion, si bien puede presumirse, supuesta la conducta general de los mismos, que permitirían de ordinario á los vencidos gobernarse por sus antiguos códigos, aunque no de un modo tan universal y constante que no dependiera en gran parte de las condiciones de los jefes de cada localidad. En cuanto á aquel puñado de valientes, héroes incomparables de la epopeya de Covadonga, puede conjeturarse fundadamente que lo crítico de las circunstancias que les obligara á refugiarse en las ásperas montañas de Astúrias para lanzar desde allí el primer grito de independencia que habia de resonar más tarde hasta en el más apartado confin de la Península, no daría tregua ni espacio para pensar en la formacion de nuevas leyes; y por tanto, debieron continuar gobernándose por sus tradiciones y antiguas reglas. Consta, por otra parte, la aplicacion que se dió al Fuero Juzgo desde aquel momento; y no contentándose en ese insigne monumento de la legislacion visigoda disposiciones relativas al asunto que nos ocupa, no es posible suponer tampoco, que si en general se siguió el antiguo derecho, hubo de innovarse por ulteriores disposiciones el observado anteriormente sobre las salinas. Hasta las mismas condiciones del territorio en que tiene su cuna la nueva dinastía de D. Pelayo, podrian tal vez suministrar-nos una confirmacion de que no hubo motivo para ocuparse especialmente de las salinas, ni mucho ménos para alterar el anterior derecho.



Si esto debió acontecer en los primeros momentos que suceden á la invasion, no permiten admitir que se adoptase diferente rumbo más adelante las luchas porfiadas y sin tregua que aquellos heróicos defensores de la idependencia española, escasos en número y faltos de recursos, se veian precisados á sostener contra las copiosas y aguerridas huestes agarenas. Una idea, un sólo pensamiento dominaban exclusivamente en aquellos denodados campeones de nuestra libertad; y ese pensamiento era expulsar á los enemigos de nuestra idependencia y de nuestra religion. No busquemos, pues, en aquella época tan azarosa como colmada de gloria, nada que pueda referirse al objeto de nuestras investigaciones, ya que, si bien importante, no podia ocupar la atencion de aquellos esforzados guerreros.

La gigantesca obra de la reconquista avanzaba entretanto, aunque lentamente; cada palmo de terreno costaba á los nuestros sacrificios innumerables, incluso el de su vida; pero al fin el territorio dominado por la media luna veíase cada dia disminuido en una extension que, si bien corta, contribuia á engrandecer la España cristiana y á mermar la que gemia bajo el yugo de los árabes. En la época en que llegó ya á adquirir notable importancia y desarrollo la colosal empresa de la restauracion de nuestra libertad, descúbrese el gérmen de dos hechos que estaban llamados á ejercer grande influjo en los tiempos posteriores y que caracterizan este período. Por un lado los monarcas recobran sobre el territorio la soberanía que por el nuevo título de la reconquista se entendió debiera corresponderles; y por otro los nobles, que tan gran parte habian tomado en la gloriosa cuanto difícil lucha, reciben de los reyes como merecido galardón considerables privilegios. El primer hecho puede ex-



plicar el dominio exclusivo de las salinas que se atribuyen los Reyes; así como el segundo las mercedes otorgadas á los particulares.

Partiendo de estas ideas no deberá extrañarnos que en el inmortal Código del Rey Sabio se consigne de una manera explícita y absoluta que las rentas de las salinas son de los Emperadores y Reyes, á quienes se otorgaron para que con sus productos se mantuviesen honradamente, pudiesen amparar sus tierras y reinos, guerrear contra los enemigos de la fe y evitar el imponer á los pueblos nuevos tributos y gravámenes ⁽¹⁾. Nótese bien ante todo que en esta ley no se declara que desde aquel momento debieran considerarse las salinas como propiedad de la Corona, sino que, por el contrario, se limita á consignar que son de los Reyes y que se les dieron para los fines que indica, como si se tratase no ya sólo de un derecho previamente establecido, sino que venia rigiendo de tiempo inmemorial y fundado en la misma naturaleza de las cosas. Aun en la redaccion de toda la ley citada se descubre que el dominio atribuido á los Reyes, especialmente mediando el nuevo título de la conquista, es el fundamento que sirve de principal base á la disposicion de la misma. A esta razon se agrega otra, de índole distinta, tambien expresada en la misma ley: la necesidad de proporcionarse recur-

«Las rentas de los puertos, é de los portazgos, que dan los mercados por razon de las cosas que, ó sacan ó meten en la tierra é las rentas de las salinas, é de las pesqueras, é de las ferrerías, é de los otros metales, é los pechos, é los tributosque dan los omes, son de los Emperadores, é de los reyes, é fuéronles otorgadas todas estas cosas porque oviesen con que se mantoviesen honradamente en sus despensas, é con que pudiesen amparar sus tierras, é sus reinados, é guerrear contra los enemigos de la fe, é porque pudiesen excusar á sus pueblos echarles muchos pechos ó de facerles otros agravamientos.» Ley 11, tít. xxviii, Part. 3.



sos para atender á los cuantiosos gastos que originaba un estado permanente de guerra, dada la escasez de los medios disponibles. No extrañará, seguramente, que así sucediera al que considere que muchos siglos despues no ha sido otra la principal razon que ha sostenido el estanco de la sal. Reservándose el Rey de un modo exclusivo la renta de las salinas, se juzgó podian evitarse otras impuestas más onerosas. También la facilidad con que, segun parecer de algunos, se soporta ese gravámen, contribuyó á sostener en tiempos posteriores el monopolio del Estado.

Consta, sin embargo, que aunque se consideraron las salinas comprendidas en la regalía inmanente, tenia facultad el Rey para hacer concesiones y otorgar gracias ó mercedes de todas las cosas que la misma abrazaba, por más que se impusieran algunas limitaciones, como la de que para su subsistencia hubiera de obtenerse la confirmacion del sucesor en el trono⁽¹⁾. No parecerá inverosímil que en los pactos solemnes establecidos entre los monarcas y los que se ofrecian á la repoblacion de los territorios rescatados á los árabes, se comprendieran las salinas ó la fabricacion y explotacion de la sal, incluyéndolas acaso en las fuentes ó pozos de que se habla en las cartas-pueblas, si bien en las mismas no se hace mencion expresa de tal derecho. Consta, empero, de un modo indudable, que se hicieron numerosas concesiones de toda clase de minas y de los demas derechos comprendidos en la regalía á favor de particulares. Prueba irrecusable de ello son las disposiciones que se dictaron más adelante, de las que nos ocuparemos en breve, para limitar ó revocar las concesiones otorgadas en los tiempos anterio-

(1) Ley 5, tit. xv, Part. II.



res, tal vez con mano excesivamente pródiga ⁽¹⁾. Y si es exacto lo que se consigna en la Crónica de D. Alfonso, no sólo nos suministra una nueva confirmacion de la verdad de nuestro aserto, sino que da á conocer lo antiguo del sistema de concesiones. Refiérese, efectivamente, en aquel notable monumento histórico, que habiendo incorporado D. Alfonso al real patrimonio todas las salinas de sus estados, los ricos-hombres se quejaron de esta novedad y le suplicaron que dejase la sal y el hierro conforme habia estado en el reinado de su padre ⁽²⁾.

D. Alfonso XI, al celebrar las renombradas Córtes de Alcalá, en los confines de la primera mitad del siglo xiv, estableció de un modo terminante, y aún más explícito, si cabe, que el Rey Sábio, que todas las aguas y pozos salados destinados á la fabricacion de la sal con toda la renta de los mismos fueran del Rey, exceptuando únicamente las que el monarca hubiese concedido por privilegio ó se adquirieran por prescripcion ⁽³⁾. No se alteró, pues, sustancialmente el derecho consignado en las Partidas, limitándose la importancia de dicha ley á establecer en la legislacion positiva un precepto que no habia comenzado á regir aún por no llegar á tener vigor el Código de D. Alfonso X. Desde este momento veremos que los sucesores de aquel monarca confirmaron repetidamente el derecho exclusivo de la corona para explotar, fabricar y vender la sal. Respétanse, sin em-

(1) Leyes 17, tít. x, lib. V.—2, tít. xiii, libs. VIII y XIX, tít. viii, libro IX, Recop.

(2) Crónica de D. Alfonso, cap. xxxvii.

(3) «Todas las aguas, é pozos salados que son para facer sal, é todas las rentas dellas, rindan á nos, salvo las que dió el Rey por previllegio, ó las ganó alguno por tiempo en la manera que debia.» Ley 48.—*Orden. de Alcalá*.—Ley 2, tít. xiii, lib. VI, Recop.



bargo, en el Ordenamiento los derechos adquiridos en virtud de privilegio ó prescripcion por los particulares, disposicion que dió lugar á numerosas reclamaciones por los límites que imponia al anterior estado de cosas; y motivó en los años posteriores hasta el reinado de Felipe II diversas leyes encaminadas á cercenar esos privilegios que alteraban la pureza de la regalía de la corona.

Consecuencia natural de este sistema monopolizador fué el que hubieren de proveerse de sal los pueblos por medio de personas autorizadas competentemente por el Rey, y que recibian el nombre de *albareros*. No se tardó mucho, sin embargo, en reconocer los inconvenientes que resultaban de tal sistema de administracion: los albareros fijaban el precio que debia tener la sal en cada una de las poblaciones, dándose ocasion con ello á mil arbitrariedades, á más de los coechos á que tan bien se prestaba esta práctica, sin contar el que desde luego se inferia á los pueblos por la diferencia de precios. Todo ello habia obligado al mismo Rey Alfonso XI á suprimir los albareros y á establecer depósitos ó alfolíes en los puntos que juzgó más á propósito, segun se deduce de la peticion hecha al mismo en las Córtes de Alcalá de 1347. Mas no cesaron los males por el establecimiento de los alfolíes, ni las reclamaciones consiguientes. Los mismos se habian establecido en Jerez, Trujillo, Plasencia, Béjar, Coria, Cáceres y otros puntos de Extremadura, Alcaráz, Villa-Real ó Ciudad-Real, y en la frontera de Portugal, obligando á cada pueblo á surtirse de determinados alfolíes. Resultaban de aquí grandes vejaciones para los pueblos, que se veian en la necesidad de proveerse de sal en puntos distantes ó incómodos, cuando pudieran hacerlo cómodamente ó en alfolíes más próximos;



y hasta parece que no causó el mejor efecto en algunos la novedad introducida. Por eso que en las referidas Córtes de 1347 se pidió que desapareciesen los alfolíes y que cada uno se proveyera de sal de donde mejor le pareciere ⁽¹⁾. No accedió el Monarca á la supresion de los alfolíes que estableciera precisamente para que desapareciesen las albarezas, que venian suscitando las más amargas y repetidas quejas, fijándolos en los puntos en que entendió eran más convenientes; pero en vista de la reclamacion hecha ofreció estudiar el asunto para que pudiera determinarse con acierto los alfolíes que debieran subsistir y los lugares en que conviniera existiesen ⁽²⁾.

La forma de la administracion y cobranza de la renta de las salinas dió lugar á nuevas y no ménos fundadas reclamaciones. A fin de aumentar los ingresos cuanto fuera posible, se acostumbraba á echar repartimientos de sal, determinando la que cada pueblo debia consumir; y llegó á desplegarse tal rigor en este punto y á repartir cantidades tan superiores al consumo, que, al verificarse las célebres Córtes de Alcalá de 1348, se hubo de pedir por los procuradores un remedio para estos males. Quejáronse en primer lugar de que á algunos pueblos se echaba mayor cantidad de sal que la debida, conforme á las cartas reales en que se fijaba la cuantía, de suerte que, aunque en estas se hubiere rebajado el repartimiento, se exigia con arreglo al primitivo. Se lamentaban en segundo término de que si no satisfacian á razon de la cantidad total señalada en los primitivos repartimientos, les tomaban en prenda todo lo que les hallaban, y

(1) Peticion 13.

(2) Gallardo.—*Orígen, progresos y estado de las rentas de la corona de España*, tomo VII.



lo mismo hacian si despues no volvian á las mismas salinas sino que compraba cada uno la sal en sus propios lugares; resultando con frecuencia de estas prendas, muertes de personas y ganados, agravios, cohechos, causas que debian seguirse en la córte originando grandes costas que no podian satisfacer, y, por último, la despoblacion de los lugares con grave daño del reino y deservicio del rey. Para atajar tamaños abusos y males, proponian que no se vejase á los pueblos que habian pagado ó estuvieren dispuestos á pagar lo que se hubiere señalado por las cartas reales; y que para lo sucesivo se estableciese que todos pudieran tomar sal libremente de cualquiera salina, como siempre se habia acostumbrado á hacer en tiempo de los anteriores monarcas y aún del mismo Alfonso XI. Este se limitó á contestar que, en lo relativo á la cuantía de la sal mandaba se observase lo contenido en su carta, en que establecia una cantidad menor para ciertas villas; y que por lo que se referia á lo sucesivo, ordenaria lo que viera cumplia más para evitar que recibiesen agravio ⁽¹⁾. Otra peticion hecha en las mismas Córtes da á conocer el excesivo rigor con que se procedia en la administracion de la renta que nos ocupa. Pidióse en efecto, que cuando se hiciese la investigacion ó *escodriño* de la sal no se impusiese pena á quien no se encontrase más de media fanega, á cuya peticion accedió el Rey ⁽²⁾.

Si á estas reclamaciones daba lugar por parte del pueblo la administracion de esta renta, no dejaron de hacerse otras en diferente sentido por los ricos hombres y demas personas á quienes se habian mermado sus antiguos privilegios por la ley antes citada de Alfonso XI. Ya hemos apun-

(1) Peticion 50.

(2) Peticion 26.



tado las quejas y peticiones que á este monarca se hicieran en tal sentido; pero no habiendo producido efecto, se renovaron en las Córtes celebradas por sus inmediatos sucesores. Consta, efectivamente, que al reunirse las de Valladolid en 1351, los ricos hombres y prelados representaron al rey D. Pedro que su antecesor D. Alfonso había despojado de las salinas á las iglesias y monasterios, por consejo que le diera D. Gonzalo Martinez; y pidieron se les reintegrase en el pleno aprovechamiento de las mismas. Mas por muy poderosas que fueran las razones que en apoyo de tal pretension se alegaran, el rey manifestó no podia acceder á lo que en ella se pedia, dando como fundamento el que de otro modo se disminuirían considerablemente sus rentas⁽¹⁾. No habiendo conseguido el resultado que se apetecia al hacer tal peticion, aparece reiterada en las Córtes que D. Juan I celebra en Búrgos el año 1379⁽²⁾. Inútiles eran, sin embargo todos los esfuerzos que de continuo se hacian para sostener en su pleno vigor los privilegios alcanzados en épocas anteriores. Desde que D. Alfonso había declarado de un modo solemne el dominio exclusivo del rey sobre las salinas, tendiendo á disminuir los derechos adquiridos por los particulares, todos los monarcas le siguen por esa senda, y propenden en todas sus disposiciones á la consolidacion de la obra comenzada en las Córtes de Alcalá. Por esta causa, lejos de acceder D. Juan I á la peticion que se le dirigia, conservó en toda su eficacia la ley del Ordenamiento; y los sucesores de este Monarca veremos que hacen los mayores esfuerzos por imponer las más extensas limitaciones que les era posible á los derechos que todavía lograron disfrutar algunos.

(1) Peticion 5.^a

(2) Peticion última.



Mas no se juzgue por lo que acabamos de decir que si se trató de poner coto á los derechos ejercidos por ciertas clases, no se otorgaron en casos concretos numerosas gracias á ciertas personas. Las mercedes y donaciones hechas por los Reyes á los particulares iban cada dia en aumento, llegando al último límite la prodigalidad en el reinado de D. Enrique, que les diera nombre en la historia. Este doble monopolio del Estado, por una parte, y de los caballeros y ricos hombres, por otra, constituia una situacion harto más perjudicial aún que la en que sólo los Monarcas ejercieran su regalía; y por ello se levantaron fuertes protestas y enérgicas y repetidas reclamaciones en las Córtes celebradas por el referido D. Enrique, especialmente en las últimas de su infausto reinado. En las que tuvieron lugar en Ocaña el año 1369, en Santa María de Nieva el 1373 y en Toledo el 1380, los procuradores suplicaron que, siendo muchas é inmensas las donaciones y mercedes que el referido Monarca habia hecho de toda clase de rentas, y entre ellas de sal y salinas, de donde resultaban grandes daños, proveyese á su remedio, pues no pocas de dichas mercedes se habian hecho de un modo inconsiderado, movido por las grandes necesidades que se experimentaban y fueron arrancadas por medios de cuestionable rectitud. No se puso remedio alguno á este mal, á despecho de tan justas reclamaciones; y, antes bien, continuaron haciéndose muchas y desordenadas mercedes, segun se dice en la pragmática de que nos estamos ocupando.

Al subir al trono los Reyes Católicos y pretender organizar la desconcertada administracion del reino, encontráronse grandemente disminuido el patrimonio real y casi por completo enajenadas las rentas; por lo cual, y no pudiendo



de otra suerte atender á las muchas necesidades de sus pueblos, se vieron obligados á exigir nuevos y grandes tributos, á tomar á préstamo á las iglesias, monasterios y concejos, á imponer onerosísimos gravámenes á estos últimos y hasta á enajenar gran parte de las exiguas rentas que lograron subsistir despues de tamaña prodigalidad. La consideracion de tan grandes males fué causa de que D. Fernando y Doña Isabel concibieran el firme propósito de aplicar con mano fuerte un remedio tan poderoso y eficaz como exigia lo crítico de la situacion. Los procuradores por su parte clamaban incesantemente porque se pusiera término á tal estado de cosas, contribuyendo así á dar más fuerza aún á las resoluciones ya de suyo ordinariamente enérgicas de los ilustres monarcas. Ordenaron, pues, estos se abriese una informacion de las mercedes otorgadas por D. Enrique desde mitad de Setiembre de 1464, en que empezó el desórden en la administracion, hasta el final de su reinado; y de ella resultó que gran número de las mismas adolecian de gravísimos vicios de nulidad, habiendo sido alcanzadas por medios reprobados ó fundándose en motivos insuficientes. La revocacion de estas mercedes y aún de aquellas otras concedidas con exceso por los Reyes Católicos en los primeros años de su reinado á causa de las muchas necesidades que encontraran y del deseo de no gravar más á sus súbditos, fué la idea que dominó desde entonces á los mismos. Para realizarla, teniendo en cuenta lo árduo de la empresa, hicieron se notificase á los principales prelados y grandes del reino, convocándolos á Córtes y ordenando que los que no pudiesen asistir manifestaran su parecer. Hízose así; y, despues de oida la opinion de todos y meditado maduramente la resolucion que debiera adoptarse, acordaron las mercedes



que debieran subsistir, mandando se expidiesen las correspondientes cartas á los agraciados, y que se cumplieran estas sin necesidad de nuevas órdenes ⁽¹⁾.

Con el fin de hacer más productivo este ramo de ingresos, los Reyes Católicos reproducen, confirman y amplían las disposiciones que habian dictado sus predecesores prohibiendo la introduccion en el reino de la sal y otros productos. No era efectivamente nuevo el contenido de esta pragmática, pues D. Pedro en las Córtes de Valladolid, Don Juan I en las de Guadalajara, D. Enrique III en Tordesillas, y el mismo Enrique IV en Toledo, habian prohibido que se introdujese sal de Aragon, de Navarra, de Portugal y de otro cualquier reino. Imponíase á los infractores la pena de pérdida del artículo y de los animales en que lo trasportasen; en el caso de reincidencia, la de todos sus bienes ademas de cuanto llevasen; y si incurria en la misma infraccion por tercera vez, la de muerte. Ordenaban ademas á los concejos, ricos hombres, caballeros, oficiales y alcaides de las ciudades, villas y lugares de las fronteras desde veinte leguas de los mojones, que cuando el alcalde de sacas ó su teniente quisieran hacer pesquisa ó inquisicion sobre este punto en los pueblos en que lo creyeren conveniente, lo consintieran y no les pusieran impedimento, sino antes bien les prestasen ayuda para aprehender así los géneros, como á los culpables, quedando sujetos en otro caso á las mismas penas anteriormente señaladas y que les impondría el rey. De lo aprehendido se establecía que la tercera parte fuese para el alcalde de sacas; la otra para los guardas que pusiere al expresado fin; y la restante para

⁽¹⁾ Ley 17, tít. x, lib. V. Recop.



el rey, no obstando ningun privilegio, merced ni albalá en contrario ⁽¹⁾.

Entre las varias providencias que se dictaron con el mismo fin, se cuenta la que disponia que la sal que viniese por mar, se recibiera en los puertos de Galicia, Astúrias y Montañas y se vendiese á los alfolineros del rey, de los que únicamente se podia comprar, so pena de perdimiento de las embarcaciones en que se condujese á los expresados puertos. Permitíase, sin embargo, á los cosecheros de Añana, Poza, Rosío y Andalucía, continuar la fabricacion de sal para el exclusivo fin de venderla al administrador de la Real Hacienda, á quien debian declarar la que tuviesen, para pagársela por coste y costas, imponiendo las correspondientes penas á los que la ocultasen ó vendiesen á otras personas, penas que se fueron agravando cada vez más ⁽²⁾.

Por último, la Pragmática de los Reyes Católicos de 3 de Setiembre de 1484, prohibia introducir y dar lugar á que se introdujese sal en su reino de los comarcanos á ellos; establecia contra los infractores las penas de pérdida de la sal, de las carretas, bueyes, acémilas y demas de que se sirviesen para introducirla, seiscientos maravedis para los arrendadores y recaudadores mayores de las salinas reales, y la muerte de saetas á los delincuentes, siendo caso de hermandad. Ordenábase que los alcaldes, ejecutores, diputados y cuadrilleros de la Hermandad, por cuya jurisdiccion se introdujese sal, cuando fuesen requeridos por los mencionados recaudadores tuviesen obligacion de prender á los reos é imponerles las penas expresadas. Establecíase, por fin, que no podria oponerse á esta prohibicion de intro-

(1) Ley 31, tit. xviii, lib. VI.

(2) Gallardo, obra y lug. cit.



ducir sal ninguna posesion, uso, costumbre, ni privilegio, porque todos estos títulos serían contra lo dispuesto en las leyes y en gran detrimento de las ventas reales ⁽¹⁾.

Juzgamos conveniente, antes de pasar adelante, hacer algunas indicaciones acerca del derecho vigente en Aragon sobre la sal, que se menciona especialmente en la anterior Pragmática y que ofrece alguna particularidad digna de notarse. La Corona de Aragon poseía muchas salinas, constituyendo uno de los más considerables recursos del reino, singularmente las de Castillar y Remolinos que tenían anejo el derecho de proveer de sal á Zaragoza y otras poblaciones. Los particulares poseían tambien numerosas salinas, cuya propiedad habian adquirido, ya por privilegio de los Reyes, ya por encontrarse en terrenos propios. Parece indudable que los pueblos que no estaban obligados por disposicion expresa á proveerse en las salinas del Rey, podian hacerlo en las de los particulares. Segun el testimonio de un distinguido escritor de aquel reino ⁽²⁾, en el año 1300 se concedió á D. Jaime II un nuevo derecho sobre la sal; y para hacerlo efectivo dispuso que todos los cabezas de casa, tanto por sí como por sus hijos mayores de siete años, habian de comprar en las salinas del Rey sendas pesas ó arrobas de sal á doce dineros cada una. Desde este momento quedó reservado al Rey el derecho privativo de vender la sal, inclusa la de las salinas de los particulares, á cuyo efecto abonaba á los dueños el precio medio que habia tenido dicho artículo en los siete años anteriores, resultando á beneficio del rey el sobreprecio á que se vendia. Opínase, no obstan-

⁽¹⁾ Ley 52, tít. xviii, lib. VI. Recop.

⁽²⁾ Dormer.—*Observaciones sobre el derecho de la sal*. V. Espínola y Subiza, *Tratado elemental de instituciones de Hacienda pública de España*.



te, que este derecho subsistió muy breve espacio de tiempo, hasta el punto de que se cree no excedió de dos años; y desde luego puede afirmarse que no se conserva noticia que manifieste se prorogara dicho impuesto en todo el siglo xiv. Pero consta que en las Córtes celebradas en 1404, reconociendo por un lado lo gravoso del aumento de tres dineros en libra, que segun parece se venia pagando, y, por otro, la necesidad de procurarse recursos para aliviar las cargas del reino, se acordó imponer un nuevo derecho sobre la sal, hasta que la generalidad de los pueblos se hubiesen descargado de los censos y deudas que sobre los mismos pesaban ⁽¹⁾.

Por lo que hace á Navarra y á las tres provincias Vascongadas, gozaron de absoluta libertad en la explotacion y venta de la sal, libertad que ha subsistido constantemente en las últimas y hasta bien entrado el siglo actual en la primera.

(1) Espínola y Subiza.—Obra citada.



CAPÍTULO II.

Exámen de las Pragmáticas de Felipe II.—Establecimiento del estanco. El Consejo de la sal.—Nuevas y onerosas cargas que se imponen sobre este artículo: reclamaciones que suscitan y obstáculos que crean.—El sistema de acopios.—Recargos y derechos establecidos sobre el precio de la sal: dificultades con que tropiezan.—Sistema seguido en la administración de la renta de la sal hasta principios del presente siglo.—Proyecto de desestanco de 1820.—Exámen de las disposiciones dictadas desde esta fecha hasta 1855.—Nuevo proyecto de desestanco.—Exposición detallada de las disposiciones dadas hasta 1869.—Indicaciones sobre la historia de la legislación relativa á la industria salinera de Ultramar.

El régimen administrativo á que se sujetó la industria salinera en la época que dejamos reseñada en el capítulo anterior, produjo, como no podía ménos, numerosos y graves inconvenientes, expuestos, de un modo que excluye toda duda, en importante documento legal. Los límites y guías que se habian impuesto tanto á las salinas del rey como á las de algunos caballeros y particulares que se hallaban en posesion de títulos y privilegios que les amparaban en el disfrute de las mismas, y el consiguiente derecho de establecer prohibiciones y penas á los pueblos comprendidos dentro de dichos límites á fin de conservar íntegro su monopolio, ocasionaban de antiguo muchos agravios, molestias, vejaciones y daños á los mismos pueblos. Agregábanse á estos males otros de no pequeña monta: los habitantes de las ciudades y villas enclavadas en algunos de dichos límites estaban obligados á proveerse de sal precisamente en la salina que á estos mismos correspondia, aunque estuviera



muy distante y pudiesen obtenerla en punto más próximo y más barata. El rigor excesivo y la falta de moralidad de los arrendadores, recaudadores y demas personas que intervenian en el pernicioso sistema de administracion vigente, causaban grandes molestias y daños, ya á pretexto de verificar averiguaciones y pesquisas, ya exigiendo crecidas sumas á los pueblos que se concertaban con ellos para poder tomar sal de otro punto distinto de aquel en que estaban obligados á verificarlo.

Todo ello hizo que repetidas veces se quejaran los pueblos á los Reyes, y singularmente á Felipe II, en cuyo tiempo parece que, sin duda por ir en aumento el mal, menudeaban más las quejas. Hubo de comprender el Monarca la justicia de tales reclamaciones; consultó con su Consejo el asunto, que consideró de la mayor importancia; y el resultado de todo ello y de la averiguacion y diligencias practicadas con este propósito, fué la pragmática de Madrid de 10 de Agosto de 1564. Establécese en ella que todos los vecinos y moradores de estos reinos, áun los comprendidos en los mencionados límites y guias, puedan comprar sal libremente en las salinas, salarios y alfolíes que se establecieren por orden del Rey, dejando de existir en su virtud la obligacion de proveerse en determinados puntos y pudiendo, por el contrario, hacerlo donde juzgasen les fuere más conveniente. Mas teniendo en cuenta que ademas de las salinas monopolizadas por la corona, existian otras en poder de los particulares, se declaran estas incorporadas al real patrimonio, dando á sus dueños las justas *recompensas* ó indemnizaciones, para que así nada fuere obstáculo á la realizacion de la merced que concedia á sus súbditos por esta pragmática. Incorporadas todas las salinas á la corona, se creyó ne-



cesario proveer por disposiciones especiales á la utilidad pública; y en su consecuencia se ordena que á fin de que haya la abundancia y copia de sal bastante para que puedan adquirir todos cómodamente la que necesitasen, se continúe fabricando en las salinas que tenían límites y guías y aún en mayor cantidad si se estimara conveniente; se manda que personas prácticas busquen nuevos pozos y fuentes donde pudiese labrarse sal para proveer á los pueblos que se hallaran distantes de las salinas; y se dispone, por lo que hace á aquellos puntos en que ni aún esto último fuere posible, el establecimiento de alfolíes y casas de aduanas en los que adquieran la sal con mayor comodidad y baratura. Una última é importante disposicion, consecuencia de los principios anteriormente establecidos, cierra esta pragmática. "Y por cuanto, concluye, quitándose y alzándose los dichos límites y guías, y dándose nueva orden, y proveyéndose por Nos abundante y abastadamente la dicha sal, sería de grande inconveniente y confusion, y de mucho perjuicio nuestro si la sal se hiciese, ni labrase, ni proveyese en otras salinas y en otras partes y lugares fuera de las que por nuestra orden y mandado y de la que por nuestra mano se hubiere de hacer, y labrar, y proveer; ordenamos y mandamos que en estos dichos nuestros reinos no se labre ni haga sal en salinas ni en pozos, sino aquellas que por nuestro mandado, orden y mano, y licencia si hiciese; ni se pueda proveer ni traer de fuera de ellos, sino la que por Nos para los dichos alfolíes y saleros, que serán declarados y consignados, se trajese, so las penas contenidas en las leyes y pragmáticas destos reinos contra los que meten sal de fuera dellos: y en lo que toca á la sal de Andalucía y reino de Granada, en que por agora no hacemos novedad, se mi-



rará la orden y forma que se debe tener, con que de allí no se puede meter sal en las otras partes destos nuestros reinos, sino la que por nuestro mandado se trajese y metiese; pues nos habemos de proveer de manera que haya abundancia ⁽¹⁾.” He aquí cómo por una derivacion del sistema adoptado, se vino á establecer el estanco de la sal, puede decirse que de un modo absoluto, puesto que no se exceptúan, y esto de una manera transitoria, más que las salinas de Andalucía. Habíanse incorporado al real patrimonio las salinas todas; y era indispensable para que ese sistema fuese una verdad y no se incurriera en los mismos inconvenientes que motivaron su adopcion, el que nadie pudiera fabricar ni vender sal más que el Estado. El procurar la adquisicion cómoda y barata á los consumidores es el propósito que domina en toda la célebre pragmática de Felipe II. ¿Consiguióse por tal camino el logro de tan buenos deseos? No cumple responder á esta pregunta en el momento actual: los hechos que habremos de referir más adelante y las consideraciones que expondremos despues servirán para resolver fundadamente la cuestion.

Dos años más tarde publicaba el mismo monarca una nueva pragmática á fin de poner coto á las defraudaciones que se cometian contra las rentas reales, disposicion que no fué motivada especialmente por la renta de la sal, pero que sin duda la comprendia. Ordenábase por ella que si los que de este modo usurpaban las rentas reales desempeñaban oficios públicos en la administracion de las mismas perdieran todos sus bienes y fueran desterrados de estos reinos por toda la vida; que en la misma pena incurrieran los que les prestaren favor, ayuda ó consejo; y que si no obtuvieren

(1) Ley 19, tít. viii, lib. ix. Recop.



ninguno de tales oficios estarian obligados á restituir todo lo que así usurpasen, con todos los frutos y rentas que hubiere producido y debido producir, y el cuatro tanto del valor total y de los frutos que hubiere rentado⁽¹⁾.

No pasó mucho tiempo sin que, separada la atencion de los laudables propósitos que produjeran el estanco de la sal, se dirigiera á otro punto bien distinto por cierto de ellos; y léjos de cuidarse únicamente de la utilidad de los consumidores, se comenzó á ver en ese artículo un abundante manantial de recursos para el erario. En 18 de Febrero de 1626 se otorgó un nuevo servicio de doce millones, el séptimo de los de su clase, pagadero en seis años con los arbitrios de un uno por ciento de los derechos del papel y del anclaje, y dos reales en fanega de sal. Entre las condiciones de la concesion la más interesante para nosotros era la que establecia que la administracion general, cobranza y paga de este servicio habia de ser del reino junto en Córtes y de sus comisarios en falta de las mismas, debiendo pasar todo ante los escribanos mayores de las Córtes que habian de tener su junta con ámplia jurisdiccion⁽²⁾.

No habia trascurrido aún el plazo señalado, cuando el mismo monarca Felipe IV⁽³⁾, mandó el 3 de Enero de 1631 que cesasen los dos servicios corrientes de millones, y que su producto se cargara desde 1.º de Enero del referido año como sobreprecio en la sal, conforme á lo que le habia propuesto el Consejo. Para la administracion de la renta pro-

(1) Ley 2, tít. viii, lib. ix. Recop.

(2) Gallardo.—Obra cit.

(3) Equivocadamente atribuyen algunos esta reforma y la creacion del consejo á Felipe II, como lo prueba el que en aquella fecha hacia ya diez años que reinaba Felipe IV.



ducida por este artículo, que iba siendo cada vez más considerable y complicada, nombró el Rey al mismo tiempo un tribunal especial que se llamó *Consejo de la Sal*. Hallábase éste constituido por ocho consejeros de Castilla⁽¹⁾, cada uno de los cuales ejercía la superintendencia de una provincia. Su jurisdicción era privativa en el ramo de su competencia, debiendo proceder con inhibición de todos los tribunales, juntas y consejos, incluso el de hacienda.

Para llevar á efecto lo acordado, se fijó el precio de la sal en 40 reales la fanega, el cual debía aumentarse con el coste de fábrica, conducción, administración y venta. Muy en breve se demostró que semejante proyecto era irrealizable: inmediatamente se escogitaron toda clase de medios y recursos fraudulentos para sustraerse de consumir la sal expendida por la Hacienda; y debió ser tal la gravedad de los mismos, que apenas habían transcurrido tres meses y ya se daba la Real cédula de 4 de Marzo del mismo año, disponiendo que fuese obligatorio para los pueblos acopiarse en la cantidad que habían de consumir. Semejante medida encontró la más tenaz resistencia y tal serie de dificultades, que hubo de caer inmediatamente, ahogada por las reclamaciones y quejas universales contra los acopios obligatorios. El Monarca no pudo menos de atender á las generales protestas que la reforma había originado; y en 22 de Junio del referido año se publicaba una nueva Real cédula reservándose el Estado la venta exclusiva, y fijando el precio en diez y seis ducados para las ciudades que, excediendo de mil veci-

(1) He aquí los nombres de los primeros consejeros: D. Fernando Ramirez Fariña, D. Juan de Chaves y Mendoza, D. Gonzalo Perez de Valenzuela, D. Francisco de Tejada y Mendoza, D. Francisco de Alarcon, D. Juan Chumacero, D. Jose Gonzalez y D. Antonio Contreras.



nos, no se acopiasen. Resulta, pues, que en ménos de seis meses se realizaba la tercera reforma, sin que hasta este momento se hubiera conseguido encontrar una solucion satisfactoria. Empero si las anteriores no lograron el asentimiento general, mucho ménos podía esperarse esto de la última, puesto que hacía sentir á los pueblos en todo su rigor las consecuencias ordinarias y naturales del estanco. Clamóse, en efecto, contra la nueva Real cédula con mayor energía aún que contra las anteriores; y ante tan exorbitante crecimiento de la sal pareció bueno todo, incluso el retornar al antiguo servicio de millones que tan fuerte oposicion encontrara antes. En su virtud, en las Córtes celebradas el año siguiente de 1632, acordóse que se volvieran á conceder los servicios de millones sobre las cuatro especies de vino, vinagre, aceite y carne, concertando en escritura de 23 de Julio un servicio de veinticuatro millones de ducados, pagaderos en seis años, á razon de cuatro cada uno, á condicion de que bajara el Rey el crecimiento de la sal y suprimiese los acopios obligatorios. Por lo que hace á la sal, se pactó que el Rey sacase de la misma setecientos cincuenta mil ducados anuales, quedando reservado á aquel la administracion, beneficio y cobranza del estanco; pero de suerte que el precio del artículo, con inclusion del derecho antiguo que comprendia la fabricacion y administracion, fuese de 11 reales vellon en Galicia, Astúrias, pesquerías de Andalucía y Castillas, puertos de mar y Montañas; de 17 reales en Castilla la Vieja y puertos de allá, y de 22 en Castilla la Nueva de puertos acá y Andalucía; no comprendiéndose en ellos el coste de conduccion⁽¹⁾. Así se llegó á establecer el nuevo derecho sobre la

(1) Gallardo, obra citada.



sal que ha venido subsistiendo en lo sustancial hasta época no muy lejana. ¡Provechosa lección que no debiera haberse echado en olvido, en especial por los que juzgan que se trata de un artículo que puede recargarse indefinidamente y sin daño de los pueblos!

Una vez establecido el estanco, se hubo de considerar entre los puntos más importantes de la administración de este artículo, ó mejor, de la renta que proporcionaba, el relativo á los acopios. Dejamos expuestas las disposiciones que se dictaron desde el primer momento de este nuevo orden de cosas, á fin de que se surtieran abundantemente los sitios más oportunos para que los consumidores pudiesen proveerse cómodamente. Para atender á esta necesidad, creáronse los alfolíes; pero como no era posible se establecieran estos en todos los pueblos, y existiese, por otra parte, el temor de que los que se hallasen distantes de aquellos y próximos á salinas, pozos, fuentes ó manantiales salados, tan abundantes en algunas provincias, se surtieran de estos en lugar de hacerlo de los depósitos de la Administración, se hubo de insistir especialmente, para mantener la integridad de esta renta, en la reglamentación de los acopios. En todas épocas, en la más inmediata al estanco como en las posteriores, se dictaron con el expresado fin numerosas Reales cédulas, siendo de notar entre ellas la del 31 de Mayo de 1714, en la que se determinaba de una manera en extremo minuciosa los pueblos que se hallaban obligados á acopiarse; las diligencias que debían practicarse para averiguar el número de vecinos, de ganados; y todas las demás circunstancias que pudieran servir para precisar el consumo y la cantidad que correspondía á cada pueblo. No es posible desconocer, sin embargo, por una parte cuán difícil tarea se



imponía por esta cédula, si había de desempeñarse con la exactitud debida; cuánto se perjudicaba, por otra, á aquellos pueblos que pudiendo surtirse de sal de una manera cómoda y barata, se veían obligados á adquirirla en las condiciones más desventajosas; y cuánto se iba separando, por último, del pensamiento que parece presidía al establecer de un modo absoluto el monopolio del Estado, pensamiento que se presentaba como exclusivamente inspirado por la utilidad de los pueblos. Desde ahora cada vez se irá mostrando de una manera más marcada esta nueva fase del estanco, que es el verdadero y esencial carácter de todos los monopolios.

Más numerosas aún, bien que informadas por el mismo espíritu, fueron las disposiciones dictadas sobre el precio de la sal. Haremos una reseña de las más importantes hasta los primeros años del siglo presente. La escritura de millones de 18 de Julio de 1650, ratificó los precios señalados en las Córtes de 1632 ⁽¹⁾; pero, si bien lograron sostenerse estos por algun tiempo, al comenzar la centuria siguiente sufren incesantes alteraciones. La guerra de sucesion con la que se inaugurara la historia de nuestra patria en el siglo precedente, dió lugar á que se recargara de un modo considerable el precio, subiendo á 14 reales sobre los establecidos en el referido año de 1632. Habiendo dêsaparecido las circunstancias que hicieron necesario el mencionado aumento, representaron los Rdos. Arzobispo de Toledo y Obispo de Leon, sobre la procedencia de que se restablecieran los antiguos precios para el clero; y estimándole así el Consejo, en consulta de 20 de Diciembre de 1723, se dictaron las Reales resoluciones de 25 de Enero y 26 de Abril de 1724,

(1) Condicion 5.^a



y, por último, y en consonancia con ellas, la Instrucción de 9 de Junio del mismo año. En su consecuencia, el precio quedó reducido para los eclesiásticos á 11 reales en las salinas de fábrica de Galicia, Astúrias; á 17 para las de Castilla la Vieja, y á 22 en Castilla de puertos acá, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Aragon y Cataluña. Debe notarse que estos tres últimos reinos habian quedado sujetos á las leyes administrativas comunes á consecuencia de la guerra de sucesion, por lo cual figuran en esta disposicion y en las dictadas despues de ella. No pasó mucho tiempo sin que se comprendiese la conveniencia, ó mejor, la necesidad de que se extendiera á los seglares el mismo beneficio concedido á los eclesiásticos en el precio de la sal. Por un lado lo demandaban los sacrificios hechos por todos en la última guerra y la estrechez á que los habian reducido los impuestos y gravámenes extraordinarios que pesaran sobre todos los vasallos por no escaso número de años; y, por otro, lo exigian la uniformidad y sencillez en la administracion, que se veia frecuentemente entorpecida y á veces perjudicada con tales diferencias de precios. Para obtener aquellas ventajas y evitar estos inconvenientes, propuso el Consejo de Hacienda como uno de los medios que pudieran producir más general utilidad, el reducir el precio de la sal; y así lo acordó el Monarca, ordenando se vendiese á todos al mismo precio, sin distincion de eclesiásticos ni seglares ⁽¹⁾.

No subsistió por mucho tiempo esta ventaja, pues los cuantiosos gastos que originaron las nuevas guerras dieron ocasion á que se gravase la sal con un sobreprecio de 13

(1) Reales decretos de 26 de Enero y 4 de Febrero de 1725.



reales. En 1748 se redujo á la mitad el indicado sobreprecio ⁽¹⁾, y una vez firmada y publicada la paz, se extinguió totalmente desde 1.º de Enero de 1750 ⁽²⁾. Mas no era posible esperar ya en la eficacia y duracion de tales disposiciones que, precedidas de pomposos preámbulos, parecían llamadas á mejorar la situacion de nuestro cada dia más esquilado pueblo: desde que sólo se consideró la sal como una fuente de ingresos para el Tesoro y las necesidades públicas crecieron con pasmosa rapidez, debían ser harto más duraderos los períodos de gravámen y sufrimiento que atravesase la industria salinera, que los de bonanza y holgura. Así, en 1761 se impone el sobreprecio de 2 reales en fanega de sal por espacio de diez años con destino á la continuacion del canal de Castilla, y construccion de buenos caminos, comenzando por los de Cataluña, Galicia y Valencia ⁽³⁾. No bien habia comenzado á exigirse el nuevo recargo, cuando se impone otro igual para el sostenimiento de las milicias provinciales, el cual habia de hacerse efectivo desde 1.º de Enero de 1767, debiendo notarse que si el sobreprecio anterior se estableció con carácter de temporal, el de que tratamos era perpétuo ⁽⁴⁾. La guerra con la Gran Bretaña motivó un gran recargo de 4 reales en fanega que debia comenzar á regir desde 1780, continuando únicamente hasta que se realizara el fin con que se habia impuesto, ó sea, atender á los gastos extraordinarios de la guerra, ó bien hasta que se hallase un arbitrio más suave para ocurrir á

(1) Real decreto de 16 de Diciembre.

(2) Real decreto de 2 de Diciembre de 1749.

(3) Real decreto de 10 de Junio.

(4) Real decreto de 18 de Noviembre.



ellos ⁽¹⁾. En 1794 ⁽²⁾ se imponen otros 4 reales más en cada fanega con motivo de los grandes dispendios que ocasionaba la costosa guerra en que la nación se encontraba nuevamente empeñada. El recargo debía durar hasta dos años después de concluida aquella guerra, quedando únicamente exceptuada de él la sal que consumiesen en sus salazones los pescadores. No podemos menos de notar las razones en que se funda en la disposición citada el sobreprecio decretado en la misma: afirmase, en efecto, que la renta de la sal lo admite por su naturaleza, por el precio moderado á que se vendía con relación á los demás géneros estancados, por el que tenía en otras potencias de Europa y por la igualdad y justa proporción con que recae este impuesto sobre todos los vasallos. Tomamos acta de las razones en que se va pretendiendo fundar el antiguo régimen de la industria salinera, para examinarlas en su lugar oportuno. Dura era la condición de esta que, poco después de ver suprimido el recargo de 13 reales, se encontraba sujeta á otros nuevos importantes, ya 8, ya 12 en fanega; pero vino á ser extremadamente aflictiva cuando, no transcurrido aún un año ⁽³⁾, se le sujeta á un nuevo sobreprecio no menos que de 24 reales en fanega además de lo que satisfacía, bien que como gracia ó compensación se le exime del recargo de 2 reales para los caminos que de temporal se había convertido en perpétuo, pues de otro modo debió concluir en 1771. Terminada la guerra en el año siguiente de 1796 ⁽⁴⁾, se redujo el recargo de los 24

(1) Real decreto de 17 de Noviembre de 1779.

(2) Real decreto de 17 de Marzo.

(3) Real decreto de 5 de Febrero de 1795.

(4) Real decreto de 23 de Enero.



reales á 14, con la circunstancia, que no queremos pase desapercibida, de que ese gravámen al que dos años antes, en 1794, se daba preferencia por recaer con igualdad y justa proporcion sobre todos los vasallos, ahora se cuenta entre las contribuciones llamadas á obtener más inmediato alivio, por constituir una de las que, gravando generalmente á todos, son más onerosas á los pobres.

Como quiera que no nos proponemos trazar una historia completa del asunto de esta Memoria, sino exponer los puntos más salientes del antiguo régimen de la industria salinera, nos limitaremos á añadir por ahora que, además de los recargos ya dichos, se cobraban algunos en Galicia para la construccion de caminos trasversales; otros en Asturias para la de un archivo del Principado y de un muelle en Rivadesella; y otro de 2 reales en Castilla para construir la carretera de Leon.

No cesaba por esto el sobreprecio para la construccion y reparos de los caminos⁽¹⁾; antes bien encontramos disposiciones que le dan por subsistente despues de comenzado el siglo actual⁽²⁾; así como el recargo de los 2 reales con destino á milicias provinciales daba lugar á numerosas órdenes especialmente en lo relativo á su administracion, hasta que se

(1) Por Real órden de 12 de Febrero de 1802 se mandó que, á fin de habilitar y reparar lo mejor posible los caminos que conducian á Barcelona para que SS. MM. no corrieran el menor riesgo, deberian dedicarse á este servicio los 2 reales en fanega que se satisfacian como sobreprecio para caminos, recaudándose por la Direccion general de los mismos; y habiendo surgido dudas sobre la aplicacion de la misma, se confirmó y aclaró con fecha 14 del mismo año.

(2) Órdenes de 12 de Febrero y 4 de Abril de 1802, 1.º de Mayo de 1817; 31 de Enero de 1821; 12 de Octubre y 12 de Diciembre de 1824; y 11 de Mayo de 1826.



abolió de un modo definitivo, bien entrada ya la presente centuria ⁽¹⁾.

Los sobreprecios que en gran número pesaban sobre la

(1) Entre las principales disposiciones relativas á este punto, pueden citarse las siguientes: 30 de Noviembre de 1807, mandando se abonen 50.000 rs. á estos cuerpos y se lleve cuenta y razon separada de los 2 reales; 18 de Mayo de 1815, para que cese la asignacion mensual y perciban el producto de los 2 reales; 16 de Marzo de 1816, para que se satisfaga con el producto de este arbitrio lo que adelantaron los pueblos por armamento y vestuario de las milicias; 11 de Diciembre de 1816, estableciendo el recargo de 3 reales en lugar de los 2, para ocurrir á los gastos del Consejo de la guerra; 7 de Noviembre de 1817, ordenando no se dé otro destino á estos fondos; 24 de Noviembre de 1818, mandando se remitan estados mensuales á la Inspeccion de Milicias; 22 de Noviembre de 1821, para que, suprimido el estanco, se haga la correspondiente liquidacion á las milicias por el extinguido arbitrio, de 2 reales; de 15 Agosto de 1823, estableciendo el impuesto de 2 reales como consecuencia del reestanco; 16 del mismo mes, ordenando que los productos de este impuesto estén á disposicion del Inspector general de milicias; 26 de Enero de 1824, autorizando al Inspector de milicias para la recaudacion del mismo impuesto; 12 de Diciembre de 1824, prohibiendo hacer uso de dicho impuesto; 8 de Abril de 1825, ordenando se abone al Inspector general de milicias lo que se le adeudase por el referido arbitrio; 9 de Febrero de 1826, prohibiendo hacer uso del producto de los 2 reales bajo la pena de separacion del empleo; 18 de Abril del mismo año, estableciendo el descuento de 4 por 100 del producto de los 2 reales en fanega para milicias; 1.º de Junio del mismo año, mandando se considere entre los productos líquidos de la renta de la sal el importe del real en fanega para el Consejo de guerra; 18 de Setiembre de 1826, disponiendo continúe el descuento de 4 por 100; 7 de Febrero de 1833, para que se entregue á la Inspeccion de milicias el producto de los 2 reales; 28 de Noviembre de 1836, para que, cesando este arbitrio á favor de las Milicias desde 1.º de Enero de 1837, segun los presupuestos, perciba el Tesoro el producto del mismo; y 25 de Julio de 1837, mandando á los intendentes se satisfaga á la Inspeccion de milicias lo que se le adeuda por los 2 reales en fanega hasta fin de Diciembre del año anterior.



sal, no podían ménos de impedir el desarrollo así de la industria salinera como de las demas que necesitan dicho artículo; y esta poderosa consideracion, no pudiendo ocultarse á nuestros gobernantes, hizo que se rebajaran más ó ménos los precios y recargos que acabamos de indicar en beneficio de ciertas industrias. Desde luego vemos que se pretende dispensar especial proteccion á la pesca y á la ganadería. Por lo que hace á la primera ordenóse en 1717⁽¹⁾ que estuvieran exentos del derecho del millon todos los pescados de las pesquerías del reino, incluso los que se exportasen para los dominios extranjeros ó se trasportaran de un punto á otro de España. Disposicion que fué confirmada en 1761⁽²⁾. En 1775⁽³⁾ se concedieron gran número de exenciones y privilegios á los productos de las pesquerías nacionales, entre los que se contaban la concesion de seis meses de espera para el pago de la sal que se entregase al fiado en la cantidad necesaria para la salazon, prestando la garantía correspondiente; y que la sal que se emplease en los pescados estuviese libre de los cuatro reales impuestos para milicias y caminos. No puede extrañarse, sin embargo, que en este punto se dejaran sentir las consecuencias de la suma variedad que sobre el régimen de la sal venia reinando desde que se consideró este artículo como un manantial de abundantes y poco costosos recursos para el empobrecido erario de nuestra nacion; y así resultó, entre otros muchos males, gran confusion y completa anarquía en los derechos que pesaban sobre la pesca. Con el propósito de establecer el orden y uniformidad necesarios y procurar á la referida

(1) Real decreto de 11 de Setiembre.

(2) Real órden de 21 de Julio.

(3) Real cédula de 16 de Febrero.



industria los mayores medios de progreso, elevaron el Conde de Floridablanca y los Directores generales de Rentas una representacion al Rey, proponiendo las resoluciones que á este fin convendria adoptar. Aceptadas por el Monarca, se publicaron en 1782 ⁽¹⁾, habiendo constituido la base de nuestra legislacion sobre la materia durante gran número de años. Aliviábase grandemente por ellas á nuestros pescados de los muchos gravámenes que venian soportando, al par que se recargaban los extranjeros; y por lo que hace al consumo de sal, ademas de confirmarse las exenciones que antes gozaban, se establecia que en todos los puertos del reino, incluso los de Valencia, Cataluña, Mallorca, Ibiza y presidios de Africa, se diera toda la sal que se empleara en la salazon, curacion ó cualquier otro beneficio de los pescados de las pesquerías del reino, al precio de 10 reales vellon la fanega, segun se venia practicando desde 1750 ⁽²⁾ en el reino de Galicia y Principado de Astúrias. No se crea, sin embargo, que ni áun estas ventajas concedidas á la industria de que tratamos subsistieran en toda su plenitud en medio de los incesantes recargos que con mil motivos se impusieran sobre la sal. Así vemos que en 1816 se aumenta en seis reales en fanega con aplicacion á la marina ⁽³⁾, el cual debia comenzar á percibirse, á contar de las existencias anteriores á 30 de Abril ⁽⁴⁾; se ordena despues que á los matriculados se entregue para la salazon de pescados la sal que necesitan al precio que tuviera en los almacenes ⁽⁵⁾; pero inmedia-

(1) Real resolucion de 23 de Diciembre.

(2) Real órden de 10 de Marzo.

(3) 30 de Abril de 1816.

(4) 2 de Diciembre de 1816.

(5) 7 de Febrero de 1817.



tamente se dictan repetidas órdenes encaminadas á obtener y regular la recaudacion del mencionado impuesto⁽¹⁾.

La ganadería disfrutó del mismo modo de una protección especial, descargándola de los sobreprecios cada día más crecidos que pesaban sobre las sales. Así aconteció cuando en 1795 se aumentó el recargo hasta 24 reales en fanega, del que se declaró exenta la sal consumida por los ganados, debiendo recibir la destinada á este uso á los precios anteriores; cuya exaccion se fundaba, según se decía, en que lo demandaba de esta suerte la causa pública. El Consejo de la Mesta hizo donacion de todo lo que se hubiese devengado por este concepto hasta fin de Setiembre de 1798; y siendo muy difícil practicar la liquidacion de lo correspondiente á 1799 sin exponerse á cometer grandes equivocaciones, se ordenó en 1800⁽²⁾ que el sobreprecio se abonase desde 1.º de dicho año, computándose 10 fanegas de sal por cada 1.000 cabezas de carneros y corderos, en que se regulaba el consumo de las mismas por las disposiciones vigentes sobre acopios. El beneficio quedaba reducido por lo demás á la dispensa del sobreprecio de 12 reales en fanega, pues los dos reales para caminos se comprendían en el sobreprecio de los 14; y el abono se refería á los ganados finos que concurrían á los esquilos. Por lo que hace á Aragon, no existiendo en aquel reino las rentas provinciales, se mandaba que las Juntas hicieran el abono referido, exigiendo á cada ganadero justificación del número de cabezas que poseyese y obrando de la manera que estimasen más adecuada para evitar fraudes y equivocaciones; entendiéndose en

(1) 13 de Agosto, 15 de Setiembre y 26 de Noviembre de 1819.

(2) Real orden de 9 de Junio.



todo caso que la predicha gracia se debía limitar á los ganados con cuya lana fina comerciase sus dueños con el extranjero y que consumiesen sal, supuesto que algunos terrenos no la necesitan por la calidad de sus pastos y no hay fundamento por consiguiente para tal compensacion. En el año 1802 ⁽¹⁾ se dispensó tambien al honrado Consejo de la Mesta de todos los recargos especiales que, segun tenemos dicho, venian pesando sobre la sal desde la segunda mitad del siglo XVIII. En 1805 ⁽²⁾ se dictaron algunas reglas determinando la manera de verificar el abono del sobreprecio decretado cinco años antes, á fin de evitar las defraudaciones que de otra suerte se pudieran cometer.

Tambien participaron de estos beneficios los mineros de Nueva España, para quienes se mandó dar la sal que necesitasen á costo y costas ⁽³⁾.

Debe notarse que por regla general los precios indicados se refieren á la sal que se tomare en las fábricas, pues si lo era en los alfolíes, debía aumentarse el importe de la conduccion. Respecto á este último punto encontramos varias disposiciones, especialmente al terminar el siglo anterior. Desde tiempos muy antiguos se venia exigiendo á los pueblos por el coste de conduccion 13 maravedís en fanega; pero como quiera que á veces satisfacía la Hacienda por este concepto 16, 19, 26 y hasta 30 maravedís, y hubiera llegado un momento en que los grandes gastos que ocasionaban las guerras exigieran se cobrasen los impuestos en toda su integridad, se estableció en 1794 ⁽⁴⁾ que por de pron-

(1) Real órden de 14 de Abril.

(2) Real órden de 7 de Julio.

(3) Real órden de 13 de Enero de 1812.

(4) Real órden de 18 de Febrero.



to y hasta que pudiera arreglarse con más exactitud este punto, se sobrecargase el precio de la sal en 17 maravedís por fanega y legua, sin alterar por esto el estado anterior de cosas respecto de aquellos pueblos y vecinos que fueren á tomar las sales á las salinas, conduciéndolas por su cuenta. Para facilitar la adquisicion de este último modo, se hallaban establecidos en los primeros años del siglo presente hasta 248 alfolíes, ya en el interior, ya en las costas, provistos por buques nacionales y extranjeros los de las costas y por las salinas más próximas los del interior. Mas como la mayor parte de los referidos buques fuesen extranjeros y se considerara conveniente favorecer con especialidad el tráfico de los españoles, insistiendo en lo que se había establecido ya nada ménos que en 1721 ⁽¹⁾, se ordenó en 1802 ⁽²⁾ que las conducciones marítimas de sales se ejecutaran precisamente en buques españoles, aunque sus fletes fueran más caros que los exigidos por los extranjeros. Esta disposicion hubo de reiterarse en 1819 prohibiendo que se condujesen sales de unos puertos á otros de la Península en buques extranjeros ⁽³⁾.

El monopolio ejercido por el Estado dió lugar á un gravísimo inconveniente que hizo necesaria la adopcion de severas medidas. El contrabando, que sigue ordinariamente á tal régimen casi con la misma regularidad que la sombra al cuerpo, disminuía notablemente la renta de salinas; y se consideró necesario para corregir tan grave mal ampliar á esta renta las severas penas que se hallaban establecidas contra

(1) Real órden de 29 de Agosto.

(2) Real órden de 14 de Abril.

(3) Orden de 28 de Enero.



los defraudadores de la del tabaco ⁽¹⁾. Empero todas estas penas, no obstante su gran rigor, se estrellaron contra los incentivos del interes personal, como ha sucedido en todos tiempos y sucederá seguramente en adelante; y las disposiciones dictadas para reprimir el contrabando fueron de todo punto impotentes para obtener el resultado apetecido. Promulgóse en su virtud la Real cédula de 1728 ⁽²⁾, en la que con mano fuerte se trataba de poner eficaz remedio á tamaños desórdenes. Recuérdase que la Pragmática de los Reyes Católicos publicada en 1484, estableciendo penas contra los defraudadores de las salinas, no estuvo nunca en práctica, y en su lugar prohíbe que nadie pueda introducir sal de otros reinos en los de Castilla, Leon y Corona de Aragon sin real licencia, incurriendo los infractores en la pérdida de la sal, bestias, carretas y otros cualesquier carruajes y embarcaciones mayores y menores, ya sean propias del introductor ó alquiladas, ó de los maestros, pilotos, capitanes, arrieros y conductores, y ademas en la multa de dos mil ducados, segun la condicion de las personas y gravedad del hecho y seis años de presidio en Africa si fuese noble ó persona decorada, y no siéndolo, incluso los criados de librea, en seis años de galera y doscientos azotes: en caso de reincidencia se debian aumentar todas estas penas con arreglo á las leyes comunes.

En las referidas penas incurrian todos los que cooperasen, diesen auxilio, asistencia, favor ó ayuda, de cualquiera manera que fuese, á los defraudadores. La sal aprehendida en todo caso debia entregarse siendo buena en el alfó,

(1) Real cédula de 14 de Diciembre de 1719 por la que se aplicaban á estas rentas las de 9 y 15 de Abril de 1701 y de 18 de Noviembre del mismo año 1719 relativas á la del tabaco.

(2) Fechada en 5 de Febrero.



almacen, salero ó fábrica más próximos; y si fuese de mala calidad habia de deshacerse en agua, vertiendo esta en el río cuando fuese posible. Los que hurtasen sal y aguas saladas en las reales fábricas, almacenes y alfolíes, además de las penas pecuniarias expuestas y la pérdida de la sal ó de su valor, quedaban sujetos á la de ocho años de presidio de Africa y dos mil ducados si fueren nobles; y si plebeyos, ocho años de galeras y doscientos azotes por la primera vez, aumentándose en caso de reincidencia; notándose que, como en la primera disposicion, se extendian dichas penas á los que prestaran favor y ayuda para semejantes hurtos. Los que acudieren á surtirse de las aguas saladas de arroyos y nacimientos cuyo uso está prohibido, incurrirían por primera vez en cuatro años de destierro y doscientos ducados; y por la segunda doble y cuatro de presidio si fuese noble, y si plebeyo seis de galeras y las penas pecuniarias. Los que sacasen sal ó aguas saladas de las salinas y sitios cegados y prohibidos incurrían en estas mismas penas y en la de que á su costa se volvieran á cegar. Para reprimir la codicia de los administradores que humedecian, mojaban y mezclaban la sal, se imponía la pena de privacion del empleo, dos años de destierro y hasta quinientos ducados de multa. Si se empleaban medidas falsas, se debían inutilizar, imponiendo á los delincuentes la privacion de sus empleos y quinientos ducados de multa y dos años de destierro, además de la indemnizacion á los compradores del perjuicio que se les hubiese causado. En el caso de que los que cometieran los delitos expresados fueren caballeros de las órdenes militares, se ordenaba que con la sumaria en que se justificase, se remitiera al Rey para que, como Gran Maestre, tomara las providencias convenientes, sin perjuicio de que en cuan-



to á la aprehension y pérdida de la sal, caballerías y demas efectos procedieran por sí los Superintendentes y Subdelegados; y que si por ventura delinquiesen algunos grandes ó títulos por sí ó prestando auxilio á otros, precediendo la correspondiente justificacion se les ocupase la sal y se consultase al Monarca para que tomase la resolucion que procediera. Los que se justificase adquirieren sal de punto distinto de los alfolíes, fábricas ó toldos destinados al efecto, ó, como se dice, de mala entrada, incurrirían por primera vez en la multa de veinte ducados y apercibimiento; por la segunda, en multa de cincuenta ducados y dos años de destierro; y por la tercera, en cuatro años de presidio de Africa y hasta dos mil ducados; entendiéndose que las mismas penas debieran imponerse á los que por no comprar sal la figurasen con agua caliente. Cuando estuviesen arrendadas las salinas de algun partido ó provincia y los arrendadores de un distrito introdujesen ó expendiesen sal en otro, se ordenaba pagasen el daño al arrendador del distrito en que se hubieren intrusado, y ademas incurrieran por la primera vez en la pena de dos años de destierro y mil ducados, la segunda en cuatro mil ducados y cuatro años de destierro, y la tercera en pérdida de la mitad de los bienes y seis años de presidio de Africa. Si alguno opusiese resistencia á los agentes de la administracion al practicar el reconocimiento y resultase ser tal defraudador, quedaba sujeto á la pena de doscientos azotes y diez años de galeras si no fuese noble, y siéndolo á diez años de presidio de Africa y dos mil ducados de multa. Para la imposicion de todas las antedichas penas debían bastar indicios, conjeturas, presunciones y cualquiera clase de pruebas que el derecho admitiera en los casos más privilegiados, pudiéndose proceder breve y sumariamente. Exis-



tiendo prueba semiplena de haberse introducido sal de mala entrada en casa de eclesiásticos, iglesias y conventos de religiosos, habíase de proceder á visitarlos, aprehender la que se encontrase y declararla por perdida, dándose cuenta de ello por cartas acordadas á los superiores respectivos, á fin de que pusieran pronto y debido remedio, aunque se mandaba al mismo tiempo que al hacer la mencionada visita procediesen con la debida modestia y templanza; y por lo que hace especialmente á los conventos de religiosas debia limitarse á las dependencias exteriores, no entrando en la clausura, sin perjuicio de poner guardias de vista si se probase la existencia del fraude.

Digno es de notarse que el excesivo rigor de la penalidad adoptada por los Reyes Católicos se había mitigado de una manera tan extraordinaria, que la pena de muerte de saeta no se comprende en el vasto catálogo de la cédula de Felipe V. No es extraño que la opinion del legislador se modificara en ese sentido y que nunca llegase á estar en uso la aplicacion de semejante pena, máxime cuando se hallaba en tal desproporcion con el delito que tendia á reprimir. Mas á pesar de todo ello y de la ineficacia de las penas que se sancionaron posteriormente, confesada por el mismo legislador, escogitáronse otras numerosas y gravísimas encaminadas al mismo fin. ¿Consiguióse por estas últimas lo que se apetecía? Los hechos que apuntaremos más adelante nos lo darán á conocer. En el momento únicamente notaremos que en 1813 se abonan diez reales por cada fanega de sal que se aprehendiese en la provincia de Cádiz⁽¹⁾; á la vez que se continua-

(1) Orden de 24 de Mayo. Por otra de 13 de Junio de 1817 se disponia que se abonarian los diez reales cuando el defraudador fuese aprehendido con la sal, y solo tres en otro caso.



ban imponiendo penas en 1818 contra los que extrajeran sal de contrabando para Navarra ⁽¹⁾.

Por lo que hace á la administracion de la renta de la sal, se siguieron diversos sistemas sin obedecer nunca á un plan fijo, ni á un principio constante: unas veces, las más, se llevaba por la Hacienda, aunque otras la encontramos dada en arrendamiento. Por fin, en 1749, se adoptó la administracion por la Hacienda, una vez que habian desaparecido los principales obstáculos que dificultaban la organizacion definitiva y estable de dicha renta. En la referida época habíanse en efecto incorporado á la Corona todas las salinas del Reino de Aragon, dando á sus poseedores las correspondientes recompensas, como se habia venido haciendo con las demas desde Felipe II, de donde tomaron origen la mayor parte de los juros impuestos sobre la rentas de la sal. Mas á pesar de que desde este momento queda completamente centralizada la administracion de la misma, no se dictaron en todo el resto del siglo XVIII instrucciones generales que la regulasen.

Este fenómeno, que á primera vista parece extraño, lo explica un notable escritor ⁽²⁾, á quien hemos aludido ya varias veces, por las circunstancias especiales de la mencionada renta que hacía difícil la unidad, y por las particularidades que aún continuaban dificultándola en las provincias. A falta de disposiciones generales, dictáronse no pocas para varias localidades. En la ley de incorporacion no se comprendieron las salinas de Andalucía; y en su virtud, continuaron algunas poseidas por particulares en la isla de Leon y en San

(1) Orden de 24 de Julio.

(2) Gallardo, obra cit.



Lúcar de Barrameda; mas para que tuviese efecto el estanco universal, los dueños de las referidas salinas estaban obligados á entregar á la Hacienda toda la sal que necesitasen, pudiendo vender la restante para su exportacion del reino á precios convencionales con el extractor; á condicion de pagar á la misma Hacienda el derecho de dos pesos sencillos por cada lastre. Los llamados cosecheros de Añana y Poza continuaron tambien fabricando sal en sus posesiones; pero á fin de que tampoco esto constituyese una infraccion del estanco, la Hacienda adquiria la que fabricaban á coste y costas; y de esta suerte venia á resultar que nadie podia comprarla sino de los alfolíes ó depósitos de la administracion, ni venderla á otro que á esta misma.

Si fué posible que por algun tiempo permaneciese esta importante renta en tal estado de variedad y falta de fijeza, semejante situacion no podia prolongarse; y, en efecto, en 1816 se publicó una instruccion general sobre rentas reales⁽¹⁾, que comprendia muy especialmente la de la sal, regulando los puntos más importantes relativos á su administracion.

Desde esta fecha hubiéronse de dictar, sin embargo, numerosas disposiciones, ya aclarando, ya promoviendo la fiel ejecucion de la instruccion. Tal vez sea el punto que dió lugar á más crecido número el referente á los acopios. Ya en los primeros años del siglo presente encontramos alguna órden relativa á dicho punto⁽²⁾; pero desde 1816 se publicaron con gran frecuencia: ya se ordena que los pueblos entreguen el importe de sus acopios en las tesorerías

(1) Instruccion de 16 de Abril. Cap. 1.º, art. 25 al 29, y cap. 10, art. 1.º al 39.

(2) Reales órdenes de 3 de Marzo de 1803 y 14 de Marzo de 1813.



de rentas de su partido⁽¹⁾; ya se encarga el cumplimiento de la instruccion por lo que hace á extender los acopios á todos los pueblos⁽²⁾; ya se declara que el clero no está exento en pueblos acopiados⁽³⁾; ora que los matriculados de marina están comprendidos en los acopios como los demas⁽⁴⁾, así como lo están los individuos del ejército y marina en los pueblos acopiados de que son vecinos⁽⁵⁾; ora que esa carga pesa tambien sobre los empleados en correos⁽⁶⁾; por unas se establece el modo de suplir en Cataluña los padrones para los acopios⁽⁷⁾, mientras por otra se manda que se continúe cobrando el impuesto en fanega en pueblos no acopiados⁽⁸⁾; se fija la aplicacion de los débitos por acopios hasta 1813⁽⁹⁾; se previene cómo ha de hacerse el abono de rectificaciones por acopios á los comisionados para hacerlas⁽¹⁰⁾ y la tramitacion que debiera darse á las solicitudes sobre repartos⁽¹¹⁾.

Llegó por fin el momento en que se vino á comprender lo absurdo é inconveniente del sistema que se habia seguido hasta entonces en el régimen del importante artículo que nos ocupa; sonó la hora en que principios económicos completamente opuestos se abrieron paso á través de los errores que dominaran anteriormente; y se piensa en el estableci-

(1) Real órden de 27 de Abril de 1816.

(2) Real órden de 31 de Diciembre de 1816.

(3) Real órden de 17 de Febrero de 1817.

(4) Real órden de 24 de Abril de 1817.

(5) Real órden de 6 de Octubre de 1817.

(6) Real órden de 4 de Enero de 1818.

(7) Real órden de 29 de Enero de 1818.

(8) Real órden de 14 de Mayo de 1818.

(9) Real órden de 21 de Julio de 1818.

(10) Real órden de 20 de Febrero de 1820.

(11) Real órden de 31 de Mayo de 1820.



miento del desestanco de la sal. Las Cortes de 1820 llevaron á término esta radical reforma en un importantísimo decreto⁽¹⁾, cuyas principales disposiciones vamos á reasumir.

Desde el día 1.º de Marzo de 1821 se declaraba en libertad el tráfico y comercio interior de la sal. Esta se habia de vender al pié de fábrica á veinte reales la fanega para el consumo de los pueblos y á diez la que se emplease para salazones en las pesquerías; la Hacienda pública, previos los conocimientos que estimase necesarios, debia proveer á estos establecimientos de las cantidades que fueren suficientes por medio de encabezamientos. Las salinas de particulares habian de continuar como hasta entonces vendiendo al Gobierno exclusivamente la sal que fabricasen, por los precios establecidos ó los que se concertasen en adelante; y las que se hallasen en las costas seguirian tambien en la libertad de vender al extranjero, pagando los derechos establecidos. Se prohibia absolutamente la introducción de sal extranjera y de la que hubiese salido de nuestros puertos exportada para el extranjero, bajo las penas establecidas contra los introductores de géneros de ilícito comercio. Sin perjuicio de esta libertad en que quedaba el comercio de la sal, se establecia que hasta que se pudiera fiar al interes particular el surtido de dicho artículo, la Hacienda pública, como quiera que tan interesada debia suponerse en la provision y consumo del mismo, concurriria con los particulares en la venta, aunque sin preferencia alguna, ó bien se concertaria para las ventas al por menor con los que las hubieran de ejecutar. En tanto fuese necesario, la Hacienda cuidaria de que en los puntos más convenientes hubiera aco-

(1) Real decreto de 9 de Noviembre de 1820.



pios de sal, de donde pudieran proveerse los particulares para su consumo y venta por menor, cuando quisieran preferir estos depósitos públicos á los privados. El precio de dicho artículo, sería el que le asignara el Gobierno todos los años en cada uno de los puntos de consumo. El contrabando de sal, por último, se declaraba sujeto á las mismas penas en que incurrian los demas defraudadores de derechos de los géneros que los adeudaban.

Como es fácil deducir de las indicaciones precedentes, el llamado desestanco de la sal no era sinónimo en el Decreto de 1820 de la libertad de la industria salinera. Desaparecían en virtud de él gran parte de las trabas que venían entorpeciendo el comercio de dicho artículo; pero la fabricación continuaba sometida á la opresora influencia del Estado. Abrigaba este el temor de que el interes privado no proveyese suficientemente á las necesidades del consumo, temor que no fué bastante á disipar la experiencia de casi medio siglo; y, como consecuencia de ello, continúa concurriendo con los particulares, empeñándose en no abandonar su intervencion como productor. El precio que se habia fijado á la sal era, por otra parte, harto subido para que ni en el consumo ordinario ni en las aplicaciones industriales, se logaran obtener las ventajas que reporta la industria de una libertad bien entendida.

Las nuevas condiciones en que se habia colocado el régimen de la sal, exigían se regulase esta materia facilitando el tránsito del antiguo sistema, estableciendo disposiciones que afirmaran y desarrollasen el nuevo. Preciso era, en efecto, que desapareciese la obligacion que anteriormente tenían los pueblos de hacer acopios⁽¹⁾, que se suprimiesen toda clase

(1) Real órden de 13 de Noviembre de 1820.



de limitaciones que impidieran el tráfico de la sal en el interior del Reino ⁽¹⁾ ó pusieran óbice al comercio exterior ⁽²⁾, y que cesasen los derechos ó gracias especiales que venian disfrutando algunos ⁽³⁾. Necesario fué tambien, por otra parte, que se aclararan algunas disposiciones del Decreto sobre el desestanco ⁽⁴⁾; que se dictasen otras para el surtido de la que habia de venderse por cuenta de la Hacienda ⁽⁵⁾; que se regulasen los ajustes de sal para la pesca y salazon ⁽⁶⁾; que se declarara la necesidad de que la Hacienda sufriese la baja del precio á proporcion que de los particulares ⁽⁷⁾; y que se reglamentase la circulacion de la sal ⁽⁸⁾.

Mas no se crea que esta série de disposiciones fueran parte á dar estabilidad y firmeza á la nueva legislacion. Cumplieron únicamente el fin de regular los primeros momentos de la brevísima existencia que la misma estaba llamada á alcanzar. Tropezaba el nuevo sistema con obstáculos gravísimos que hacian imposible la viabilidad del mismo, hasta el punto de que puede afirmarse que nació muerto. La notable disminucion que sufrieran los ingresos por la renta de la sal, no obstante el precio elevado que conservara este artículo, ese perpétuo enemigo del desestanco, hizo que antes de transcurrir dos años se volviera á estancar, bien que modificando en algún modo su antigua forma.

(1) Real órden de 14 de Agosto de 1821.

(2) Reales órdenes de 20 de Marzo y 28 de Mayo de 1822.

(3) Real órden de 1.º de Marzo de 1821.

(4) Real órden de 20 de Enero de 1821.

(5) Real órden de 2 de Febrero de 1821.

(6) Real órden de 18 de Mayo de 1821.

(7) Real órden de 18 de Junio de 1821.

(8) Real órden de 29 de Junio de 1821.



He aquí las disposiciones que contenia el decreto restableciendo el estanco ⁽¹⁾.

El estanco de la sal continuará como hasta aquí; pero reducido á las fábricas y salinas de la Hacienda pública, en las cuales se venderá únicamente de cuenta de esta. Cesarán los surtidos de la Hacienda pública en los puntos en que hasta aquí los ha tenido, luego que se consuman las existencias que haya, y el cuidado de estos surtidos se dejará al interes particular, que podrá emplearse en él por via de especulacion desde el dia 1.º de Julio próximo. Los transportes de sal que hiciesen por mar los especuladores para el surtido del reino y para el beneficio de las pesquerías nacionales se harán precisamente en buques españoles, debiendo llevar guía ó certificacion de las fábricas, que acredite el número de fanegas compradas en ellas. El transporte por mar se hará via recta sin escalas. En caso de arribada forzosa deberán justificar los capitanes de los buques no haber podido cargar ni descargar parte alguna del cargamento, pena de confiscacion del barco. En los puertos de descarga de los buques conductores de la sal, que no podrán ser otros que los puertos habilitados para cualquiera clase de comercio, deberá reconocerse si la cantidad de sal que se conduce está conforme con la guía ó certificado de la salina; y no estándolo, se comisará el exceso. En las conducciones por tierra deberá llevarse guía; y la sal que se aprehenda sin ella en el distrito de seis leguas de las salinas ó de la orilla del mar será comisada. La Hacienda pública venderá la sal al pié de fábrica, á doce reales vellon la fanega. A este precio pagarán la sal los pescadores, á quie-

(1) Decreto de 29 de Junio de 1822.



nes se les abonará cinco reales vellon en quintal de pescado beneficiado en la Península é Islas adyacentes que se extraiga al extranjero. Para facilitar á los traficantes y compradores de sal con destino al surtido del Reino todos los medios de verificar sus especulaciones, se les admitirán en pago de sal letras sobre cualquiera plaza de la Península hasta ciento veinte dias de la fecha, siempre que la compra excediese de seiscientas fanegas. Las letras serán endosadas á favor de la Hacienda pública por una casa conocida de comercio, á satisfaccion del Administrador de la salina. El Gobierno hará en el precio de la sal que se vendiese para extraer al extranjero la rebaja que le pareciese oportuna; y dicha extraccion se podrá hacer en bandera nacional ó extranjera. Los dueños particulares de salinas continuarán en la fabricacion y beneficio de la sal como hasta aquí, vendiéndola exclusivamente á la Hacienda pública á precios convencionales, y la podrán extraer al extranjero en los términos acordados por el decreto de Córtes de 9 de Noviembre de 1820. La Hacienda pública cobrará á los dueños particulares de salinas diez reales vellon por cada fanega de sal de su cosecha que quieran extraer para el surtido de la Península; quedando dos reales á su favor por recompensa del precio á que la habian de vender á la Hacienda. Los dueños particulares de salinas harán el pago en letras, del mismo modo que lo ejecutarán los demas especuladores segun se previene anteriormente. El Gobierno procurará concluir y presentar á las Córtes en la próxima legislatura los expedientes que se están instruyendo sobre incorporacion al Estado de las salinas de particulares. El Gobierno presentará á las Córtes en la próxima legislatura su opinion acerca de si se deberá vender la sal por peso en vez de hacerlo por medida.



Se prohíbe absolutamente la introducción en el Reino de sal extranjera y de la que haya salido de nuestros puertos exportada para el extranjero, bajo las penas acordadas en el decreto de Córtes de 9 de Noviembre de 1820. El Gobierno dictará todas las providencias de precaución y seguridad que tuviese por oportunas para que se cumpla lo dispuesto en el presente decreto y para que no se cometan fraudes, en la inteligencia de que la pena de estos consistirá en la pérdida de la sal, que quedará á beneficio de los aprehensores, y el pago por razón de multa de doce reales por fanega de las aprehendidas, cuyo importe se entregará íntegramente en Tesorería. Quedan autorizados para las aprehensiones de sal los mismos empleados y personas que lo están para los tabacos.

Infírese de lo que antecede que así como al establecer el desestanco no se había concedido á la industria salinera toda la libertad necesaria, al retornar al estanco en 1822, tampoco se restituyó á su primitivo estado, adoptándose en su lugar un término medio; pero una vez colocados en este terreno, y bajo el influjo de exigencias económicas y políticas á un mismo tiempo, no podía extrañarse que se restableciese el antiguo monopolio en todo su vigor, como se verificó por una orden de 1823. Se declaraban por ella sin efecto todo los decretos, órdenes y reglamentos expedidos por el Gobierno revolucionario desde 7 de Marzo de 1820, relativos al desestanco y libre comercio y alteración de los precios del tabaco y sal; y se restablecían en su virtud á su fuerza y vigor las leyes, órdenes y reglamentos que se observaban antes de la citada época. Los pueblos debían continuar en los encabezamientos que tenían antes del expresado día 7 de Marzo para el acopio y consumo de sal, verificándose las entregas en los mismos términos en que antes



se hacian. Los intendentes debian asimismo dar desde luego las órdenes oportunas para que cesase en las fábricas la venta de sal á los particulares, activar la elaboracion de este género y hacer en los almacenes los acopios necesarios para surtir á los alfolíes de su distrito de modo que el pueblo no careciese de sal ⁽¹⁾.

Así como el decreto de 1822 obedecia exclusivamente á razones de carácter económico, la orden que dejamos transcrita parece inspirada en motivos políticos; juzgamos, no obstante, que el propósito de aumentar los ingresos del Tesoro no fuera de todo punto extraño á la nueva reforma. Empero de cualquier modo que sucediere, el resultado positivo de la orden de 1823 fué el restablecimiento del estanco de la sal por un período de medio siglo próximamente.

Consecuencia de este profundo cambio fué el que se hubiera de reproducir la legislacion que habia venido rigiendo hasta el momento en que comenzó ese brevísimo paréntesis de libertad, aunque imperfecta, de la industria salinera. Así vemos que inmediatamente se restablece el impuesto de dos reales en fanega para las milicias provinciales, dando lugar á disposiciones no ménos numerosas que las publicadas en la época anterior ⁽²⁾.

(1) Orden de 11 de Junio.

(2) Real orden de 15 de Agosto de 1823.—Encontramos ademas las disposiciones que siguen hasta 1855. En 16 de Agosto de 1823, mandando que los productos de este impuesto se pongan á disposicion del Inspector general de Milicias; en 26 de Enero de 1824, autorizando á dicho inspector para recaudar el referido impuesto; en 12 de Diciembre del mismo año, prohibiendo hacer uso del producto de dichos dos reales; en 8 de Abril de 1825, ordenando se abonase al Inspector general de Milicias lo que se le adeudaba por este concepto; en 9 de Febrero de 1826, reiterando la prohibicion de hacer uso del producto de los dos reales para



El impuesto para la reparación de caminos que se había venido satisfaciendo anteriormente se puso también en vigor⁽¹⁾; y no se tardó mucho en recargarlo con nuevos arbitrios destinados á un fin análogo, como sucedió con el establecido para la construcción de la carretera de Vigo á Castilla⁽²⁾ y el de cuatro reales en fanega para la reparación de los muelles de Castro-Urdiales⁽³⁾. Los acopios ocuparon muy especialmente la atención del Gobierno, dictándose no pocas órdenes sobre este importante punto dado el sistema del estanco; ya se establece la necesidad de que se acopien todos los pueblos sin excepción alguna⁽⁴⁾, ya se manda repartir á los pueblos la sal que debieron haber consumido desde el restablecimiento del Gobierno absoluto hasta fin de Diciembre de 1823⁽⁵⁾, ya se declara la obligación en que

milicias, bajo la pena de separación del empleo; en 18 de Abril de 1826, restableciendo el descuento de 4 por 100 del mencionado producto; en 1.º de Junio del mismo año, disponiendo que se considerase como producto líquido de esta renta el importe del real en fanega para el Consejo de la guerra, cuyo impuesto se había restablecido; en 18 de Setiembre del mismo año, reiterando la disposición relativa al descuento de 4 por 100; en 7 de Febrero de 1833, mandando se entregue á la Inspección de Milicias el producto de los dos reales; en 28 de Noviembre de 1836, ordenando que debiendo cesar los arbitrios á favor de las Milicias provinciales y caminos desde 1.º de Enero de 1837, se observara el orden y sistema establecidos en los presupuestos y el Tesoro percibiera el producto de los referidos arbitrios; y en 25 de Julio de 1837, mandando en su consecuencia se satisficiera á la Inspección de Milicias lo que se le adeudaba por los dos reales en fanega hasta fin de Diciembre anterior.

(1) Reales órdenes de 12 de Octubre de 1824 y 11 de Mayo de 1826.

(2) Real orden de 16 de Noviembre de 1836.

(3) Real orden de 15 de Julio de 1827.

(4) Real orden de 22 de Enero de 1824.

(5) Real orden de 18 de Marzo de 1824.—Por otra de 29 de Julio del



están los eclesiásticos y militares de recibir y pagar la sal que se les reparta en los pueblos acopiados en que tengan vecindad ⁽¹⁾; ora se previene no intervengan en los repartos las autoridades eclesiásticas y de marina ⁽²⁾; ora se sancionan otras diferentes medidas ⁽³⁾.

En cuanto al precio se fijó desde luego en veinticuatro reales la fanega, no comprendiendo en él el coste de conducción ⁽⁴⁾, aún cuando sí se incluían el gasto de entroge ⁽⁵⁾ y las cantidades para Milicias, bien que sin perjuicio de satisfacer además los impuestos particulares establecidos en algunas provincias ⁽⁶⁾. Pero de la misma manera que antes venía establecido, se concedieron rebajas y bonificaciones en el referido precio á los fomentadores de pesca y salazon ⁽⁷⁾,

mismo año se denegó la solicitud del pueblo de Borox sobre exención del pago de la sal que dejó de sacar.

(1) Real orden de 26 de Enero de 1828.

(2) Real orden de 16 de Setiembre de 1828.

(3) Así en 11 de Noviembre de 1828, se declaró que los del resguardo, torreros y militares ilimitados é indefinidos, estaban sujetos al reparto en los pueblos en que residieran; en 16 de los mismos mes y años, se mandó que los acopios se continuaran haciendo por los Ayuntamientos sin intervencion de ninguna autoridad militar ni eclesiástica; en 29 de Junio de 1829 se hacen nuevas declaraciones sobre repartos á militares ilimitados é indefinidos; en 10 de Enero de 1830 se determina el orden en que deben hacer su consumo los cuerpos militares; en 1.º de Mayo del mismo año se circula el formulario para fijar el consumo de la sal; en 22 de Diciembre de 1832 se declara están sujetos á los repartos los empleados de la hacienda militar; y en 21 de Enero de 1833 se dispone que los expedientes de acopios se sometan á la aprobacion de la Direccion general de Rentas.

(4) Real orden de 16 de Febrero de 1824.

(5) Real orden de 23 de Junio de 1824.

(6) Real orden de 4 de Abril de 1827.

(7) Reales órdenes de 16 de Febrero de 1824, 23 de Mayo y 21 de Agosto de 1828 y 23 de Mayo de 1829.



se abona asimismo el 6 por 100 á los buques que extrajesen sal para el extranjero ⁽¹⁾, y se exime del derecho de tonelada á los buques extranjeros que vinieren por sal ó barrilla ⁽²⁾. Encontramos alguna solicitud por otra parte para que se rebajara el precio establecido, á la que no se consideró oportuno ó procedente acceder; así sucedió con la de la Junta de Mallorca que pedia se rebajasen los ocho reales en fanega que se repartia á los eclesiásticos por su acopio ⁽³⁾. Al llegar á 1834, encuéntrase una disposicion importante que tendió á modificar la anterior manera de ser del estanco de la sal, asimilándole al del tabaco, reforma que, segun se dice en la disposicion á que aludimos, reconocia por causa evitar las repetidas quejas que habia producido y producía la administracion de dicha renta, tal cual se hallaba establecida anteriormente, y proporcionar á los pueblos cuantos alivios fueran compatibles con las necesidades del Estado. Veamos las disposiciones concretas de esta interesante resolucion ⁽⁴⁾. Quedan abolidos desde 1835 los acopios de sal á los pueblos. Se establecerá para la Renta de salinas el estanco y administracion en la misma forma que lo está para la de tabacos. El precio de la sal será uniforme en todos los pueblos, sea cual fuere la distancia á que se hallaren de las fábricas. Este precio se fija á razon de cincuenta y dos reales de vellon cada fanega; entendiéndose comprendida en él la conduccion á todos los puntos de expendio. Los empresarios, armadores, pescadores, fomentadores ó dueños de establecimientos de salazon de carnes, mantecas y pescados,

(1) Real orden de 10 de Mayo de 1825.

(2) Reales órdenes de 25 y 27 de Agosto de 1825.

(3) Real orden de 30 de Julio de 1826.

(4) Real decreto de 3 de Agosto de 1834.



recibirán la sal á razon de los mismos cincuenta y dos reales vellon la fanega. A todos los comprendidos en el artículo anterior se les entregará la cantidad de sal que necesiten; y se les concederá para el pago un plazo de seis meses, contados desde el dia de la entrega, debiendo asegurar su importe con arreglo á las instrucciones y Reales órdenes vigentes. La Real Hacienda abonará á los expresados armadores y fomentadores ó dueños de establecimientos de salazon el treinta por ciento del principal costo que tengan las carnes, mantecas y pescados salados que se extraigan para el extranjero, y quince por ciento por las exportaciones de los mismos artículos que se hagan para los puertos de las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. Los derechos sobre iguales artículos importados del extranjero, se arreglarán de modo que resulte un beneficio en favor de los nacionales. Se establecerá en cada provincia el número de Administraciones generales y de partido que se considere necesario, con los alfolíes y toldos correspondientes al mejor servicio del público. La sal se venderá al contado en todos los alfolíes y toldos, sin otra excepcion que la establecida á favor de los empresarios, armadores, pescadores y demas industriales antes referidos. Se arreglarán las fábricas de modo que correspondan al objeto, para el cual se hallan establecidas. Se prohíbe la venta en las fábricas de sal para el consumo interior. Tanto en las fábricas como en los alfolíes y toldos se venderá la sal por peso, en vez de la medida que en el dia se usa; este peso será el mismo en todas partes y en todos los casos, y se arreglará el precio al señalado para la fanega, publicándose en tarifas que se fijarán á la vista en todos los puntos de expendio, y que comprenderán las divisiones y subdivisiones correspondientes.



A pesar de las disposiciones que acabamos de exponer, el sistema del estanco no había sufrido alteracion esencial; y no se extrañará, por consiguiente, que se continuaran dando sin interrupcion otras nuevas que, como inspiradas en los mismos principios, no podian contribuir á un mejoramiento importante de las condiciones en que estaba llamada á desarrollarse la industria salinera. No nos proponemos fatigar más y más la atencion de nuestros lectores insertando el muy abundante catálogo de decretos, órdenes y circulares que tuvieron origen en este período que corre, hasta las nuevas tentativas hechas en favor del desestanco; pero no podemos prescindir tampoco de indicar los puntos más notables que descuellan en este decenio, harto vacío de interes, si hemos de formar un juicio exacto y fundado del mismo, como venimos intentando conseguirlo á traves de las dificultades que ofrece terreno tan poco trillado.

Digno es de notarse en primer término que si en 1828 el estanco de la sal se había suspendido ya, aunque provisionalmente, en la isla de Mallorca ⁽¹⁾, durante esta época se amplía á Navarra, haciéndose cargo el Gobierno de las salinas de la provincia ⁽²⁾. La administracion de esta renta, punto importantísimo y de trascendentales consecuencias, que por tantas vicisitudes había atravesado ya, sufrió una grave reforma en 1842 ⁽³⁾, arrendándose á D. José Salamanca, cuyo contrato terminó en 1846 ⁽⁴⁾. En este último año volvió á encargarse el Gobierno de la administracion de la referida renta, dictándose inmediatamente varias reglas, á las que

(1) Real órden de 21 de Mayo.

(2) 15 de Diciembre de 1840.

(3) Real órden de 4 de Enero.

(4) Real órden de 2 de Noviembre.



habia de sujetarse la devolucion á la Hacienda pública de las fábricas y alfolíes del reino por la empresa del arriendo ⁽¹⁾. Habiéndose notado algunas irregularidades en la diferencia de precio entre el de la venta y el del estanco, durante la época del arriendo referido, se instruyeron expedientes contra los individuos de las juntas contratistas del mismo; pero en 1850 ⁽²⁾ se relevó de responsabilidad á los mismos y se mandó sobreseer en los mencionados expedientes. En 1847 ⁽³⁾, encargado exclusivamente el Gobierno de la administracion de la sal, se hizo necesario dictar una instruccion para el régimen de las fábricas que se hallaban bajo la dependencia del mismo. En virtud de la misma, toda la sal debia pasar á las fábricas; en estas se abria cuenta con la administracion de cada provincia, las que la tenian á su vez con las expendedurías, las cuales vendian por sí ó encargaban la venta á los particulares mediante la correspondiente licencia.

En este período se adoptó una innovacion importante sobre la manera de expender la sal. En 1821 habia pedido ya noticias la Direccion de Impuestos indirectos para resolver el punto de si convendria adoptar el peso en lugar de la medida en la venta de la sal ⁽⁴⁾. Mas al llegar el año de 1834 y publicarse el decreto cuyas disposiciones dejamos trascritas, se estableció definitivamente que se empleara el peso en lugar de la medida. Se habia convenido, en efecto, en que la exactitud de la apreciacion por medida no podia equipararse á la que se hacía por peso, pues sabido es que

(1) Circular de 6 de Noviembre de 1846.

(2) Real órden de 27 de Noviembre.

(3) Instruccion de 4 de Enero.

(4) Real órden de 30 de Noviembre.



el volúmen de una fanega de sal en tiempo seco es muy diferente del que tiene en tiempo húmedo; y si bien es verdad que tampoco es el mismo el peso en ambos casos, la diferencia es mucho menor tratándose del peso, que de la medida.

Encontramos inmediatamente una larga série de disposiciones encaminadas á regularizar la administracion centralizada en el Estado. Así, se determinan la forma en que debe verificarse la conduccion, entrega, cargo y data de la sal ⁽¹⁾; el abono de portes que debe hacerse al contratista de conducciones de efectos estancados por las fanegas que entregare de más ó de ménos ⁽²⁾; el que debia hacerse por mermas á los alfolíes que no la recibian directamente de las fábricas ⁽³⁾; los gastos que deberian considerarse como de fabricacion ⁽⁴⁾; y las formalidades con que deberian entregarse las sales en los alfolíes ⁽⁵⁾; las medidas que se juzgaron más eficaces para promover los rendimientos de esta renta ⁽⁶⁾; los medios para hacer efectivos los débitos considerables en algunos años por dicho concepto ⁽⁷⁾; las disposiciones que debe-

(1) Real órden de 28 de Junio de 1835.

(2) Real órden de 15 de Noviembre de 1835.

(3) Real órden de 26 de Octubre de 1836. Numerosas son las disposiciones dictadas sobre mermas en el período que recorremos. En 8 del mismo mes se habia hecho abono á los empleados en almacenes y alfolíes por mermas naturales. Siendo excesivas é infundadas las solicitudes que se hacian por mermas, se dictaron varias precauciones para evitarlas en 8 de Noviembre de 1839. Por último, y prescindiendo de otras análogas, en 23 de Agosto de 1840 se establecieron nuevas disposiciones sobre abono de las mismas.

(4) Real órden de 1.º de Noviembre de 1836.

(5) Real órden de 12 de Diciembre de 1836.

(6) Real órden de 25 de Enero de 1839.

(7) Reales órdenes de 18 de Marzo de 1839 y 20 de Abril de 1840.



rian observarse en el caso de avería gruesa de sal ⁽¹⁾; el modo de redactar los estados de consumos y valores para que resultase la debida uniformidad ⁽²⁾; las formalidades con que los administradores y jefes de las fábricas de sal debían recibir las cantidades consignadas para el pago de sus obligaciones ⁽³⁾; las reglas sobre la cuenta y razon de las expresadas fábricas juntamente con una instruccion general para el régimen de las mismas ⁽⁴⁾; la facultad de los intendentes para expedir libranzas contra los comisionados del Banco de San Fernando por los sueldos y gastos de las referidas fábricas ⁽⁵⁾; y lo relativo á la visita general de las mismas ⁽⁶⁾.

El contrabando y las defraudaciones continuaban mermando los ingresos, cada vez más cuantiosos, de la renta de la sal, sin que fuera parte á evitarlo las repetidas órdenes que incesantemente se publicaban para reprimirlos. Tal fué la suerte de las providencias dictadas contra los menores de 17 años aprehendidos como defraudadores ⁽⁷⁾; de las órdenes publicadas para que se inutilizase la sal portuguesa que se aprehendiese ⁽⁸⁾; de las que fijaban las condiciones que habian de reunir los individuos del resguardo ó fuerza armada que el Gobierno situaba en las fronteras de la nacion y en las inmediaciones de las minas y terrenos salobres que el Estado explotaba ⁽⁹⁾; de las precauciones for-

(1) Real orden de 30 de Marzo de 1840.

(2) Circular de 14 de Mayo de 1840.

(3) Circular de 13 de Enero de 1847.

(4) Circular de 20 de Enero de 1847.

(5) Real orden de 28 de Abril de 1847.

(6) Real orden de 8 de Octubre de 1851.

(7) Real orden de 30 de Setiembre de 1836.

(8) Real orden de 16 de Junio de 1840.

(9) Real orden de 19 de Mayo de 1842.



madras para evitar el fraude que se cometia por las provincias exentas ⁽¹⁾, y, por último, de las disposiciones dadas para impedir la defraudacion é impulsar los rendimientos ⁽²⁾. Ni fueron más felices los resultados del extenso y meditado decreto de 1852 ⁽³⁾ contra los delitos de contrabando y defraudacion en general, que viene constituyendo aún hoy la base de nuestra vigente legislacion penal sobre la materia. Motivos más que bastantes habia ya para producir la persuasion de que el contrabando no puede evitarse por muchas y muy buenas que fueren las disposiciones adoptadas para conseguirlo.

En el período que recorremos, como en el anterior, encontramos precios y gracias especiales establecidos en beneficio de las industrias que consumen la sal, y cuyo progreso y desarrollo se entendió interesaba singularmente. La ley de presupuestos de 1835, ordenaba que á los ganaderos que consumiesen más de doce fanegas, se les suministrase en las mismas salinas ⁽⁴⁾, por más que para obtener este beneficio debian cumplir con ciertas formalidades ⁽⁵⁾. Las fábricas debian formar y remitir á la Direccion los correspondientes estados de la sal que con arreglo á las precedentes disposiciones entregasen á los ganaderos, conforme á un modelo que se les remitió ⁽⁶⁾. En 1854 se mandó expedir á los ganaderos la sal que necesitasen, inutilizándola para otro uso, al precio de veinte reales fanega de ciento doce libras ⁽⁷⁾; publi-

(1) Real órden de 13 de Setiembre de 1843.

(2) Real órden de 3 de Setiembre de 1855.

(3) Real decreto de 20 de Junio.

(4) Ley de 26 de Mayo.

(5) Reales órdenes de 28 de Junio y 24 de Agosto de 1835.

(6) Real órden de 11 de Marzo de 1836.

(7) Real decreto de 16 de Enero.



cándose una detallada instruccion para determinar la forma en que habian de cumplirse las prescripciones del mencionado decreto ⁽¹⁾. El mismo beneficio se concedió pocos meses despues á los regimientos de caballería y establecimientos de remonta, por lo que hace á la sal adulterada que necesitasen para beneficiar sus caballos ⁽²⁾. A los empresarios de salazon se rebajó tambien el precio en equivalencia á la prima que disfrutaban antes ⁽³⁾; y habiéndose retardado en practicar las liquidaciones respectivas en algunos casos, se ordenó la formalizacion de las mismas y el pago de sus descubiertos ⁽⁴⁾. Los fabricantes de productos químicos y otros industriales que emplean la sal, disfrutaron de las mismas ventajas concedidas á los fomentadores de salazon ⁽⁵⁾.

A fin de dar todo el impulso posible al comercio exterior de la sal, se concedió premio á la que se extrajera para el extranjero y Ultramar ⁽⁶⁾, aunque no se permitia la exportacion en buques menores de cincuenta toneladas ⁽⁷⁾ ni en menor cantidad que esta ⁽⁸⁾; se eximió de los derechos de puertos á los buques que cargasen sal de las salinas de San Fernando, Torrevieja é Ibiza, en cuya exencion se comprendieron tambien los buques nacionales ó extranjeros que cargaran

(1) Instruccion de 18 de Marzo.

(2) Real orden de 10 de Julio de 1854.

(3) Real orden de 26 de Noviembre de 1835, y 2 de Abril y 13 de Junio de 1855.

(4) Real orden de 4 de Noviembre de 1842, y 13 de Agosto y 29 de Diciembre de 1855.

(5) Reales órdenes de 27 de Octubre de 1836 y 22 de Agosto de 1855.

(6) Real orden de 26 de Noviembre de 1835.

(7) Real orden de 22 de Agosto de 1842.

(8) Real orden de 15 de Febrero de 1848.



en lastre en dichas salinas ⁽¹⁾, así como se amplió á las de San Isidoro, Santa Teresa y Palmones ⁽²⁾; y se prohibió que se exigiesen derechos de puertos en la playa de Vendrell ⁽³⁾; aunque, en cambio de esta gracia, se exigía que los consignatarios de buques que cargasen la sal para el extranjero, en las fábricas de Torre vieja, Ibiza, Formentera y San Pedro del Pinatar, la pagasen en el acto de recibir las guías ⁽⁴⁾.

Debe notarse que el precio ordinario de este artículo fué de cuarenta reales fanega desde 1854, elevándose á cincuenta en los presupuestos de 1855 ⁽⁵⁾.

No debemos omitir tampoco que tanto en la legislación de minas de 1825 ⁽⁶⁾, como en la de 1849 ⁽⁷⁾, se comprendía la sal entre las sustancias que son objeto de la misma.

Si el sistema del estanco subsistía en medio de las múltiples dificultades con que tenía que luchar constantemente, no se crea por eso que se hallaba sostenido ni por la opinión ni por la ciencia, ni por otra causa alguna distinta de la que le consideraba como un capítulo importante de ingresos. La opinión general, ilustrada por la ciencia y de acuerdo en esta parte con ella, se mostraba cada día más opuesta al monopolio ejercido por el Estado, considerándole como una traba injusta é inconveniente que impedía el desarrollo de la industria salinera y de las que utilizan los pro-

(1) Reales órdenes de 25 de Febrero y 4 de Marzo de 1852.

(2) Reales órdenes de 30 de Julio, 26 de Agosto y 15 de Diciembre de 1852.

(3) Real órden de 4 de Diciembre de 1852.

(4) Real órden de 28 de Octubre de 1855.

(5) Real decreto de 21 de Abril y Circular de 1.º de Junio de 1854.

(6) Art. 5.º

(7) Art. 1.º



ductos de la misma. Si en 1823 se habia restablecido el estanco, las ideas no retrocedieron á la época en que este sistema se hallaba en su apogeo, sino que, por el contrario, continuaban progresando en el sentido de su abolicion, hasta el punto de que, invadiendo las esferas gubernamentales, se hubo de tomar por la Administracion la iniciativa en esta importante reforma. En 1852 ⁽¹⁾ se ordenaba el nombramiento de una comision compuesta de personas competentes que se ocupara del exámen de la posibilidad y conveniencia de levantar el estanco de la sal; que propusiera, si lo creia conveniente, el ensayo ó ensayos parciales de desestanco que procediera hacer; y que consultara en su caso, el sistema que en su concepto pudiera establecerse en reemplazo de aquellas rentas, asegurando cumplidamente la equivalencia de sus progresivos productos de un modo que no fuera más oneroso para los pueblos. Al mismo tiempo se excitaba el celo de los particulares que poseyeran conocimientos en esta materias, para que dirigieran á dicha comision los datos y observaciones que juzgaran oportuno.

No se obtuvo por de pronto resultados inmediatos y positivos de semejante decreto, inspirado, aunque tímidamente, en las ideas que habian llegado ya á generalizarse, si bien se hicieron á consecuencia del mismo trabajos que no fueron de todo punto inútiles; pero las exigencias de la opinion y de la industria, hacian cada vez más perentoria una solucion en el sentido del desestanco; y cuando, al llegar el año 1855 y aprobarse los presupuestos, se muestra que no era posible dilatar por más tiempo esa ansiada reforma, el señor D. Juan Bruil, Ministro de Hacienda en aquel entonces,

(1) Real decreto de 18 de Agosto.



formula y presenta á las Córtes un proyecto de ley de desestanco, cuyas disposiciones interesa conocer como precedentes de las que en la actualidad se hallan en vigor ⁽¹⁾. "Se levanta el estanco de la sal, quedando desde 1.º de Julio de 1857, en completa libertad la fabricacion y venta de este artículo. Las corporaciones ó personas interesadas en la percepcion de arbitrios ó recargos sobre el consumo de sal, serán indemnizadas por otros medios del importe anual de sus respectivos contingentes, sirviendo de tipo al efecto los rendimientos del último quinquenio ó de período más corto en caso necesario. Se declaran en estado de venta las salinas de la Hacienda y las demas fincas y efectos pertenecientes á la misma que se hallen aplicados exclusivamente al servicio de la renta. En pago de estos bienes sólo se admitirá metálico, entregando los compradores la cuarta parte al verificarse la adjudicacion, y el resto, por cuartas partes tambien, en los cuatro años siguientes. La venta de las salinas y demas fincas, tendrá lugar en pública licitacion. Tambien se sacará á pública subasta con las precauciones convenientes el arrendamiento de las salinas del Estado, mientras por cualquier circunstancia estén pendientes de enajenacion. Con la misma publicidad se venderá la sal, que á la supresion del estanco resulte existente en las fábricas, depósitos y alfolíes, y la que reciba la administracion en pago de arrendamientos ó por otros conceptos. El Gobierno cuidará de ejecutar, si fuere posible, la venta de las existencias dentro del plazo que medie desde la publicacion de esta ley hasta el día que en la misma se prefija para el desestanco. A fin de facilitar á los compradores los medios de tomar

(1) 9 de Noviembre.



parte en esta especulacion, se admitirá á los rematantes en pago de la sal letras pagaderas en el mismo punto de la venta, ó pagarés á la órden, y en ambos casos garantizados por casas de arraigo, siempre que la cantidad de sal comprada no baje de dos mil quintales, ni exceda de noventa dias el plazo más largo de las letras ó pagarés. La Hacienda concurrirá con los particulares á la venta por mayor y menor de toda la sal perteneciente al Estado para cuya adquisicion no se hayan presentado compradores. Continuará prohibida por regla general la introduccion de sal extranjera y de la que salga de puertos españoles para fuera del reino, bajo las penas establecidas respecto á las introducciones de artículos de ilícito comercio. El Gobierno podrá, sin embargo, permitir la introduccion por tierra de sal portuguesa para el surtido de aquellas poblaciones en que el excesivo precio de la sal indígena aconseje esta medida, á condicion de que la entrada tenga lugar precisamente por aduana habilitada y mediante el pago de diez reales en quintal. Por ahora y hasta tanto que se arreglen los fueros de las provincias Vascongadas, podrán estas surtirse de la sal indígena que necesiten para su consumo, quedando habilitadas para la que de puertos españoles introduzcan por mar las aduanas de Bilbao y San Sebastian, mediante el pago de diez y seis reales en quintal. Los trasportes de sal indígena por mar de unos puertos á otros de España, se permitirán en la misma clase de buques que estén autorizados para los demas frutos nacionales. La extraccion del mismo artículo para las colonias ó para el extranjero será permitida con libertad de derechos de fabricacion y consumo en toda clase de bandera, y cualquiera que sea la cabida de los buques. Los buques nacionales y extranjeros que vengan en lastre á



puertos españoles con el objeto de cargar sal, ó que con el mismo fin vengan de un puerto á otro, tambien españoles, quedarán exentos de los derechos de faros, fondeaderos, carga y descarga. Si el cargamento de un buque consistiere ademas en otros efectos, la exencion del impuesto á la salida será proporcional á la cantidad de sal realmente cargada. En subrogacion de los actuales rendimientos de la renta, el Gobierno queda autorizado: 1.º Para imponer un recargo de 5 por 100 sobre los cupos de la contribucion territorial é industrial y de comercio. 2.º Para incluir la sal en la tarifa de las especies generales sujetas al impuesto de consumos ó de puertas, con un derecho uniforme para todas las poblaciones de diez y seis reales en quintal. Las cuotas que á este respecto hayan de imponerse á los pueblos en donde no se hallen establecidos los derechos de puertas, serán á razon de diez y seis libras por habitante. La que se destine á la agricultura, ganadería, salazones, fábricas de productos químicos y otros usos industriales, será tambien comprendida en el señalamiento con un derecho módico de dos reales por quintal. 3.º Y, finalmente, para incorporar en las matrículas de la contribucion industrial y de comercio: (a) En la primera clase de la tarifa general núm. 1, adjunta al Real decreto de 20 de Octubre de 1852, á los almacenistas que vendan sal por mayor y menor ó en el primer concepto solamente. (b) En la sexta clase de la misma tarifa núm. 1, á los que solo vendan sal por menor, ó sea en cantidad que no pase de doce libras. (c) En la tarifa núm. 2, no sujeta á la base de poblacion, á los mercaderes ambulantes que recorren los pueblos, ferias ó mercados con el objeto de vender sal por menor, pagando una cuota fija de setenta reales anuales. (d) En la misma tarifa núm. 2, á los patrones ó capitanes de



buques que embarquen sal á su nombre y recorran los puertos con el objeto de venderla, pagando una cuota fija de trescientos diez reales anuales. (e) Y en la tarifa de la industria fabril y manufacturera señalada con el núm. 3, á los dueños ó arrendatarios de salinas, pagando por ajuste alzado dos reales por cada quintal de sal que elaboren y destinen al consumo interior; pero sin que en ningun caso la cuota anual que pague cada fabricante, sea menor de cuatrocientos reales. Los fabricantes no podrán vender sal en cantidades inferiores á diez quintales á no acumular al propio tiempo la profesion de vendedores por mayor y menor, en cuyo caso pagarán por separado una cuota equivalente á la señalada á los almacenistas situados en poblaciones de quinientos vecinos abajo. Los actuales poseedores de salinas, ó los que con título suficiente beneficien nuevos criaderos, pagarán ademas del derecho de fabricacion una cuota de tres reales por cada quintal de sal de la que destinen al consumo interior. De este derecho quedarán exceptuadas las salinas del Estado, que por compra, cesion ú otro cualquier motivo pasen á manos de sociedades ó particulares.”

Al mismo tiempo que se presentaba este proyecto á las Córtes, publicábase una orden ⁽¹⁾ en que se establecia que habiéndose presentado á la Córtes en aquel dia el proyecto para el desestanco de la sal, cumpliendo el precepto legislativo de las mismas al aprobar el presupuesto del mismo año, mientras no llegara á ser ley y estuviera vigente la del estanco, debia procurarse por todos la más puntual observancia de la misma. No queremos pase desapercibida esta disposicion, porque muestra bien claramente cuál era el es-

(1) Real orden de 10 de Noviembre de 1855.



píritu general dominante en aquel momento, y cuánta impaciencia debía manifestarse por el inmediato planteamiento de la abolición del monopolio que venía ejerciendo el Gobierno, cuando este hubo de apresurarse á anunciar la reforma el mismo día que presentaba su proyecto á las Cortes, y á recomendar de una manera especialísima la observancia de la ley del estanco, á la vez que conminaba con todo el rigor de las leyes penales vigentes á los que infringieren aquella. El proyecto de desestanco obtuvo por fin la aprobación de las Cortes y mereció inmediatamente la sanción real; pero por un fenómeno extraordinario y que parecería inexplicable sino se tuvieran en cuenta las especialísimas circunstancias del monopolio de la sal, no obstante haberse cumplido todas las condiciones necesarias para elevarlo á la categoría de una verdadera ley, ni se promulgó, ni se llegó, por tanto, á aplicarle. Sin duda contribuyó á producir este insólito fenómeno más que los acontecimientos y mudanzas de carácter político, el obstáculo gravísimo conque ha tenido que luchar constantemente el desestanco de la sal, la dificultad de sustituir este importante capítulo de ingresos, y de privarse el Tesoro, en su consecuencia, de los pingües y fáciles productos del mismo; y acaso no favoreciera tampoco para el buen éxito de este proyecto la especie de solidaridad que, por desgracia del desestanco de la sal, se ha establecido ordinariamente entre el mismo y el del tabaco, que se encuentra en muy distintas condiciones.

No habiendo tenido cumplimiento la ley de 1855, por el raro fenómeno que acabamos de notar, las cosas continuaban marchando por el mismo camino que venían recorriendo anteriormente. El decreto del referido año que tendía á reprimir con mano fuerte el contrabando de la sal, no hubo



de producir los resultados apetecidos, ni obtuvo más feliz éxito que las disposiciones precedentes sobre el mismo punto: en su virtud, encontramos que se reitera el precepto de que las sales de procedencia ilegítima aprehendida por los resguardos de las provincias limítrofes al reino de Portugal, fueran completamente inutilizadas en la forma en que antes se verificaba ⁽¹⁾; se aclaran las disposiciones anteriores sobre la conduccion de las aprehensiones de sal sin reo ni caballería al pueblo más inmediato ⁽²⁾; y se establece que la sal procedente de aprehensiones se estime al precio de estanco para la imposición de multas ⁽³⁾.

Para facilitar la exportacion de la sal se concedió á los consignatarios de los buques treinta días de plazo para satisfacer á la Hacienda el importe de la que cargasen para el extranjero de las salinas de Torre Vieja, Ibiza, Formentera y San Pedro del Pinatar con pagarés garantidos al efecto ⁽⁴⁾.

En cuanto al precio de este artículo, se estableció en 1856 que desde 1.º de Julio del mismo año dejaran de exigirse todos los arbitrios ó recargos que venian cobrándose sobre el precio de cincuenta reales por quintal, exceptuándose los de premio por expedición al por menor. Continúase, por otra parte, favoreciendo á determinadas industrias que consumen sal y que el Estado se creyó en el deber de fomentar, de una manera análoga á lo que se habia venido practicando en los años precedentes. Así vemos que se modifican el precio y las reglas para la entrega de sal á los

(1) Real orden de 12 de Agosto de 1856.

(2) Real orden de 2 de Junio de 1856.

(3) Real orden de 28 de Marzo de 1860.

(4) Real orden de 19 de Julio de 1856.



fomentadores de pesca y salazon ⁽¹⁾; se establece la forma en que debe entregarse á varios fabricantes de jabon la sal adulterada que necesitasen para sus elaboraciones ⁽²⁾; se hace extensiva á todos los fabricantes de dicho producto la gracia concedida á los de Málaga para poder adquirir sal de las salinas de la Hacienda, despues de inutilizada para otros usos y cumpliendo con ciertas formalidades ⁽³⁾; se declara comprendidos en esta misma gracia á todos los fabricantes de guano artificial ⁽⁴⁾; se concede á los fabricantes de jabon de la Coruña la adquisicion de la sal que necesitasen para su elaboracion, á doce reales quintal, prévia la inutilizacion del género ⁽⁵⁾; se fijan las reglas oportunas para justificar la inversion de la sal que los fabricantes de escabeches reciben á ménos precio que el de estanco ⁽⁶⁾; se reproducen la circular de 27 de Julio de 1852 y la Real órden de 23 de Junio del mismo año sobre entrega de sales á los fabricantes de escabeches ⁽⁷⁾; se fija en seis reales el precio á que en lo sucesivo deben pagar la sal los fabricantes de fundicion de minerales ⁽⁸⁾; y se extiende, por último, á determinadas clases de pescados el abono de sal concedido en la Real órden de 26 de Noviembre de 1853 ⁽⁹⁾.

Por lo que hace á la administracion de la renta de la sal encontramos únicamente establecido en cuanto á mer-

(1) Real órden de 4 de Febrero de 1856.

(2) Real órden de 4 de Mayo de 1856.

(3) Real órden de 2 de Junio de 1856.

(4) Real órden de 23 de Junio de 1856.

(5) Real órden de 24 de Setiembre de 1856.

(6) Real órden de 26 de Setiembre de 1856.

(7) Circular de 24 de Setiembre de 1858.

(8) Real órden de 12 de Noviembre de 1860.

(9) Real órden de 19 de Noviembre de 1860.



mas, que sólo se podrán abonar las que fueren declaradas con anterioridad por el Rey ⁽¹⁾.

Al llegar á este punto de nuestra narracion, volvemos á encontrarnos con nuevas tendencias y aspiraciones á la terminacion del monopolio del Estado. Despues de breves años de observancia del antiguo y casi exclusivo sistema dominante, la opinion general, que se iba afirmando y robusteciendo de un modo cada vez más extenso, no pudo ménos de dejarse oír nuevamente en las esferas del poder; la idea del desestanco se iba haciendo lugar cada día con más fuerza; y no era posible ya que los poderes públicos se mostrasen indiferentes ó desoyeran ese clamor.

Tropezábase, sin embargo, con el eterno obstáculo que oponia la penuria del Tesoro á una reforma que le privaba de cuantiosos ingresos; pero tal era el descrédito en que habia caído el sistema antiguo, tales y tan justas las reclamaciones que contra él se dirigian de continuo, que los poderes públicos se vieron precisados á estudiar esta importantísima materia, dando de este modo cierta satisfaccion á las exigencias racionales del pueblo. En 1863 ⁽²⁾ vemos, efectivamente, que el Ministro de Hacienda dicta varias reglas á la Direccion general de Rentas estancadas para que se estudie esta importante cuestion, y se proponga despues de maduro exámen, el proyecto de desestanco que tambien esta vez se extendia á la sal y al tabaco. Las consideraciones que en esta interesante órden se exponen, y de las que nos ocuparemos en otro lugar, son por regla general de todo punto exactas, y tienden á colocar la cuestion del estanco en

(1) Real órden de 15 de Octubre.

(2) Real órden de 28 de Octubre.



su verdadero punto de vista, cuando se prescinde de las exigencias del estado financiero del país, fijándose únicamente en los principios. Aquí solo nos interesa dejar sentado que se reconoce de un modo terminante que el monopolio que ejercía el Estado era un arbitrio de los más combatidos, y que sólo podía disculparse por la antigüedad de su origen y los rendimientos que proporcionaba.

Las atinadas observaciones del Ministro no sirvieron por de pronto sino para satisfacer la aspiracion general de una reforma profunda en el ramo que nos ocupa. No fué, sin embargo, completamente estéril para la realizacion del término á que se tendia: cada paso que se daba por este camino, cada reforma parcial obtenida, cada disposicion legislativa alcanzada, era un nuevo y más evidente reconocimiento de lo inconveniente del sistema actual y de la necesidad imperiosa de sustituirlo por otro más justo y útil. No se llega tampoco por esta vez al desestanco; pero los ensayos, las tendencias, las aspiraciones, son cada dia más frecuentes y universales, y no puede estar lejos el momento en que se llegue, por fin, á plantear sólidamente tan ansiada reforma.

Por lo demas, no habiendo surgido ningun resultado práctico en el órden legal de las mencionadas advertencias de 1863, ni del proyecto de desestanco que á la vez se encargaba, no podrá extrañarse que la legislacion siga recorriendo en los años subsiguientes un camino igual al anterior, y que debe considerarse como continuacion del mismo. Así vemos que se hace necesario insistir cada vez con más energía en las disposiciones encaminadas á reprimir el contrabando; se previene á los Comandantes del resguardo de sales informen mensualmente á la Direccion del resultado de los valores, y den al mismo tiempo cuenta de las visitas que



efectúe el resguardo á los alfolíes ⁽¹⁾; y se manda reproducir las Reales órdenes de 27 de Octubre de 1865 y 17 de Febrero de 1866 á fin de que con su estricto cumplimiento se evitara el contrabando que denunciaba el cónsul de España en Villarreal de San Antonio ⁽²⁾.

Se continúan dictando de la misma manera diferentes disposiciones dirigidas á favorecer la exportacion de las sales, tal sucede con la que declara exentos de derechos, aunque con ciertas limitaciones, á los buques que fueren á cargar en el puerto de San Pedro del Pinatar ⁽³⁾; y con la que amplía á noventa dias el plazo de treinta concedido á los consignatarios de los buques que cargasen en las salinas de Torreveja, Ibiza, Formentera y San Pedro del Pinatar ⁽⁴⁾.

Los precios que se fijan á las sales, tanto para el consumo general, como para determinadas industrias en particular, sufren numerosas alteraciones. La ley de presupuestos de 1865 á 1866 estableció el de once escudos, doscientas ochenta y cuatro milésimas por cada quintal métrico ⁽⁵⁾; aumentándose en su consecuencia los precios y tarifas para la venta de la sal ⁽⁶⁾. Por la ley de presupuestos de 1866 á 67 ⁽⁷⁾ se autorizaba al Ministro de Hacienda para que, siguiendo la venta de la sal en la forma en que entonces se verificaba, pudiera establecer, segun las condiciones de cada localidad, las espendedurías particulares con los recargos

(1) Circular de 26 de Febrero de 1864.

(2) Real orden de 1.º de Setiembre de 1866.

(3) Real orden de 30 de Junio de 1865.

(4) Real orden de 3 de Enero de 1868.

(5) Ley de 15 de Julio de 1865.

(6) Real orden de 13 de Junio de 1865.

(7) Ley de 3 de Agosto de 1866, art. 13.



que estuvieran vigentes hasta 30 de Junio de 1865, debiendo establecerse alfolíes para la especulacion al por mayor en todas las administraciones de estancadas que fuere conveniente; y se establecia tambien que por el nuevo sistema de fabricacion que se estaba ensayando, se sacase al consumo público en paquetes y envases apropiados la sal depurada, preparada, molida y refinada, recargando en cada clase el precio que exigieren las respectivas manipulaciones. Como consecuencia de estas disposiciones, la administracion fijó los precios á que respectivamente debia venderse cada una de las clases de sal ⁽¹⁾.

Por lo que hace á los precios de gracia, se dispuso desde luego en la ley de presupuestos de 1865 á 1866 ⁽²⁾, que desde el 1.º de Julio del año 1865 cesaria el privilegio de los ganaderos de sacar la sal pura en las fábricas á treinta reales, facilitándoles desde aquella fecha en los almacenes de las capitales de provincia la sal adulterada que necesitasen para el uso de sus ganados, en la forma prevenida en el Real decreto de 16 de Enero de 1854. Para llevar á efecto lo preceptuado en este artículo, se circuló la instruccion correspondiente ⁽³⁾. Para evitar los fraudes que pudieran cometerse por los fomentadores de pesca y salazon, con perjuicio de la Hacienda, se les señaló un plazo dentro del que debian justificar la inversion de la sal que se les hubiese entregado al fiado ⁽⁴⁾. Se fijó definitivamente en diez reales el precio de cada quintal que se suministrase para la industria de salazon de carnes y pescados, y en diez y ocho el de

(1) Real órden de 10 de Agosto de 1866.

(2) Art. 5.º de la ley de 15 de Julio de 1865.

(3) 17 de Julio de 1865.

(4) Real órden de 16 de Octubre de 1865.



cada uno destinado á la fabricacion de escabeches⁽¹⁾. Nuevamente hubo necesidad de insistir, por falta del debido cumplimiento de las órdenes anteriores, en la necesidad de que se justificase, señalando el preciso término de un año, el pago y liquidacion de la sal que los fomentadores de pesca y salazon recibiesen al fiado y á más bajo precio que el de estanco⁽²⁾. Para regularizar esta importante materia se establecieron algunos preceptos en la ley de presupuestos de 1866 á 1867⁽³⁾. Segun esta los fomentadores de pesca y salazon seguirian disfrutando del beneficio de recibir la sal al fiado y al precio de coste y costas para la Hacienda, que se fija desde 1.º de Julio de 1866 en un escudo por quintal: la administracion debia cuidar de que se formalizara mensualmente con arreglo á instruccion las liquidaciones de cada costera con los industriales, cobrando de ellos al precio de gracia la sal cuya inversion acreditasen por medio de exportaciones de pescado salado, bajo los tipos de salazon establecidos en la Real orden de 26 de Noviembre de 1835, y cargándoles por primera partida de cuenta nueva la sal que resultase existente en las fábricas, aunque fuese de la ya usada y conocida en la industria con el nombre de resalga.

En consonancia con lo prescrito por la antedicha ley de presupuestos, hubo de determinarse la aplicacion que se deberia dar á las sales limpias y de resalga de la última costera, que resultasen existentes en las fábricas de salazones al practicar la liquidacion con la Hacienda⁽⁴⁾. No se habia conseguido extirpar completamente los abusos cometidos por

(1) Real orden de 5 de Enero de 1866.

(2) Real orden de 4 de Mayo de 1866.

(3) Art. 12.

(4) Real orden de 4 de Setiembre de 1866.



los fomentadores de pesca y salazon á la sombra de los privilegios de que gozaban; y esto explica la nueva declaracion de que estaban obligados á satisfacer á precio de estanco, la sal que recibiesen al fiado, mientras no justificasen su inversion en salazones y el desembarque de las mismas en el punto de su destino ⁽¹⁾. En el mismo año de 1867, se hizo extensiva á los fabricantes de losetas y mosaicos finos para pavimentos la gracia de recibir la sal en las salinas del Estado al precio de catorce reales quintal castellano ⁽²⁾. En el año siguiente ⁽³⁾ se mandó nombrar una comision que, despues de estudiar los antecedentes del asunto, propusiera la solucion que estimare conveniente para misturar la sal destinada al consumo de los ganados. De la enumeracion que venimos haciendo de las industrias favorecidas con el privilegio de obtener la sal á precios más reducidos que los del estanco, resulta que el número de aquellos habia llegado á ser considerable, y los precios en extremo varios y establecidos sin obedecer á un plan general ni á principio fijo. Comprendióse la necesidad de una reforma en este punto; y ya que no se introdujo la modificacion radical que exigia, establecióse á lo ménos cierta uniformidad y fijeza que pudo considerarse como una mejora. En su virtud se determinaron en 1868 los precios á que debia facilitarse la sal á cada una de las industrias desde 1.º de Julio ⁽⁴⁾; y se circularon las órdenes ⁽⁵⁾ oportunas para que se pusiera en observancia, sujetándose en todo lo demas á las disposiciones vigentes en

(1) Real órden de 9 de Abril de 1867.

(2) Real órden de 27 de Diciembre de 1867.

(3) Real órden de 2 de Junio de 1868.

(4) Real órden de 8 de Junio de 1868.

(5) Circular de 19 de Junio de 1868.



aquella fecha ⁽¹⁾. No podia ménos de comprenderse, sin embargo, que semejante reforma era tan incompleta como destituida de sólida base; y en su consecuencia fué llevada á su natural término en el año siguiente, estableciéndose, á vuelta de importantes declaraciones de que nos haremos cargo, que el precio de la sal para todas las industrias que gozaban de la gracia ó privilegio de adquirirla á otros más bajos, sería el de diez reales quintal, tomándola en los depósitos y alfolíes; que sobre el precio mencionado satisfarian dos reales más en quintal, por gastos de misturacion y adulteracion, la industria pecuaria, los fabricantes de productos químicos, los de fundicion de minerales, los de barrilla y jabon y los de cristal, vidrio, loza y losetas; y que la entrega de sal pu-

(1) Consideramos un dato interesante para dar á conocer el estado en que se encontraba esta parte de nuestra legislacion inmediatamente antes de 1869, la nota ó tarifa consignada en la Real órden de 8 de Junio citada.

	Escudos.	Milésimas.
Salpresadores de pescados.....	5	200
Fomentadores de pesca y salazon.....	1	400
Salazoneros de carne.	1	400
Fabricantes de escabeche.....	2	"
Idem de conservas alimenticias de pescado.....	2	"
Idem de queso y manteca al estilo de Flandes.....	1	600
Ganaderos (adulterada).....	2	200
Fabricantes de productos químicos { En las fábricas. .	"	400
(adulterada á su costa). { En los alfolíes..	1	400
Idem de fundicion (adulterada á su costa). En las fábricas.....	1	"
Idem de barrilla y jabon (adulterada á su costa). En las fábricas.....	1	400
Idem de cristal, vidrio, loza y loseta, y mosaicos finos para pavimentos (adulterada á su costa). En las fábricas.....	1	400
Idem de guano artificial (adulterada).....	1	400



ra ó misturada se verificase únicamente en los depósitos y alfolíes con extricta sujecion á lo determinado por las instrucciones vigentes ⁽¹⁾.

Varias son tambien las órdenes pertenecientes á este período cuyo objetivo lo constituye el regularizar la administracion de esta renta, poner un correctivo á los abusos que se cometieran y procurar la baratura en la fabricacion y expencion de la sal. A este fin se señalaron los días en que debían remitirse á la Direccion los cumplidos de las guias de remesas de sal ⁽²⁾; se dictaron las reglas convenientes para los trasportes marítimos y terrestres de dicho artículo ⁽³⁾; se suprimieron hasta once fábricas por ser excesivo el gasto de fabricacion, dato importantísimo que no olvidaremos en este trabajo ⁽⁴⁾; se varían los precios y tarifas para la venta ⁽⁵⁾; y se autoriza al administrador del Barquero, provincia de la Coruña, para expedir registros de cabotaje para las salazones que se embarcasen por dicho punto ⁽⁶⁾.

Empero en medio de las innumerables disposiciones que se dictaron en el espacio de medio siglo y cuya fatigosa enumeracion hemos terminado, descúbrese un vicio radical que, si no esterilizaba por completo aquellas, por la colosal abundancia de nuestra riqueza salinera, hacía imposible se obtuviesen todas las ventajas debidas. Nos referimos á la direccion facultativa de las salinas. Encomendada ésta á personas puramente prácticas y sin los conocimientos científicos

(1) Decreto de 4 de Marzo de 1869.

(2) Circular de 24 de Febrero de 1864.

(3) Circular de 15 de Febrero de 1864.

(4) Real decreto de 3 de Marzo de 1865.

(5) Real orden de 13 de Junio de 1865.

(6) Real orden de 22 de Julio de 1865.



indispensables para una acertada y bien dirigida explotación, no era posible obtener los pingües rendimientos que, dado el sistema del estanco pudo y debió obtener el Gobierno, ya que se reservara un monopolio cuya justicia y conveniencia examinaremos más adelante. Hay más aún; al obrar así, no sólo se faltó á lo que dictan los sanos principios y hasta al sentido comun, sino tambien á las prescripciones legales terminantes y expresas; porque, en efecto, tanto en la ley de minas de 1849 ⁽¹⁾ como en la de 1859 ⁽²⁾, se establece que el Cuerpo de Ingenieros de Minas será el encargado de la direccion facultativa de los establecimientos mineros reservados al Estado. Consecuencia de ello ha sido que, dominando exclusivamente la rutina en semejantes explotaciones, y prescindiéndose de los importantes trabajos y estudios que por deber y mision propias venian haciendo los ilustrados Ingenieros de minas en asunto tan de su exclusiva competencia, la fabricacion no pudiera resultar con la perfeccion y baratura que de otra suerte, y se desperdiciase gran cantidad de productos con grave daño del consumidor y del Tesoro.

La ley de minas de 1859 comprende, como las anteriores, las sustancias salinas entre las que son objeto del ramo de minería ⁽³⁾, y las bases de 1868 incluyen tambien en la tercera seccion las sustancias salinas, comprendiendo las sales alcalinas y térreo-alcalinas, ya se encuentren en estado sólido, ya disueltas en el agua ⁽⁴⁾. De todas maneras, como la sal se hallaba monopolizada por el Estado, los concesiona-

(1) Art. 38.

(2) Art. 96.

(3) Art. 1.º

(4) Art. 4.º



rios debían vender al mismo los productos y sujetarse á las demas limitaciones que dejamos expuestas, sin contar con los impuestos mineros que pesaban sobre esta explotacion, ya los generales de contribucion de inmuebles, cultivo y ganadería, ya los especiales de carácter exclusivamente minero. Todas estas trabas, como dice un distinguido escritor contemporáneo, cuya competencia en las cuestiones económico-mineras es notoria ⁽¹⁾, son la causa de que la industria particular no se haya dedicado á la explotacion de la riqueza salífera que poseemos, y las pocas solicitudes que se han hecho sobre minas de sal, han encontrado siempre la oposicion de los empleados del ramo, fundándose en que pertenecen al Estado por estar dentro de sus demarcaciones, cuya cuestion era difícil de resolver por ser muy pocas las salinas que tienen límites fijos y reconocidos.

No terminaremos esta sucinta cuanto enojosa exposicion con que nos vemos precisados á comenzar nuestro trabajo, sin añadir algunas frases con el propósito de indicar, siquiera fuere brevemente, el estado de la industria salinera en Ultramar. No nos mueven á hacerlo así solo el deseo de que la presente Memoria sea lo ménos defectuosa que fuere posible, sino la conviccion de que nunca ni en materia alguna debe relegarse al olvido aquel país que, si bien tan mermaado hoy que causa honda pena la comparacion con lo que fuera en mejores tiempos, comparacion que sin poderlo evitar asalta á la memoria, constituye al fin una parte de nuestra querida patria, verdad tan indudable como en mal hora olvidada: las importantes y provechosas lecciones que ese estudio nos suministra, fueran más que suficiente motivo

(1) Sr. Maffei.—*Economía minera*, 1879.



para obrar de este modo, aun cuando no militasen en nuestro favor aquellas poderosísimas consideraciones.

Las vastas y riquísimas regiones, preciosas perlas engastadas en la Corona de España por Cristóbal Colon, no sólo eran abundantísimas en metales preciosos, sino tambien en sal. Los historiadores de las Indias hacen especial mencion de las salinas de Araya; de las lagunas de Méjico, cuya sal era singularísima para salar carnes; y de las salinas artificiales de Santa Marta ⁽¹⁾. En el Perú se encontró con tal abundancia que, segun Solórzano ⁽²⁾, no podia apreciarse su cantidad; el P. Acosta ⁽³⁾ refiere que cerca de la ciudad del Cuzco, existia una fuente cuyas aguas se convertian en sal á poca distancia; y el Dr. D. Juan de Orpin descubrió en la provincia de los Cumanagotos lagunas de sal tan copiosas, que temiendo que los enemigos les molestasen mucho por codicia de poseerlas, les echó encima un rio de agua dulce con no poca costa y trabajo para inutilizarlas y librarse del cuidado de defenderlas, habiéndose hecho lo mismo con las de la Tortuga, Bonaire y otras.

La explotacion de esta gran riqueza fué completamente libre en los primeros años del descubrimiento de América; pero no tardaron nuestros monarcas en extender al otro lado de los mares el sistema de la regalía establecido en el antiguo continente. Siendo Virey del Perú D. Francisco de Toledo, se le habia encargado ya que ocupase las salinas de aquel país y se explotaran por cuenta del Rey; mas no habiendo tenido efecto, se ordenó nuevamente al Virey Don

(1) Antonio Herrera, *Decadas*, y el P. Eusebio de Nieremberg, *De hist. natur.*

(2) *Política indiana*.

(3) *Historia natural y moral de las Indias*.



Martin Enriquez, por cédula dada en Lisboa el 13 de Febrero de 1582. Hácese mencion en ella de las riquísimas salinas de Pesiacaca y otras de aquella region, que no tenían dueño, y que convenia se ocuparan por el Rey, que era su legítimo señor; y se manda se verifique así, administrándose por la Real Hacienda, aunque suspendiendo el ejecutarlo y dando cuenta en el caso de que juzgase se pudiese seguir algun inconveniente ⁽¹⁾. Lo mismo se dispuso respecto á las salinas de Nueva España, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya por otras Reales cédulas de 1575 y 1587 ⁽²⁾.

Los rendimientos que el estanco de este artículo dió inmediatamente fueron en extremo pingües, como es fácil comprenderlo, ya se atiende á lo muy abundante del mismo, hasta el punto de haber hecho decir á un notable escritor ya citado ⁽³⁾, que con la agregacion de las Indias á España puso Dios en manos de ésta todos los alfolíes de la sal, ya

⁽¹⁾ *Schedula Reg.* t. III. Solórzano, obra cit.—Como quiera que esta disposicion no se encuentra citada generalmente, juzgamos no será inoportuno copiar su parte dispositiva que dice así: «Os mandamos hagais todas las diligencias necesarias para saber y entender las salinas que hay en esa tierra, y que por el mejor medio y órden que convenga, pues nos pertenecen, se beneficien con la menor costa que ser pueda por cuenta nuestra á precios moderados, y encargareis la administracion de ello á la persona ó personas que mejor lo puedan hacer, y con más beneficio de nuestra Real Hacienda. Y si os pareciese que de ejecutarlo se puede seguir algun inconveniente notable, sobreseereis en ello y darnosheis aviso de todo en la primera ocasion.»

⁽²⁾ Solórzano, obra cit.—Escalona, *Gazophil Perub.*

⁽³⁾ Solórzano, obra cit.—En confirmacion de la gran abundancia de sal que poseía España, tanto en la Península como en las posesiones de Ultramar, cualquiera de cuyas salinas fuera bastante para proveer á ambos mundos, cita el testimonio de los siguientes escritores: Aristóteles, *De hist. Anim.* Plinio, *Hist. nat.* Solino, Alberto Magno, *De hist. Anim.*, y Marineo Lículo, *De reb. Hisp.*



se considere el gran consumo que de la misma se hacía en el beneficio de los metales, y especialmente de la plata. Así consta que en tiempo del Virey Marqués de Cerralvo se arrendaron las salinas llamadas del Peñon Blanco en setenta mil pesos anuales; y, según testimonio del escritor últimamente mencionado, se comunicó al Consejo que había pujas por mucha mayor suma, las cuales no se admitieron.

En el Perú parece encontró el estanco mayor oposición que en los demás puntos, en términos de que el Virey Don Matías Enriquez y sus inmediatos sucesores no consideraron conveniente establecerlo, y hubo necesidad de que se reiterase el encargo por otra Real cédula de 5 de Marzo de 1603. Comenzó á plantear el nuevo sistema el Conde de Monterey, y lo prosiguió el Marqués de Montesclaros, á cuyo efecto dieron principio por las salinas de Guara y otras del distrito de la Ciudad de los Reyes, encargándolas al Contador Juan Canclas Albarran⁽¹⁾.

Poco tiempo pasó, no obstante, sin que la experiencia diera á conocer los inconvenientes gravísimos que resultan del estanco, unidos á los que emanaban de las peculiares condiciones de los pueblos americanos en aquel entonces. Resultaba, en efecto, según documento fehaciente que citaremos después, que frecuentemente no se obtenían las ventajas que se prometían del estanco, porque el costo de producción era mayor que los rendimientos que de los productos se alcanzaban; y por vía de arrendamiento no se encontraba quien se quisiese encargar de tal empresa. Causábanse además graves daños á los indios, porque siendo muchos de los pozos de escasa importancia, los beneficiaban por sí mis-

(1) Así se deduce de una carta escrita al dicho Marqués de Montesclaros desde Madrid con fecha 4 de Mayo de 1607, que cita Solórzano.



mos, á fin de obtener lo preciso para su subsistencia; pero una vez establecido el estanco, no les era posible sustentarse con lo exiguo del salario que obtenian en recompensa de intolerable trabajo. Por último, aparte de otras consideraciones, los mineros no obtenian la sal dentro de este sistema, con la baratura, comodidad y abundancia que necesitaban para el beneficio de los metales. Todos estos inconvenientes fueron expuestos al Monarca por el referido Marqués de Montesclaros, por el de Salinas, Virey de Nueva España, y por otras diferentes autoridades de Indias; y conociendo aquel, que lo era á la sazón Felipe III, lo fundado de tales observaciones, expidió la Real cédula de 31 de Diciembre de 1609⁽¹⁾, por la que se ordenó cesase el estanco, se dejara libre el uso de la sal y volviesen las cosas al estado que tenian antes del establecimiento de aquel arbitrio.

Mas no era posible que partiendo del principio de la regalía, segun el que todas las salinas son del Monarca, rigiendo este mismo sistema en la Península y proporcionando abundantes y fáciles recursos al Erario, que con el tiempo vino á adolecer de gran penuria, pasasen muchos años sin propender al restablecimiento del monopolio en las posesiones ultramarinas. En 1632, precisamente en aquel mismo año en que las Córtes reconocian lo gravoso de la carga que pesaba sobre la sal, publicaba Felipe IV la pragmática de Madrid de 28 de Marzo, por la que se exponia que si bien se habia suspendido el establecimiento del estanco de la sal por los inconvenientes que de él resultaban á los indios y á la Hacienda, se halló despues que en ciertas salinas fué posible proseguir el estanco sin perjuicio de los mismos ni difi-

(1) La importancia de este documento y la oscuridad en que yace, á pesar de ello, nos han movido á insertarlo íntegro en el *Apéndice núm. I.*



cultades por parte de la administracion, resultando de aquí utilidad y aumento lícito de la Real Hacienda; y en su virtud ordenaba que se sujetasen al referido monopolio todas las salinas en que á juicio de los Vireyes y Presidentes no resultasen graves daños á los indios y sí utilidad al Tesoro, no introduciendo novedad alguna en las que no se encontrasen en este caso. La misma disposicion se reiteró en el reinado de Carlos II, en cuyo tiempo fué recopilada ⁽¹⁾.

Desprendidas una por una las riquísimas perlas que en dias de incomparable gloria engastara en la Corona de España el esfuerzo de los heróicos conquistadores y civilizados de América; reducidas nuestras posesiones en aquellos antes vastísimos dominios á límites cada vez más exíguos; postrada y decadente la industria en los mermados restos de nuestra antigua dominacion, pocas, aunque no desprovistas de interes, son las disposiciones que se ofrecen en el período que enlaza los referidos acontecimientos con la época actual. Expondremos las más importantes relativas á Cuba y Puerto-Rico.

(1) Ley 13, tít. xxiii, lib. VIII, Recop. de Indias que dice así: «Habiéndose mandado poner estanco en todas las salinas de Indias, porque tocan, y pertenecen á nuestra Regalía, se reconoció, que resultaba daño y perjuicio á los Indios, y por otras razones de nuestro Real servicio se suspendió esta resolucion, y dexó libre el uso de la sal, como estava. Y porque despues pareció, que habia salinas, en que sin perjuicio de los Indios, y dificultad en su administracion, se podia proseguir, y guardar el dicho estanco por la utilidad, y aumento lícito, que dél resultaria á nuestra Real Hacienda, y se puso en las que fueron á propósito para ello, mandamos, que en estas, y en todas las que pareciere á los Vireyes y Presidentes, que pueden ser de utilidad, y no resultaren graves inconvenientes á los Indios, se ponga, y guarde el dicho estanco, y que en las demas no se haga novedad.»

Sobre esta ley hace importantes indicaciones el P. Avendaño, *Thes. Indic.*



Considerando los perjuicios que resultaban al Erario de la continuacion del estanco en la Isla de Cuba, segun lo que manifestaba el Intendente de la Habana en Marzo de 1815 y lo que se consigna en la orden á que nos vamos á referir, se declaró extinguido aquel en el referido año ⁽¹⁾, mandando proceder desde luego á la venta de las sales almacenadas por cuenta de la Hacienda, ya fuese á contratista por precio justo y de contado, ya, en su defecto, á plazos cortos y abonados. Se declaraba permitida la introduccion de sal tanto á los naturales como á los extranjeros, exigiendo de aquellos un seis, y de estos un diez por ciento de introduccion, llevándose en las Aduanas por donde ingresara el género cuenta y razon separada, y debiéndola dar circunstanciada el Intendente, pasados dos años. Debia permitirse asimismo á los naturales de la Isla el fomento de las salinas de la misma, concediéndoles por término de dos años libertad de derechos en el comercio interior; pero si, fomentadas aquellas, deseasen extraer el fruto, se les debia exigir un moderado derecho, que fuera compatible con su fomento y con la abundancia del país.

Habiendo solicitado en 1840 ⁽²⁾ el síndico del Ayuntamiento de Holguin que se permitiese á sus vecinos el aprovechamiento de las salinas naturales de Jarros y Malagueta, á razon de diez reales por fanega, se ordenó que se procediera á la subasta de la libre recoleccion y venta de dicha sal.

En vista de los abusos que se cometian á consecuencia de la excesiva libertad que concedian algunos administradores subalternos de rentas, expidiendo á los traficantes licen-

⁽¹⁾ Real orden de 28 de Diciembre.

⁽²⁾ Real orden de 24 de Setiembre.



cia por un plazo demasiado largo dentro del que podían hacer dos ó tres viajes á los cayos inmediatos en que se cuajaba la sal, defraudando así á la Hacienda en sus derechos, se pusieron limitaciones en 1841 ⁽¹⁾, determinando la forma en que debía verificarse el tráfico en los cayos.

En 1843 ⁽²⁾ se dictó un extenso Reglamento, llamado de la sal, organizando minuciosamente el aprovechamiento de las salinas naturales.

Con motivo de las proposiciones presentadas por la casa de comercio de M. Senior, y de la conveniencia para el Erario de que se sacase á subasta el arriendo de las salinas, se autorizó en 1850 ⁽³⁾ al Intendente para que celebrase un arriendo de las salinas de Cabo Rojo, sujetándose á ciertas bases que vamos á indicar. El arriendo debía hacerse por diez años, siendo obligacion del arrendatario el construir de su cuenta y riesgo los edificios necesarios para almacenar la sal, vivir los empleados de las salinas y demas usos análogos, así como tambien el hacer las obras indispensables para dar otra direccion al arroyo de agua dulce y evitar se mezclase con la salada. El arriendo debía comprender no sólo las indicadas salinas, sino tambien las llamadas de Guanica y Coamo, y las demas que se descubriesen en la Isla. Interin las salinas de la Isla no diesen las sales necesarias para el consumo de la misma, cuyo plazo se fijaba en dos años, no habia de prohibirse la importacion de la sal extranjera ni la de la Península, aunque pudiendo tener la exclusiva introduccion el arrendatario pagando los derechos reales de importacion y expendiéndola al público al

(1) Circular de 9 de Octubre.

(2) 17 de Enero.

(3) Real orden de 4 de Agosto.



precio de tres pesos cada fanega. El arrendatario podía exportar libremente y sin derechos la sal que sobraba en las salinas de la Isla después de surtido el mercado, teniendo obligación de dejar en almacenes, al finalizar el contrato, las fanegas necesarias para el consumo de un año. Se imponía asimismo á la empresa arrendadora la obligación de ocupar á los individuos jornaleros de los pueblos inmediatos á las salinas, que estaban acostumbrados á surtirse de ellas, y que vendían la sal para otros puntos á precios módicos, debiendo expendirse este artículo á los mismos pueblos á doce reales en las salinas. Cuando las salinas estuviesen cuajadas y se diera principio á la saca y almacenaje de sales, se ofrecía al contratista facilitarle, si la pidiera, la escolta de tropas que necesitase, siendo los gastos que ocasionase de cuenta del mismo. El arrendatario debía expendir la sal, excepto en los pueblos indicados, al precio de tres pesos fanega. El precio de arrendamiento que se fijaba, sin perjuicio del mayor que pudiese adquirir en la subasta, era el de veintiseis mil pesos fuertes en los diez años, satisfaciendo dos mil seiscientos en cada uno de ellos. El remanente debía afianzar á satisfacción de la Superintendencia de Hacienda de la Isla. El arrendatario, por fin, no podía pedir indemnización por daños ó perjuicios, á no ser que estos proviniesen evidentemente de culpa de la Administración pública.

En 1856 ⁽¹⁾ se concedió la libre fabricación de sales en la Isla de Cuba, tanto para el consumo como para la exportación. A este efecto los que intentasen establecer fábricas debían obtener previo permiso de la Intendencia general.

(1) Real orden de 2 de Setiembre.



La sal extraída debía pagar por cada fanega el impuesto de diez reales fuertes, que satisfacía la importada de la Península. Para extraerla se exigía permiso del Administrador de Rentas del partido en que se hallase situada la fábrica, el cual no se expediría sin haberse satisfecho al contado todos los derechos si la sal se hubiere de exportar, ó hasta quinientos pesos si se destinase al consumo, asegurando el pago del resto en la misma forma establecida para los demás artículos de importación. Se sancionaron además varias reglas para evitar que se exportase ó extrajera de las fábricas mayor cantidad de sal que la consignada en los permisos. En cuanto á los medios de represión, se establecía que además de la pena de comiso en que caería cualquier exceso que apareciese entre la sal extraída y la permitida extraer, pagase el dueño de la fábrica donde se tomó dicho exceso, una multa del doble del valor que esta tuviese.

Por lo que hace especialmente á Puerto-Rico, en 1664 ⁽¹⁾ se suprimió el impuesto sobre salinas; y al establecer el régimen de la minería en 1867 ⁽²⁾ se comprenden las salinas entre las sustancias que son objeto especial de ella. Empero la disposición más importante de este período es sin duda alguna la publicada en 1868 ⁽³⁾ reglamentando la explotación de las sustancias salinas; y exige por tanto dediquemos algunas líneas á indicar su contenido. Se declaran objeto especial del ramo de minería en aquella isla, además de los comprendidos en el Decreto de 1867 mencionado, los lagos, lagunas, charcas, manantiales de corto trayecto y todo depósito que contenga sustancias salinas sus-

(1) Real orden de 28 de Octubre.

(2) Art. 1.º del Real decreto de 15 de Enero.

(3) Real decreto de 23 de Agosto.



ceptibles de beneficios, cualquiera que fuese su composicion y la aplicacion á que se las destine, siempre que el beneficio se haga en establecimientos fijos. De no efectuarse la explotacion en esta forma, son de libre aprovechamiento, sin necesidad de autorizacion ni licencia. Las solicitudes de registro que se presentasen para explotar sustancias salinas debian expresar la clase de las que se deseaba explotar, acompañando al propio tiempo una muestra no menor de dos litros de agua que contuviera sal, en frascos bien acondicionados para que el Ingeniero hiciese un ensayo, al ménos analítico cualitativo, que demostrara la verdad del registro. Si la sustancia fuese sólida por encontrarse depositada en el fondo ó márgenes de los lagos, las muestras, cuyo peso no bajarían de un kilogramo, se entregarían igualmente en frascos lacrados. Era asimismo obligatorio presentar á la vez un plano del lago, laguna, etc., señalando en él un punto fijo dentro ó fuera del depósito que sirviera de partida para la demarcacion. A las solicitudes de registro de salinas procedentes de aguas del mar, no era necesario que se acompañasen muestras, pero sí el plano del terreno que se solicitaba, tanto para la formacion de balsas como para las construcciones que se necesitasen. Dentro de los cuatro meses de la presentacion y admision del registro, habia de pedir el registrador la demarcacion, acompañando una Memoria descriptiva de los medios y aparatos que se propusiese emplear en el beneficio, y el presupuesto aproximado de sus gastos, fijando la cantidad que hubiera de producir anualmente de la sustancia salina y todo lo demas que condujera á dar una idea de la explotacion. Instruido el expediente de este modo, debia pasar al Ingeniero de minas para el reconocimiento, y en su caso para



la demarcacion, que habia de hacerse precisamente en la forma poligonal que más se acercara á los límites naturales del lago, laguna, charca, etc., en la mayor altura de las aguas, con tal que no excediera del máximo que la ley señalaba á los cotos de minas de carbon de piedra. Si quedase algun sobrante debia agregarse como demasía, siempre que no excediese de la cuarta parte; pero si fuese mayor, sería objeto de otra ú otras concesiones. Para las salinas marinas el registrador podia señalar el terreno en la forma que más le conviniera dentro de los límites que acabamos de indicar. En todos los casos el Ingeniero, en vista de su reconocimiento y de la Memoria presentada por el registrador, estaba obligado á informar cuanto se le ofreciera y pareciese al devolver el expediente á la Autoridad; proponiendo las condiciones especiales que considerase necesario imponer á la concesion. Estas quedaban sujetas á las condiciones generales impuestas por el referido Decreto de 1867, exceptuándose las referentes al pueble, quedando tambien exentos los productos de la deduccion del 3 por 100 establecido por el mismo. La concesion sería sin perjuicio de los demas aprovechamientos que se refirieran á otras industrias, como caza, pesca, etc., fundadas en derechos anteriormente adquiridos, y en su caso previas las indemnizaciones convenientes. Los concesionarios estaban obligados á dar principio á las operaciones en un plazo que no podia exceder de un año. Todos los edificios que se construyeran dentro del terreno de la concesion, así como las balsas, las aguas y las sales que se obtuviesen, serian propiedad exclusiva del concesionario mientras cumpliera con las condiciones de la concesion. En virtud de las referidas disposiciones quedaban suprimidos todos los derechos con que el Estado venia gra-



vando la produccion de las sales, debiendo exigirse en adelante á esta industria sólo los establecidos por el mencionado Decreto como impuestos comunes á la minería, con la excepcion ya consignada en este, y ademas la contribucion que, con arreglo á las bases generales establecidas y que se estableciesen en la Isla, correspondiera á la misma industria en proporcion de sus utilidades, y fuere repartida en la misma forma que á las demas del país.

Las precedentes indicaciones juzgamos son bastantes para dar á conocer el estado de la industria salinera en Ultramar, dentro del antiguo régimen, lo cual constituia el objeto que nos habiamos propuesto al cerrar con ellas este capítulo.



CAPÍTULO III.

Proyecto de desestanco de 1869.—Discusion del mismo en el Congreso.—Ley de 16 de Junio de 1869.—Exámen detallado de las disposiciones dictadas hasta 1877.—Tentativa de reestanco en este último año.—Disposiciones posteriores hasta fin de 1879.

Despues de haber recorrido, bien que ligeramente, los acontecimientos más importantes que comprende la historia de la renta de la sal en ese largo período, en que domina casi de un modo exclusivo el monopolio; expuestas las continuas y gravísimas dificultades de diverso género con que tuvo que luchar ese sistema desde que se planteara; indicadas las tentativas y esfuerzos que con repeticion se hacen para establecer el desestanco, que constituia ya una necesidad reconocida en las esferas gubernamentales; habiendo visto los obstáculos insuperables con que tropezó el estanco en América desde el primer momento de su introduccion, y que concluyeron con él en los primeros años del siglo xvii, no podrá extrañarse, antes bien se deberá considerar como una consecuencia de los mencionados precedentes, como una continuacion ó desarrollo de los hechos referidos, el que en la plenitud de la centuria que recorremos se proclame el desestanco de la sal, la libertad de la industria.

Los acontecimientos políticos de 1868, hicieron salir al terreno práctico de los hechos, convertidos en leyes, los trabajos y proyectos que venian madurándose en los años anteriores. El Sr. Orense, que al discutir la ley de desestanco



de 1855 habia tomado parte tan activa, tomó tambien la iniciativa en 1879 ⁽¹⁾, presentando á las Córtes una proposicion de ley sobre desestanco del tabaco y de la sal. La proposicion era en extremo lacónica y se limitaba casi exclusivamente á consignar el principio de libertad de ambas industrias. Se declaraba por ella el libre tráfico del tabaco y de la sal, autorizándose al Gobierno para fijar el subsidio que debian satisfacer los fabricantes; y se concluia mandando vender las salinas, fábricas y demas edificios que servian para el monopolio ⁽²⁾. En 9 de Marzo siguiente se dió cuenta del nombramiento hecho por las secciones de la Comision que habia de emitir dictámen sobre el referido proyecto, quedando constituida seis dias despues ⁽³⁾. Inmediatamente comenzaron los trabajos dentro de la Comision, la cual ciertamente no obró de ligero y sin los antecedentes necesarios, que en no escaso número reclamara uno de los individuos de la misma.

En esta ocasion el desestanco de la sal se presentaba bajo los más felices auspicios; en el sentir unánime de todos ese monopolio debia desaparecer; y si alguna diferencia

(1) Lleva la fecha de 27 de Febrero, y va firmada por D. José María Orense, D. Ramon de Cala, D. Federico Rubio, D. J. Suñer Capdevila, D. Juan José Hidalgo, D. Manuel Carrasco y D. Pedro Caymó y Bascos.

(2) El articulado de este lacónico proyecto decia así literalmente:

Artículo 1.º Se declara libre el tráfico del tabaco y sal.

Art. 2.º Queda el Gobierno autorizado para fijar el derecho que debe pagar el tabaco en las aduanas de la frontera, y lo que deben pagar por subsidio industrial los fabricantes en dichos ramos.

Art. 3.º Se venderán las salinas, fábricas y demas edificios que servian para el monopolio de ambos ramos.

(3) Constituian esta Comision los Sres. Ruiz Gomez, Becerra, Leon y Medina, Carretero, Ferratges, Prieto y Baeza, siendo Presidente el Sr. Leon y Medina, y Secretario el Sr. Prieto.



existia en la manera de apreciar la cuestion, versaba solo sobre detalles y procedimiento. Ni la costumbre perniciosa é infundada de unir en un mismo proyecto la abolicion del estanco del tabaco y de la sal, perjudicó esta vez á la última, hasta el punto de que si hubo individuo de la Comision que presentó dictámen particular contrario á la supresion inmediata del monopolio del tabaco, en cuanto al de la sal, se declara que todos sin excepcion alguna han opinado de la misma manera.

Apoyada la proposicion por el Sr. Orense, que á este propósito adujo abundantes razones que iremos examinando oportunamente, es tomada en consideracion sin dificultad, antes bien con unánime aplauso. Si alguna discusion existió, debióse únicamente á que, como consecuencia del extraordinario fraccionamiento y cruel lucha de partidos que por desgracia divide y corroe á nuestra querida patria, se pretendió convertir en una cuestion política la que es y debe ser meramente económica y rentística; y el entonces Ministro de Hacienda, Sr. Figuerola, hubo de defenderse contra las acusaciones que, á vuelta de los argumentos en pró del desestanco de la sal, dirigia al Gobierno el Marqués de Albaida. Ni áun esta discusion inoportuna fué completamente infructuosa para nuestro asunto, pues se hicieron indicaciones que no echaremos en olvido.

Preparados de este modo todos los ánimos, no se extrañará que la Comision aceptara en principio la proposicion del Sr. Orense y se limitase á desenvolver más su pensamiento y á adoptar aquellas medidas que en concepto de la misma demandaba el interes general; ni que el dictámen se aprobara casi sin debate y con solo una ligerísima modificacion.



Se declara en primer término que desde 1.º de Enero de 1870 serán completamente libres la fabricacion y venta de la sal, desapareciendo por consiguiente el estanco y el monopolio ejercido hasta entonces por el Estado. En su virtud todos los propietarios de salinas beneficiadas ó inutilizadas por el Estado, ya mediante el pago de determinados derechos ó ya por precio alzado de compra exclusiva del artículo, debian dejar de cobrar las sumas que por estos conceptos venian percibiendo bajo cualquier título que fuese, desde el dia que, dentro del segundo semestre del año económico de 1869 á 70, señalase en cada caso el Poder Ejecutivo para que dichos propietarios volvieran á posesionarse de sus salinas, mediante liquidacion y pago del valor de los edificios, máquinas y mejoras que la Hacienda hubiese hecho en ellas. Las existencias de sales debian enajenarse por la Hacienda segun fuese más conveniente. Declarada la libertad de la fabricacion y venta, no se reconocia ningun derecho á indemnizacion á las corporaciones ó personas interesadas en la percepcion de arbitrios ó recargos sobre el consumo de la sal, interin no acreditasen con título legítimo y primordial un contrato oneroso que obligase al Estado al pago de semejante carga ó gravámen. Estas disposiciones, comprendidas en los dos primeros artículos del dictámen, se aprobaron sin discusion alguna.

Sostúvose, aunque no con grande animacion, sobre el art. 3.º Se declaraban por éste en estado de venta las salinas de la Hacienda y las demas fincas pertenecientes á las mismas que se hallaban aplicadas exclusivamente al servicio de la renta; se disponia que el pago de las salinas vendidas se verificase en metálico, entregando los compradores la décima parte al verificarse la adjudicacion, y el resto por



partes iguales, en los nueve años siguientes; se establecía que las ventas se harían en pública licitación; y se exceptuaban, por último, con la cláusula de por ahora, las salinas de Torrevieja, Imon, los Alfaques, Ibiza y Formentera. A esta última parte del artículo presentóse una enmienda, por la que se excluía de la excepción indicada las dos salinas de Ibiza y Formentera, las cuales debían por lo tanto ponerse á la venta inmediatamente. La Comisión, después de breve exámen, admitió la enmienda. Mas, una vez aceptada, pidió un diputado que se excluyesen también las otras tres salinas de Torrevieja, Imon y los Alfaques, puesto que existían las mismas razones para exceptuar unas que otras, y se había aceptado la eliminación de dos de ellas. La Comisión alegó en favor del artículo enmendado, que aceptó la supresión de dos salinas del corto número que proyectaba exceptuar, animada del deseo de dar al pensamiento de la ley y al desestanco toda la mayor extensión posible; pero no podía traspasar los límites últimamente señalados, porque se lo vedaban gravísimas razones. Reducíanse estas á la situación de ciertas localidades en que no sería posible en algún tiempo la libre concurrencia, á la cual obedecía la excepción de las de Torrevieja y los Alfaques y al gusto especial y preferencia consiguiente de determinadas sales, como las de Imon, en grandes centros de consumo, como Madrid, que daría por resultado poner en manos de los particulares adquirentes de ciertas salinas un monopolio mil veces peor que el ejercido hasta entonces por el Estado, y que sólo podría evitarse reservándoselas éste hasta que el gusto cambiara por el uso de otras sales, fomentado con la mayor baratura de los precios. Por estas consideraciones, se añadía, no se propone que esa excepción haya de ser permanente ó per-



pétua, sino sólo *por ahora*, es decir, hasta que, consolidada la reforma y habiendo adquirido los mercados condiciones normales dentro del nuevo régimen, no pudieran temerse las perniciosas consecuencias que dejamos indicadas.

Aprobado el artículo tercero con la expresada primitiva enmienda, fuéronlo sin discusion todos los demas del proyecto. Con el fin de que no faltase en determinados puntos especialmente, la sal necesaria para el consumo, se estableció que el Gobierno cuidaría de proveer los depósitos y alfólies con el surtido ordinario, aumentando con un veinte por ciento más la consignacion señalada en toda la region no salinera de España durante el segundo semestre del ejercicio; que desde 1.º de Julio de 1870 venderia las existencias resultantes, sin ulterior abastecimiento; y que el Poder Ejecutivo conservaria ó disminuiria los precios segun el estado de los mercados hasta la indicada fecha de 1.º de Julio⁽¹⁾.

Insistiendo en el propósito de adoptar las medidas que se consideraran más eficaces para evitar los inconvenientes que en perjuicio del desestanco y de la utilidad pública pudieran sobrevenir en los primeros momentos del nuevo sistema, se determinó que la Hacienda concurriria con los particulares á la venta por mayor y menor de toda la sal perteneciente al Estado en las salinas cuya explotacion conservaba, fijando los tipos de venta al precio del mercado⁽²⁾.

La libertad del comercio interior y exterior del artículo era la consecuencia y complemento del nuevo régimen. En su consecuencia se dispone que la importacion de sal procedente del extranjero es libre en las aduanas españolas des-

(1) Art. 4.º

(2) Art. 5.º



de 1.º de Enero de 1870, mediante el pago de trece reales por quintal métrico, limitacion que así puede encaminarse á proporcionar los consiguientes ingresos al Erario como á proteger la naciente industria, abandonada á la iniciativa individual. El cabotage de la sal indígena se establece que no estará sujeto á ningun derecho de arancel; y en cuanto á la exportacion, que será completamente libre la que se verifique en buques nacionales ó extranjeros, cualquiera que sea su cabida ⁽¹⁾.

Abolido el monopolio del Estado y concedida amplia facultad á los particulares para dedicarse á la explotacion y tráfico del artículo, era natural que la ley determinara la obligacion de los mismos de contribuir con los correspondientes impuestos por razon de las utilidades que obtuviesen. En su virtud se dispone que los propietarios de minas de sal, salinas ó espumeros, pagarán la contribucion conforme á la territorial por los que tengan en explotacion ⁽²⁾, y que se incluirá en las matrículas de la contribucion industrial á los que al por mayor ó al por menor se dediquen á la venta de la sal, debiendo el Poder Ejecutivo fijar las cuotas prudencialmente, sin perjuicio de modificarlas en alza ó en baja, segun aconseje la experiencia ⁽³⁾.

Preocupados los autores de la ley con la idea de las consecuencias inmediatas que en daño de los consumidores pudiera producir el régimen de libertad de la industria, terminan sus disposiciones insistiendo sobre este punto y consignando que el Poder Ejecutivo adoptará todas las medidas necesarias para facilitar la transicion del estanco á la liber-

(1) Art. 6.º

(2) Art. 7.º

(3) Art. 8.º



tad del tráfico de la sal, sin que falte el abastecimiento de este artículo de primera necesidad dentro del ejercicio del presupuesto en los puntos de la Península que pudieran carecer de él ⁽¹⁾.

Hé aquí las disposiciones de la ley de desestanco ⁽²⁾, de esa ley importantísima que tan anhelada fuera, que tantos esfuerzos habia costado en el largo período de medio siglo, y que por fin parece haberse consolidado y adquirido condiciones de estabilidad en los diez años que lleva de existencia, hasta el punto de poder resistir los embates de su más declarado y cada día más potente enemigo, la penuria del Tesoro, y de haber visto pasar incólume terrible borrasca que amenazara en algunos momentos hacerla perecer en un nuevo naufragio.

Compréndese por lo demas fácilmente, que si esta ley habia de plantearse en condiciones de viabilidad; si se habia de hacer posible y fácil el tránsito del antiguo al nuevo sistema; si, por último, habian de respetarse los derechos adquiridos á la sombra de la legislación anterior, era necesario preparar la reforma, reglamentar el ejercicio de los derechos que la ley de desestanco establecía, y desenvolver los principios consignados en la misma, por medio de disposiciones perfectamente meditadas. De aquí surgió esa larga série de preceptos legales, que muy numerosos en el año

(1) Art. 9.º

(2) Véase en el *Apéndice* núm. II, el texto de esta ley, así como el de las demas disposiciones dictadas con posterioridad, que hemos creído oportuno consignar literalmente, puesto que constituyen una nueva época, distinta por completo de las que le precedieran, y forman el principio de la nueva legislación que nos lisonjamos en esperar reciba cada vez mayor amplitud, pero que no retrogradará nunca recorriendo el camino que hasta este momento siguiera.



1869 y en los inmediatos, van decreciendo á medida que el nuevo régimen adquiere solidez y firmeza. Detengámonos en su exposicion, siquiera fuere brevemente, supuesto que debemos darnos cuenta de los resultados producidos por tales disposiciones, y no podremos alcanzar este fin sino á condicion de adquirir un conocimiento prévio y suficiente de las mismas ⁽¹⁾.

Siendo necesario conocer las verdaderas existencias de sal que á la terminacion del año 1869 resultaban en los almacenes, depósitos y alfolíes, si habia de cumplirse lo preceptuado por la ley de desestanco, en cuanto al surtido y venta de dicho artículo, se acordó que se practicara un repeso general en todas las provincias del Reino, el cual debia quedar terminado dentro del año, expidiéndose al efecto una larga circular, con la exposicion de cuyas minuciosas disposiciones no vamos á molestar á nuestros lectores ⁽²⁾. Pocos dias despues de publicada la referida circular, dictábase una extensa y razonada órden, con el fin de dar cumplimiento á lo ordenado por la ley, en lo referente á la devolucion de las salinas de particulares á sus dueños, y las restantes á la Hacienda, incautándose al efecto de las mismas la Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado; así como tambien á la venta de las sales existentes, despues de hecho el abastecimiento de los alfolíes y depósitos ⁽³⁾. Una extensísima instruccion vino, por último, á completar la série de disposiciones reglamentarias de 1869, dirigidas á desen-

(1) La importancia que ofrecen tales disposiciones para la presente Memoria y la conveniencia de formar una *Coleccion legislativa* de la industria salinera libre, nos han movido á compilarlas en el *Apéndice núm. II*.

(2) Circular de 9 de Diciembre de 1869.

(3) Orden de 21 de Diciembre de 1869.



volver y aplicar los preceptos contenidos en la ley de 16 de Junio ⁽¹⁾. En su virtud, la fabricacion y venta de la sal, declaradas completamente libres, se someten sólo á las reglas prescritas por la Direccion general de Contribuciones. Se declara libre la circulacion de la sal por el interior del Reino, limitándose en su consecuencia los deberes del Cuerpo de Carabineros y del Resguardo especial á que no se extraiga fraudulentamente de las fábricas de particulares mientras los dueños de estas no acrediten haberse colocado en situacion legal para ejercer tal industria. La exportacion de la sal para el extranjero, puede hacerse en buques de cualquiera cabida por las aduanas habilitadas y en las mismas condiciones establecidas para los demas artículos de lícito comercio. Puede asimismo importarse la sal extranjera por las aduanas de primera y segunda clase, cumpliendo lo ordenado en general para la importacion. El comercio de cabotaje de este artículo queda sujeto á las mismas condiciones que el de todos los demas. Conforme á lo preceptuado en la ley, se declara que la Hacienda no fabricará sal más que en las tres salinas reservadas al Estado, así como la forma en que habia de expendirse la sal por la misma durante el primer semestre del año 1870, en concurrencia con los particulares. El precio de la sal se establece sea el mismo que el que tenía en aquel momento en los alfolíes y estancos, con arreglo á la ley de 15 de Julio de 1865 y á la tarifa aprobada por Real orden de 10 de Agosto de 1866, que dejamos citadas; pero como debia variar segun el que tuviera sucesivamente en el mercado, se ordena muy especialmente á los Jefes de las Administraciones económicas, se enteren

(1) Orden é Instruccion de 27 de Diciembre de 1869.



de él y lo comuniquen cada quince días á la Direccion general del ramo. Se dispone la adopcion de las medidas conducentes á proveer los depósitos y alfolíes con el surtido que determina la ley; y respecto al sobrante que resultare, así como las sales producidas en las fábricas reservadas al Estado, se establece que el Gobierno determinará la época y el precio á que deban venderse. Esto mismo se ordena relativamente á las salinas de particulares beneficiadas hasta entonces por la Hacienda, aunque sin perjuicio de liquidar y abonar su coste á los fabricantes á los precios señalados y en el tiempo, modo y forma establecidos en las respectivas instrucciones y contratos vigentes. Respecto de la venta de sal para la exportacion en la salina de Torrevieja, se declara que continuará en la misma forma, mientras otra cosa no se determine. Se manda disolver las rondas volantes del Resguardo especial, pasando sus individuos á reforzar los destacamentos encargados de la custodia de las salinas, en la forma indicada. Se ordena que el Cuerpo de Carabineros y el Resguardo impidan el desembarque por las costas y la introduccion por la frontera del reino de sales indígenas ó extranjeras, cuando una y otra operacion no hayan sido competentemente autorizadas por las aduanas, procediendo en este caso á la detencion y entrega del género á la Junta administrativa de la provincia en que tuviere efecto la aprehension, á fin de que determinare lo que procediese con arreglo á las prescripciones del Real decreto de 20 de Junio de 1852. Se prescribe, por último, que las corporaciones y particulares, propietarios de salinas beneficiadas é inutilizadas por el Estado, deberian deducir el derecho que les asistiera para volver á posesionarse de ellas, ante la Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, con el fin de



que, consultados los títulos que presentasen y los antecedentes que obrasen en poder de la Administracion, pudiera resolver el Gobierno, conforme á lo establecido en la ley.

Por la detallada noticia que acabamos de dar de la instruccion de 1869, puede comprenderse y comprobarse que las limitaciones contenidas en la ley de Junio y la parte que se reservó la Hacienda en el tráfico de la sal, contribuyeron á complicar la administracion de esta renta, que de otra suerte pudo y debió ser sencillísima, sin contar con los efectos que semejantes reminiscencias del antiguo monopolio habian de producir en el mercado, y de los que nos ocuparemos en momento oportuno. Mas no son las referidas disposiciones las únicas de esta clase que pertenecen al período que estamos reseñando. La autorizacion concedida por la instruccion citada á la fábrica de Torrevieja para la venta de la sal, se hizo extensiva á las de Ibiza y Formentera en las islas Baleares, y á la de San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia, aunque previniéndose expresamente que sólo podria verificarse al precio de gracia para el extranjero y posesiones españolas de Ultramar ⁽¹⁾.

Pocos dias habian transcurrido desde que se dictó la mencionada orden, cuando hubo necesidad de insistir sobre el último de los extremos que la misma abrazaba, á consecuencia de haber permitido exportar sal para las Provincias Vascongadas, el administrador de Torrevieja. Declaróse en su virtud que la exportacion únicamente podia verificarse al extranjero y posesiones españolas de Ultramar; y que, por consiguiente, una de las consecuencias del desestanco habia sido la derogacion de la facultad anterior de exportar para

(1) Orden de 25 de Enero de 1870.



las Provincias Vascongadas ⁽¹⁾, cuyas condiciones eran antes las mismas que las del extranjero, puesto que se ejercia en ellas libremente el comercio de la sal, por efecto de sus fueros. No dejaremos de notar, por último, que en la disposicion que nos ocupa se establece que para descargar la sal exportada en las condiciones dichas, bien fuera en el puerto de Vigo, que habia dado lugar á la resolucion, bien en cualquier otro de la Península, es preciso el prévio pago de los derechos de Arancel, como si procediese del extranjero ⁽²⁾.

Constituido el Estado en comerciante de sal por mayor y menor, áun dentro del nuevo régimen de libertad, hubo de hacerse alguna alteracion en el personal administrativo de las salinas, creando ciertos cargos en la de Torrevieja y suprimiendo otros en la de los Alfaques, dando por resultado la exígua economía de doscientos escudos que no se deja de mencionar en la órden á que nos referimos, en la que se consigna ademas la fianza que deben prestar algunos empleados ⁽³⁾.

A la reglamentacion del personal, siguió la de la forma en que debia hacerse la venta, á cuyo efecto se circularon repetidas y minuciosas reglas, que reduciremos aquí á las importantes para nuestro estudio. La unidad de peso debia ser el quintal métrico, siendo el mínimum de la cantidad vendible el de dos quintales para su conduccion por tierra y el de diez de la que se trasportase por mar; y el precio de cada quintal se fija en tres pesetas y cincuenta céntimos, y el de la molida en una peseta más ⁽⁴⁾.

(1) Instruccion de 4 de Enero de 1847.

(2) Orden de 1.º de Febrero de 1870.

(3) Orden de 11 de Abril de 1870.

(4) Orden de 20 de Abril de 1870.



La ley de desestanco que ordenaba se vendiesen las salinas de la Hacienda y se devolvieran á sus dueños las beneficiadas ó inutilizadas por la misma, no habia previsto el caso de que ni una ni otra cosa pudiera tener lugar inmediatamente en todas las salinas y fábricas. No habiendo sido posible verificar la enajenacion de estas en el momento en que comenzó á regir la ley de 1869, ni considerándose conveniente á los intereses de la Hacienda verificarlo hasta despues de haber obtenido el producto de la cosecha de 1870, se pensó en utilizarlas de algun modo, siquiera fuere para compensar los gastos del personal encargado de la custodia y resguardo de dichos establecimientos, segun se dice en el documento oficial que nos suministra este dato. Habiendo creido que el medio adecuado para conseguir tal propósito era el arriendo de la mencionada cosecha, se mandó que la Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado procediese al arrendamiento en pública subasta, dictando á este fin las reglas que deberian observarse y determinando las condiciones con que se habia de verificar ⁽¹⁾. Mas esta situacion no era momentánea, contra lo que pudiera pensarse en los primeros meses de 1870: seis años habian transcurrido, y, segun testimonio fehaciente, aún se encontraban las cosas en el mismo estado, ya porque no se habian resuelto los expedientes incoados por los particulares que alegaban derechos á la propiedad de unas salinas, ya porque no se habia realizado la venta de otras; y puede afirmarse que hoy mismo, á pesar de los diez años de existencia que alcanza el nuevo régimen, no ha desaparecido la necesidad que inspiró la idea del arriendo. Cuál haya sido el resultado de las varias tenta-

(1) Orden de 5 de Julio de 1870.



tivas que en las diversas épocas se han hecho para llegar al arriendo, no necesitamos exponerlo; dígalo por nosotros el Real decreto de 1877, en cuya exposicion de motivos se confiesa de un modo terminante que parece faltó estímulo para la colocacion de capitales en este negocio, y que no obstante haberse procurado en los seis años anteriores el arrendamiento de las salinas, las subastas intentadas con este objeto, ofrecieron las más de las veces un resultado absolutamente negativo. Creyóse que el desgraciado éxito de estas tentativas y los consiguientes grandes perjuicios de la Hacienda, procedian de las bases adoptadas para el arriendo; y en su virtud se modificaron algunas de las condiciones que se venian fijando hasta entonces. Tales fueron el aumento del plazo que habia de mediar entre los anuncios y las subastas; el exigir la presencia de ciertos funcionarios en el acto de celebrarse las mismas; la fijacion del tipo que hubiera de servir para la subasta por el precio medio de la unidad de peso en el mercado, haciendo las rebajas que se considerasen justas y prudentes, y graduándose por peritos el máximun de productos probables, á fin de consignarlo como punto de partida; la facultad de prestar la fianza en valores públicos; y la prevencion de que el arrendatario no entrase á explotar las salinas hasta que recayera la aprobacion superior, otorgase la escritura pública correspondiente, y verificara el pago del importe del primer plazo. La experiencia ha continuado demostrando que las causas en cuya virtud el sistema de arrendamiento no producía resultado, consistian, segun mostraremos en otro lugar, en algo distinto y más importante que esos ápices reglamentarios que no vacilamos en calificar de insignificantes ⁽¹⁾.

(1) Real decreto de 19 de Abril de 1877.



La explotacion de las salinas por el Estado, dió lugar á una nueva série de disposiciones pertenecientes á otro órden. Declarada la omnímoda libertad para la fabricacion, importacion y venta de la sal, ni tenian razon de ser los privilegios concedidos á la exportacion en el régimen del monopolio, ni era procedente ni útil la diferencia de precio de la sal destinada á la exportacion y al consumo del país; y en su virtud, se declaró abolido el premio de seis por ciento que disfrutaban los capitanes de los buques extractores, y se fijó en una peseta el precio de cada quintal métrico que se vendiera para la exportacion al extranjero y posesiones de Ultramar en la salina de Torrevieja, reservada al Estado por la ley de desestanco, y en las de Pinatar é Ibiza, mientras no se enajenasen ⁽¹⁾.

Esta modificacion, cuya procedencia no puede ponerse en duda, debia comenzar á regir desde 1.º de Julio del mismo año 1870; pero los comerciantes extranjeros que se dedicaban á la exportacion de sal de las salinas habilitadas al efecto, reclamaron contra esta disposicion que les privaba de las grandes utilidades que obtenian anteriormente; y consiguieron que se declarara en suspenso una y otra vez ⁽²⁾, obteniendo otras tantas prorogasen el disfrute de los privilegios de que venian en posesion antiquísima. Cesaron, por fin, al terminar el año 1871, en virtud de una última disposicion que fijó definitivamente el régimen y gobierno de la administracion de la salina de Torrevieja, así como la venta

(1) Orden de 24 de Junio de 1870.

(2) Por la órden de 28 de Julio del mismo año 1870, se declaró en suspenso la de 24 de Junio hasta 15 de Setiembre, si bien se establecia que el pago de transporte desde la era cargadero hasta el buque, sería de cuenta del cargador.



de sales de la misma, dictando al efecto numerosas reglas. Los fines que se proponia realizar, eran principalmente asimilar en lo posible la venta de la sal de dicha fábrica á las demas del Reino, tanto en los precios como en las demas condiciones; evitar de esta suerte los abusos que podian cometerse á la sombra de embarques simulados para el extranjero con perjuicio de los intereses generales é industriales; simplificar la contabilidad; concluir de una vez con los privilegios de que gozaban antiguamente los cargadores para el extranjero de pagar á plazos, y la bonificacion que se hacía á los capitanes de los buques extractores; y, por último, reglamentar debidamente la guarda y custodia de la salina, así como las facultades y operaciones de su administracion. No descenderemos al exámen de las minuciosas reglas de la orden que nos ocupa; pero sí nos interesa consignar la alteracion que se introduce en el precio de las sales. Este se fija en una peseta veinticinco céntimos y en una peseta por quintal métrico segun fuere lavada ó sin lavar, la que se vendiese para el comercio de la Península é islas adyacentes; y en una peseta y en 90 céntimos respectivamente la vendida para la exportacion al extranjero y posesiones españolas de Ultramar ⁽¹⁾.

Apenas se habia puesto en observancia la precedente disposicion, representaron el Ayuntamiento y comerciantes de la villa de Torrevieja sobre la conveniencia de modificar algunas de las reglas contenidas en la misma, á lo cual se accedió alterando en su virtud lo prevenido acerca del precio, la manera de pesar y la forma de hacer el pago. Nos

(1) Real orden de 9 de Agosto de 1871, que comenzó á regir en 1.º de Setiembre para la Península é islas adyacentes, y en 1.º de Octubre para el extranjero y posesiones españolas de Ultramar.



limitaremos á indicar aquí que el precio se bajó á 90 céntimos de peseta el quintal métrico de sal lavada, y á 75 la sin lavar que se exportase para el extranjero y las posesiones españolas ultramarinas ⁽¹⁾.

Cuando todavía continuaba vivo el influjo de las ideas que habian producido el desestanco; cuando los acontecimientos confirmaban que el acaso excesivamente previsor *por ahora* consignado en la ley de Junio, podia desaparecer sin daño del interes general, vemos que el poder legislativo se apresura á facilitar á la Administracion los medios que pudieran serle necesarios para desarrollar el gran pensamiento contenido en aquella importantísima reforma. Al aprobarse los presupuestos de ingresos de 1870 á 1871, se autorizó al gobierno para enajenar en pública subasta las salinas de los Alfaques y de Imon, conforme á lo dispuesto en la ley de desestanco ⁽²⁾. La enajenacion se iba verificando, no obstante, lentamente; parecia como que costaba al Estado gran violencia desprenderse de este último resto de tan antiguo monopolio. Lo que ha venido aconteciendo hasta hoy en este punto, es una nueva afirmacion de nuestro aserto.

La dificultad suscitada en la Administracion económica de Albacete, en cuya provincia no habia Ingeniero de minas ni industrial que se encargara de la tasacion de las salinas, dió lugar á que se reglamentase este importante servicio, aunque no encontramos presidiera el debido criterio en las disposiciones que á conseguirlo se dictaron. La determinacion del modo y forma en que debían abonarse los gastos y dietas á los Ingenieros, parece ser la idea que preocupó á la

(1) Orden de 20 de Abril de 1872.

(2) Art. 4.º de la ley de 8 de Junio de 1870.



Dirección de Propiedades y Derechos del Estado al fijar las reglas á que nos referimos ⁽¹⁾; empero, por lo demás, parécennos poco meditadas y difícilmente conciliables con los preceptos de la legislación minera. Establécese, en efecto, que para las tasaciones se nombre un *Ingeniero industrial ó de minas*, además de concurrir al acto el perito ó peritos ordinarios que deben intervenir en el aprecio de todas las pertenencias de las salinas. Considérase, pues, indiferente que la tasación se verifique por Ingeniero de una ú otra clase, como si los conocimientos facultativos y la competencia de unos y otros fueran los mismos; y, por otro lado, se olvida que, según la legislación vigente, son objeto especial del ramo de minería *las sustancias salinas, comprendiendo las sales alcalinas y térreo-alcalinas, ya se encuentren en estado sólido, ya disueltas en agua* ⁽²⁾; y que el Cuerpo de Ingenieros de minas continúa encargado de las *comisiones científicas propias de su profesión* ⁽³⁾. Si se hubiesen tenido en cuenta estas consideraciones, es seguro que se hubiera establecido la absoluta necesidad de que las tasaciones se practicasen por un Ingeniero de minas, sin perjuicio de que interviniesen Ingenieros industriales, peritos agrónomos ú otros, en lo que fuera de competencia de estos últimos. La legislación vigente está reclamando en esta parte una mejora en tal sentido, con lo que se alcanzarían las ventajas que mostraremos.

Si en la venta de las salinas no se desplegó gran actividad, no pudo suceder lo mismo con la de las existencias de sales que resultaron en los depósitos y alfolíes. Se hacía necesario, por una parte, realizar el capital que representaban

⁽¹⁾ Ordenes de 10 de Junio y 7 de Octubre de 1870.

⁽²⁾ Art. 4.º de las Bases para la nueva legislación minera.

⁽³⁾ Art. 96 de la ley de Minas.



para indemnizarse el Tesoro de la considerable disminucion de ingresos que sufría en virtud del desestanco; y era urgente, por otro lado, librarse de la carga que suponían el precio de los almacenes arrendados á particulares y los sueldos del personal empleado en aquel servicio. Dictáronse al efecto las órdenes oportunas á fin de que en un breve plazo se diera salida á las mencionadas sales ⁽¹⁾; y se declaró que en esta disposicion se comprendían las sales de espuma, molida, purgante, misturada, bolas y ladrillos ⁽²⁾.

El comercio de importacion y de cabotaje han dado lugar á algunas disposiciones en armonía con el nuevo régimen de la industria salinera. Así vemos que se habilita la aduana de Puigcerdá, en la provincia de Gerona, para la importacion de sal del extranjero, conforme á la facultad concedida por la instruccion de 1869 ⁽³⁾; se declara que los cargamentos completos de sal pueden despacharse en unos ó más puertos habilitados; y se dispone que se permita conducir por cabotaje á la Fregeneda las sales de la provincia de Cádiz ⁽⁴⁾ y las de Torre Vieja ⁽⁵⁾. Cuán ventajoso había de ser cuanto tendiera á facilitar el comercio, destruyendo las trabas y limitaciones que le ahogan y aniquilan, tendremos ocasion de apreciarlo más adelante.

Habíase votado ya la ley de 16 de Junio, y aún daba señales de vida, bien que las últimas, el antiguo régimen del monopolio. El decreto de 1852 destinado á reprimir el contrabando, tenía aplicacion al de la sal, por última vez, en

(1) Real orden de 18 de Enero de 1871.

(2) Real orden de 17 de Febrero de 1871.

(3) Orden de 29 de Marzo de 1870.

(4) Orden de 10 de Agosto de 1872.

(5) Real orden de 9 de Julio de 1875.



Agosto de 1869 con motivo de una partida de sal que detuvo la Administracion económica de Sevilla en el año anterior ⁽¹⁾. Cerróse, por fortuna, con este caso la larga série de artificiales delitos que venia registrando la estadística criminal de nuestra nacion en el dilatado curso de los siglos anteriores, y vemos en cambio que se atenúa y mitiga cual demandaban la razon y la justicia, la rigurosa legislacion penal sobre delitos de defraudacion. Declaróse, en efecto, que no se penarian las diferencias de más ó de ménos en los despachos de sal, siempre que no excediesen del cinco por ciento de la cantidad declarada, teniendo en cuenta que el cloruro de sódio es uno de los artículos más expuestos á sufrir alteracion en su peso por las influencias atmosféricas, y principalmente en las conducciones por mar ⁽²⁾.

El precio de las sales dentro del régimen de la libertad debia ser uno de los puntos en que se mostrase, como se mostró en efecto, de un modo más evidente la influencia de la abolicion del estanco, y en el que procede fijemos de un modo especial nuestra atencion. Habiéndose de dar salida á las sales existentes en los depósitos y alfolíes del Estado, conforme á lo dispuesto en la ley, se fijó el precio de las mismas en dos pesetas el quintal castellano en las provincias pertenecientes á la primera seccion de la zona salinera, ó sea á la parte marítima, y en tres pesetas en las comprendidas en la segunda division, ó parte terrestre ⁽³⁾. Por lo que hace á la salina de Torrevieja, única cuya explotacion se reservaba y conserva el Estado, notándose escasa venta de sal de

(1) Orden de 5 de Agosto de 1869.

(2) Orden de 3 de Mayo de 1870.

(3) Orden de 25 de Junio de 1870.



grumos, se acordó, á fin de darle más fácil salida, que se vendiera á cuatro pesetas el quintal métrico ⁽¹⁾; y un año despues se rebajaba el precio hasta reducirlo á tres pesetas ⁽²⁾.

Una vez declarados libres el tráfico y explotacion de la sal, no era procedente que subsistiera el precio de gracia de que venian disfrutando varias industrias, supuesto que estaban en completa libertad de surtirse en la forma y en el punto que más les conviniese; y en su virtud se dispuso cesara la adulteracion del artículo que nos ocupa para uso de los ganaderos, fabricantes de productos químicos, fundicion de minerales, barrilla y jabon, cristal, vidrio y loza y demas industriales que hasta este momento gozaban de dicha gracia. Mas para el caso de que resultase en los almacenes alguna existencia de sal adulterada, se facilitaria á los ganaderos á diez reales y dos más por gasto de misturacion, y á los fabricantes á diez reales ⁽³⁾. La gracia que se concedia á los fomentadores de salazon, dió lugar á varias disposiciones. Consecuencia lógica del desestanco de la sal, era el que cesase toda entrega á los fomentadores de salazon de pescados, carnes, embutidos, escabeches, conservas alimenticias, y queso y manteca al estilo de Flandes, que la recibian con dicho beneficio; pero al mismo tiempo se consideró necesario girar una visita á todas las fábricas de la mencionada clase, para hacer constar el uso que hubieren hecho de las cantidades que habian recibido, y las relaciones consiguientes entre ellos y la Hacienda, y á este efecto se publicó una extensa y detallada circular cuyas reglas nos creemos

(1) Real orden de 9 de Agosto de 1871.

(2) Real orden de 30 de Agosto de 1872.

(3) Circular de 10 de Diciembre de 1869.



dispensados de reproducir por su carácter meramente reglamentario y transitorio ⁽¹⁾.

En virtud de la mencionada disposicion, los fomentadores debian justificar la inversion de la sal existente en sus almacenes en 31 de Diciembre de 1869, y si deseaban hacerse cargo de las existencias, podrian verificarlo prestando nuevas garantías para responder del precio del género al precio de estanco, y á condicion de justificar la inversion del mismo. No habiéndose hecho oportunamente las expresadas justificaciones, por equidad se concedió para verificarlo, un plazo que terminaba en fin de Marzo de 1871 ⁽²⁾. No dió mayor resultado esta próroga que el primitivo plazo; y hubo de disponerse que la sal cuya inversion no se hubiere justificado, se pagara á precio de estanco ⁽³⁾. La resistencia á presentar tales justificaciones, continuaba siendo tenacísima, á pesar de las órdenes terminantes que para obtenerlas se dictaban; y entretanto no sólo habia comenzado á regir la ley de desestanco, sino que, produciendo sus naturales efectos, habia dado lugar á una baja notabilísima en el precio del artículo. En tales circunstancias no pudo ménos de reconocerse la justicia y equidad que entrañaban las reclamaciones hechas por los industriales. La ley de desestanco habia interrumpido las relaciones anteriores entre los mismos y la Hacienda; esta consideraba que experimentaria grandes dificultades y perjuicios en la venta de la sal que se le devolviese en momentos en que abundaba en los mercados con notable baratura; y, por último, no podia ocultarse que exigir el pago de las existencias al precio de estanco, que se

(1) Circular de 11 de Diciembre de 1869.

(2) Orden de 7 de Marzo.

(3) Real orden de 17 de Setiembre de 1872.



elevaba á cincuenta y dos reales quintal, no sólo no era justo ni se conformaba con el espíritu de las antiguas disposiciones que tendian á favorecer la industria salazonera, sino que ademas habria de originar honda perturbacion y riesgo de ruina en ese comercio en que libraban su subsistencia multitud de familias pobres. Todos estos poderosos motivos impulsaron al Gobierno á poner fin á esta larga y porfiada lucha, estableciendo que las mencionadas existencias se satisficieran á razon de diez reales quintal castellano ⁽¹⁾.

Las nuevas condiciones en que se colocó á la industria salinera, dieron lugar á que estableciese y fijase un punto de la mayor importancia, y que estaba llamado á ser en adelante el objeto de la atencion de los Gobiernos y de las discusiones de las Cámaras y de los particulares, así como antes lo fuera el estanco: nos referimos á los impuestos.

Con ocasion de una consulta hecha por el Jefe de la Administracion económica de Barcelona, sobre si las minas de sal concedidas segun la ley de minas, debian satisfacer el cánon que la última establece por razon de superficie y ademas la contribucion territorial correspondiente, ó sólo esta, dictóse una resolucion importantísima que dió por resultado el determinarlo de una manera precisa y perfectamente ajustada al espíritu y letra de las leyes vigentes, disponiéndose por ella que todas las minas de sal concedidas con arreglo á la ley especial del ramo, sólo están sujetas al pago del cánon prefijado en la misma ⁽²⁾. Los fundamentos de semejante resolucion son de todo punto sólidos, si bien podrian haberlo sido aún más, si en vez de fijarse exclusivamente en

⁽¹⁾ Orden de 27 de Marzo de 1873.

⁽²⁾ Orden de 26 de Febrero de 1871.



las disposiciones de la ley de minas de 1859 se hubieran tenido también en cuenta las bases de 1868. Los artículos 13, 80 y 85 de la ley y el 4.º de las bases no permiten dudar un momento sobre lo acertado de la resolución que nos ocupa; y es verdaderamente extraño que después de tan claras y terminantes disposiciones se haya pensado siquiera en asimilar esta clase de propiedad á la territorial.

La venta de la sal debía quedar sujeta, según la misma ley de desestanco, á la contribución industrial ó de subsidio, á cuyo efecto se declararon comprendidos en la tarifa primera, clases primera y sexta respectivamente, los vendedores por cuenta propia ó en comisión al por mayor y menor ó al por menor solamente, y en las expendedurías en cantidad menor de diez kilogramos; así como en la tarifa de patentes se incluyó á los mercaderes ambulantes que vendieren sal en las ferias y mercados, en cantidad menor de diez kilogramos, los cuales deberían pagar cien reales, y á los capitanes ó patrones de buques que recorrieran los puertos é islas adyacentes, vendiendo dicho artículo por su cuenta ó en comisión, á quienes se sujetó al pago de cuatrocientos reales ⁽¹⁾.

Durante el último semestre de 1869, se exigió por las Diputaciones provinciales un recargo de tres reales á cada quintal de sal comun, expendida por cuenta del Estado, recargo que no puede tener el carácter de verdadero impuesto de consumos en una época en que ni estos existían, ni regía aún la ley de desestanco. No habiendo cesado todavía el monopolio del Estado, ese recargo debe considerarse como un sobreprecio del artículo, que podía establecerse como los

(1) Orden de 21 de Diciembre de 1869.



otros muchos que con tanta frecuencia hemos visto en las épocas anteriores; y en tal sentido se resolvieron las dudas que sobre este punto se suscitaran ⁽¹⁾.

En los presupuestos del año económico de 1874 á 1875, se restableció el impuesto de consumos sobre los géneros de comer, beber y arder; y, por lo que hace á la sal, se fijó en quince céntimos de peseta por kilogramo como derecho uniforme en todas las poblaciones de España, disponiéndose que, como renta estancada que fué y no especie de consumo, no podría ser gravada con ningún recargo ⁽²⁾. El impuesto referido se estableció para fijar el encabezamiento calculando el consumo á razon de seis kilogramos por habitante y noventa céntimos al año por cada uno de estos que tuviese el pueblo encabezado. Partiendo de esta base, no se propuso el Gobierno obtener los mismos productos que rendía el estanco, y que se elevara á treinta millones de pesetas en el año económico de 1866 á 1867; limitábase en las nuevas condiciones de la renta á presupuestar la mitad, ó sean quince millones de pesetas. Para regular la forma en que había de recaudarse el nuevo impuesto, se publicó una instrucción cuyas principales disposiciones, por lo que hace al objeto de nuestro estudio, eran los encabezamientos por los Ayuntamientos de los respectivos pueblos, y la facultad que se concedía á los particulares de establecer depósitos domésticos en todas las poblaciones, excepto Madrid, siempre que pagasen la contribucion de subsidio y cumplieran con los siguientes requisitos: 1.º Introducir durante un año dos mil quinientos kilogramos de sal. 2.º Exportar ó extraer para otros pueblos, dentro del mismo plazo, la mitad al ménos

(1) Orden de 3 de Mayo de 1870.

(2) Art. 13 del decreto de 26 de Junio de 1874.



de las especies que despachasen. Y 3.º No tener comunicacion alguna interior ⁽¹⁾. Poco despues se declaró, con motivo de una consulta del Ayuntamiento de Leon, que las sales entrojadas antes de 1.º de Julio del mismo año, estaban comprendidas en las precedentes disposiciones; y que, por tanto, se hallaban facultados los Ayuntamientos para la exaccion de los respectivos derechos, conforme á la tarifa aprobada ⁽²⁾.

Establecida la Direccion general de Impuestos indirectos como consecuencia de la reforma introducida á la que nos acabamos de referir, la resolucion y despacho de los asuntos relativos á los impuestos de consumos, sal y demas de esta clase que se habian decretado, fué de la exclusiva competencia de dicho centro administrativo ⁽³⁾. No tardó mucho en emanar de la nueva Direccion, un importante acuerdo de gran interes en la materia que nos ocupa, y que se hallaba fundado, por otra parte, en la más exstricta justicia. Habiendo exigido la Administracion económica de Santander, que los fabricantes de escabeches de Santoña satisficieran los derechos correspondientes á la sal que empleaban en su industria, la Direccion revocó este acuerdo, exceptuando del impuesto de consumos la sal que se emplease en la fabricacion de escabeches y conservas, fundándose en que, segun la instruccion vigente, cuando figuraran en las tarifas así las primeras materias como los productos con ellas elaborados, la Administracion podia dejar en libertad á aquellas, y exigir los derechos sobre estos ó viceversa, procurando siempre

(1) Instruccion de 26 de Junio de 1874.

(2) Orden de 29 de Julio de 1874.

(3) Decreto de 26 de Junio de 1874.



en estos casos conciliar los intereses de la Hacienda con los industriales y fabriles ⁽¹⁾.

Planteado el nuevo sistema de impuestos indirectos, y habiendo comenzado á regir los correspondientes encabezamientos, fueron no pocas las corporaciones municipales que reclamaron á fin de obtener rebajas y moratorias en el pago de las cantidades que adeudaban por razon de los referidos impuestos, y que se veian en la imposibilidad de satisfacer. Atendiendo á las consideraciones nada despreciables que se alegaban en apoyo de tal peticion, hubo de autorizarse al Gobierno para acceder á ella durante el año económico corriente, y de facultarse á los Ayuntamientos para que hiciesen el pago de dichas cantidades y las demas que adeudaran, con los créditos que los mismos tuviesen contra la Hacienda ⁽²⁾.

Satisfecha de este modo por el momento la necesidad más apremiante, hubo de pensarse maduramente en la solucion que se debiera dar con carácter de permanencia, pues lo tenian tambien las causas que produjeron el conflicto en que se encontraban los Municipios. Se reconoció en primer término el error en que se habia incurrido al tomar por base del nuevo impuesto los treinta millones de pesetas que se supuso rendia la renta de la sal en tiempo del estanco. No se habia tenido en cuenta efectivamente que en esa respetable cifra no todo era derecho fiscal y productos para la Hacienda, pues se comprendia el coste del artículo desde su fabricacion hasta su venta en el punto de consumo, ni tampoco que una parte no insignificante representaba el importe de lo vendido para la exportacion al extranjero. Reduciáse,

(1) Real orden de 15 de Abril de 1875.

(2) Real orden de 17 de Abril de 1875.



por su virtud, el producto líquido para el Estado á poco más de veinte millones de pesetas, cantidad que ni aún así limitada, podia servir de base en el nuevo régimen del desestanco, en el que el impuesto debe estar en relacion con el precio que en el mercado tiene el artículo, y no puede elevarse el valor de este hasta el punto, si se quiere exagerado, que es susceptible de alcanzar bajo el régimen del monopolio. Recuérdase á continuacion en el razonado preámbulo del decreto que nos ocupa, que cuando se intentó desestancar la sal en 1855, época en que la renta se elevaba á veintisiete millones de pesetas, se adoptó como punto de partida, para obtener un ingreso de nueve millones, no el precio de treinta reales quintal castellano, de que se partia en 1875, sino el de diez y seis reales, cantidad tal vez aún excesiva con relacion al precio medio del artículo en las diferentes poblaciones del reino. Adoptando en su consecuencia como base esta última cifra, se reduce el impuesto á nueve céntimos de peseta como derecho uniforme para todas las poblaciones, excepto Madrid. Se faculta, sin embargo, á los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales para que puedan recargar el impuesto hasta igual cantidad, á fin de proporcionarse recursos para sus presupuestos, desnivelados en todas partes ⁽¹⁾. La reduccion del impuesto que parece que se sanciona por este decreto, no puede ménos de merecer todos nuestros aplausos y se halla perfectamente en armonía con la série de razonamientos que le preceden; pero ¿quién no conoce que las necesidades abrumadoras que pesan sobre los pueblos y las provincias habian de ser permanentes, y general el recargo que en concepto de la disposicion que es-

(1) Real decreto de 8 de Mayo de 1875.



tudíamos debía ser únicamente transitorio y extraordinario? ¿Quién no reconocerá que la última parte del decreto podía fácilmente neutralizar y destruir aquella saludable reforma, facultando á las mencionadas corporaciones para recargar hasta diez y ocho céntimos de peseta el kilogramo de sal, que antes nunca podía contribuir con más de quince? La nueva tarifa debía regir en los encabezamientos que se celebraran con los Municipios en los sucesivos años económicos, y en su defecto para la administracion por cuenta del Estado; mas los hechos se encargaron de demostrar que ni aún imponiendo á los pueblos el peso de la nueva carga, ni aún sujetándolos á las odiosas vejaciones que llevaba consigo, podían los Ayuntamientos cubrir los débitos para con el Estado por tal concepto.

La ley de presupuestos de 1876 á 1877 estableció que fueran obligatorios por dos años los encabezamientos del impuesto de consumos vigentes á la sazón, debiendo subsistir la misma tarifa aprobada por la disposicion que acabamos de exponer. La misma ley autorizaba al Gobierno para arrendar en participacion y mediante pública subasta las salinas de Torre vieja, asegurando el mayor producto que hubiesen ofrecido en años anteriores, cuya autorizacion, por lo demas, no tuvo resultado. Debe notarse, por último, que en el presupuesto de ingresos se incluye la cantidad de un millón quinientas mil pesetas por venta de sal á precio de comercio en las salinas de propiedad del Estado y para extraer al extranjero, computándose los gastos causados por las salinas en ciento tres mil ciento veinticinco pesetas ⁽¹⁾. La instruccion para la cobranza del impuesto conforme á las

(1) Ley de 21 de Julio de 1876.



precitadas bases solo contiene ligeras modificaciones respecto de la precedente, como quiera que aquel no habia sido alterado en su esencia. Unicamente mencionaremos en este lugar que la cantidad que los depósitos debian introducir, se limitó á la cantidad uniforme de dos mil kilogramos; que se consignan reglas para el caso en que los pueblos hagan efectivos sus cupos por repartimiento vecinal; y que se manda aumentar al importe del mencionado cupo, un cinco por ciento para suplir partidas fallidas ⁽¹⁾.

Entretanto, los Municipios venian luchando con mil dificultades para hacer efectivos los cupos que les correspondian en los anteriores encabezamientos, eran muchos los que no lo habian verificado á contar desde el año económico de 1874 á 1875, y no fué ciertamente la sal el artículo que ménos obstáculos creaba á los Ayuntamientos en la realizacion de sus compromisos. Los débitos llegaron á ser tan considerables, como grande era la penuria del Tesoro; y hubo de dictarse una rigurosa y severa disposicion por la que se ordenaba que inmediatamente y sin excusa comenzaran á hacerlos efectivos, conminando en otro caso con los medios que proporcionaban los contratos celebrados y los ejecutivos que establecia la instruccion de 1869 ⁽²⁾.

Empero si la necesidad de allegar recursos, más aún que la de hacer cumplir las disposiciones dictadas y las obligaciones contraídas, forzaba al Gobierno á adoptar esas medidas extremas, no podia ocultarse al mismo lo grave de los obstáculos con que tenia que luchar el sistema establecido: considerábase, por un lado, de absoluta y apremiante necesidad allegar recursos que llenaran el vacío que dejó el des-

(1) Instruccion de 24 de Julio de 1876.

(2) Real decreto de 10 de Abril de 1877.



estanco; y se veían, por otro, prácticamente las dificultades que se oponían á ello dentro del sistema adoptado. Así lo confirma el Gobierno explícitamente al presentar los presupuestos de 1877 á 1878; y no se limita á confesarlo, sino que de una manera bien clara indica la insistencia con que había acudido á su mente la idea de volver al antiguo monopolio. Comienza, en efecto, haciendo indicaciones que tienden á probar las ventajosas condiciones que ofrece la sal como materia imponible y la facilidad que ofrece para obtener de ella nuevos y más crecidos rendimientos. "La forma, dice, en que se produce, la baratura con que se obtiene y lo general y uniforme de su consumo, que permite al Estado obtener rendimientos crecidos de un derecho apenas sensible por lo que se subdivide y difunde, hacen que sea de antiguo considerado en todas las naciones como excelente materia imponible. Sólo Inglaterra ha renunciado á gravarla, merced al extraordinario desahogo de su situación financiera." Reconócese que la cifra de diez millones doscientas noventa y siete mil diez y ocho pesetas, por la que figuraba el encabezamiento de la sal, era excesiva para los Municipios, debiendo producir constantemente un déficit en sus presupuestos, á no ser que cubrieran la mayor parte de su importe por medio de otros recursos: para comprender que así debía suceder, basta fijarse en que el impuesto de la sal era de nueve pesetas por quintal métrico, y existían provincias en que el precio oficial y público de la misma era de dos pesetas cincuenta céntimos; y existiendo tan extraordinaria desproporción entre el impuesto y el precio ordinario, ¿cómo podía hacerse efectivo aquel? ¿Cómo podían evitarse las defraudaciones que encontraban tan poderoso aliciente? Desistió en su virtud el Gobierno de continuar exi-



giendo el impuesto á la entrada del artículo en los centros de consumo, prefiriendo hacerlo efectivo al extraerlo de los lugares en que se elaboraba, siguiendo el sistema adoptado en Francia. Pero tropezábase con el inconveniente de que este impuesto por sí solo sería ineficaz en España para producir el importe de los encabezamientos. Por otra parte, la producción en aquel momento no podia apreciarse por la que se obtenia en las fábricas y salinas de la nacion antes del desestanco, habiendo llegado á ser, en concepto del Gobierno, muy superior al consumo. Las diversas condiciones en que se hallaban la fábricas del interior y las salinas de la costa, se consideraba habian de producir una desigualdad en el impuesto, sobre todo si fuera elevado; y las innumerables salinas, espumeros, salobrales, lagunas y pozas de aguas muertas que existen en nuestro suelo, en el que constituyen un verdadero privilegio, no podian vigilarse si no se completase y facilitara el resultado con la prohibicion de la venta.

Tales eran, casi literalmente expuestas, las consideraciones que se hacian sobre los inconvenientes que llevaba consigo el sistema de encabezamientos y los que pudiera ofrecer otro nuevo. Todo esto se conseguiria, continuaba la exposicion, con el restablecimiento del estanco; pero sobre la repugnancia que siente el Gobierno hácia el monopolio de objetos entregados hoy á la libre especulacion, ofreceria esta reforma notables dificultades. Desechado, pues, este único medio que restaba para salvar los inconvenientes de los anteriores, se decidió por un sistema mixto de imposicion que gravara el consumo á la vez que al fabricante. Se impone, en consecuencia, el derecho de una peseta por habitante exigido de los Ayuntamientos, quedando estos



autorizados para establecer por sí ó por arriendo la venta exclusiva de la sal, con lo cual se obtendría la suma de diez y siete millones de pesetas; y un impuesto de cupo fijo á repartir entre todos los fabricantes ó productores de sal en proporcion á la que expendiesen ordinariamente para el consumo interior, y que se fija en un millon quinientas mil pesetas. De esta manera se proponía conciliar todos los derechos, todos los intereses: el Estado podría hacer efectivo el impuesto; los Ayuntamientos tendrían los medios de vigilancia que proporciona la venta exclusiva, *equivalente sin duda á un éstanco en cada localidad*, y los dueños de las fábricas y salinas conservarían su propiedad sin otro quebranto que el pago de módico tributo que, previos los oportunos concertos con la Administración, podrían abonar en plazos prudentemente establecidos.

El proyecto de presupuestos dió lugar á un ruidosísimo acontecimiento, sobre el que interesa llamar especialmente la atención, tanto por las enseñanzas que suministra para el porvenir como por lo mucho que ilustra el pasado de la importante cuestion objeto de nuestro estudio. Cundió con la velocidad del rayo y como el rumor sordo de una cercana catástrofe, la noticia inesperada de que la Comision que entendía en la formacion del presupuesto general de ingresos habia presentado al Ministro de Hacienda un proyecto de reestanco de la sal, añadiéndose que habia encontrado no desfavorable acogida. La verdad es que este proyecto no se publicó ni aparece en los periódicos oficiales; pero bastó que uno político lanzase á los vientos de la publicidad la noticia de la existencia del mismo y el que se consideraba como su contenido, para que, cual bomba que estalla en medio de pacífica y descuidada multitud, levantara indecible clamo-



reo, sentidas quejas y fundadas reclamaciones⁽¹⁾. Compréndese sin mucho esfuerzo la alarma que debía producir sólo la posibilidad de que desapareciese por una ley de presupuestos cuanto se había establecido por la ley especial de desestanco, se conculcaran los derechos adquiridos á la sombra de esta, y fueran víctimas de tan violento é inesperado ataque los cuantiosos y respetables intereses, creados bajo su amparo. En todas partes se levantó un clamoreo tan jus-

(1) El malhadado proyecto, tal como lo publicó *El Imparcial* en el número correspondiente al 8 de Marzo del referido año de 1877, decía así:

Artículo 1.º Se establece el estanco de la sal, devolviéndose al Estado el monopolio de su venta para el consumo interior del reino desde la publicacion de esta ley.

Art. 2.º Se autoriza al Gobierno para incautarse inmediata y directamente de las salinas, espumeros y salobrales enajenados, indemnizando con arreglo á esta ley á los adquirentes, así como para celebrar con ellos y con los demas propietarios conciertos de suministro á la Hacienda sobre la base del producto ordinario de las salinas y en la forma más equitativa, económica y conveniente á los intereses del Estado.

Art. 3.º El Gobierno adquirirá tambien los depósitos y acopios de sal, y fijará su precio, de igual modo que el de las indemnizaciones que procede abonar á los propietarios. Las indemnizaciones por expropiacion y mejoras se regularán extrictamente por el valor con que aparezcan amillaradas las salinas en los repartos de contribucion de inmuebles.

Art. 4.º Los expedientes de indemnizacion quedarán resueltos y liquidados por el Ministro de Hacienda, en el término de seis meses, desde la publicacion de esta ley. El Gobierno dará cuenta á las Córtes de su resultado y del que ofrezcan los conciertos de que trata el art. 1.º

Art. 5.º Las salinas revertidas á sus antiguos propietarios ó á los causa-habientes de ellos, volverán á poder del Estado sin otra indemnizacion que el restablecimiento y pago de las correspondientes cargas de justicia, en los casos en que hubiesen existido y desde la fecha de la nueva incautacion. Las salinas simplemente vigiladas hasta el año 1869 que hayan sido posteriormente reclamadas y obtenidas á título gratuito, volverán á su situacion anterior, sin que se conceda resarcimiento alguno á los poseedores actuales. Las concesiones de minas de sal hechas por el



to como formidable: los dueños de salinas, los fabricantes de mil géneros de productos que emplean la sal, los consumidores, la prensa, unieron su voz para protestar contra el pernicioso proyecto que tantos derechos pretendia hollar, tantos intereses atacaba, y tan profunda conmocion se proponia introducir ⁽¹⁾.

Ministerio de Fomento, se entenderán, cuando no proceda su nulidad, subordinadas á las condiciones á que venian sujetas por la legislacion anterior al desestanco.

Art. 6.º El pago de las indemnizaciones á que se refieren los anteriores artículos, se realizará en seis plazos de un año, con hipoteca de la venta é interes de ocho por ciento. Con el fin de constituir inmediata y préviamente á la expropiacion estas indemnizaciones, el Tesoro emitirá pagarés por reversion de salinas al Estado, representativos de su importe, con las expresadas condiciones.

Art. 7.º El precio de la sal comun que la Direccion general de Rentas estancadas venderá á los consumidores uniformemente en todo el Reino, será el de.....

Los precios de gracia serán los siguientes.....

Art. 8.º Se restablece el resguardo especial de sales organizado con sujecion al Reglamento de 25 de Abril de 1858, y especialmente encargado de vigilar todas las salinas, espumeros y minas de sal, estén ó no en explotacion, de impedir la introduccion de sal extranjera en el Reino, y la venta de la que proceda de las salinas que queden en poder de sus actuales dueños, destinadas exclusivamente en adelante á producir sal para el suministro del Estado y para la exportacion.

Art. 9.º Se restablecen los alfolies y expendedurías por cuenta del Estado en la forma más ventajosa, á juicio del Ministro de Hacienda.

Art. 10. La Administracion hará contratas generales para el transporte de la sal en un precio fijo por quintal métrico, calculado sobre un promedio de distancia.

(1) Entre las reclamaciones á que aludimos, merece ocupar un puesto distinguido el folleto titulado: *Reestanco de la sal. Consideraciones contra dicho proyecto por la comision de propietarios de salinas*. En él se comprende la que se dirigió al Ministro de Hacienda en 5 de Abril de 1877, precedida de extensos y fundados razonamientos en apoyo de su peticion.



Ante tan ruda y fundada oposicion, hubo de ceder el desdichado proyecto; y las consideraciones con que encabezaba el Ministro del ramo los presupuestos, bien pueden considerarse hasta cierto punto como un desagravio de la opinion pública irritada, como una garantía que la tranquilizase. Se dispuso, en su virtud, que desde 1.º de Julio de 1877, se percibieran en sustitucion del impuesto sobre el consumo, otros dos, exigibles el uno directamente de los Ayuntamientos, cuyo tipo sería una peseta por habitante, y otro fijo, consistente en millon y medio de pesetas repartibles entre los fabricantes. En compensacion del gravámen que se imponia á los Ayuntamientos, se les concede el derecho de la exclusiva en la venta de la sal, pudiendo ejercitarlo directamente ó por medio de arrendamiento, si no prefiriesen recaudar este impuesto á la entrada de las poblaciones, ó por cualquier otro de los medios establecidos para la contribucion de consumos. Para hacer el reparto del impuesto entre los fabricantes, la Administracion pública debia formar la estadística de la produccion de la sal, con destino al consumo de la Península é islas adyacentes, quedando autorizada tambien para celebrar conciertos con los productores para el cobro del impuesto, é intervenir en la forma que estimara mejor las fábricas y minas, cuyos explotadores no creyesen justa la cantidad que se les impusiera. Ambos impuestos debian cobrarse por trimestres y por la vía de apremio á los quince dias del vencimiento. Los depósitos de sal se declaraban sujetos al aforo, para someterlos al impuesto y á las disposiciones de la ley. Se prohibia la explotacion y venta del artículo sin que préviamente se justificase estar al corriente en el pago del impuesto, considerándose á los que de otro modo obrasen como defraudadores. Las salinas del li-



toral que no quisieran se les incluyese en el impuesto de fabricacion, no podian vender sal para el consumo. Las salinas de la nacion que se hallaban en estado de venta, podian arrendarse, estableciendo como condicion precisa el deber del arrendatario de pagar el impuesto de fabricacion, rebajándose proporcionalmente la cantidad que satisficieran por este concepto de la repartida á los demas productores. La Hacienda habia de concurrir á la venta al por mayor de la sal perteneciente al Estado en las salinas de Torre vieja, cuya explotacion conservaba. Los precios de venta se fijarian por los del mercado, así para la exportacion como para el consumo interior, teniendo en cuenta respecto á este último el impuesto de fabricacion establecido por la ley á fin de no desigualar injustamente las condiciones de los particulares y de la Hacienda. Se autorizaba, por último, al Gobierno para arrendar en participacion, y mediante pública subasta, las salinas de Torre vieja, asegurando el mayor producto que hubiesen ofrecido en años anteriores. El resultado que arrojaba el presupuesto conforme á las mencionadas bases, era, reducido á guarismos, de diez y nueve millones cien mil pesetas de ingresos, y doscientas veintinueve mil ciento diez de gastos ⁽¹⁾.

Las dificultades que se oponian anteriormente á que los Ayuntamientos hicieran efectivos sus débitos, continuaban colocando á los mismos en una situacion embarazosa, sin que, por otra parte, hubiese mejorado la de los consumidores. Así se explica que al formarse los presupuestos de 1878 á 1879, se fijase casi exclusivamente la atencion del legislador en hacer factible el cumplimiento de lo establecido para

(1) Ley de 11 de Julio de 1877.



el anterior año económico, introduciendo al par alguna modificación reclamada por la equidad: se dispone, en efecto, que los débitos por consumos, cereales y sal, por el impuesto personal y por el cinco por ciento sobre presupuestos municipales, correspondientes á los años anteriores al de 1877 á 1878, se cobraran en seis años, pagando los pueblos una sexta parte en cada uno, pudiendo tambien compensar estos débitos con los créditos que les resultase contra el Estado por sus bienes de propios vendidos; y en cuanto á los atrasos por los impuestos pertenecientes al año económico de 1877 á 1878, se cobrarían de los recursos é ingresos que correspondiesen tambien al mismo año, formándose un presupuesto adicional para cada uno de los Municipios en el caso de que estos no alcanzasen. Los encabezamientos anteriores se declaran permanentes aunque con los aumentos que en el mismo año pudiesen aceptar los Municipios, y las bajas que la Hacienda acordase con arreglo á la instruccion de consumos vigente. Mas tanto para imponer aumentos como para obtener bajas, se habrán de instruir expedientes justificativos de la pretension, la cual se resolverá con audiencia del Consejo de Estado en pleno, cuyo informe, con la Real órden resolutive, se publicará en la *Gaceta de Madrid*, sin cuya circunstancia no causará efecto. Los encabezamientos de los Municipios que en el último censo general de 31 de Diciembre anterior resultasen con más de cinco mil almas, y no se rigieran por la primera base de poblacion de las que señala la tarifa vigente, se modificarán al respecto de seis pesetas por habitante, si no lo satisfacieren ya superior; cuyo tipo se considera reducido á la mitad para las provincias de la Coruña, Orense, Pontevedra y Oviedo, y á la tercera parte para las de Lugo y Canarias. Teniendo en cuenta las bajas



que por tal motivo habrían de sufrir las cantidades presupuestadas para el año anterior, se fijan los ingresos del de 1878 á 1879 en quince millones, novecientas diez mil pesetas, y los gastos en doscientas treinta y ocho mil, setecientas ochenta y cinco, resultando por consiguiente, un líquido de más de quince millones y medio de pesetas ⁽¹⁾.

(1) Ley de 21 de Julio de 1878.



CAPÍTULO IV.

Síntesis de los capítulos precedentes.—Resultados producidos por la ley de desestanco y las disposiciones posteriores.—Criterio bajo que debe estudiarse esta materia.—Relaciones entre la nueva legislación, el precio del producto y los intereses fiscales.—Influencia de aquella en el consumo.—Desarrollo del comercio de cabotaje y de la industria de acarreo.—Beneficiosos resultados para la ganadería, salazones y otras industrias que consumen sal.—Fomento de este ramo de la minería.—El nuevo derecho y el contrabando.—Resultados poco favorables de algunas disposiciones posteriores á la ley de desestanco.

Conocidas detalladamente, ya la ley de desestanco, ya las disposiciones dictadas con posterioridad, resta enumeremos concretamente los resultados producidos por una y otras, bien que al ir las exponiendo, hemos indicado en muchas ocasiones, las consecuencias que de las mismas debían emanar, lo cual permite que podamos reducir este capítulo á ciertos puntos de vista generales.

Ante todo juzgamos oportuno notar que la nueva legislación solo cuenta con la corta duración de diez años; y que para apreciar debidamente todos los resultados que está llamada á producir, debería esperarse á que transcurriera un período harto más largo. Ténganse en cuenta las profundas raíces que el sistema del monopolio había echado en nuestra patria, y se comprenderá fácilmente que no era fácil extirparlas por completo en un breve espacio de tiempo. Cuánta sea la eficacia de las nuevas disposiciones para regenerar



nuestra industria, habrá de comprobarse plenamente cuando se considere que, no obstante su corto reinado, los hábitos inveterados con que han debido y deben aún luchar, los intereses opuestos que contrarían y el no ser todavía la fiel expresión del pensamiento capital que informa el novísimo derecho, han producido ya los más brillantes resultados. Si este continúa rigiendo, como esperamos; si se depuran sus disposiciones de los vicios y defectos que impiden surtan todos sus provechosos resultados; si se sigue avanzando con paso firme por el buen camino, entonces será cuando se llegue á recoger todos los abundantes y sazonados frutos que produce siempre el feliz reinado de la verdad y la justicia.

El primer resultado que exponremos á la consideración de nuestros lectores, es la baja notabilísima que sufrieran los precios de la sal tan pronto como se declaró libre su tráfico. Recuérdese que, según las disposiciones que venían rigiendo en los años inmediatamente anteriores al desestanco, el precio del artículo llegó á once escudos doscientas ochenta y cuatro milésimas el quintal métrico, y que en su consecuencia pudo considerarse como precio de gracia el de cinco escudos doscientas milésimas que establecía la Real orden de 8 de Junio de 1868 á favor de los salpresadores de pescados. Pues bien; nosotros no saldremos del terreno de los datos oficiales para mostrar cuánto influjo había ejercido en los precios la libre concurrencia establecida, y ni aún nos hemos de fijar en los que se dan como corrientes en los años más próximos al actual. No habían transcurrido aún cuatro meses desde que comenzara á regir la ley del desestanco, y ya se notaban de tan evidente modo los resultados de la misma, que, según hemos visto, en las reglas dictadas para



la venta de la sal de Torrevieja se fijaba el precio del artículo por quintal métrico en tres pesetas cincuenta céntimos, y en cuatro pesetas cincuenta céntimos la molida, es decir, en la misma cantidad que constituía el antiguo precio de gracia más beneficioso. En el siguiente año 1871 se rebaja el precio á una peseta veinticinco céntimos el quintal métrico de sal lavada, y á una peseta la sin lavar; de suerte que vino á quedar reducido á la tercera parte del precio más bajo conocido dentro de la legislación anterior. Por lo que hace á la que se exportaba para el extranjero, llega á reducirse á setenta y cinco céntimos de peseta el quintal métrico de sal sin lavar.

No necesitamos encarecer las ventajas que habían de resultar de la baratura producida en los precios del artículo. Desde luego se cortaban de raíz las quejas y reclamaciones que en las épocas anteriores vemos reproducidas con frecuencia, motivadas por el excesivo precio que exigía el Estado, dejándose llevar del inmoderado deseo de aumentar á todo trance los ingresos, según lo iban exigiendo las circunstancias y el crecimiento de los gastos. Se ha facilitado, por otra parte, el consumo, según veremos después, suministrando así á la industria condiciones de vitalidad y progreso que sólo se pueden encontrar en la proporción natural que debe existir entre la producción y el consumo. Y si el Estado no obtiene hoy todos los ingresos que antes le rendía el monopolio, es indudable que la diferencia no es tanta como pudiera parecer á primera vista; que lo que actualmente percibe representa de un modo harto más perfecto lo que ese ramo de riqueza debe producirle sin aniquilarla y destruirla en su misma fuente; y, por último, que esa cifra podría y debería elevarse de un modo notabilísimo el día que



la industria salinera llegase á alcanzar todo el grado de desarrollo á que está llamada. Empero estas últimas ideas exigen nos detengamos algunos momentos en su exámen y las reduzcamos al terreno concreto y preciso de los números.

Debemos ante todo tener en cuenta cuáles eran los verdaderos rendimientos que el monopolio de la sal producía al Erario, para poder determinar luego el verdadero estado de esta renta en el momento actual. No tomaremos como punto de partida los productos de la misma en los siglos anteriores, ni aún en el primer tercio del presente, lo cual nos colocaría en una situación que se calificaría de excesivamente ventajosa para nuestros cálculos, y no acomodada al tiempo actual, que es al que debemos referirnos: sabido es que en la citada época producía al Tesoro una cantidad notablemente inferior á la que obtiene despues del desestanco ⁽¹⁾. Nos fijaremos en los años más próximos á esta memorable fecha; y en ella puede asegurarse que el ingreso ordinario más favorable ha sido el de setenta millones de reales líquidos, y sólo excepcionalmente ha llegado á ochenta ⁽²⁾. Empero debe advertirse que para obtener estos ochenta millones líquidos se necesitaba gravar á los consumidores en ciento veinte, pues los gastos de todas clases absorbían los cuarenta restantes.

Veamos ahora el producto posterior á la cesacion del monopolio. Segun los últimos presupuestos, se calculaban los ingresos por la sal en quince millones setecientas cincuenta mil pesetas, sin contar otras novecientas mil por venta de salinas, fábricas y demas propiedades afectas al es-

(1) Véase el *Apéndice núm. III*.

(2) Véase el *Apéndice núm. IV y IV bis*.



tanco, descomponiéndose aquella cantidad en las siguientes partidas:

Impuesto sobre la sal.	12.750.000	pesetas.
Venta de sal á precio de comercio.	740.000	"
Venta de sal para extraer del Reino.	760.000	"
Impuesto sobre la fabricacion.	1.500.000	"
<i>Total.</i>	<u>15.750.000</u>	"

De suerte que la renta de la sal desestancada produce al Estado, segun datos oficiales fehacientes, sesenta y tres millones, de los que, deducido el diez por ciento por gastos de repartimiento y recaudacion, quedan líquidos cincuenta y siete millones, esto es, una diferencia de trece millones respecto al ingreso ordinario, ó de veintitres millones relativamente al año de mayores rendimientos. Pero es de notar que en ese cálculo no se tienen en cuenta varias partidas que no figuraban ni podian figurar en los presupuestos pertenecientes á la época del estanco, pero que desde 1870 contribuyen á aumentar los ingresos: tal sucede con el aumento que ha recibido la contribucion territorial por las fincas correspondientes á las salinas enajenadas, el cánon y el derecho de superficie por las nuevamente registradas, el producto del impuesto sobre los trasportes, el de la contribucion industrial por venta del artículo, el de las fábricas de salazon y los derechos de importacion, de cuyos diferentes capítulos nos ocuparemos más adelante. Es necesario contar, por otra parte, con los mayores ingresos que debe producir al Tesoro en el momento en que llegue á alcanzar esta industria el desarrollo de que es susceptible, dadas las especiales condiciones de nuestra nacion. Nótese, por último, que se halla aún perdida para la circulacion una gran ri-



queza, á la que no se han aplicado las disposiciones de la ley de desestanco, y que producirá no despreciables recursos bajo distintos aspectos, el día en que salga de esa situacion anómala. He aquí, pues trazado el camino que debe seguirse para que la industria salinera prospere cuanto es posible y se obtenga á un mismo tiempo, como debe suceder siempre, el mayor bienestar de todos, y con él una situacion desahogada y apoyada en sólidas bases por lo que hace al Tesoro.

La influencia de la nueva legislacion en los precios se ha dejado sentir bajo otro concepto que no puede ménos de estimarse como extremadamente aceptable. Dentro del sistema de la concurrencia libre, los precios siguen la ley que los regula en el mercado, y con ellos ha desaparecido la variedad de los que anteriormente venian fijándose, segun las diversas aplicaciones que se daba á la sal y la mayor ó menor proteccion que el Estado se creyó en el caso de dispensar á cada una de las industrias que la consumen. La ventaja que de aquí ha resultado, se concibe sin esfuerzo teniendo en cuenta la gran confusion que en esta parte existia y la desigualdad no bien justificada que esas diferencias de precios estableciera entre las varias industrias. Y si llegara un momento en que se aplicasen en todo su rigor los buenos principios y los precios pudieran adquirir su natural nivel, libres de la influencia de circunstancias extrañas y movimientos artificiales, se haria posible y hasta necesario el que desapareciese tambien la diferencia que tiene establecida la Administracion pública entre la sal que se destina al consumo interior y la que se adquiere para la exportacion, diferencia que no encontramos debidamente fundada dentro de las sanas doctrinas económicas.



Consecuencia lógica y natural de la baja de los precios ha sido en esta ocasion, como en todas, el aumento del consumo. No sostendremos, cual parece pretenden algunos, que el aumento del consumo del artículo que nos ocupa guarde exacta proporcion con la disminucion de los precios, tratándose de la que se destina directamente al servicio del hombre, al consumo ordinario para condimentar los alimentos, pues sabido es que esta aplicacion tiene límites naturales conocidos que se alcanzan en breve, y que no es lícito traspasar. No sucede lo mismo, sin embargo, con las demas numerosas aplicaciones de que es susceptible ese artículo, que no sin razon aparece prodigado en la naturaleza con tan extraordinaria abundancia. La prueba clara é indudable de este aumento de consumo se encuentra ya en el desarrollo alcanzado por las industrias que utilizan la sal, de cuyo punto nos ocuparemos, ya de la incomparable mayor actividad del comercio de cabotaje, ya del gran aumento que acusan las balanzas del comercio exterior. Por lo que hace al comercio de la sal entre los diferentes puntos de la nacion, ha sido tan extraordinario su aumento, que no elevándose por término medio en los años 1864 á 1869 más que á cincuenta y un mil seiscientas una toneladas de mil kilogramos, en igual período, desde 1870 á 1875, subió á doscientas ochenta y seis mil trescientas diez y ocho ⁽¹⁾. Y bueno es no perder de vista en este punto, así como en todo lo que se refiere al asunto de este capítulo, que las circunstancias políticas, sociales y económicas por las que atravesaba en aquellos años nuestra nacion, no eran las más propicias para que ni este ni ningun otro ramo de la riqueza pública ad-

(1) Véase el *Apéndice* núm. V.



quiriesen notable incremento. En cuanto á la exportacion, los números comprueban tambien nuestro aserto, pues el término medio en los mismos seis primeros años, fué de ciento ochenta y siete mil ciento ochenta y seis toneladas, y desde 1870 á 1875, ascendió á doscientas diez y ocho mil ciento diez ⁽¹⁾.

Ese notable movimiento comercial ha contribuido á su vez á un resultado importantísimo por lo que hace al desarrollo de la navegacion de cabotaje. No podia ménos de suceder así cuando en breves años llegó á elevarse la cantidad trasportada á ocho veces mayor que la que alimentaba ese tráfico anteriormente; los buques costaneros la adquirian en grandes cantidades para sus cargamentos, en términos de representar hasta el 40'37 respecto á las demas mercancías, siendo así que en los años anteriores á 1869 solo se elevó á 8'86 ⁽²⁾; y, por último, fomentaba extraordinariamente el trabajo de la marinería. Los trasportes terrestres han obtenido asimismo un gran incremento; pues no de otra manera podia sostenerse ese activo comercio marítimo. De todo ello han resultado los consiguientes beneficios al Estado, aunque sólo le consideremos en este instante como sinónimo de fisco. Este ha venido, en efecto, á percibir un impuesto sobre esas considerables cantidades de sal, como sucede con todas las demas mercancías trasportadas por ferro-carriles, y ha aumentado sus ingresos con la contribucion industrial satisfecha por los dedicados al acarreo.

Mas no concluyen aquí las ventajas obtenidas ya del desestanco: gran número de industrias, algunas de la mayor importancia en nuestra nacion, han adquirido notable incre-

(1) Véase el *Apéndice núm. VI*.

(2) Véase el *Apéndice núm. V*.



mento. Puede contarse en primer término la ganadería. Oigamos lo que á este propósito se dice con motivo del reestanco en una produccion reciente ⁽¹⁾: "No cabe dudar que la sal es de suma importancia para la ganadería, y el antiguo expediente requerido para inutilizar la sal destinada á los ganados, concediéndole á los que contasen diez reses vacunas ó cien lanares, prueba sin necesidad de otra demostracion, cuánta es la ventaja actual para el ganadero que tenga mayor ó menor número de cabezas, el adquirirla como mejor le convenga y distribuirla con la abundancia que permite la baratura, sin las molestias que el fisco le imponia con el solo hecho de la formacion de expediente, y las trabas y socaliñas con que ciertos subalternos hostigan, acucian y aburren á los particulares para un provecho ilegítimo, en descrédito del gobierno que representan. Hay que tener en cuenta que el último censo de la ganadería hecho por la Junta de Estadística, arrojaba el guarismo de treinta y seis millones de cabezas, que durante el estanco consumian muy poca sal, y con el desestanco la comen en progresion creciente con gran ventaja del país, tanto para la salud como para la riqueza pública, pues el ganado obtiene una mejora en sus carnes y un aumento en el cebo, que todos los ganaderos reconocen, y por ello se felicitan, estimándola muchos en un veinte por ciento." Verdad es que segun la legislacion del estanco, la ganadería era una de las industrias que disfrutaban de los precios de gracia; pero, como se ha indicado, eran tales las limitaciones establecidas, que semejante beneficio estaba muy lejos de tener el alcance que pudiera creerse á primera vista. En efecto, para gozar de él

(1) *Reestanco de la sal.*



era necesario poseer diez reses vacunas, ó ciento lanares; y, segun el censo, los propietarios de ménos de diez cabezas de la primera clase, estaban en la proporcion de trescientos setenta y siete á cuatro; y los de la segunda en la de quinientos cincuenta y seis á cuarenta y ocho ⁽¹⁾.

No es menos benéfica la influencia que ha ejercido el nuevo derecho en el desarrollo de las pesquerías é industria de salazon. "La industria de salazones, se dice en la obra últimamente citada, tiene en Galicia un incremento que permite afirmar á corporaciones respetables la existencia de seiscientas fábricas desenvueltas en el período de ocho años, y la ocupacion permanente de cincuenta mil familias menesterosas. No sostendremos guarismos cuya exactitud no hemos podido comprobar; pero aun cuando apareciesen abultados, aun cuando cincuenta mil familias quedaran reducidas á cincuenta mil personas, ¿no dice este hecho por sí mismo que el desestanco ha procurado pan y trabajo á gran número de menesterosos?" Y cuanta importancia tenga en nuestra nacion la referida industria, lo van á comprobar las siguientes palabras pertenecientes á un escritor tan competente en la materia como Silva Ferro: "Uno de los artículos de comercio que figuran por una suma más considerable en la balanza mercantil de la Península española, es el bacalao que se importa de las pesquerías extranjeras, el cual se consume en España é Islas Baleares; y es un estupendo y muy costoso abandono el que, teniendo á su disposicion los españoles riquísimas é incomparables pesquerías en las inmediaciones de las Islas Canarias, é inagotables salinas en Cádiz, Torre vieja y Figueras, para poder fomentar la industria de

(1) Véase el *Apéndice núm. VII*.



pesca y salazon con recursos nacionales, estén pagando á la industria de las pesquerías extranjeras un tributo que llega ya á ser próximamente de *tres y medio millones de pesos fuertes* cada año, por el solo artículo de bacalao y pez-palo que consumen. Una gran parte de la sal marina que se exporta de las salinas de Figueras, Cádiz, Torrevieja, en buques extranjeros, es destinada á las salazones de pescado que la industria y comercio de las naciones que benefician este artículo de consumo, introducen despues en los mercados de España y en otros países de raza latina.”

Algo semejante, aunque en menor escala, puede decirse de las varias industrias que consumen la sal en cantidades mayores ó menores; tal sucede con la de beneficio de minerales, fábricas de conservas alimenticias, productos químicos, barrilla, jabon, cristal, vidrio, loza, mosaicos, guano y otras que necesitan obtener sal abundante y por lo mismo barata. Todas ellas están llamadas á alcanzar considerable desarrollo, ademas del que ya han conseguido en el corto período de desestanco.

Las facilidades concedidas para la explotacion de la sal, ha dado lugar á un importante incremento de esta parte de la minería, habiéndose registrado desde 1869 numerosas salinas que, ó no se conocian antes, ó no se habian explotado por las dificultades con que hemos visto tropezaban generalmente estos asuntos, y que llegaban muchas veces hasta el extremo de hacerlos naufragar. La comprobacion de este aserto se halla en la *Estadística minera* desde 1870 en adelante, y hasta en la interesante orden de 26 de Febrero de 1871. Añádase á esto que muchas salinas, aunque no todas las que debieran, pasaron del poder del Estado al de los particulares dueños de las mismas, y los contratos de venta



y otros por los que se cedieron aquellas, poniéndose en activa circulacion, y se comprenderá el movimiento industrial desarrollado en punto á minería. El Estado por su parte no permanece extraño á este movimiento, pues reporta la ventaja de percibir el correspondiente cánon y el derecho de superficie que cada dia debe adquirir mayores creces. ¡Tanto y tan extraordinariamente se diversifican las incidencias del impuesto!

La venta de las salinas hecha por el Estado ha contribuido por una parte á poner en circulacion una riqueza paralizada antes; y, por otra, viene siendo una compensacion por las cantidades que deja de percibir actualmente por la sal, con relacion á lo que antes le rendia. Otros diferentes recursos á los que ha dado lugar el nuevo régimen de la industria salinera suplen tambien el vacío que en las arcas del Tesoro dejara el desestanco; y prueban á la vez la bondad de un sistema que abre nuevos y fecundos manantiales de riqueza sin daño de ninguno y no poco provecho de todos. Es indudable, en efecto, que, aun cuando no sea en gran escala, han pasado al dominio privado edificios y tierras anejas á las salinas, y por las que sus dueños pagan la contribucion territorial, que significa nuevos aunque no cuantiosos recursos; y la existencia de una industria desconocida antes, la de venta de la sal, da origen al derecho de patente que figura ya por una cantidad no despreciable.

En otro orden de ideas, los resultados de la legislacion que decretara la libertad de la industria, han sido más beneficiosos, si cabe, que bajo los aspectos que venimos estudiando. Ese nuevo régimen ha cortado de raiz el gravísimo mal que venia fomentando la inmoralidad pública por su frecuente repeticion y por la generalidad que habia llegado



á alcanzar. Nos referimos al contrabando que tantas disposiciones habia motivado en las épocas anteriores, sin poderse conseguir poner remedio á ese delito, que tan profunda llaga sostenia constantemente abierta en la moralidad pública, y que retenia de continuo en presidio algunos centenares de individuos. Bastaria esta circunstancia por sí sola para aquilatar la bondad de un sistema que tan trascendental fin cumple.

Mas no se juzgue que todas las disposiciones dictadas desde 1869 debian producir esos benéficos resultados; antes bien, encontramos algunas que ni cumplen debidamente, en nuestro entender, con el pensamiento que inspirara la nueva legislacion, ni están llamadas á mejorar el estado anterior de la industria salinera.

Prescindiendo de ciertas disposiciones de carácter puramente reglamentario, encaminadas á facilitar el tránsito del antiguo al nuevo sistema, ajenas, por tanto, á trascendentales resultados, encontramos no pocas que se dirigen á regular la explotacion de las salinas que se reservara el Estado. Todas estas podrian y aún deberian haberse ahorrado si, teniendo en cuenta que la reserva de tales salinas á favor del Estado es meramente provisional y transitoria, se hubiera acordado su total enajenacion.

Varias son tambien las disposiciones dictadas para facilitar el arriendo de esas mismas salinas; pero todas ellas han quedado vacías de resultados, pues han permanecido sin arrendar. Y consiste en que la causa de semejante fenómeno no estribaba precisamente en las pequeñas modificaciones que introducía el Decreto de 19 de Abril de 1877. Es que la duracion del arriendo era corta é incierta; es que el arrendatario no podia esperar que continuara el arriendo



una vez que terminase en breve plazo, pues todo dependía de que se vendiesen ó no las salinas; y estando expuesto á esto todos los días, ¿existe aliciente bastante para dedicar los capitales á ese empleo? Lo que aconsejan los buenos principios, hallándose las cosas en tal estado, es que se procure vender cuanto antes todas las salinas que se encuentren en ese caso, proporcionando así un gran beneficio á los intereses públicos y particulares, y evitando los inconvenientes insuperables de tales arriendos.

Ponemos término á estas consideraciones que pudieran prolongarse indefinidamente, en el concepto de que las que preceden al actual capítulo, las que consignaremos más adelante y las expuestas en éste como en una gran síntesis, dan á conocer los beneficiosos resultados producidos por la ley de desestanco y las disposiciones posteriores en general.



CAPÍTULO V.

Régimen legal de la industria salinera.—Cuál es el más conveniente á la misma.—Forma en que debe plantearse el problema.—Exámen de la cuestion en el órden de los principios, en armonía con el concepto del Estado.—Investigacion dentro de ese mismo órden de la procedencia del reestanco.—Consideracion especial del estanco relativamente á la materia penal.—Conclusion en favor del sistema de libertad.

En el largo y fatigoso camino que acabamos de recorrer hemos pasado en revista los principales hechos que constituyen la historia de la industria salinera de nuestra nacion; hemos visto cómo se ha ido operando lentamente el tránsito de un sistema á otro; y se han hecho patentes, en fin, los resultados producidos por ambos. Empero no basta que hayamos hecho ese estudio en el terreno práctico, siquiera fuere descendiendo á detalles que nunca se podrán calificar de excesivos cuando se trata de adquirir un conocimiento profundo de la materia objeto de nuestras investigaciones; forzoso es al llegar á este punto, llamar en nuestro auxilio las teorías de la ciencia, los principios del derecho y de la economía, examinar á la claridad de la viva luz que estos esparcen los hechos estudiados, discernir la verdad del error, lo justo de lo injusto, lo útil de lo perjudicial, y determinar, por fin, el régimen que en el órden legal, económico y administrativo debe establecerse para una industria que presenta en nuestra patria condiciones de vida y prosperidad cuales difícilmente podrán encontrarse en ninguna otra nacion. El problema es, en verdad, tan importante como difi-



cil, pues á los escollos que ofrece la materia en sí misma considerada cuando se trata de descender á las conclusiones prácticas de los principios y al establecimiento de un sistema científico y viable, se unen los obstáculos que oponen á cada paso los hábitos inveterados, las preocupaciones de los unos, la falta de convicciones arraigadas de los otros, los errores en materias económicas de no escaso número, y sobre todo, la lastimosa situacion de nuestra Hacienda, que sirve de base á los empíricos cálculos y combinaciones de los arbitristas, y parece legitima hasta los más absurdos planes rentísticos fundados en la dura é ineludible ley de la necesidad. Por nuestra parte lucharemos hasta donde nuestras fuerzas alcancen contra el error y la preocupacion; y, procurando inspirarnos siempre sólo en el deseo de descubrir la verdad y promover el bien, manifestaremos lealmente nuestra opinion sobre el árduo problema objeto de este estudio.

Dos sistemas opuestos han compartido alternativamente el reinado del régimen de la industria salinera así en nuestra nacion como fuera de ella: el estanco, el monopolio ejercido por el Estado, sistema que ha dominado en la mayor parte de los siglos y de los pueblos; y la libertad en la explotacion, fabricacion y venta, que data de fecha más ó ménos reciente en las diversas naciones, pero en todas ellas muy próxima á los tiempos actuales.

Si la mayor antigüedad de un sistema constituyese por sí misma una prueba concluyente de su bondad, habríamos de reconocer desde luego que pocos podrian presentarse tan excelentes como el del estanco; ahí están, sin acudir á otra demostracion, las indicaciones históricas que dejamos hechas en los primeros capítulos. Bien sabido es, no obstante,



que los errores cuentan tambien fabulosa antigüedad, y que, si en ellos encontramos ejemplos en todos los órdenes, no es seguramente el económico donde se ofrece el menor número.

Abandonemos, pues, ese camino, que no es el llamado á conducirnos á la verdad; y examinemos la cuestion en el terreno firme de los principios. El estanco de la sal supone que el Estado es el único que puede explotar, fabricar y vender dicho artículo, ó que, por lo ménos, se reserva el monopolio de su tráfico: dentro de este régimen, cualquiera de los enunciados hechos, ejecutado por un particular, constituye una infraccion del derecho, un verdadero delito. Partiendo de esta mocion tan sencilla como evidente, investiguemos si puede conciliarse el monopolio con la naturaleza, funciones y fin del Estado. En el verdadero y puro concepto de este, no es una entidad distinta y de todo punto extraña á los individuos que constituyen un pueblo; antes bien, es imposible concebir el Estado prescindiendo en absoluto de los asociados. El Estado es la colectividad considerada en cuanto realiza el derecho, en cuanto tiende á la consecucion del fin social dentro de la esfera á la que no puede llegar la accion de los individuos; y siendo así, bien se concibe que no puede consistir en la negacion de la actividad y de los fines de los particulares dentro del órden jurídico. La idea del Estado implica el cumplimiento del derecho en la esfera de la sociedad; y sería contradictoria si admitiéramos que para realizarlo debiera ó pudiera negar el que comprende á los individuos. El Estado para realizar el derecho, para cumplir su fin propio, puede y debe aunar y dirigir la accion de los individuos, dentro de su propio derecho, por medio de leyes que determinen la esfera de cada uno en relacion con la de los demas; debe aplicar esas mismas leyes y pro-



mover su cumplimiento, prestando atencion solícita y perenne á la satisfaccion de las necesidades públicas en cuanto no alcanzan las fuerzas individuales; debe, por último, reprimir las infracciones del derecho, obligando á reparar las perturbaciones del órden jurídico. Empero no puede constituir ninguna de sus funciones el fabricar, el vender, ni mucho ménos negando á los asociados esa misma facultad que él está llamado á garantizar. Cuando, pues, el Estado se reserva el monopolio exclusivo de un artículo para obtener una ganancia, como lo hacen los particulares, se extralimita y produce una perturbacion en el derecho de aquellos. Existen, en verdad, ciertas facultades exclusivas que los Estados se reservan en ocasiones y que no pueden incluirse en esa condenacion general de los monopolios; mas no confundamos el fondo y esencia de las instituciones con su forma accidental y externa, no confundamos el ejercicio de una funcion propia del Estado con el monopolio, por más que afecte las exterioridades del mismo. Sea cual fuese nuestra opinion acerca de esas facultades reservadas exclusivamente al Estado, no puede negarse que el monopolio ejercido por el mismo con el fin de proporcionarse ganancias, siquiera las hubiera de destinar á proveer de recursos al Tesoro público, es de todo punto ajeno á la naturaleza, funciones y fin del mismo Estado.

Ahora bien, ¿quién se atreverá no á negar, sino ni aún á poner en tela de juicio que el monopolio de la sal ejercido por el Estado en nuestra nacion, tenia por único y exclusivo fin el obtener una ganancia, por cierto desmedida, que aumentase los ingresos del Erario? Si en otros pueblos, y aún en el nuestro en cierta época, segun dejamos notado, aparece la idea del monopolio como confundida y mezclada



con el propósito de proporcionar á los particulares la abundancia y baratura del artículo, hace ya siglos que el estanco venia inspirado solo en fines meramente rentísticos. ¿No ha venido siendo el enemigo irreconciliable del desestanco, la penuria del Tesoro? ¿Qué otra razon poderosa y de valía se ha alegado para sostener el monopolio, sino la escasez del Erario y la imposibilidad ó dificultad de encontrar recursos que sustituyesen á los que proporcionaba aquel? ¿No se ha dicho y repetido una y mil veces y en todos los tonos, que por más que el deseo de los gobiernos era aliviar al pueblo de esa carga, no lo permitian las necesidades del presupuesto? ¿No ha sido esta la causa de que en época bien reciente se volviera á pensar en el restablecimiento del estanco? ¿No eran, por ventura, bien conocidos y evidentes los beneficios que había reportado á los particulares el desestanco en el período precedente, á pesar de que no fué largo y sí por todo extremo azaroso?

Una última consideracion hará más y más patente lo injusto del régimen del monopolio. Convertido el Estado por virtud de este en traficante, se halla tan lejos de cumplir con su propia mision, con su verdadero fin, que se ve precisado á obrar abiertamente contra él. En esa situacion el interes del Estado consiste, como sucede con los particulares, en que los precios del artículo suban todo lo más posible, puesto que en la misma proporcion aumentarán sus utilidades; y he aquí cómo habrá de colocarse en pugna con el interes de los asociados, que tiene el deber de amparar: este exige, en efecto, que se obtengan las mercancías fácilmente y á precios módicos, al par que el Estado reclamará que estos se sostengan elevados. Así se explica que los precios de la sal hayan ido en constante aumento hasta rayar en los úl-



timos límites de la exageracion, por no emplear otra palabra ménos respetuosa aunque seguramente más exacta. Y ¿habrá quien sostenga que al obrar así el Estado funcionaba dentro de su esfera propia? Y nótese que en este momento prescindimos de las condiciones desfavorables de todo punto que reúne el Estado para ser productor ó comerciante. Por otra parte, debe tenerse en consideracion, para apreciar todas las consecuencias que resultan de este régimen cuando el Estado emprende tan errado camino, que contra los abusos y la mala fé de los particulares son suficientes por un lado la libre concurrencia, y por otro la represion ejercida por el mismo Estado; pero cuando éste se dedica al tráfico y se ve impelido por el mismo móvil que el particular consagrado á la especulacion, los abusos no admiten correctivo, y córrase grave riesgo de quedar á merced de la más completa arbitrariedad.

Juzgamos inútil insistir por más tiempo en la demostracion de una verdad que parécenos lleva en sí el sello de la evidencia; empero la cuestion presenta otro aspecto en el que es forzoso considerarla. Cuanto acabamos de exponer tiene aplicacion á todo Estado, cualesquiera que sean, por otra parte, las condiciones en que se encuentre; mas cuando se trata de una nacion que, como la nuestra, ha abandonado el monopolio, entregando en manos de los particulares la fabricacion y venta de la sal, manifiéstase el problema bajo una nueva fase, y nuevas y poderosas razones vienen á reforzar las ya extremadamente sólidas que condenan el régimen del monopolio.

Abolido este, los gobiernos se han visto asaltados por la tentacion de restablecerle ante la necesidad de obtener la posible nivelacion de los presupuestos. Ahora bien; ¿es



posible ese restablecimiento, es posible ese reestanco si han de quedar incólumes los sanos principios jurídicos? Al meditar sobre la contestacion que deba darse á esta pregunta, ofrécese en primer término el hecho de haber sido desestancada la sal por una ley especial y de un modo perpétuo y absoluto, pues no sólo se declaró libre su fabricacion y tráfico, sino que se mandaron vender las salinas y hasta las fábricas, fincas y efectos destinados exclusivamente al servicio de dicha renta. Por otro lado, sacadas á subasta las salinas y demas efectos, despues de cumplir todos los requisitos y solemnidades necesarias, la disposicion de la ley surtió su efecto, agregándose á lo respetable del precepto legal el vínculo del contrato. Una vez adquirida la propiedad de las salinas, no sin haber satisfecho el precio prefijado, se han introducido en ellas las más notables mejoras, como lo exigía por una parte el estado en que dejó la Hacienda su explotacion y el interes de los particulares adquirentes de hacerlas cada vez más productivas. En esta situacion han trascurrido diez años, poseyendo pacíficamente esas propiedades sus legítimos dueños; se han inscrito en el Registro de la propiedad, precioso depósito y salvaguardia de los derechos, y se han verificado numerosas divisiones y trasmisiones, ya por herencia, ya por contrato, formalizadas con arreglo á los requisitos exigidos por las leyes. Siendo esta, como es, la verdadera situacion en que se encuentran colocadas las cosas por efecto de la abolicion del monopolio, ¿puede establecerse el reestanco de la sal?

No podemos suponer que ninguno de nuestros lectores participe de las ideas que atribuyen al Estado una verdadera omnipotencia, que conceden al poder legislativo, siquiera resida en las Córtes, un poder ilimitado. Sobre la soberanía



del Estado se halla la de los eternos é inmutables principios del derecho que á nadie es lícito violar.

Mas si esos principios han de ser respetados, si entre ellos existe el que sanciona la propiedad individual, no concebimos cómo se puede despojar á los particulares de lo que tan legítimamente adquirieron. El Estado concurrió y concurre á la enagenacion de las salinas y demas efectos como una parte contratante; el contrato que se produjo y produce es verdaderamente bilateral; y no es posible por lo mismo que quede sin efecto por voluntad de una sola parte. Y si á esto se agrega que en muchas ocasiones han venido á adquirirse por terceras personas esos derechos de quien los poseia legítimamente, y hasta hallándose inscritos en el Registro de la propiedad, sube de punto la gravedad é injusticia que envuelve la privacion de bienes asegurados por tantas y tan sólidas garantías. Si tantos y tan legítimos títulos no merecen el respeto de la ley, si el modo de la adquisicion de esta propiedad, si el ejercicio de la misma durante el espacio de tiempo precedente, si los solemnes convenios que se celebraran con el Estado, no son suficientes garantías del derecho que asiste á los dueños de las salinas, y á cuyo tranquilo goce puedan entregarse, preciso es reconocer que no existe propiedad alguna que se halle asegurada y libre de las zozobras y continuos temores consiguientes á tan precaria situacion. Consumada la adquisicion de las salinas por los particulares, reducidas á la condicion de propiedad privada, ningun motivo aceptable y conforme con el derecho se puede alegar en pró de acto alguno que tienda á hacerlas revertir al Estado, distinto de aquellos por los que se trasmite y adquiere semejante propiedad.

Obsérvase, no obstante, que en el proyecto de reestanco



se indica como un procedimiento corriente y legal para lo que se llama la incautación de las salinas, el establecido en la ley de expropiación forzosa por causa de utilidad pública; y es, por tanto, indispensable que estudiemos la cuestión en este nuevo orden de ideas. Para que la expropiación tenga lugar según las disposiciones de esa ley, conforme á la fundamental del Estado, es de todo punto necesario que concurren dos circunstancias imprescindibles: la *utilidad pública* y la *prévia* indemnización. Veamos si ambas condiciones tienen aplicación al reestanco.

Las obras de utilidad pública son las que tienen por objeto proporcionar al Estado en general, á una ó más provincias, ó á uno ó más pueblos, cualesquiera usos ó disfrutes de beneficio comun. ¿Es, por ventura, algo semejante á esto lo que constituye la utilidad pública en el reestanco? No seguramente; la utilidad consistiría en todo caso en los mayores ingresos que podría proporcionar al Tesoro, con lo que le sería posible atender más perfectamente á las necesidades y servicios públicos. Hasta tal punto es así, que aunque se pretendiese dar á la ley toda la extensión y elasticidad posibles, aunque se dictase una nueva que expresamente comprendiera el reestanco, la utilidad pública de este no podría hacerse consistir en nada distinto de lo que acabamos de indicar. Mas en este caso ¡ay de la propiedad privada! Todas las fincas cuyos rendimientos fueran pingües y pudieran facilitar cuantiosos ingresos al Erario, se verían amenazadas de semejante expropiación; las minas que ofreciesen grandes beneficios, los ferro-carriles que produjeran grandes sumas, las fincas y propiedades adquiridas del Estado y aún las que tuvieran distinto origen, veríanse pasar presto de manos de sus dueños á las de éste.



Y ¿sería más hacedero cumplir con el requisito de la prévia indemnización? Una vez que las salinas pasaron á propiedad de los particulares, el interes privado, siempre más activo, más eficaz y poderoso que el público para producir, introdujo importantísimas mejoras de que se hallaban harto menesterosas, y que aumentó su valor de un modo considerable. Resulta, pues, en su virtud, que el Estado debería abonar préviamente el valor de las salinas en el momento de verificarse la expropiación, tomando en cuenta no sólo el que tenían cuando se enajenaron, sino tambien el que alcanzaran posteriormente por efecto de dichas mejoras. Justo habría de ser, del mismo modo, que se indemnizase á los expropiados de los perjuicios que les causara la privación de su propiedad, pues no es ménos sagrado el derecho que asiste al propietario con relacion al Estado, que respecto á los demas particulares. Y ¿habrá quien imagine siquiera que ese mismo Estado cuyo Tesoro se halla exhausto, que recurre al reestanco para llenar el vacío que en sus arcas dejara la abolición del monopolio, pudiera satisfacer y satisfacer préviamente las respetables sumas que los capítulos indicados representan? Bien se comprendió por los autores del proyecto aludido que era de todo punto imposible el pago inmediato y prévio de tan considerables cantidades, cuando fijaban nada ménos que seis plazos de un año. Mas ¿es posible que admitamos en buenos principios que el Estado haya de dar el ejemplo de faltar á lo que prescribe la ley fundamental del mismo, y que ejecute lo que no se tolera á los particulares, ni aún tratándose de la finca más despreciable?

Y no se alegue que el bien público debe anteponerse á todo género de consideraciones fundadas en el interes priva-



do, ni se pretenda justificar tal procedimiento por el *salus populi*..... pues el verdadero interes, la verdadera salvacion de la sociedades consiste ante todo en el cumplimiento de los soberanos é inmutables principios del derecho, en la más perfecta realizacion posible de la justicia, sin lo que ni los pueblos, ni los individuos pueden alcanzar sus fines. El grande y supremo deber del Estado en la materia que nos ocupa, consiste en proteger y prestar todo el apoyo posible á la propiedad individual, combatida hoy como nunca, lejos de atacarla ó debilitarla con disposiciones que pudieran presentar ni áun remota conexion con procedimientos y doctrinas que tengan ni la más ligera sombra de socialistas.

De otra suerte ¿cómo se pretenderá que nadie emplee sus capitales en la explotacion salinera ni en las demas industrias, si pesa constantemente sobre ellos la amenaza de una expropiacion que significa para los mismos pérdidas considerables, ya que no una completa ruina? ¿No se comprende cuánto daño causa al desarrollo de la industria, sólo el temor de que esas trasformaciones violentas y forzosas puedan llegar á verificarse? ¿O es que se desconoce la perturbacion, la intranquilidad y hasta las verdaderas pérdidas que produce el simple anuncio de semejantes reformas?

Cabe aún considerar el régimen del monopolio bajo un nuevo aspecto dentro del orden de ideas en que le estamos estudiando. Cuando el Estado se reserva exclusivamente la explotacion y tráfico de la sal, prodúcese una nueva materia de delito que es de todo punto imposible allí donde existe el régimen de libertad. Ahora bien, ¿procede que el Estado constituya como delito un acto que intrínsecamente considerado no es malo, y cuya bondad ó malicia concreta depende por completo de la consideracion que aquel le dé? No



pretendemos coartar en manera alguna la accion del Estado que tiende á reprimir las infracciones del derecho, á reparar el orden jurídico perturbado, sin lo que es imposible la existencia de las sociedades, cuanto más su progreso y la realizacion de su fin. Mas supuesto que se trata de actos que no constituyen por sí mismos perturbacion del orden jurídico, sino dentro de cierto régimen que el Estado puede ó no establecer, debe determinarse si éste se halla en la necesidad jurídica de establecer y conservar el monopolio, aun cuando esto equivalga á extender la esfera de la accion penal. Desde luego se ofrece á nuestra consideracion que el Estado no es árbitro para convertir en delito cualquier acto, pues si en el terreno práctico se considera tal el penado por la ley, esta no puede penar sino el que constituya una pérturbacion del orden jurídico. En tal supuesto, tratándose de un régimen que corresponde establecer al Estado, y siendo indudable que el del monopolio es inaceptable y constituye á aquel en una situacion contradictoria, ó por lo ménos distinta, respecto á la naturaleza, funciones y fin del mismo, no se concibe que pueda extender la materia penal á los actos negaciones de ese monopolio. En asuntos de naturaleza esencialmente económica, el Estado debe inspirarse en los principios que la ciencia consagra como verdaderos y hasta fundamentales: no es posible que, obrando de otro modo, cumpla fiel y debidamente su mision. Pues bien, si el monopolio constituye, segun creemos haber probado, un régimen contrario á los principios inmutables del derecho, que rige así á las sociedades como á los individuos, no puede calificar el Estado sus infracciones como delitos ni por consiguiente penarlas.

De otra suerte habrá de acontecer lo que sucede cuando



quiera que se infringe el derecho. El poder del Estado pierde ante los súbditos el prestigio y la influencia moral, sin los que es imposible el gobierno; la conciencia de los ciudadanos se subleva ante el espectáculo que ofrece la penalidad establecida contra actos intrínsecamente buenos y conformes con las verdades más inconcusas en el orden científico; dúdase, ya que no se niegue, sobre la justicia de una legislación que puebla las cárceles de personas que ejecutaran esos mismos actos; acostúmbrase á los ciudadanos á burlar las leyes, cuya infraccion parece cosa baladí y liviana y predispone á la de otras completamente justas; y sufre grandísimo detrimento la moralidad pública, sin cuya firme y sólida base en vano se pretenderá la realizacion del fin jurídico.

Resulta de las consideraciones que preceden, bien que someramente expuestas, que el régimen del monopolio ejercido por el Estado, es insostenible dentro de los sanos principios del derecho, y no queda, por tanto, otro aceptable que el de la libertad. Y no se crea por esto que negamos al Estado la intervencion que le corresponde en la industria salinera, como en todas las demas, al afirmar que el monopolio constituye una extralimitacion de su esfera de accion. Mucho é importante réstale que hacer en este punto sin rebasar los límites que señalan su propia competencia. Dictar leyes justas y perfectamente meditadas que regulen el ejercicio de esa misma industria abandonada á los particulares; prestarle los medios y condiciones de vida y pujanza á cuya consecucion no llega la iniciativa individual; remover los obstáculos que pueden oponerse al más amplio desarrollo de esa riqueza nacional, ¿no es, por ventura, asunto de la mayor importancia y que reclama toda la actividad y



fuerzas de que dispone el Estado? Procurar el progreso de la industria, y dentro de él los recursos que necesita para levantar las cargas públicas, ¿no es empresa harto más noble y propia del Estado, que convertirse en fabricante ó mercader, aún á costa de dejar mal parados los derechos de los particulares?



CAPÍTULO VI.

Régimen económico de la industria salinera.—Estudio del estanco con relacion á los principios de la concurrencia y del interes personal.—Comprobacion de nuestra doctrina por el testimonio de algunos escritores.—Exposicion y exámen de los funestos resultados que en el órden económico produce el estanco.

En el capítulo precedente hemos probado que el monopolio ejercido por el Estado, ya en la fabricacion, ya en la venta, es contrario á la naturaleza y funciones de éste, y, por tanto, inaceptable en el órden jurídico; examinémosle ahora en el terreno económico. No pretendemos hacer un estudio detenido de los monopolios considerados en este terreno, pues nos llevaria fuera de los límites de nuestro asunto y excede de los que podria alcanzar en el presente capítulo; y nos limitaremos únicamente á consignar las indicaciones que puedan tener aplicacion especial al artículo referido, procurando confirmar despues nuestros asertos con los antecedentes que dejamos expuestos en los capítulos anteriores, con los datos que nos suministra, ya la historia del monopolio, ya la de la industria libre en nuestra patria, y, por último, con los que ofrece el régimen de la sal en las demas naciones, las que, abolido el monopolio en época antigua relativamente á la nuestra, pueden suministrar más extensa base á nuestros razonamientos.

El estanco se opone desde luego directamente á la realizacion de dos grandes y fecundos principios económicos: la concurrencia ó competencia y el interes personal. Cuando



el Estado se reserva la fabricacion ó venta exclusivas de un artículo, cuando esos actos ejercidos por los particulares constituyen hasta un hecho punible, no puede temer el influjo de la concurrencia y es árbitro para establecer los precios que tuviese á bien, áun los más exagerados, seguro de que los consumidores habrán de pagarlos si no han de privarse absolutamente de aquel. Sólo así puede explicarse que el precio de la sal haya ido subiendo de un modo tan considerable que llegara á cincuenta y dos reales la fanega en la última época del estanco, precio cuya exageracion se halla comprobada por el que ha alcanzado despues del desestanco, segun los documentos oficiales ya citados, y por el que tenia en la misma época en los demas países⁽¹⁾. El resultado inmediato de esa excesiva elevacion de precios es la limitacion del consumo, pues sabido es que éste se halla en razon inversa de aquel. Los consumidores se ven precisados á adquirir la cantidad mínima del artículo monopolizado que toleren sus necesidades; y mientras el Tesoro ve llenarse sus arcas por este lado, tiene que presenciar cómo se vacian por otro, acaso en mayores y alarmantes proporciones. Porque, en efecto, si el precio del artículo hace difícil y costosa su adquisicion, si el productor no puede atender debidamente á sus necesidades, si se ve obligado á cercenar los gastos que aumentan el gasto de produccion, ¿cómo podrá evitarse la decadencia y la ruina de la industria, y con ella el agotamiento de las fuentes de la riqueza privada, que ha de ser la base contributiva del Estado? Y si esto sucede con todo artículo estancado, ¿qué deberá acontecer con el que consti-

(1) El pernicioso influjo que en el excesivo precio de la sal ejercia, por otra parte, el coste de fabricacion, puede comprobarse por los datos que aparecen en el *Afédice núm. VIII*.



tuye uno de primera necesidad, como la sal? Y no se diga que el aumento ó disminucion en el consumo de esta es de escasa importancia, y por tanto que el precio más ó ménos elevado puede ejercer escaso influjo en la industria, pues debemos apresurarnos á hacer notar, como expondremos más adelante, que los que así opinan no han tenido en cuenta sino el uso que de ella se hace para la alimentacion, prescindiendo de otras mil importantísimas y variadas aplicaciones actuales y posibles.

No ha podido ocultarse á los gobiernos de los países en que ha existido el monopolio, incluso el nuestro, la evidente verdad que dejamos consignada; y antes bien ella sirvió de fundamento á las casi innumerables disposiciones que han regulado los precios de gracia. No puede ménos de comprenderse que la exageracion de los precios corrientes del artículo habia de ser grandemente perjudicial para el desarrollo de ciertas industrias que hacen mayor ó menor consumo de él; y en su virtud se establecieron considerables rebajas en el de la sal que empleasen determinados industriales. Mas por poco que se reflexione es imposible pueda ocultarse que semejantes medidas distan mucho de remediar el mal que el estanco produce. Esa gracia en el precio de la sal, no puede extenderse á todas las industrias ni aún á una gran parte, pues de lo contrario desaparecerian las ventajas que produce el estanco para el Tesoro y que han formado el principal apoyo de ese sistema. Es, pues, preciso hacer una clasificacion de las industrias para determinar las que deben ser favorecidas con la rebaja de precios. Y ¿cómo podrá justificarse el procedimiento que para ello adopte el Estado? ¿cómo se podrá librar del gravísimo peligro en que se halla de cometer los más perniciosos errores y de incurrir en las más



injustas desigualdades? Para obrar con el acierto y justicia debidos, al practicar semejante clasificacion sería necesario nada ménos que conocer préviamente la influencia que el consumo de la sal puede ejercer en cada industria, y el desarrollo que respectivamente fueran susceptibles de alcanzar y alcanzarán efectivamente en lo futuro. De otra suerte, si se fijase un mismo precio de gracia para todas, se faltaria á la justicia distributiva; y estableciendo uno distinto para cada una, debería temerse con harto fundamento faltar tambien á ella. No perdamos tampoco de vista una observacion que juzgamos es en este punto de la mayor oportunidad é importancia. El Estado podrá conocer todas las industrias existentes hasta la fecha que hacen uso de la sal; llegará si se quiere, en una hipótesis que hemos visto no es posible admitir, hasta apreciar exactamente la proporcion en que debe favorecer á cada una de ellas; pero lo que nunca podrá conocer ni determinar, será las industrias que en lo sucesivo podrian establecerse y se establecerian. ¿No hemos visto surgir industrias nuevas fundadas en diversas aplicaciones de la sal, desconocidas por completo anteriormente? ¿Por qué no habrán de nacer otras en adelante? Mas para que esto llegue á suceder, para que se fomenten los medios que den por resultado esas nuevas y provechosas aplicaciones, es indispensable facilitar la adquisicion de la sal, y para conseguirlo es preciso bajar cuanto sea posible los precios; y precisamente todo lo contrario acontece en el sistema del monopolio. Empero, fijémonos, por último, en que todos los precios de gracia, aún los más ventajosos, establecidos dentro del estanco, no llegan nunca á ser tan bajos como los corrientes en el régimen de libertad, y no podremos ménos de convenir en que la verdadera gracia que



exigen el bien y la prosperidad de la industria, la única manera de evitar desigualdades injustificadas, la arbitrariedad y la injusticia, es la desaparición del monopolio.

El principio del interés personal no es más favorable al estanco que el de la concurrencia. El Estado tiene interés indudablemente en que el monopolio produzca las mayores utilidades que fuere posible, máxime cuando esta ha sido casi la única causa que hizo nacer y sostuvo el estanco. Pero ese interés remoto y colectivo dista cuanto es posible del personal, ya por su naturaleza, ya por sus fines, ya por los medios de que dispone para traducirse en hechos. Creeríamos ofender á nuestros lectores y rebasar los límites de esta Memoria, si nos propusiéramos demostrar una verdad evidente dentro de la ciencia económica, cual es que el interés personal, si no constituye el móvil más puro de los que pueden impulsar al hombre á producir, es el que incita á ello de un modo más universal y constante. Si el Estado tiene el interés que inspira el deseo de allegar recursos con que atender á la satisfacción de las necesidades públicas, el particular se ve estimulado por las inmediatas y apremiantes personales que no admiten aplazamiento ni trégua. El Estado, como quiera que se halla constituido por una colectividad, necesita para ejercer sus actos y funciones, personas individuales que los realicen en nombre y representación de aquel. Mas teniendo estas intereses propios y personales que pueden encontrarse á las veces en oposición más ó ménos abierta con los públicos, y no habiendo de obtener una utilidad proporcionada al mayor trabajo que emplea, á los mayores desvelos que se imponga, se comprende perfectamente los males que de esta causa se han de originar. Por buenas que sean las condiciones que adornen á los empleados de que el



Estado se valga para ejercer los numerosos cargos que exigen la fabricacion y venta bajo el régimen del monopolio, nunca ha sido ni será posible que se les exija hayan de prestar la misma diligencia, ni hacer los mismos sacrificios que cuando se trata de asuntos que les interesan personalmente y en los que, á trueque de proporcionarse para sí y para su familia las mayores utilidades posibles, se hallan dispuestos á sacrificar sus legítimos placeres, su reposo, su salud y hasta su misma vida. ¿No es cierto efectivamente que esto último sucede muchas veces con los empresarios? Y ¿tendrá derecho el Estado á exigir semejantes sacrificios, ni otros que se le equiparan, á todos y cada uno de los que le prestan sus servicios? Pero no es esto sólo; tratándose de hombres hay que tener en cuenta sus pasiones y sus vicios; y en este terreno ¿habrá alguno á quien se oculte cuánto se presta el régimen del estanco al desarrollo de todas las pasiones y vicios, que pueden ser alimentados á costa de los intereses públicos?

Cuán perfecta aplicacion tengan las consideraciones últimamente expuestas, lo demostrará, entre otros, el testimonio de un antiguo y competente escritor, acérrimo partidario del estanco, que, refiriéndose á este punto, dice: "El beneficio y cobro de la renta de las salinas consiste únicamente en buenos Ministros; y aunque todas las demas rentas los necesitan, esta en particular, porque consta de cosas cuasi imaginarias, pues no hay registros ni aforos para poderse gobernar, como en las demas rentas, y en esta tambien es prohibido, como en las demas, hacer encabezamientos involuntarios y por fuerza; y desde el primer lance, que es la fábrica, se empieza con la dificultad de una fábrica en el campo, que es preciso fiarla de otras personas el Admi-



nistrador general; y aunque el Fiel sea cual debe ser, hay el peligro de hurtar la sal fabricada; y cada día se ven desgracias con pérdida de la vida de muchos; y no es menor el peligro de fraude entre alfolieros y tolderos, que pueden introducir sal en sus puestos en perjuicio de la renta" ⁽¹⁾.

La falta del poderoso aguijón del interés personal ha causado y no puede menos de causar daños de otra índole. Cuando los particulares se encargan de un género cualquiera de fabricación ó tráfico, procuran á todo trance utilizar los procedimientos que se consideran más adecuados y valerse de las personas más aptas que fuese posible para la dirección de sus empresas. No acontece así cuando los gobiernos se convierten en empresarios, pues no existiendo el móvil del interés propio ni el estímulo de la ganancia, no siempre se consigue el resultado que debe corresponder naturalmente á una inmejorable dirección. Por un contrasentido difícil de explicar, prescindiendo de lo que llevamos expuesto en el curso de nuestro estudio, á pesar de tener un personal facultativo entendidísimo en el cuerpo de Ingenieros de Minas, que hubiera planteado los procedimientos científicos más adecuados para establecer una explotación óptima, dominó única y constantemente la rutina y el empirismo, y los encargados de dirigir la fabricación carecían con frecuencia hasta de los conocimientos más indispensables. Véase en comprobación de este aserto lo que dice un entendido escritor al encarecer la necesidad de un Manual consultor que contuviera las nociones más indispensables para los empleados de las fábricas: "Son ya pocos los que no lo desean, porque ven que nada hay estacionario, y mé-

⁽¹⁾ Ripia.—*Práctica de la administración y cobranza de las rentas reales y visita de los Ministros que se ocupan en ellas.*



nos son aún los que quieren representar el triste papel de algunos administradores que por falta de conocimientos se entregan á la direccion de sus subalternos, honrados y celosos los más, pero que ocultas á su inteligencia las causas de los efectos que ven cada día, no son más que fieles imitadores de las prácticas rutinarias que de sus padres aprendieron, y que continúan por punto general con tanto respeto, que no parece sino que la menor alteracion los castigaria como al Escita con la pena de muerte, que en la antigüedad se imponia al que propusiera la menor innovacion en las costumbres." Y poco despues añade: "Los que desconozcan la triste historia de algunos nombramientos, acaso crean exagerados ó demasiado subidos los colores de este cuadro; pero tan lejos están de serlo, que en más de una ocasion suelen avivarse por circunstancias especiales. Tales son las en que ni jefe ni subalternos conocen las operaciones, y el jornalero suele guiar á tales administradores comparables solo á aquellos pobres enfermos que en la antigüedad se exponian en las plazas públicas, por si algun extranjero conocia y queria prodigarles el remedio para su mal ⁽¹⁾." Y si esto acontecia en la segunda mitad del presente siglo, ¿qué debemos pensar respecto á los anteriores ⁽²⁾.

No concluyen aquí los males gravísimos ocasionados por el estanco. Una de las más absurdas consecuencias de ese régimen, era la disposicion que mandaba inutilizar los ma-

(1) Ibañez Rubio.—*Sobre los conocimientos especiales que necesita el personal de las administraciones de las fábricas de sal para dirigir acertadamente sus operaciones, y proyecto para generalizarlo.*

(2) Cuánto influian ademas el crecido número de individuos que constituian el resguardo y los sueldos y gratificaciones consiguientes en el aumento del precio de la sal, se comprueba por los *Apéndices IX y X.*



nantiales, espumeros y demas fuentes de produccion de las que se pudieran aprovechar los particulares con detrimento de la renta. Tal era ni más ni ménos una de las reglas que para la buena administracion de la misma daba un conocido escritor ya citado. "Para el remedio, decia, de que no se fabrique sal sin órden, y que no se gaste agua salada ni se valgan de la sal que se cuaja en arroyos, fuentes, espumeros y lagunas, se cegarán las fuentes y espumeros; y para las lagunas grandes, que no se pueden cegar, y que casi todos los estíos se cuajan, se hollarán con carretas y ganados mayores, tratándolas de confundir, de suerte que no se pueda separar de la tierra; y para esto es necesario disputar gente que lo haga y guarde y ronde estos sitios, que la experiencia tiene mostrado lo que en cada parte se debe prevenir y el tiempo que han de asistir y la gente que se podrá ocupar ⁽¹⁾." ¡De suerte que en lugar de esforzarse en producir más y más cada dia, se ponía el mayor empeño en inutilizar lo que sin esfuerzo ni trabajo alguno se hubiera podido obtener; y se consideraba como un recto y útil empleo de los capitales que debieran hallarse dedicados á aumentar la produccion, consagrarlos á destruir los productos que con mano pródiga ofrecia la naturaleza! Y sin embargo, por absurda que parezca, era una medida que reclamaba el sistema del monopolio, y que encontramos puesta en práctica hasta hace poco, y que acaso se continuó cuando ya se habia sancionado el desestanco ⁽²⁾. ¡Ah, si en lugar de estas y

⁽¹⁾ Ripia.—Obra cit.

⁽²⁾ Habiendo aparecido en un periódico político en 1869, la noticia de que se habia procedido á inutilizar los manantiales, pozos, espumeros, salobres y demas de las fábricas suprimidas de Bejano y Navazo, la excelente *Revista minera*, que de tanto nos sirve en estas investigaciones, pu-



otras absurdas disposiciones que originaba el estanco hubiese surgido en algun entendimiento la feliz idea de romper esas trabas, y poner en circulacion la colosal riqueza salinera de nuestro país, qué inmenso raudal de beneficios hubiera fecundado todo él!

Pero en vano se pretendia combatir el contrabando por tan irracionales y absurdos medios. Si el incentivo de una considerable ganancia con que convida el sistema del monopolio, sostiene y sostendrá siempre el contrabando, las condiciones especiales en que se encuentra la explotacion de la sal en nuestro suelo, ha de hacer sea tan imposible extirpar ese tráfico vedado cuanto es fácil ejercerlo. Efectivamente en la region salinera de España pueden obtener los individuos la sal que necesitan con escaso trabajo, y aún en ciertas partes sin ninguno, y es por demas cruel y durísimo el obligarles á proveerse, mediante muy crecido precio, de un artículo que les ofrece el suelo gratuitamente; y, por otro lado, es en extremo difícil custodiar la explotacion y comercio de una sustancia que se encuentra á cada paso pródigamente diseminada en gran número de provincias de nuestra nacion. He aquí cómo hace más de un siglo, exponia un escritor aludido poco há, ese inconveniente gravísimo del estanco: "Y tambien es sumamente difícil que se gaste la sal de S. M., obligando á que la compren, habiendo en muchas partes donde comprarla más barata, y aún de balde, valiéndose de aguas saladas ó de espumas y costrones de tantas como hay en fuentes, arroyos y lagunas que no es posible fabricarlos ni guardarlos bien, y más siendo estos sitios bas-

blicó un razonado y bien escrito artículo del Sr. Maffei, titulado *La sal*, combatiendo ese absurdo procedimiento y consignando de paso atinadas observaciones sobre el sistema de desestanco que se acababa de establecer.



tantes á sustentar de sal toda Andalucía, en cuya region se experimentan más estos inconvenientes. Además de esto se ha de prevenir que cada persona compre cuanta há menester, siendo este gasto imperceptible, y que cuanto en esto se procurase ajustar, ha de ser por conjeturas; y si este remedio tan dudoso no se intentara, pudieran satisfacer con comprar del Toldo una poca de sal, y la demás proveerla por los medios que van referidos. Y no es la menor dificultad el haber, demás de comprar la sal que una persona pueda comer, ajustar la que pueda corresponder al tiempo que hubiere comido del año cuando se hace la visita, no siendo el gasto de cada día igual respecto de las matanzas de ganado de cerda y otras salazones, que se hacen entre año, que dependen de los accidentes del tiempo, muriéndose mucho ganado, ó dejando de morir; y por último, consiste el gasto en poca cantidad, que si no lo mostrara la experiencia, lo calificaria el proverbio, que es menester comer una fanega de sal para conocer un hombre, con que significaba el mucho tiempo que ha de pasar para gastarla” ⁽¹⁾.

De aquí las numerosas disposiciones dictadas en todas épocas para reprimir el contrabando de la sal y regularizar la administracion de la misma, y las mil otras que se dirigian á reglamentar el resguardo especial, sin que ni unas ni otras se aproximaran á la consecucion del fin apetecido ⁽²⁾.

Error gravísimo y de trascendental y pernicioso influjo para nuestra industria fué tambien el que se cometió durante la época del estanco, concediendo considerable rebaja

⁽¹⁾ Ripia.—Obra cit.

⁽²⁾ En comprobacion de este aserto basta recordar las disposiciones que dejamos citadas, la obra de La Ripia y la de Canals, *Manual de Hacienda ó coleccion de reglas por rentas y ramos*.



en las sales que se exportaban para el extranjero, lo que dió lugar á que las industrias de otros países que empleaban la sal, hicieran una competencia ruinosa para las nacionales. La comparacion de los precios á que se vendia la sal para el consumo interior y para la exportacion, lo comprueba por sí sola de un modo incontestable. Oigamos, no obstante, como una confirmacion, lo que sobre este punto se dice por un concienzudo escritor contemporáneo⁽¹⁾: "Hace muy pocos años todavía que el Gobierno de España sostenia el error económico de tener estancada la sal, sin excluir del impuesto en ese monopolio á las fábricas de salazon de pescado; en tanto que multitud de buques extranjeros exportaban nuestra sal á un bajo precio, prohibido para los españoles; la misma sal con que preparan el pescado que despues venden en nuestros mercados. Siendo enorme entonces la diferencia en el precio de la sal para los extranjeros y los españoles, en contra de estos últimos, esta sola diferencia era bastante poderosa para contener el desarrollo de la industria de pescado salado en España, y sobre todo para imposibilitar la competencia de sus productos en mercados extranjeros." Lejos de nosotros el afirmar que, considerada la cuestion en abstracto, el mal que acabamos de exponer sea de tal modo inherente al monopolio, que fuera absolutamente imposible ni áun concebir éste separado de aquel; pero sí aseguraremos que en nuestro sistema del estanco ha existido constantemente, y que, dadas todas las condiciones, es en extremo difícil libertarse de él, en un sistema que necesita favorecer el consumo por medios artificiales.

(1) Silva Ferro.—*Estudios económicos, industriales y científicos respecto á la explotacion y riqueza de algunas pesquerías, y consumo de sus productos en los grandes mercados*. Lóndres, 1875.



CAPÍTULO VII.

Continuacion del estudio sobre el régimen económico de la industria salinera.—Determinacion del régimen que se debiera establecer supuestos los anteriores precedentes.—Diferentes tendencias que se notan en el derecho positivo y en los escritores de distintos países.—Sistema de absoluta libertad.—Sistema que defiende la posibilidad, procedencia y justicia de un aumento indefinido del impuesto: exámen de la teoría de la desaparicion del impuesto por la division del mismo.—Nuestra opinion sobre el régimen que debiera establecerse.

Abolido el estanco y declarados libres la exportacion y comercio de la sal, ofrécese nuevos problemas dentro del órden económico, problemas que es necesario resolver. La industria salinera ¿debe contribuir á levantar las cargas públicas al igual de las demas industrias, una vez que se ha extendido á la misma el régimen comun de estas? Y supuesto que deba soportar la carga del impuesto, ¿cuáles han de ser las condiciones con que cumpla éste para que no resulte perjudicado interes alguno? En el estado actual de la industria salinera, no sólo en España, sino tambien en las demas naciones, estos son los grandes problemas que se discuten, que tienen divididos á los tratadistas y á los gobiernos, y que envuelven la más vital importancia, como quiera que de la solucion que reciban depende en gran parte el progreso y desarrollo de aquella industria, el bienestar de numerosos individuos y familias y la próspera situacion financiera de los pueblos. Si la cuestion relativa al estanco no ha perdido aún por desgracia su interes, si es aún forzoso insistir



en ella, á fin de que de una vez para siempre se comprenda lo absurdo é inconveniente de semejante sistema y no se haga en lo sucesivo ni la más leve tentativa para establecerlo, lo que debe llamar poderosamente nuestra atencion es la forma en que ha de reglamentarse la industria salinera en su natural estado de libertad.

Dos tendencias opuestas descubre en esta parte el estudio de las opiniones de los escritores y de las legislaciones de los diferentes pueblos. Algunos, así de aquellos como de estas, propenden á aligerar gradualmente el impuesto, y áun á abolirlo por completo, en tanto que otros se muestran partidarios de un aumento indefinido. Detengámonos algunos momentos en el exámen de tan importante cuestion.

La primera de las dos tendencias indicadas puede y debe simbolizarse en la legislacion inglesa. Inglaterra es, en efecto, la nacion que puede gloriarse de haber sido la que se anticipó á todas las demas en este camino, habiendo abolido el estanco en 1825, y continuado rigiéndose desde entonces y sin interrupcion por el sistema de libertad. Bélgica adoptó el mismo sistema, imponiendo sólo un derecho de aduanas á la importada del extranjero. Francia ofrece en esta materia suma variedad, habiendo pasado por todas las fases posibles, sin haber llegado de un modo definitivo tan adelante como Inglaterra. El derecho que percibia el Estado por la sal, y que se denominaba gabela, fué establecido por una ordenanza de Felipe V el Largo, promulgada en 1317, segun la cual debian percibirse ocho sueldos por cada moyo de sal. Los Estados reunidos en 1318, reclamaron contra este derecho, y el Rey hubo de declarar que era puramente temporal. Mas lejos de suceder así, fué aumentando de un modo progresivo y considerable bajo los reinados de Luis XI,



Francisco I y Luis XIII, hasta que en 1700 fué abolido por completo. No duró mucho este estado de cosas, porque despues de haber logrado salir victorioso de las reformas del Directorio, que pensaba restablecerlos, merced á la firmeza con que se opuso á ello el Consejo de los Ancianos, no pudo sobrevivir á las introducidas en 1806, en cuyo año se estableció de nuevo por la ley de 11 de Junio. De todas suertes, habíanse ya abolido las diferencias de condicion que tenian dividida á Francia en cinco clases de territorios, denominados países de las grandes gabelas, países de las pequeñas gabelas, países de las salinas, provincias francas y países redimidos, siendo tan desigual la consideracion de cada uno, que las provincias de las grandes gabelas pagaban 115 francos, y las provincias francas no satisfacian impuesto alguno ⁽¹⁾. El derecho, áun así modificado, suscitó tan tenaz oposicion, que por la ley de 17 de Junio de 1840 hubo de abolirse completamente el monopolio. No se consideró suficiente esta importantísima reforma; y las quejas comenzaron á dirigirse contra el impuesto. El gobierno provisional consideró procedente acceder á ellas; y en 15 de Abril de 1848, se acordó abolir completamente todo impuesto desde 1.º de Enero de 1849. Muy pronto hubo de conocerse que el Estado no se podia privar en absoluto del considerable ingreso que esa contribucion producía; y en 28 de Diciembre del mismo año se restableció el impuesto suprimido, aunque, en satisfaccion á las justas peticiones hechas, se rebajó á diez francos por cada cien kilógramos. Por un decreto de 17 de Marzo de 1852, se suprimieron las franquicias que concediera á la industria el de 1809, y el impuesto se fijó tambien en diez francos los cien kilógramos. En el presupuesto ex-

(1) Girardin.—*L'impôt*.



traordinario de 1863, se trató de elevar el impuesto al doble, ó sean 20 céntimos por kilogramo, teniendo en cuenta que era necesario aumentar los ingresos, y que el mencionado recargo no podia constituir una carga muy pesada para los pueblos; pues, por más que se consignaba el considerable aumento para el Tesoro que no debía bajar de treinta y tres millones de francos, y que ese recargo era sólo temporal, el proyecto encontró tan enérgica oposicion en la Cámara, que el Gobierno se vió precisado á ceder ⁽¹⁾.

Las razones que se alegaban y aún alegan para probar la inconveniencia y la verdadera injusticia de tal impuesto, pertenecen á diferentes órdenes; y no es seguramente tarea fácil combatirlas victoriosamente en el terreno de los principios de la ciencia. Veamos cómo piensan los principales partidarios de esta opinion.

El impuesto se ha acusado en primer término de injusto, principalmente por la desigualdad con que pesa sobre los ciudadanos. "El impuesto de la sal, decia M. Lemercier en el Consejo de los Ancianos, es anticonstitucional, porque no está repartido entre los contribuyentes segun sus facultades. El indigente consume más sal que el rico, porque, es necesario decirlo para vergüenza de las costumbres, el indigente tiene siempre más hijos que el rico, y siendo su alimento más ordinario, tiene necesidad de mayor condimento." De donde deduce un escritor contemporáneo há poco aludido ⁽²⁾, que "el impuesto de la sal es contra el consumo, y que lejos de ser *proporcional* relativamente á la fortuna, es *progresivo* relativamente á la *miseria*."

(1) Cohen.—*Etude sur les impôts et sur les budgets des principaux Etats d'Europe*.

(2) Girardin.—Obra cit.



Esta misma es la opinion del notable publicista M. Passy. "Cuanto más indispensable, dice, para la satisfaccion de las necesidades humanas, son los productos cuyo precio aumenta el impuesto, ménos se proporciona el impuesto que los afecta á las facultades de aquellos que lo pagan, y más priva á las familias pobres de los escasos recursos con que cuentan..... Tomemos, por ejemplo, el impuesto de la sal; este es una capitacion ó peor que una capitacion. Nada más fácil de demostrar. La sal es una de las cosas sin las que nadie se puede pasar, y de que todos usan en una cantidad igual. ¿Qué resulta de aquí? Que cada uno paga al Estado la misma suma con ocasion de la sal que necesita..... Hay más aún; en todas partes son los pobres los que por la misma naturaleza de su alimentacion se ven obligados á comprar más sal; y entre los pobres los más necesitados, los que soportan la carga de mayor número de hijos, son los que consumen más. Así el impuesto, de clase á clase, y, dentro de cada clase, de persona á persona, pesa en razon inversa de sus facultades ó de sus recursos. Un impuesto personal, que produjera otro tanto al Estado, perjudicaria ménos los intereses de las masas y sería menos contrario á las reglas de la justicia y de la proporcionalidad. Entre los impuestos calificados de indirectos, los únicos que pueden producir ámpliamente, son los que pesan sobre los productos de primera y universal necesidad; y he aquí por qué las sustancias alimenticias han sido gravadas con tan lamentable preferencia. Así se ha hecho más cara la vida de las clases obreras, y sobre ellas ha recaído el principal peso de la carga."

Proudhon, que participa de las mismas ideas, añade las siguientes palabras: "En nuestros dias el fisco ó los tribunales correccionales ó de policía que le representan, son



mucho más benignos con los contrabandistas y defraudadores; la humanidad ha ganado, la moralidad ha perdido. El régimen de transacciones amistosas entre la regalía y el defraudador sorprendido, ¿no es la confesion formal, por parte del fisco, de que el impuesto exigido, percibido por él, es inícuo en su reparticion, inícuo en su cuota, y de que su única causa es la necesidad del presupuesto, la razon de Estado?" (1)

"En vano direis, exclamaba M. de Lamartine en las Cámaras de diputados el año 1847, que vuestro impuesto produce millones al Tesoro: si gravita con un peso mayor sobre las clases que sufren, las más faltas de recursos de vuestro orden social; si vuestro impuesto pesa más sobre las clases más próximas á la tierra, y para las cuales el consumo que las disputais es una necesidad, por decirlo así, vital; si llenais vuestro Tesoro..... Pero, no lo olvideis, vuestro Tesoro, al llenarse de millones, se llenará tambien de murmuraciones, se llenará de privaciones del pueblo, se llenará de recriminaciones de los partidos, se llenará de ese desafecto social que toda legislacion sábia debe siempre alejar de las bases de las instituciones, de las bases de su Ministerio de Hacienda, como de las del mismo Estado..... Hay, sobre todas, una razon que me ha conducido, despues de algunos dias de reflexion, á un punto de vista muy diferente del de la Comision, lo confieso, cual es defender, á mi turno, la proposicion del distinguido M. Demesmay (2). Yo

(1) *Théorie de l'impôt.*

(2) M. Demesmay merece, sin duda, ser considerado como el más acérrimo defensor de la abolicion del impuesto. No se limitó á presentar á las Cámaras una proposicion en este sentido, sino que en apoyo de su sistema publicó las siguientes obras: *Observations de Cuthbert William John-*



me he dicho asimismo: ¿hay, no diré ya esa benevolencia, esa caridad, cuyo nombre quisiéramos ver todos escrito en nuestras leyes, hay siquiera equidad? Es decir, ¿este impuesto es proporcional? ¿Está acomodado á las fuerzas de los que están obligados á soportarlo?..... Nosotros tenemos en una poblacion de treinta y cinco millones de habitantes, cinco millones de hombres que se pueden llamar acomodados; por tanto, el impuesto de la sal pesa sobre treinta millones, es decir, sobre la parte más numerosa, la que más sufre, la más necesitada de nuestra poblacion. Es decir, en una palabra, que este impuesto de setenta y un millones seiscientos mil francos, lo pagan en gran parte, en provecho de la fortuna, de la riqueza pública, aquellos que están más faltos de recursos, y pesa no sólo sobre el bolsillo, sino sobre la vida; porque es una observacion fisiológica que oí hacer ayer á un ilustre médico, que la sal está reconocida fisiológicamente como uno de los elementos constitutivos del cuerpo humano, y que, por consiguiente, este impuesto pesa, no sólo sobre la miseria, sino sobre la vida, sobre el organismo humano, como si se sujetasen á un impuesto la sangre y los nervios del hombre.”

Más terminante y decisiva aún, si cabe, es la doctrina de un laureado escritor, fundada principalmente en que se trata de un artículo de primera necesidad y con el que nos brinda gratuita y abundantemente la naturaleza. He aquí

son sur l'emploi du sel en agriculture et en horticulture.—Opinions des hommes politiques, des savans, des agronomes, des agriculteurs sur l'utilité du sel pour les plantes et pour les animaux.—Documents nouveaux sur l'impôt du sel.—Question du sel, publicada en el Journal des économistes.—Contestation á M. Gay-Lussac.—En el mismo sentido de M. Demesmay opinaba M. Dupont-White en su opúsculo De la suppression de l'impôt du sel et de l'octroi.



cómo se expresa Montyon ⁽¹⁾, que es el escritor aludido: "En casi todos los Estados europeos, se halla establecido un impuesto sobre la sal; sin embargo, es una de las contribuciones más duras, más perjudiciales, más injustas, una de las que dan lugar á más vejaciones, á más fraudes, á más gastos de recaudacion. La sal es uno de los mayores bienes que debemos á la beneficencia de la naturaleza; privarnos de ella por impuestos ó á lo menos restringir la munificencia de la naturaleza, es un ultrage hácia ella y una crueldad odiosa contra la especie humana. La sal está destinada á comunicar á los alimentos una sávia saludable, y á preservarlos de una corrupcion tan desagradable como perniciosa; pero los derechos enormes conque está gravado este artículo, obligan al pobre á una economía que compromete su salud. La sal no es ménos saludable para los animales que para el hombre, sobre todo para la clase de los que sirven de alimento á este ⁽²⁾. Pero en algunas provincias la imposibilidad y en otras la dificultad de dársela en cantidad suficiente, ha hecho perecer un gran número por enfermedades de las que se les podría haber preservado; y la agricultura ha experimentado por ello un gran perjuicio. Por este impuesto el pobre resulta mucho más recargado que el rico; porque el padre de familia que tiene que proveer á la subsistencia de muchas personas, paga mucho más que el célibe, y debería pagar mucho ménos. En los puntos de

(1) Montyon.—*Quelle influence ont les diverses espèces d'impôts sur la moralité, l'activité et l'industrie des peuples.*

(2) El efecto que produce en los carneros el uso de la sal, es tal, que los comerciantes de lana por solo el tacto de esta, conocen si el carnero de que procede comió habitualmente la sal, ó estuvo privado de ella. (Nota de Montyon.)



Francia en que el impuesto territorial y el personal se hallaban mejor ordenados, el obrero sin propiedad, y por consiguiente, que sólo tenía que pagar una contribucion personal, por razon de su propio trabajo, pagaba sobre cuarenta sueldos; y en los lugares de Francia en que la sal estaba á más alto precio, este mismo obrero, suponiendo que tenía mujer y cuatro hijos mayores de siete años, pagaba por la sal veintiseis libras; verdad es que como la sal que consumía tenía un valor comercial, este valor debía sacarse además del montante del impuesto. Suponiendo este valor en tres libras ⁽¹⁾, el impuesto de la sal era aun así cerca de doce veces el importe de la contribucion á la que estaba sujeto este hombre privado de toda propiedad; y sobre hallarse gravado por la naturaleza con una carga enorme por la obligacion de alimentar á su familia, estaba además condenado por la Hacienda á soportar un impuesto exorbitante."

Como fundamento de gran valía, ya que no para la completa supresion del impuesto, para su disminucion hasta un punto equivalente á ella, se ha alegado el que á la misma sigue la baja de los precios, y ésta da lugar á su vez á un aumento en el consumo, con lo que se consigue á la par un considerable beneficio para los particulares y para el Estado. Así hace notar el escritor últimamente citado, que en los puntos de Francia en que el impuesto llegó al tipo más alto y en que el consumo del artículo era obligatorio, se necesitó fijar éste en seis libras por persona aun cuando el efectivo llegaba á nueve; en aquellos otros países en que la sal se vendía á bajo precio, el consumo era de doce libras por cabeza; y, por último, en aquellos otros en que la venta era

(1) Deduccion muy crecida apreciada en razon á una gran distancia del lugar de produccion al de consumo. (Nota de Mantyon).



libre, el consumo ascendía á diez y ocho libras por individuo. Hasta tal punto se ha pensado que puede influir la disminucion del impuesto, y más aún su supresion, que, al comenzar el segundo tercio del siglo actual, Desormes escribia en Francia un opúsculo destinado á probar que disminuyendo el impuesto y bajando el precio, aumentaria de tal modo el consumo, que compensaria superabundantemente al Tesoro de la minoracion de ingresos que experimentase por la reduccion del impuesto ⁽¹⁾.

Otras consideraciones no ménos importantes, fundadas en las grandes aplicaciones de la sal á las industrias, especialmente á la agrícola, y en la imposibilidad que existe de otro modo de establecer la distribucion igual y oportuna entre los contribuyentes, decidian hace pocos años en favor del sistema que exponemos á M. Goullin ⁽²⁾.

La tendencia opuesta á la que acabamos de reseñar, se halla representada por escritores dignos de estima y aún por estadistas importantes, en especial de la nacion vecina, los cuales, impulsados por los acontecimientos, no sólo han llegado á sostener que puede aumentarse el impuesto indefinidamente, sino que sobre esa base han pretendido levantar planes financieros. Los grandes desembolsos que ocasionó á Francia la última guerra con Prusia, ya durante la misma, ya una vez terminada, por vía de indemnizacion, y que no bajaron de la enorme suma de ocho mil millones de francos, hicieron pensar en toda clase de impuestos, aún los más gravosos, para afrontar tamaños compromisos. No hubo entonces artículo que ó no se gravara ó no fuera objeto de proyectos en ese sentido; y seguramente no podia librar-

(1) *De l'influence du bas prix du sel sur la consommation.*

(2) *L'impôt sur le sel, nouvelles observations à l'enquête sur les sels.*



se la sal de ser objeto preferente de los planes financieros que por todas partes bullian, supuestos los precedentes de su historia. En 1872 se pone á discusion el aumento del impuesto sobre la sal en el seno de la subcomision de diputados libre-cambistas; pero es rechazado, ya por su impopularidad, ya porque pesaria excesivamente sobre las clases poco acomodadas, cuya alimentacion exige mucha sal y que consume poca carne y mucho tocino, que necesita grandes cantidades de sal para su salazon. Pero pocos meses despues uno de los que habian tomado parte en la Informacion sobre las sales, llevada á efecto bajo la direccion de M. Cornudet, propuso el aumento del impuesto como el medio más á propósito para salir de los apuros que agobiaban al Erario ⁽¹⁾. Expongamos, siquiera fuere brevemente, este sistema y los fundamentos en que lo apoya.

Debemos notar ante todo lo que el aumento se propone como temporal, que tiende á evitar que se establezca el impuesto sobre las primeras materias que tanto y tan justamente preocupaba en aquel entonces los ánimos, y que se halla inspirado por las necesidades imperiosas del Tesoro público.

Despues de hacer de este modo justicia al autor de tal sistema, notemos tambien que confiesa que el impuesto sobre la sal es detestable y se debe condenar en teoría sin contradiccion; mas es tal la influencia que en su inteligencia ejerce lo apremiante de las circunstancias, que, á pesar de todo, aun de la misma impopularidad del impuesto, se decide por el aumento de esa contribucion, que declara execrable; y sostiene que el elevarle al doble produciria al Te-

⁽¹⁾ Ch. Gomel.—*De la augmentation de l'impôt du sel.*—Véase *Journal des économistes*.



soro los ingresos que necesitaba y en verdad no sería oneroso para los pueblos.

El impuesto que á la sazón se hallaba vigente consistía, según hemos dicho, en diez céntimos por kilogramo; y, dividido su importe por el número de habitantes, resultaba que venía á costar á cada uno ochenta y cinco céntimos cada año ^(x). Empero hay que tener presente que esta cantidad no representa el verdadero coste de la sal para el consumidor; debe agregarse á ella el de los trasportes, carga y descarga, almacenaje, ganancia de los comerciantes y otros que elevan al doble ó más el precio originario de este artículo. Y no se observa que este precio baje en los puntos próximos á las salinas, pues el público da tan poca importancia á pagar unos céntimos más ó menos, que con la misma facilidad paga diez céntimos por kilogramo que veinte; y como los fabricantes y comerciantes no ignoran esto, venden más cara la sal que debe consumirse en el país. Seguramente que los consumidores podrian obtener el artículo con más ventaja adquiriéndola de los fabricantes y comerciantes por mayor, pero prefieren tomarla en pequeñas cantidades á los intermediarios ó comerciantes por menor. Estableciendo, pues, que se duplicase el impuesto, el precio de la sal no aumentaría en la misma proporción: valdria treinta céntimos en lugar de veinte. Ahora bien, despues de lo que antecede, nadie podrá afirmar que tan pequeña elevación en el precio de la sal, la que por otra parte es objeto de compras mínimas repetidas, puede ser carga pesada para los contribuyentes, ni que escite sus quejas. En cuanto á las familias acomodadas que consumen gran cantidad de alimentos, y que, por lo mismo, necesitan más sal, el aumento

(x) *Enquête sur les sels.*



del precio no les puede causar más daño, pues significará sólo un gasto de algunos francos más, que pasará sin percibirse entre las grandes sumas que gastan anualmente. Otro tanto sucederá á los obreros sobre cuyos reducidos presupuestos pesará de un modo muy ligero: así, suponiendo que el consumo medio de cada familia sea de seis kilogramos por individuo cada año, y que una familia conste de cinco personas, dará por resultado un aumento de tres francos anuales, en seis, ocho diez ó más compras, cantidad que no puede considerarse como excesiva.

La elevacion del impuesto no sería más sensible por lo que hace al consumo, el cual continuará el mismo, pues sólo cuando el precio aumentase de un modo verdaderamente abusivo podría disminuir su uso en la alimentacion. Así lo comprueba la experiencia, pues, si antes de 1848, en que el impuesto se elevaba á cuarenta céntimos, el consumo medio era de seis kilogramos y medio, en la actualidad sólo se ha elevado á ocho y medio, lo cual se debe en gran parte al desarrollo de la riqueza pública. He aquí, pues, un medio sencillo, fácil, exento de inconvenientes, por el que se puede aumentar el impuesto sin gravámen para el contribuyente y con grandes é indudables ventajas para el Tesoro.

Indicadas sumariamente las dos opuestas direcciones que se advierten en la época contemporánea, por lo que hace al régimen económico de la industria salinera, es llegado el momento de apreciar su respectivo valor para establecer luego el que en nuestro humilde sentir debia plantearse en España.

Consideramos fuera de discusion los males y perjuicios que los impuestos indirectos ocasionan; las trabas que imponen á la produccion, circulacion y consumo de los ar-



tículos que se hallan gravados con ellos son harto conocidas para que hayamos de detenernos en su exposicion y prueba; la desigualdad con que pesan sobre los contribuyentes no admiten duda alguna. La desaparicion del impuesto sería seguramente el remedio radical que curara de una vez para siempre tamaños males.

Por otra parte, si así sucede con los impuestos que gravitan sobre el consumo de las mercancías, cuando se trata de una de las especiales condiciones de la sal, sube en extremo de punto el daño que aquellos ocasionan. Trátase, en efecto, de un artículo de primera necesidad, cuyas aplicaciones á la industria son tan numerosas como importantes, que ha llegado á denominarse la primera materia de las primeras materias. Y si despues consideramos la inmensa abundancia con que ofrece ese producto nuestro suelo, la colosal riqueza que en este ramo se atesora en él y que podría surtir vastísimos mercados excluyendo completamente ó haciendo en extremo difícil toda competencia, parece que no se ofrece como posible otro camino que el de una absoluta franquicia.

Empero si continuamos reflexionando sobre estas ideas, si extendemos nuestra vista más allá del limitado círculo de la industria objeto de nuestra meditacion, si investigamos los vínculos que le unen con las demas y á todas ellas con el Estado, no pueden ménos de asaltar á nuestra mente como ciertos escrúpulos y dudas que debemos consignar.

La idea de que haya una industria completamente exenta del impuesto, imagínasenos opuesta á la solidaridad que existe entre todas ellas, como ramas que son todas de una sola y misma industria. No acertamos tampoco á conciliarla con la exigencia de la generalidad del impuesto que



supone en todos el deber de contribuir en la proporcion de sus haberes al sostenimiento de las necesidades públicas. Si las ventajas indubitables que habria de alcanzar una industria de la absoluta supresion del impuesto, hubieran de inducirnos forzosamente á establecerla, no concebimos que existiese una sola que no reclamara tal reforma, ni alcanzamos el criterio que podria servirnos de otro modo para establecer una distincion fundada entre ellas.

Válidas siempre, á nuestro entender, estas consideraciones, parece adquieren fuerza irresistible en la inteligencia, cuando hacemos aplicacion de las mismas á nuestra patria. Combatida esta, fuerte y constantemente, por todo género de apremiantes necesidades, mermadas sus naturales fuentes de ingresos, y acrecentados de un modo extraordinario sus gastos, difícilmente puede renunciarse á ninguno de los recursos que deben suministrar los particulares. Por muy apetecible que fuera librar á la industria de las cargas todas que la agobian, no es ménos indispensable acudir á las múltiples atenciones que supone la gobernacion de los Estados en los tiempos presentes.

No puede esperarse tampoco que la supresion del impuesto llegue á dar por resultado que el aumento del consumo cubra toda la cifra con que aquel figura en los ingresos del Tesoro público. Desde luego puede asegurarse, segun los datos que poseemos relativos á los diferentes Estados, que si bien el aumento que siguiera á la supresion del impuesto fué considerable, no hay fundamento para suponer que llegue á ser indefinido, y pueda, por tanto, ni aun en una época lejana, contribuir de tal modo al progreso de las demas industrias, de la riqueza pública en general, que compense al Erario de la cantidad que deja de percibir en el



momento de la abolición del impuesto, y que supone una pérdida segura.

Ni es posible prescindir tampoco de la situación especial de nuestra Hacienda, que no permitirá seguramente en muchos años prescindir de recursos que sin duda son superiores á las fuerzas y al bienestar de la nación, pero que, por otra parte, son medio necesario para atender á una necesidad imperiosa. Y bien se comprende que al hacer esta afirmación, estamos muy lejos de adoptar el argumento constantemente alegado por los enemigos de la industria salinera libre, pues las consideraciones que en el momento actual venimos exponiendo, no se refieren al sistema del estanco, sino al que propone la completa supresión del impuesto.

Mas si esta no ofrece, ni en el terreno de la teoría ni en el de las aplicaciones prácticas, condiciones suficientes para admitirla y proponerla como base del futuro régimen económico de la industria salinera, la teoría que sostiene la posibilidad del aumento indefinido del impuesto, es de todo punto inaceptable y errónea. Inspirada esta, no en los principios inmutables y superiores de la ciencia, sino en el deseo de salir á todo trance del estado excepcional en que se encontraba el pueblo francés en instantes solemnes y sobre toda ponderación terribles, no debe extrañarse que diste mucho de poder ser aceptada.

Así se explica que habiendo comenzado por proponer un impuesto, que consideraba ménos malo, ménos perjudicial que el que se proyectaba sobre las primeras materias, llegase por fin tan adelante en ese camino, y esforzara de tal modo las razones que, si ellas hubieran de ser válidas, habría que admitir que el aumento indefinido del impuesto sobre la sal no ofrece inconveniente alguno, y es el gran re-



curso á que deben recurrir los Estados para sustraerse á la situacion financiera apurada, en que generalmente se encuentran.

El argumento Aquiles en que se apoya la teoría que estudiamos puede reducirse á estos términos. La sal es un artículo que, como de primera necesidad, todos consumen; las cantidades que exige la alimentacion del hombre son pequeñas, y suponen un exíguo desembolso; y, por último, áun ese reducido precio se paga en muchas veces, pues las adquisiciones se van haciendo poco á poco y en largo trascurso de tiempo: de aquí se deduce que el consumidor satisface insensiblemente el impuesto, sin que acierte á distinguirlo del precio del artículo, y el aumentar aquel supone únicamente una elevacion en el precio de algunos céntimos más que está dispuesto á satisfacer sin repugnancia. Preciso es confesar que esta doctrina ya no era una novedad: habia informado anteriormente el proyecto del impuesto sobre las primeras materias que presentaba Thiers, apoyándolo con un ejemplo tomado de la lana, y sobre el que exponia consideraciones semejantes. Empero tal sistema estaba basado en un sofisma que encontró valientes y entendidos impugnadores, denominándose esta teoría de la desaparicion del impuesto por la division ⁽¹⁾.

A la verdad que comparado este artículo con otros cuyo uso es tambien necesario para la vida, ofrece la diferencia de que, siendo mucho ménos la cantidad que del mismo se consume, la elevacion del impuesto no puede ser tan gravosa como si tuviese lugar en mercancías en que, por tener más valor, alcanzara un precio más alto en el mercado, y por emplearse en mayor cantidad le haria insoportable apenas

(1) *Journal des économistes*, 1872.



establecido. Mas el que esta contribucion no cause desde luego tan sensibles é inmediatos males, el que no pese con tanto rigor como otras, ¿autoriza para sostener que absolutamente no pesa, ó que supone sólo una carga ligerísima? Con razon se ha hecho observar sobre este punto, que si mil kilogramos divididos entre mil personas no representan en cada una más que un peso ligerísimo, tampoco puede decirse que nada pesan; y que en el mismo caso se halla el impuesto sobre la sal; ya que si bien dividido entre muchos y en numerosos actos no supone un peso insoportable, infundadamente se afirmaria que nada pesa. De otra suerte, así como se llegarían á convertir en carga pesadísima y sobre las fuerzas humanas los mil kilogramos, si fuéramos multiplicándolos en consideracion á que distribuidos entre mil personas nada pasan, del mismo modo, unido el peso del impuesto sobre la sal, aunque se suponga muy ligero, á los mil y mil otros que recaen sobre el consumidor, llegará por fin á abrumarle. Ciertamente es que semejante contribucion, una vez abolido el estanco, no suscita las quejas y reclamaciones que ese malhadado sistema levantaba; pero ¿no se oyen á cada momento las que surgen de la carestía de los artículos de más apremiante y general necesidad? Y ¿se cree que no afectan en una parte al precio que alcanza indebidamente la sal por el recargo del impuesto?

Por otro lado, esa facilidad extraordinaria que se atribuye á la exaccion y pago del impuesto, no es un carácter distintivo del que pesa sobre la sal, sino comun á la mayor parte de los indirectos, y tan engañoso en aquel como en estos últimos. En todos ellos se verifica, en efecto, que el contribuyente no puede distinguir en el precio que paga por los artículos la parte que corresponde á éste y al impuesto;



y como quiera que se divide y subdivide el último en un gran número de actos, correspondiendo á cada uno pequeña porcion, no le exasperan ni irritan esos pequeños pagos, á diferencia de lo que sucede con los impuestos directos, que suponen la privacion de cantidad considerable en cada una de las exacciones. No causa, pues, el impuesto sobre la sal las reclamaciones y quejas vehementísimas que los impuestos directos suscitan, pero no por ello es más aceptable, pues si los contribuyentes no perciben sus efectos de un modo tan notable como los de otros, ni dejan de sentirlos, ni es tampoco por eso ménos evidente que las cantidades de gran importancia que percibe el Estado salen de manos de contribuyentes y disminuyen su fortuna. A la doctrina que impugnamos puede aplicarse lo que decia Mr. Lowe al presentar á la Cámara de los Comunes el presupuesto de 1871: "Se han hecho cálculos muy ingeniosos para demostrar que el derecho sobre el trigo no puede ejercer accion alguna sobre el consumo..... que el derecho no suponía más que una fraccion de céntimo por pan de cuatro libras..... Si esto es exacto, habeis encontrado la piedra filosofal de la hacienda..... Nada más fácil que pedir cada dia y cada hora una porcion minúscula de la fortuna de cada uno, lo cual se puede hacer bajo mil formas; pero ¿juzgais que por eso saldrán ménos los millones del bolsillo de los consumidores, y que afectando así al consumo no impondreis sufrimientos y privaciones que debeis remediar?"

Son, á la verdad, los impuestos indirectos como pequeñas sangrías hechas en el cuerpo social, de ninguna de las cuales puede decirse sean capaces no ya de destruirle, sino ni aún de privarle de fuerza ni vigor alguno; pero que repetidas y multiplicadas indefinidamente concluyen por debili-



tarle y poner en grave peligro su vida. Guardémonos, pues, de aceptar esa doctrina que nos conduciría á admitir un aumento progresivo en el impuesto, y que por un verdadero sofisma muy conocido, tiende al error de establecer que el impuesto desaparece cuando se divide. Seguramente que el que pesa sobre la sal no es suficiente por sí para arruinar á las familias; pero no es ménos indudable que contribuye á cercenar los recursos que podrian invertir de otro modo en satisfacer sus necesidades y al malestar de las clases ménos acomodadas.

Las consideraciones precedentes no han podido ocultarse á M. Gomel, y trata en su virtud de prevenir el argumento que podria oponerse á su sistema, que dejamos expuesto, fundado en que esa contribucion pesaria más sobre los pobres que sobre los ricos. No, dice, es preciso considerar ese impuesto no aisladamente, sino en relacion con los demas; los que gozan de una posicion desahogada se hallan sujetos á otras contribuciones que no paga el pobre, y cuyo resultado es igualar las condiciones de los unos y de los otros; y, por otra parte, el rico consume más alimentos que el pobre, y, por tanto, consume tambien más sal.

El razonamiento es indudablemente ingenioso y no carece por completo de verdad: en todo regular sistema económico las cargas deben distribuirse en proporcion á los haberes, sin que pueda excusarse de contribuir el que puede hacerlo, siquiera fuese en pequeña cantidad; pero no es ménos evidente que si nos fijamos de un modo exclusivo en lo que cada uno tiene, habremos de establecer las más monstruosas desigualdades. Es cierto que el que cuenta con mayores recursos que el pobre, paga ademas otros impuestos; mas para aquel suponen una disminucion en los gastos mé-



nos necesarios, al par que para éste la contribucion que se le exija cercenará el consumo de lo más necesario para la vida. No cabe desconocer, por lo tanto, que la mayor parte de esos millones que vienen á aumentar el presupuesto salen de la gran masa del pueblo, y que en igual cantidad disminuyen los medios con que podrian y deberian atender de otro modo á la satisfaccion de sus necesidades. No se olvide tampoco que en los exiguos presupuestos de las clases poco acomodadas, los céntimos equivalen cuando ménos á pesetas en los de aquellas que gozan de posicion más desahogada, y que, por consiguiente, el aumento, por pequeño que fuese, en las contribuciones que han de satisfacer, es un sacrificio para ellas, supone la pérdida de un dia de jornal, y es causa de sufrimientos y perniciosa privacion. Nada más lejos de nuestro ánimo que pedir en este punto exenciones y privilegios que introduzcan la perturbacion así en el orden jurídico como en el económico, ni soñar en nada que se parezca á las utopias socialistas con que muchos pretenden introducir el bienestar general en las sociedades, en las clases todas; pero juzgamos que los sanos principios económicos, en armonía con los altísimos de la moral, exigen que se favorezca cuanto fuere posible la condicion del pobre y se aligere en la medida más extensa que sea dable la carga que debe levantar. Y es á nuestro entender indudable que si cada uno de esos pequeños impuestos, entre los que se encuentra la sal, no es suficiente por sí solo para agobiar al pobre, todos reunidos forman un peso excesivo; y que si en lugar de establecer uno más ó recargar los existentes, procuramos suprimir ó aliviar los que paga, habremos conseguido una notable mejora en su situacion.

Empero no concluyen aquí las observaciones que se ofre-



cen contra el sistema que estamos analizando. Habráse notado, sin duda, que el entendido autor del mismo se ocupa de la sal como si no fuera susceptible de otra aplicacion, ni la tuviera de hecho más que á la alimentacion del hombre. Mas debió tener en cuenta que la cantidad que se consume con destino á las varias industrias que la utilizan, se eleva en todas las naciones á una suma respetable. Y siendo así, ¿podrán tambien aplicarse en este terreno las razones alegadas por aquel escritor? ¿Tambien se pagará insensiblemente por la industria el recargo que sufra la sal? M. Gomel habia rehusado hacer aplicacion de su sistema á la sal consumida por la industria; pero era imposible prescindir de este poderoso obstáculo con que tropezaba la adopcion de su doctrina, y procura destruirlo haciéndose cargo de él como para prevenir uno de los argumentos que podrian oponerse á su proyecto. Detenidamente hemos meditado sobre las consideraciones que expone para desvanecer esa dificultad; mas no hemos podido encontrar en el fondo de todas ellas sino el reconocimiento del gravísimo daño que resultaria á la industria de aumentar el impuesto, y la necesidad, en su virtud, de conceder gracia ó dispensa de él á la sal destinada á usos industriales. No nos proponemos reproducir aquí las razones expuestas en otro lugar contra ese sistema de precios de gracia tan generalmente observado en todas las legislaciones, y del que tantos ejemplos ofrece la muestra; recuérdese lo que dejamos dicho sobre este punto, y juzgamos será más que bastante para rechazar un medio que tantos inconvenientes presenta.

Resúmen de cuanto dejamos indicado en este capítulo es que, ni se puede considerar aceptable, dadas todas las condiciones, la absoluta supresion del impuesto, ni es posible



tampoco el sistema que tiende á legitimar un recargo indefinido del mismo. No pediremos, pues, ni podemos pedir que la industria salinera, ni otra alguna, quede exenta de contribuir á levantar las cargas públicas por medio del impuesto: trátase de una sagrada obligacion de cuyo cumplimiento á nadie puede eximirse. Empero tampoco nos es posible aconsejar que se adopte un sistema que ha de conducir forzosamente á imposibilitar el progreso de esa industria, y aún á impelerla por el camino de su decadencia y de su ruina. Y debemos advertir en este punto que, segun se ha podido notar, no nos ha traído á tal conclusion el propósito preconcebido y empírico de sostener este importante capítulo del presupuesto de nuestra Nacion. Cierto es que no podíamos echar en olvido la situacion poco satisfactoria de nuestro Tesoro, pero hemos procurado constantemente huir de ese falso criterio que inspirára la mayor parte de los planes rentísticos en España y fuera de ella, hoy y en los tiempos pasados. Nuestra mision dentro de este humilde trabajo no podia ni puede consistir en determinar las bases sobre las que se levante una copiosa fuente de ingresos con los que se soporten las abrumadoras cargas que nos agobian. Los fines que ha de procurar conseguir, y esto es precisamente lo que más aumenta la gravedad de la tarea que hemos impuesto sobre nuestros débiles hombros, consisten en determinar de un modo permanente y estable el régimen á que debe someterse la industria salinera de España, armonizando los intereses de la misma y del Estado, de modo que ni éste deje de obtener los recursos á que tiene derecho, ni aquella sufra lesion en el suyo, sino, antes bien, alcance el mayor grado posible de la gran prosperidad á que las condiciones especialísimas de nuestro país la llaman indudablemente.



Pues bien, supuesto que la industria salinera debe satisfacer un impuesto, réstanos sólo fijar cuál haya de ser este. Los principios y los hechos que venimos exponiendo con una prolijidad que nunca consideramos excesiva, dan á conocer bien claramente, en nuestro sentir, que el impuesto que pesa sobre la sal debe ser módico, debe consistir en el minimum de lo que, segun las exigencias de las verdaderas necesidades públicas y la importancia de esta fuente de riqueza en relacion con las demas, pueda exigirse. No se pierda un momento de vista que la explotacion de la sal en España, merced á la abundancia del producto y á la facilidad de su fabricacion, está llamada á adquirir un desarrollo tal, si no se le oponen trabas, que pocas naciones podrán hacerle competencia. Miremos, pues, en ella un manantial fecundísimo de riqueza no aprovechado aún debidamente; pero no pretendamos aniquilarla ni siquiera detener su progreso por el insensato afan de que rinda al Tesoro cantidades de importancia que colmen su vacío. ¿Se quiere que aún como materia imponible llegue al máximo de lo que puede ser y constituya la base de cuantiosos rendimientos? Pues dejémosla crecer, desarrollarse y tocar á su mayor grado de perfeccion; y entonces se verá demostrado una vez más en el terreno de los números, como lo está en el de los principios, que el interes del Estado no puede ser opuesto al de los particulares, al de la industria; y que el Tesoro público no puede encontrarse desahogado y verdaderamente próspero sino cuando lo están tambien los de los particulares, y tiene por sólido apoyo el acrecentamiento de la riqueza de la Nacion y la prosperidad general.



CAPÍTULO VIII.

Régimen administrativo de la industria salinera.—Importancia de la cuestion y forma en que debe plantearse.—Datos que suministra para la resolucion del problema el estudio histórico de nuestra legislacion relativa á la industria salinera.—Relacion que debe existir entre el régimen legal y económico y el administrativo.—Exámen del sistema de encabezamientos.—Necesidad de un régimen administrativo estable.—La concurrencia del Estado con los particulares y la venta de las salinas que conserva el mismo en sus relaciones con el régimen administrativo.

Para terminar nuestro trabajo réstanos únicamente exponer el régimen administrativo que debiera aplicarse á la industria salinera. Acaso pudiera parecer á alguno esta materia como desprovista de interes ó digna á lo más de un puesto muy secundario en la organizacion de dicha industria; pero seguramente no lo estimará así quien conozca la poderosísima influencia que ejerce en el órden económico una buena administracion, así como los grandes males que produce un régimen administrativo erróneo ó poco acertado. La historia demuestra que las más pesadas cargas se han hecho soportables y llevaderas bajo un ordenado y conveniente plan administrativo, así como, por el contrario, gravámenes relativamente ligeros han suscitado las más amargas quejas, han dado lugar á ruda oposicion, y se han hecho sentir con pesantez abrumadora. Y se explica fácilmente que deba suceder así; no es suficiente que se escogiten con toda madurez y cordura los medios más adecuados para obtener de los ciudadanos los recursos indispensables para levantar



las cargas públicas con el menor gravámen y extorsion de los mismos, si luego, por la forma en que se les exige, ó por el tiempo ó lugar en que se reclaman, ó por otras mil circunstancias, livianas en apariencia y graves en realidad, se aumenta más y más el sacrificio que siempre imponen necesariamente aún las exacciones de todo punto justas y prudentes.

No es, por tanto, manera aceptable de considerar este asunto trascendental relegarle al número de los que por su insignificancia pueden tener indiferentemente una ú otra solución, toda vez que se dejen á salvo ciertos principios, y antes bien estimamos que es materia digna de ocupar seriamente nuestra atencion antes de poner término á este pobre trabajo. Y á la verdad, que cuando comenzamos á enumerar, más prolijamente de lo que nos habiamos propuesto en un principio, las más importantes fases que ofrece la historia de nuestra legislacion en la época anterior á 1869, teniamos á la vista de un modo especial, entre otras interesantes aplicaciones, el vital problema de la administracion de la renta de salinas; y viniendo á nuestra memoria las esenciales relaciones que han existido y no pueden ménos de existir entre el régimen legal y económico de la renta de la sal con la administracion de la misma, juzgábamos necesario establecer una de las firmes y sólidas bases que deben servir de sustentáculo á toda racional y práctica reglamentacion de la misma. La historia, la larga experiencia de los siglos condensada en ella, es, en efecto, un manantial fecundísimo de provechosas enseñanzas que no pueden desperdiciarse impunemente.

No comenzaremos, sin embargo, este estudio exponiendo los inconvenientes que ofrecia la forma de administracion en



la época del monopolio, por más que no deben perderse de vista las dificultades y quejas suscitadas en tan prolongado período, y que son provechosas lecciones que pueden aprovecharse siempre, cualquiera que fuere el régimen que se adopte: habiendo partido del principio de que el estanco constituye una organizacion viciosa é inadmisble bajo todos conceptos, nuestros esfuerzos han de dirigirse por el camino de la libertad de la industria.

Desde luego juzgamos que establecido como base de la nueva organizacion un reducido impuesto, mientras no sea posible abolir completamente todo gravámen que impida el considerable desarrollo que la industria salinera está llamada á alcanzar en nuestra patria por las condiciones especialísimas que en ella concurren, habránse minorado notablemente las dificultades con que tropieza de un modo imposible de evitar la administracion de impuestos excesivos. Empero no se crea que la administracion de impuestos, aunque constituya una importantísima mejora, es suficiente para dar por terminada la obra del establecimiento del debido régimen en la industria referida. El sistema administrativo que hoy rige nos parecería inaceptable aunque se rebajase de un modo notabilísimo los impuestos que hoy pesan sobre la explotacion, fabricacion y venta de la sal.

Hállase computado uno de ellos, el más importante, tomando como punto de partida el número de habitantes y exigiéndose una determinada cuota por cada uno de ellos. Mas no habiéndose encargado el Gobierno de hacerlo efectivo directamente, sino encomendado su recaudacion á los Ayuntamientos, á quienes se lo exigía, háse acudido al sistema de los encabezamientos, concediendo á los Municipios el derecho exclusivo de venta, ejercido bien por sí, bien por ar-



rendamiento. Este sistema ha tropezado con gravísimas dificultades y entorpecimientos, suscitado quejas sin número por parte de los mismos Municipios, y producido no pequeño daño á los consumidores. No es posible pensar sobre ese sistema sin que venga á la memoria el antiguo régimen de los acopios forzosos con todo el inseparable séquito de reclamaciones, obstáculos é inconvenientes. Los Ayuntamientos, por su parte, se vienen quejando de que en la distribución se les gravara excesivamente, atendido el número de los habitantes de que constan y con relación á otros; y las dificultades con que tropiezan ordinariamente para hacer efectiva su correspondiente cuota, hacen que de un modo constante se hayan atrasado en su pago y soliciten incesantemente, á la vez que rebajas en sus cupos, moratorias para su entrega. Si esto último se ha concedido más de una vez, en mucho mayor número de ocasiones se ha reconocido que cuotas asignadas á determinados pueblos, no eran tan equitativas como fuera de desear. Compréndese efectivamente, sin esfuerzo, cuán difícil ha de ser el llegar á una distribución hecha, digámoslo así, *á priori*, partiendo de cálculos más ó ménos fundados y próximos á la verdad, pero que no pueden alcanzar nunca la exactitud de los números representativos del verdadero consumo. Este inconveniente sería por sí solo bastante para dudar mucho, cuando ménos, de la bondad de un sistema que en el orden teórico aparece falto de una base tan segura como debiera exigirse, y en el terreno de la práctica lucha con tan numerosos y graves obstáculos.

Por lo que hace á los consumidores, el sistema de encabezamientos, máxime en la forma en que se halla establecido, no puede considerarse en manera alguna ventajoso. El



derecho exclusivo de venta, bien lo ejerciten por sí los Ayuntamientos, bien lo arrienden, se halla condenado por casi todas las consideraciones que en el orden legal y económico hacíamos respecto al monopolio del Estado. Poco importa, en efecto, que éste haya abolido el estanco y declarado la libertad de la industria, si luego las disposiciones relativas á la administracion y recaudacion del impuesto, hacen en gran parte ilusorias ó no tan provechosas como debieran ser las ventajas alcanzadas por la nueva legislacion. Y no se diga que nosotros abultamos ó exajeramos, pues en documentos oficiales se confiesa explícitamente que esa facultad concedida á los Ayuntamientos equivale á un gran número de pequeños monopolios. De suerte que se ha abolido el supremo y absoluto monopolio ejercido por el Estado para sustituirle por otros muchos que, si no alcanzan á producir los rendimientos del estanco, llevan consigo inconvenientes muy aproximados á los que este producía. Lo mismo en la fabricacion que en el tráfico de la sal, queremos se realice la ley de la libre concurrencia, que tan beneficiosos resultados está llamada á producir en todo el orden económico: no de otra suerte se podrá obtener el que el producto llegue á manos del consumidor en las condiciones de bondad y baratura que son de apetecer.

Juzgamos, pues, que la forma vigente de administracion reclama una modificacion en el sentido de la abolicion de monopolios infundados y perjudiciales. Si pudiera llegarse un dia á la abolicion casi total del impuesto ó á una reduccion considerable, habríase logrado mucho para reformar radicalmente disposiciones que tienden á hacer posible á todo trance contribuciones onerosísimas de suyo, y más y más agravadas aún por la manera con que se exigen ó ad-



ministran. Entre tanto, y no pudiéndose llegar á convertir en directa la contribucion sobre la sal, no vemos motivo racional fundado para exigir lo que hoy pesa sobre ese producto en forma distinta de la establecida ordinariamente para los demas. Si la contribucion sobre la sal ha de ser un impuesto indirecto, nosotros preferiríamos gravase el consumo, porque, así en ese artículo como en los demas, lo consideramos ménos perjudicial para el desarrollo de la industria, que si se establece sobre la produccion ó circulacion, cegando las fuentes de la riqueza en su mismo origen.

Adoptado un sistema de administracion, ya fuese el propuesto, ya otro, juzgamos deberia introducirse una reforma que, si bien ménos necesaria en el régimen administrativo que en el económico, parece la exige la manera de ser actual de la legislacion sobre este punto. Deberíase, á nuestro juicio, meditar muy maduramente el sistema que se ofreciese como más aceptable para la administracion del impuesto de la sal; pero una vez aceptado uno, convendria tuviera una vida más duradera que la anual de los presupuestos é independiente por completo de estos últimos. Así se evitarian esas continuas mudanzas que ofrecen gran apariencia de ensayos; se podria obtener un sistema regular y ordenado de administracion incompatible de ordinario con el incesante mudar de leyes; y se haria posible apreciar las ventajas de la organizacion adoptada ó los inconvenientes que produjera y que justificasen una modificacion ó reforma más ó ménos radical. Alguna esperanza nos hace concebir de que así llegue á realizarse en época no remota, el proyecto de presupuestos del año económico inmediato que se presenta en el momento de escribir estas líneas, y que aparece ménos recargado que los anteriores de disposiciones especiales, de



esa larga série de apéndices, que todos los años acostumbraban á seguir á los presupuestos.

Asunto de la mayor importancia es el relativo á la concurrencia que el Estado ejerce con los particulares, por la sal cuya explotacion continúa reservada al mismo. Tenemos hechas ya las indicaciones suficientes para comprender que no somos partidarios de que el Estado ejerza las funciones de fabricante, porque ni lo encontramos justificado en el órden extríctamente jurídico, ni en el económico. Bien comprendemos que la salina que explota actualmente el Estado, se encuentra en condiciones ventajosísimas que hacen menos temibles las consecuencias que siguen siempre á la fabricacion por cuenta del mismo; pero aún así parécenos que comprende una excepcional empresa algo y aún mucho que debiera evitarse. Esa excepcion por sí sola hace indispensable por un lado una fuerza pública que evite el tráfico ilícito que de otro modo pudiera hacerse, y da lugar á que se perpetúe, bien que en menor escala, una clase de delitos que deberia desaparecer por completo y de raíz. Es, pues, á todas luces conveniente, en nuestro humilde entender, que el Estado deje de ser fabricante de una vez y para siempre. Adoptada esta saludable medida, la Administracion se encontraria tambien descargada de un peso insoportable que le abrumba ó debilita sus fuerzas, cuando se ve en la necesidad de distraer su actividad de asuntos que exigen, hartó más que éste, toda su atencion y se hallan más en armonía con sus propias y peculiares funciones.

Y esta consideracion nos lleva á ocuparnos de un último punto cuya capital importancia exige nos detengamos en su exámen algunos momentos. Recuértese que en la ley de destanco sólo se exceptuaron de la venta tres salinas, y todas



ellas con la cláusula de *por ahora*; no se olvide tampoco que el espíritu general que dominó al votarse aquella memorable ley, fué el que desapareciese hasta el último resto del monopolio ejercido anteriormente por el Estado; ténganse, por último, en cuenta los motivos especialísimos y de exquisita prudencia que inspiraron esa excepcion; y, bajo ese criterio, examinemos el estado en que actualmente se encuentra el cumplimiento de esta parte de la ley de 1869 y lo que en su consecuencia demanda una buena administracion.

Y entiéndase bien que al expresarnos así no tratamos de inculpar á nadie, sino de exponer lealmente nuestra opinion, como lo exige el empeño que hemos tomado sobre nosotros. El tiempo trascurrido desde que se promulgó la ley de 16 de Junio; el no existir ya motivos fundados para sostener un nuevo monopolio peor aún que el del Estado; y las condiciones de vida propia y de prosperidad que ha alcanzado la industria salinera en estos dos últimos lustros, entendemos son causas más que suficientes para que el precepto legal tenga perfecto cumplimiento en bien de todos.

Existen aún, segun nuestras noticias, salinas, espumeros y otras fuentes de esta clase de riqueza á las que no ha llegado el momento de entrar en el movimiento de libre circulacion impreso á esa industria. No necesitamos encarecer la pérdida que esto ocasiona á la riqueza pública, y la necesidad de que se ponga término en breve á esta situacion. No se espere á que el interes de determinados particulares promueva estos asuntos y tome la iniciativa que corresponde de derecho á los centros administrativos. Opinamos que es de suma utilidad el que sin levantar mano y venciendo toda clase de dificultades, se proceda á investigar las salinas no exceptuadas que se hallan en estado de venta, y se realice



ésta. Débense asimismo superar cuantos obstáculos se opongan á que se normalice la situacion de la salina de los Alfaques, á fin de que rinda los cuantiosos productos de que es susceptible. Es necesario, por fin, que se obtenga la autorizacion necesaria para enajenar la salina de Torrevieja. Ignoramos con qué fundamento comienza á circular la noticia de que se intenta realizar esto último, con cuya ocasion principia tambien á publicarse una série de artículos por una notable Revista industrial ⁽¹⁾, y, á la verdad, nos complace en extremo esa idea, y hacemos votos por que se realice.

La evidencia de la materia nos ahorra descender á ultteriores consideraciones para demostrar las grandes ventajas que de suceder así habrian de reportar el Estado y los particulares. El precio de las salinas enajenadas vendria á suplir en gran parte la utilidad que deja de obtener el Tesoro público por efecto del desestanco; y sabido es que esta ha sido siempre la principal, si no la única razon que ha venido sosteniendo el monopolio. Cada año que transcurre en esta situacion significa para el Estado una pérdida positiva cuantiosa, y otra negativa no ménos digna de consideracion: deja, en efecto, de percibir sumas de importancia que podrian aliviar la suerte de los contribuyentes sin menoscabo de los intereses públicos; y, por otra parte, aumenta cada día más la enorme deuda que nos abruma y que podria enjugarse en una cantidad de importancia por este medio, máxime cuan-

(1) Sobre la salina de Torrevieja se contienen luminosísimos artículos en el tomo 24 de la *Revista minera*, en cuya notable publicacion se encuentran tambien otros importantes estudios relativos á nuestro asunto, en los que debemos confesar, pues no nos gusta adornarnos con méritos ajenos, que nos hemos inspirado más de una vez al escribir este modesto trabajo.



do se trata de una situación en que no puede ni debe despreciarse medio alguno, por insignificante que sea.

No se nos ocultan los obstáculos que se oponen á la realización de esa medida necesaria y hasta urgente en nuestro juicio. Tropiézase con las dificultades prácticas que surgen al ponerse en planta la enajenación, entre las que se cuenta por muchos, en primer término, hasta lo grave y nada fácil de tasar debidamente salinas como la de Torrevieja, de suerte que no se perjudique el Estado en esa misma operación que se propone para fomentar sus recursos, y se lucha hasta con el inconveniente de no permitir la pronta y oportuna terminación de los expedientes, el gran cúmulo de negocios que se aglomeran en los grandes centros administrativos. Estas y otras varias razones se alegan para justificar el estado en que subsiste la realización completa del pensamiento que domina en la ley de desestanco; pero, en nuestro sentir, no son semejantes obstáculos de tal entidad y tan insuperables que no puedan vencerse en manera alguna, ni aún con la fuerza de un firme propósito y del convencimiento de las grandes ventajas que de ello podrian derivarse. Indudablemente son necesarios trabajos difíciles y constantes para llegar al término que proponemos; mas es preciso contar tambien con que son de gran valía é importancia los medios con que cuenta el Estado para realizar la empresa, medios que pueden dar por resultado un éxito completamente feliz si se emplean con ánimo decidido. Y por lo que hace á la valoración de las salinas de Torrevieja, punto que ciertamente ofrece alguna dificultad, ni creemos que sea imposible, pues hasta existen ya importantes estudios sobre la materia, ni es lícito olvidar que contamos con un cuerpo de Ingenieros de minas ilustradísimo y de competencia notoria,



que es el llamado naturalmente á secundar los esfuerzos de la Administracion. Por estas consideraciones precisamente insistimos en la idea de que todas, absolutamente todas las tasaciones de salinas se hagan por los Ingenieros del ramo, cual lo exigen de consuno la justicia y la conveniencia del Estado.

No presumimos haber dicho la última palabra en la importante y difícil materia que ha venido sirviendo de asunto á esta Memoria, ni abrigamos la pretension de creer que todas nuestras afirmaciones correspondan perfectamente á nuestro propósito de encontrar la verdad y el bien. Hemos reunido cuantos datos nos ha sido posible; hemos meditado sobre ellos; hemos procurado hermanar las enseñanzas de la ciencia con las lecciones de la historia; é inspirándonos únicamente el deseo del acierto y de ser útiles á nuestra patria, hemos deducido las consecuencias que en nuestro entender se derivan de aquellos principios, con la pura y leal libertad de quien expresa sus firmes convicciones, lo que su propia conciencia le dicta. Y, aunque siempre con la natural desconfianza de nosotros mismos, juzgamos que si se adoptasen las ideas que dejamos expresadas, podríamos aspirar á que llegara un dia en que nuestra industria salinera se elevase á un grado envidiable de prosperidad; y, conformándose con los principios indicados, no dudamos en concluir con la siguiente afirmacion:

"La industria salinera de España debe competir ventajosamente con la de todas las demas naciones."



APÉNDICES.



APÉNDICE I.

REAL CÉDULA DE FELIPE III DE 1609.

«El Rey. Marqués de Montesclaros, Pariente, mi Virey, Gobernador y Capitan General de las Provincias de el Perú. Por cartas vuestras y del Marqués de Salinas, mi Virey, Gobernador y Capitan General de la Nueva España, y otros Ministros míos de las Indias, he entendido los inconvenientes, y dificultades, que se han ofrecido y ofrecen en administrarse, ó arrendarse por mi cuenta las Salinas de esse Reyno, como lo ordené por Cédula mia, fecha en cinco de Marzo del año passado de 1603, y la poca sustancia que de esto se saca, ni puede sacar administrándose por mi cuenta, pues vienen á ser mayores las costas, que el aprovechamiento, sin que haya quien por via de arrendamiento se quiera encargar de ellos y que los daños, y molestias, que de ello se siguen á los Indios, son muchos, por ser las más de las dichas Salinas pozos de poca consideracion y los mesmos Indios, los beneficiaban para su sustento, ocupándose aora en este ministerio con intolerable trabajo, y con tan moderados jornales, que no se pueden sustentar. Y que siendo este material de la sal tan necesario para el beneficio de los metales, con el estanco que se ha hecho de él, se ha encarecido en algunas partes, y no le pueden tener los Mineros en tan buen precio, ni con la comodidad, y abundancia que solian. Por lo qual, y otros inconvenientes, que se han hallado en la exaccion de este arbitrio, convendria, que se dexasse correr esto como hasta aquí, y que la sal se distrayesse por todas partes, para que en los Assientos de Minas tengan los Mineros á buenos precios lo que han menester. Y habiendose discurrido y platicado sobre esta materia por los de mi Consejo de las Indias, y consultadoseme,



teniendo consideracion á lo susodicho, y por lo mucho, que deseo el alivio, y buen tratamiento de los Indios, y que no sean vexados por este camino: He acordado y resuelto que se alze la mano del dicho arbitrio, y os mando, que proveais, y ordeneis que así se haga en todo esse distrito, y que se dexe el uso de la sal libremente, hasta que yo ordene, y mande otra cosa, como se hacia antes que se assentase el dicho arbitrio, sin embargo de qualesquier órdenes mias, que en contrario en esto haya, que assí es mi voluntad etc. Fecha en Madrid á último de Diciembre de 1609 años.—Yo el Rey.—Por mandado de el Rey nuestro Señor, Gabriel de Iboa.



APÉNDICE II.

COLECCION LEGISLATIVA DE LA INDUSTRIA SALINERA LIBRE.

1869.—16 de Junio.—*Ley declarando libres la fabricacion y venta de la sal.*

D. Laureano Figuerola, Ministro de Hacienda, en nombre y con acuerdo del Poder Ejecutivo de la Nacion; á todos los que las presentes vieren y entendieren, salud: Las Córtes Constituyentes de la Nacion española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Artículo 1.º Desde 1.º de Enero de 1870 serán completamente libres la fabricacion y venta de la sal, desapareciendo por consiguiente el estanco y el monopolio ejercido hoy por el Estado.

Todos los propietarios de salinas beneficiadas ó inutilizadas actualmente por el Estado, ya mediante el pago de determinados derechos, ó ya por precio alzado de compra exclusiva del artículo, dejarán de cobrar las sumas que por estos conceptos vengán percibiendo bajo cualquier título que sea desde el día que, dentro del segundo semestre del año económico de 1869 á 1870, señale en cada caso el Poder Ejecutivo para que dichos propietarios vuelvan á posesionarse de sus salinas, mediante liquidacion y pago del valor de los edificios, máquinas y mejoras que la Hacienda hubiese hecho en ellas.

Las existencias de sales se enajenarán por la Hacienda segun fuese más conveniente.

Art. 2.º Declarada la libertad de la fabricacion y venta, no se reconoce ningun derecho á indemnizacion á las corporaciones ó personas interesadas en la percepcion de arbitrios ó recargos sobre el consumo de sal, ínterin no acrediten con título legítimo y primordial un



contrato oneroso que obligue al Estado al pago de semejante carga ó gravámen.

Art. 3.º Se declaran en estado de venta las salinas de la Hacienda y las demas fincas y efectos pertenecientes á las mismas, que se hallen aplicados exclusivamente al servicio de la Renta.

El pago de las salinas vendidas se verificará en metálico, entregando los compradores la décima parte al verificarse la adjudicacion, y el resto por partes iguales en los nueve años siguientes.

Las ventas se harán en pública licitacion.

Exceptúanse por ahora de la venta las salinas de Torrevieja, Imon y los Alfaques.

Art. 4.º El Gobierno cuidará de proveer los depósitos y alfolíes con el surtido ordinario, aumentando con un 20 por 100 más la consignacion señalada en toda la region no salinera de España, durante el segundo semestre del ejercicio.

Desde 1.º de Julio de 1870 venderá las existencias resultantes, sin ulterior abastecimiento. El Poder Ejecutivo conservará ó disminuirá los precios segun el estado de los mercados hasta la indicada fecha de 1.º de Julio de 1870.

Art. 5.º La Hacienda concurrirá con los particulares á la venta por mayor y menor de toda la sal perteneciente al Estado, en las salinas cuya explotacion conserve, fijando los tipos de venta al precio del mercado.

Art. 6.º La importacion de sal procedente del extranjero, es libre en las Aduanas españolas desde 1.º de Enero de 1870 mediante el pago de 13 reales por quintal métrico.

El cabotaje de la sal indígena, no estará sujeto á ningun derecho de arancel.

Será completamente libre la exportacion de la sal en buques nacionales ó extranjeros, cualquiera que sea su cabida.

Art. 7.º Los propietarios de minas de sal, salinas ó espumeros, pagarán la contribucion conforme á lo territorial, por los que tengan en explotacion.

Art. 8.º Se incluirá en las matrículas de la contribucion industrial á los que al por mayor ó al por menor se dediquen á la venta de la sal; debiendo el Poder Ejecutivo fijar las cuotas prudencialmente,



sin perjuicio de modificarlas en alza ó en baja segun aconseje la experiencia.

Art. 9.º El Poder Ejecutivo adoptará todas las medidas necesarias para facilitar la transicion del estanco á la libertad del tráfico de la sal, sin que falte el abastecimiento de este artículo de primera necesidad dentro del ejercicio del presupuesto en los puntos de la Península que pudieran carecer de él.

De acuerdo de las Cortes se comunica al Poder Ejecutivo para su cumplimiento y publicacion como ley.

Palacio de las Cortes catorce de Junio de mil ochocientos setenta y nueve.—Nicolás María Rivero, Presidente.—Manuel de Llano y Persi, Diputado Secretario.—El Marqués de Sardoal, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.

Madrid diez y seis de Junio de mil ochocientos sesenta y nueve.—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola.

1869.—5 de Agosto.—*Orden desestimando la reclamacion de D. José Suarez, para el abono de una partida de sal, que le detuvo la Administracion de Hacienda pública de Sevilla en Noviembre de 1868, y disponiendo que la Junta administrativa resuelva lo que procede con arreglo al Real decreto de 25 de Junio de 1852, decidiéndose en igual sentido los casos análogos que puedan presentarse.*

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino del expediente instruido en la suprimida Direccion general de Rentas estancadas y Loterías, con motivo de haber reclamado D. José Suarez el pago de una partida de sal que le detuvo la Administracion de Hacienda pública de Sevilla en el mes de Noviembre último, resultando que el interesado acudió á este Ministerio con la pretension indicada, manifestando que tolerada por la Junta revolucionaria de Cádiz, la libre circulacion de las sales procedentes de las fábricas de particulares, compró en las nombradas de San Antonio y Vicario unos 130 lastres, de los que negoció 30 en San Fernando, conduciendo los 100



restantes á Sevilla, donde fueron detenidos por la fuerza de carabineros, verificándose su desembarque y entrega en los almacenes de la Administracion, por cuyo motivo pide el abono del precio á que se hizo la compra en las salinas, y el coste, conduccion, desembarque y almacenaje; y que de un modo análogo se ha procedido con los dueños de otras cantidades de sal detenidas en la estacion del ferro-carri! de dicha ciudad:

Considerando que el tráfico de los efectos estancados constituye un delito de contrabando, que lleva siempre consigo la pérdida ó comiso del género aprehendido, segun se declara en los artículos 18 y 24 del Real decreto de 25 de Junio de 1852, y de cuyo asunto conocen en primer lugar las Juntas administrativas:

Considerando que ni las determinaciones adoptadas por la Junta revolucionaria de Cádiz, ni por la de Sevilla, se dirigieron á desestancar la sal y que fuese una mercancía de libre comercio, limitándose únicamente á rebajar en un 75 por 100 el precio á que se vendia dicho artículo por la Hacienda, y por ello, tanto D. José Suarez como todos los que se encuentran en su caso, antes de dedicar sus capitales á una especulacion como la de que se trata, debieron haberse asegurado si estaban dentro de la legalidad existente:

Considerando que contra las disposiciones del citado Real decreto no puede Suarez invocar con fundamento la circunstancia de que la Junta revolucionaria de Cádiz tolerase en Octubre último la libre circulacion de la sal en aquella provincia, porque á él no se le intervino allí, sino en Sevilla, y porque la tolerancia, dado caso que existiera, no es ninguna autorizacion ni ménos puede reputarse como una derogacion de la ley escrita, cuando ella dimana por otra parte de autoridades transitorias, cuales son siempre las expresadas juntas revolucionarias:

Considerando que, si bien es cierto que durante la convulsion política porque pasó el país cuando los acontecimientos de Setiembre y Octubre del año último, se consintió el libre comercio de la sal y tabaco, era debido á que en aquellos momentos la accion gubernamental, bien estuviera concretada en las Juntas revolucionarias, bien en la Central, su única y exclusiva mision era restablecer el orden y confianza, y encauzar, por decirlo así, la marcha regular de la Nacion,



pero sin variar la gestion administrativa, cuyas reformas sólo podia llevar á cabo el Poder Central, como así lo realizó el Gobierno provisional;

Y considerando, por último, que si como precedente favorable á la reclamacion de Suarez, se cita el hecho de que en Sevilla se hizo cargo la Hacienda de sal detenida á particulares, abonándoles su coste, debe tenerse en cuenta que esta medida obedecia á un fin puramente político, cual era el temor de que pudiera alterarse el orden público, de adoptarse otra determinacion, lo que nunca debe servir de regla para la resolucion de reclamaciones sucesivas; S. A., de conformidad con los dictámenes emitidos por la suprimida Asesoría general de este Ministerio y la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, se ha servido desestimar la reclamacion de D. José Suarez, y disponer que la Junta administrativa de Sevilla resuelva en primera instancia lo que estime conveniente respecto á la sal allí aprehendida, conforme á lo dispuesto en los artículos 18 y 24 del Real decreto de 25 de Junio de 1852, y que en el propio sentido deberán resolverse los demas casos que se presenten de igual naturaleza.

De orden de S. A. lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Agosto de 1869. —Ardanaz.—Sr. Director general de Rentas.

1869.—26 de Agosto.—Orden declarando que la reduccion en el precio de la sal, acordada en 30 de Junio último, sólo alcanza á los fomentadores de pesca y salazon.

Ilmo. Sr.: Vista la consulta que ha elevado V. I. á este Ministerio, acerca de si la reduccion del precio acordada por el Poder ejecutivo en orden de fecha 30 de Junio último, respecto á las sales que hubieren sacado los fomentadores de pesca y salazon desde 1.º de Julio de 1868 á 31 de Marzo de este año, es extensiva tambien á los industriales que se ocupan en salar carnes:

Considerando que el expediente que produjo la citada resolucion



fué promovido por los fomentadores de las rias de Vivero, Vicedo y Bareg, que exclusivamente se dedican al fomento de la pesca y salazon, los cuales, entre otros motivos, expusieron que el aumento de precio del quintal de sal á un escudo y 400 milésimas, segun la Real orden de 8 de Junio de 1868, afectó de una manera grave las condiciones especiales de la industria y la suerte de los pescadores que en ella encuentran su sustento:

Considerando que los cálculos que se tuvieron presentes sólo se referian á las sacas de sal hechas por esta clase de fomentadores:

Y considerando que al acordarse en vista de estos datos, una parte de la rebaja pretendida, se expresa textualmente que era extensiva á los industriales que se hallasen en idéntico caso que los reclamantes, y que esta identidad no concurre en industrias de índole tan diferente, por más que la de salazones de carnes pague al mismo precio la sal que necesite; S. A. el Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido declarar que los efectos de la referida orden de 30 de Junio, sólo alcanzan á los fomentadores de pesca y salazon en los términos que la misma expresa.

De orden de S. A. lo comunico á V. I. para su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Agosto de 1869.—Ardanaz.—Sr. Director general de Rentas.

1869.—9 de Diciembre.—Circular dictando reglas para llevar á efecto el desestanco de la sal, dispuesto por la ley de 16 de Junio de este año.

Decretado y sancionado por las Córtes Constituyentes el desestanco de la sal, debe llevarse á efecto esta soberana disposicion con arreglo á la ley de 16 de Junio último, desde 1.º de Enero del próximo año 1870.

En su virtud, y siendo absolutamente necesario conocer las verdaderas existencias de sal que á la terminacion del año corriente resulten en cada uno de los almacenes, depósitos y alfolíes, donde se hacen los acopios y la expendicion de dicho artículo, este Centro di-



rectivo ha acordado que se practique un repeso general en todas las provincias del Reino con extricta sujecion á las reglas siguientes:

1.^a Desde el día 16 al 31 del presente mes indefectiblemente se repesarán todas las sales existentes en los almacenes, depósitos y alfolíes de las capitales y pueblos subalternos de las provincias en que se halle establecido el estanco.

2.^a Los Jefes de las Administraciones económicas nombrarán los empleados que consideren necesarios y aptos para desempeñar este servicio, designando á cada uno el número de alfolíes en que deben practicarlo, para lo cual tendrán en cuenta la importancia de sus respectivas existencias, la más ó menos facilidad que haya en los almacenes para verificar el repeso, y la distancia que separa á unos de otros, con el objeto de que todos aquellos vengan á repesar aproximadamente igual número de quintales de sal, y que esta operacion se termine en el ménos tiempo posible. En las provincias cuyos alfolíes subalternos reunan en junto una cantidad de sal que no exceda de la que pueda ser totalmente repesada en los días 16 al 31 ambos inclusives, al respecto por lo ménos de 600 quintales diarios, sólo se nombrará un empleado para este servicio en evitacion de gastos innecesarios.

3.^a El repeso deberá comenzarse, en los alfolíes y depósitos subalternos, por los que cuenten mayores existencias, y practicarse sin interrupcion de sol á sol.

4.^a En las capitales de provincia tendrá efecto el repeso con asistencia del Jefe de la Administracion económica ó funcionario que este designe y ante Notario, y en los pueblos subalternos con la del Alcalde presidente del Ayuntamiento ó Concejal en quien tenga á bien delegar, de los Jefes del Resguardo especial de Rentas estancadas y Cuerpo de Carabineros, si los hubiese, y tambien ante Notario, y en su defecto ante el Secretario de la Corporacion municipal.

5.^a Antes de dar principio al repeso se hará constar por diligencias, que suscribirán todos los asistentes al acto, las existencias que en aquel día arrojen los libros, á fin de que aumentando á ellas las remesas que se reciban, y deduciendo del total cargo las ventas que realicen durante aquella operacion, pueda compararse el remanente con el resultado material del repeso, y apreciarse así con exactitud



los aumentos ó faltas que apareciesen, los cuales figurarán en el acta que de la operacion deberá extenderse y á la que se acompañará la diligencia de que queda hecho mérito.

6.ª Al terminar el repeso en cada almacén, depósito ó alfolí, si esto sucediere antes del día 31, quedará intervenido en la capital por el empleado que nombre la Administración económica, y en los pueblos subalternos por la persona que designe el Alcalde, si este no quisiese hacerlo por sí mismo, á fin de que llevando cuenta formal de la entrada y salida de sales en aquellos establecimientos, durante los días que medien entre el en que se concluya el repeso y el 31 expresado, se extienda acta adicional del movimiento de sales, para que pueda conocerse la verdadera existencia resultante al cerrar la cuenta del presente mes. Con el acta adicional y la del repeso, se extenderá el testimonio de que se trata en la regla 9.ª

7.ª En todos los almacenes de sal se cerrará la cuenta de recibo y expendición de este artículo al finalizar el día 31 del mes actual, cargándose como aumento en los repesos las sales que hayan resultado de más, y datándose, en el concepto de faltas reintegrables, las que hayan aparecido de ménos, cuyo valor á precio de estanco deberán ingresar en el Tesoro público los empleados responsables.

8.ª En los almacenes y alfolíes que cuenten con una existencia mayor de nueve mil quintales el día 16 del presente mes, no se verificará el repeso, pero se establecerá una intervencion en el mismo día, en las capitales por el empleado que designe el Jefe de la Administración económica, y en los pueblos por el Alcalde ó un delegado de su autoridad.

Esta intervencion se llevará por cargo y data en forma de acta, extendida en papel de oficio, en la que se figurará como primera partida la existencia que aparezca de los libros en aquella fecha, y no cesará hasta que se agoten las existencias, á no ser que la Dirección disponga otra cosa.

9.ª Reunidas que sean en las Administraciones económicas las actas de repeso é intervencion, se pasará al Notario que corresponda para que extienda un testimonio general demostrativo de las existencias resultantes el día 31 en cada uno de los almacenes y expendedurías, con expresion de los aumentos y bajas que hayan aparecido. Del



testimonio se librarán por el Notario dos copias, una para que sirva de comprobante á la cuenta, y otra para que por la Administracion económica se remita, sin la menor demora, á esta Direccion general.

10.^a Los gastos que ocasione el repeso serán de cuenta de los encargados de los almacenes, depósitos y alfolíes cuando resulten faltas, cualquiera que sea su importancia, y cuando no las haya ó resulten aumentos, se sufragarán del premio de la venta de la sal, con arreglo á lo dispuesto en orden de 4 de Diciembre de 1856, reproducida en 18 de Noviembre de 1861.

Y 11.^a Los empleados nombrados por los Jefes de las Administraciones económicas para verificar el repeso fuera de las capitales, devengarán por razon de dietas diez escudos diarios, para que puedan subvenir á los gastos de locomocion y manutencion, mediante ser extraordinario el servicio que deben prestar. Al efecto rendirán cuenta, acompañada del diario de operaciones, en el que harán constar el número de quintales de sal que repesen diariamente, y las Administraciones económicas las remitirán, con la censura del Jefe de la Intervencion, á este Centro directivo para su aprobacion si la mereciese.

La Direccion espera que comprendiendo los Jefes de las Administraciones económicas toda la importancia del servicio que se les encomienda, tomarán las medidas más eficaces y conducentes á que se lleve á efecto con la mayor exactitud, á fin de conocer las verdaderas existencias de sal en 31 del presente mes.

Lo comunico á V. S. para los efectos correspondientes, incluyéndole varios ejemplares de esta orden para que los trascriba y haga cumplir á sus subalternos, acusándome entretanto su recibo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Diciembre de 1869.—Lope Gisbert.—Sr. Jefe de la Administracion económica de.....

1869.—10 de Diciembre.—Circular dictando varias disposiciones relativas al surtido de sal á precio de gracia, con motivo del desestanco de dicho artículo.

Debiendo tener efecto el desestanco de la sal en 1.º de Enero próximo, conforme á la ley de 16 de Junio del corriente año, desde



aquel mismo día estarán en completa libertad de surtirse en el punto y en la forma que más les convenga, los ganaderos, los fabricantes de productos químicos, fundicion de minerales, barrilla y jabon, cristal, vidrio y loza, y demas industriales de esta clase que al presente disfrutan la gracia de recibir aquel artículo á más bajo precio que el de estanco.

En esta atencion, y á fin de que las Administraciones económicas tengan reglas fijas á qué atenerse en este interesante particular, la Direccion ha estimado oportuno dictar las disposiciones siguientes:

1.ª A contar desde el mencionado día 1.º de Enero, cesará la adulteracion de sal para uso de las industrias que acostumbran á emplearla en esta forma.

2.ª Si en aquella fecha resultase en almacenes alguna existencia de sal adulterada, y los ganaderos ó fabricantes desearan adquirirla para destinarla á sus industrias respectivas, los Jefes de las Administraciones dispondrán que se les facilite, prévias las formalidades de instruccion que en la actualidad se observan, y á los precios de un escudo por quintal de sal y doscientas milésimas por gastos de misturacion, los ganaderos, con arreglo al decreto de 4 de Marzo de este año; y de un escudo, tambien por cada quintal, los fabricantes, de conformidad á lo mandado por órden de S. A. el Regente del Reino, fecha 26 de Agosto último. Tan luego como se extinga la existencia de sal de que se trata, las Administraciones económicas lo participarán á esta Direccion general para los efectos correspondientes.

3.ª Si á pesar de lo consignado en la disposicion anterior, no tuviese salida la sal adulterada, se conservará en los mismos locales en que hoy se halla, á cargo del Guarda-almacen, hasta que la Direccion disponga su ulterior destino. De la propia forma y con igual objeto se conservarán tambien las cantidades de hollín y retama que resulten existentes en la fecha indicada.

4.ª Los presupuestos de gastos últimamente aprobados por este Centro directivo para la adulteracion de la sal, se considerarán nulos y sin efecto alguno en la parte de que no se hubiere hecho uso al terminar el día 31 del mes actual, devolviéndolos desde luego á esta Superioridad, ó uniéndolos á la cuenta de su inversion, segun que haya



quedado sin misturar ó sólo se haya misturado una parte de la cantidad de sal de su referencia.

Y 5.ª Las Administraciones económicas cuidarán de remitir inmediatamente á esta Direccion general para su aprobacion, si la mereciesen, las cuentas de gastos ocasionados en las misturaciones de sal que estuviesen pendientes de aquel requisito, con el fin de que este servicio quede completamente orillado á su extincion.

Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento, debiendo darme aviso del recibo de esta órden á vuelta de correo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Diciembre de 1869.—Lope Gisbert.—Sr. Jefe de la Administracion económica de.....

1869.—11 de Diciembre.—Circular disponiendo que se gire una visita á todas las fábricas de salazon, y determinando las formalidades con que ha de practicarse aquella y el repeso de la sal, para evitar perjuicios á la Hacienda.

Dispuesto por la ley de 16 de Junio del presente año el desestanco de la sal, desde el dia 1.º de Enero próximo, en que debe tener efecto esta medida, estarán en completa libertad de abastecerse en la forma más conveniente los fomentadores de pesca y salazon. En su consecuencia, y con el objeto de saber cuál es el estado de sus relaciones para con la Hacienda, en cuanto al uso que hayan hecho de las cantidades de sal recibidas para sus respectivas industrias, esta Direccion general ha dispuesto que se practique una visita y repeso en las fábricas de dicha clase establecidas en esa provincia, observándose en su ejecucion las reglas siguientes:

1.ª Desde 1.º de Enero próximo cesará toda entrega de sal por la Hacienda pública á los fomentadores de salazon de pescados, carnes, embutidos, escabeches, conservas alimenticias y queso y manteca de Flandes.

2.ª La visita á las fábricas de salazon deberá practicarse indefectiblemente desde el dia 16 al 31, ambos inclusive, del mes actual, y los Jefes de las Administraciones económicas de las provincias en que aquellas se hallen situadas, nombrarán el empleado ó empleados



que consideren más aptos y de condiciones más á propósito para desempeñar este servicio.

3.^a Para que los Visitadores puedan dar principio á su cometido con la oportunidad indicada, las Administraciones económicas les entregarán, sin pérdida de momento, nota detallada de las fábricas de salazon de todas clases que deben visitar en la respectiva provincia, expresando la Administracion subalterna á que correspondan, punto en que aquellas están establecidas y nombre de los fomentadores. Esta nota, en la que se hará constar la fecha en que se entrega al Visitador, formará despues parte integrante del expediente de visita.

4.^a Inmediatamente que llegue el Visitador á la Administracion á cuyo distrito correspondan las fábricas de salazon que deba visitar, examinará las cuentas individuales que aquella dependencia lleva á cada fomentador, y tomará nota de sus resultados para que le sirvan de base y comprobacion con los que arrojen las operaciones sucesivas, extendiendo de todo la oportuna diligencia, que firmará en union del Administrador.

5.^a Seguidamente se presentará al Alcalde popular en cuya demarcacion estén enclavadas las fábricas, y acompañado de la misma autoridad ó de la persona que al efecto delegue, se constituirá en aquellos establecimientos, reclamará al fomentador la libreta que le tiene entregada la Administracion, comprobará sus asientos con la nota á que se refiere la regla anterior, y si estuviesen conformes sus resultados, se examinará minuciosamente la fábrica, con el fin de averiguar y conocer si existe alguna cantidad de sal, ademas de las que haya en el almacen, y el estado en que se encuentra. Si no hubiese conformidad entre los asientos de la libreta del fomentador y los resultados que demuestre la nota de la Administracion subalterna, procurará averiguar la causa de la diferencia ó diferencias antes de practicar el repeso, y consignará aquella ó estas en el acta de visita.

6.^a El dueño ó representante de la fábrica deberá manifestar al Visitador los quintales de salazon que, habiendo sido exportados, estuviesen pendientes de justificacion por no haber acreditado la llegada al punto de su destino, á fin de conocer la cantidad de sal que les corresponde, y prévia comprobacion con la nota sacada de los libros de la Administracion subalterna.



7.ª Se procederá en seguida al repeso de las sales limpias que existan separadas en el almacén y á las de resalga, empezando por las de esta última clase, cuando su estado lo permita, ó calculando lo más aproximadamente que sea posible su importancia, cuando por su estado y situación no pueda utilizarse otro medio. Se repesarán después las salazones que estén dispuestas para ser exportadas, graduando la sal que á estas corresponda, lo mismo que á las que se hallaren en chanca, con arreglo á los tipos establecidos.

8.ª Terminadas que sean estas operaciones, que se procurará ejecutar con el mayor acierto, y evitando molestias á los fomentadores, se extenderá la oportuna acta por duplicado y en papel de oficio, con arreglo al modelo adjunto, en la que, además de consignar los extremos que el mismo comprende, se expresarán cuantas circunstancias hubiesen mediado, firmando seguidamente los dos ejemplares en el mismo local el Visitador, el dueño ó representante del establecimiento, el Alcalde ó su delegado y todas las personas que hubiesen intervenido y presenciado el repeso. Uno de estos ejemplares se remitirá á la Administración económica para los efectos que se dirán, y el otro á esta Dirección general, directamente por el mismo Visitador, para su exámen y comprobación con las cuentas correspondientes; suprimiéndose por innecesaria la información de testigos que se practicaba para conocer si la fábrica poseía los barcos, redes y útiles necesarios para la pesca.

9.ª Siendo el objeto de la visita liquidar definitivamente con los fomentadores, el Visitador remitirá las actas á la Administración económica sin el menor retraso, á fin de que esta dependencia pueda dar sus órdenes para el transporte de la sal sobrante á los almacenes de donde proceda, á costa y riesgo del fomentador, con arreglo á lo prevenido en la circular de 12 de Noviembre de 1857, cargándose de ella previo repeso y reconocimiento de estar útil para el consumo, el alfolí ó depósito donde se entregue, en concepto de sal devuelta por fomentadores.

Si alguno de estos manifestara serle necesaria una parte de la sal existente en su fábrica en el acto de la visita, sólo devolverá el resto á los almacenes de la Hacienda, así como sino pudiese calcular el número de quintales que puede invertir hasta 31 de Diciembre inclu-



sive, quedará obligado á devolver en este dia los que resulten sobrantes, siempre con arreglo á la citada circular y á condicion de justificar la inversion de la diferencia.

10. Si los fomentadores solicitasen hacerse cargo de la sal existente en su establecimiento, como no debe privárseles de los medios necesarios á continuar su industria, se accederá á su solicitud, consignándose así en el acta de visita; igualmente que la obligacion por parte del fomentador de prestar nuevas garantías para responder del importe de la sal que quede en su poder al precio de estanco hoy vigente, y justificar su inversion con arreglo á la legislacion del ramo.

11. Para que la visita se lleve á cabo en la forma que ménos moleste á los fomentadores en la época actual, la Administracion económica, con el conocimiento que tiene de las fábricas de la provincia, señalará al Visitador ó Visitadores el orden con que han de desempeñar su cometido, empezando por las de ménos importancia, para dar lugar á que la costera avance lo más posible en las fábricas de mayor movimiento.

12. Si por cualquier causa se opusieran dificultades por el fomentador en el acto del repeso ó se entorpeciese la operacion bajo pretextos inadmisibles, coartando la accion del Visitador, ademas de hacerse constar por este en el acta de la visita cuantas circunstancias mediaren, instruirá expediente por separado, con audiencia del industrial, fijando los hechos con toda claridad, y lo pasará al Jefe de la Administracion económica de la provincia, para que, ó bien lo dirija á este Centro para la resolucion que proceda, ó la remita al Juzgado correspondiente, si encontrase méritos para ello, sin perjuicio de que por el mismo Jefe de la Administracion económica se acuerden las medidas preventivas que convengan.

13. Las Administraciones económicas, tan pronto como conozcan los resultados de la visita por las actas que de cada una de ellas deben entregarles los Visitadores, conforme determina la regla 8.ª, comunicarán las órdenes oportunas á las subalternas de Rentas estancadas, á fin de que por su parte cuiden tambien, previo acuerdo con los fomentadores, de la traslacion de las sales sobrantes que devuelvan estos, y de que se haga efectivo el valor de las faltas que apareciesen; en la inteligencia de que unas y otras dependencias se.



rán efectivamente responsables ante este Centro directivo, si en todo el mes de Enero próximo no quedaran hechas estas traslaciones y cuantas operaciones deben practicarse por consecuencia de la visita. Como pudiera suceder que algun fomentador, despues de practicado el repeso, sacara nuevas sales de los almacenes de la Hacienda en los dias que medien entre el en que aquel se termine y el 31 del presente mes, á los expedientes de visita se acompañará por los Jefes de las Administraciones económicas una nota ó resumen detallado del resultado de la misma, con las entregas posteriores, cuidando de hacer en cuentas á cada industrial el cargo correspondiente.

14. Las Administraciones económicas dispondrán que se proporcione á los Visitadores los medios para verificar el repeso, con cuyo objeto tendrán presentes las circunstancias de cada localidad, se pondrán de acuerdo con los Alcaldes populares y excitarán á los fomentadores á que faciliten los útiles y mozos indispensables, como lo han verificado en años anteriores.

15. De los gastos que se ocasionen á los Visitadores por viajes y manutencion durante la visita, formarán estos cuenta documentada y la elevarán á la aprobacion de este Centro directivo por conducto de los Jefes de las Administraciones económicas, previo exámen y censura de los Jefes de intervencion de las mismas dependencias.

16. En los mismos términos y con las propias formalidades, se practicará la visita en los establecimientos destinados á la salazon de carnes, embutidos, queso, manteca, escabeches y conservas alimenticias.

17. Los Jefes de las Administraciones económicas darán sus órdenes á los subalternos de Rentas estancadas para que, con arreglo á lo dispuesto en la regla 1.ª, no se haga entrega alguna de la sal á los fomentadores y demas industriales desde el día 1.º de Enero próximo; teniendo, sin embargo, entendido que estos no cesarán en sus obligaciones para con la Hacienda, hasta que se liquiden por completo las entregas de sal hechas á cada uno, y se declare su solvencia, de conformidad y en los términos que disponen las instrucciones del ramo.

18. Ultimamente, los empleados á quienes se refiera este servicio, darán cuenta semanal á esta Direccion, de las fábricas que visi-



taren, y de cuantos incidentes se promuevan durante el desempeño de su cometido, y los Jefes de las Administraciones económicas, comprendiendo la importancia del acto que va á practicarse, y los grandes perjuicios que podría sufrir la Hacienda sino se llevase á cabo con la debida escrupulosidad y exactitud, redoblaran su celo y vigilancia para que la visita ofrezca resultados verdaderos y se ejecute sin dificultades, para lo cual resolverán por sí mismos las consultas que les dirijan los Visitadores, ó acudirán hasta por telégrafo á esta Direccion cuando la urgencia del caso lo requiriera; en la inteligencia de que el descuido, la lenidad ó el desconocimiento de los respectivos deberes, será castigado sin consideracion de ninguna clase.

Lo que este Centro directivo comunica á V. S. con la inclusion de varios ejemplares de la presente orden para su más exacto cumplimiento, sirviéndose acusar recibo sin pérdida de correo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Diciembre de 1869.—Lope Gisbert.—Sr. Jefe de la Administracion económica de la provincia de.....

1869—21 de Diciembre.—Orden adicionando la forma que expresa las tarifas del impuesto para la industria de la venta de la sal.

Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino del expediente que V. E. ha remitido en consulta á este Ministerio proponiendo las cuotas de la contribucion industrial que en cumplimiento del art. 8 de la ley de 16 de Junio próximo pasado deben fijarse y regir desde 1.º de Enero de 1870 para la industria de la *venta de sal*; y considerando que por el artículo 1.º de la mencionada ley se declara libre el comercio de dicho artículo y que por el 8.º ya citado se manda incluir en las matrículas de aquella contribucion, á los que *al por mayor ó al por menor* se dediquen á la referida industria, autorizando al Gobierno para «fijar las cuotas prudencialmente, sin perjuicio de modificarlas en alza ó en baja segun aconseje la experiencia,» S. A., conformándose con el parecer de esa Direccion general, se ha servido disponer se tengan por adicionadas las actuales tarifas



primera y de patentes, y rijan para todos los efectos del citado impuesto, desde 1.º de Enero de 1870, los epígrafes siguientes:

TARIFA PRIMERA.

Primera clase.

Vendedores por cuenta propia ó en comision al por mayor y menor ó al por menor solamente de sal comun ó purificada.

Sexta clase.

Expendedurías de sal en cantidad menor de 10 kilogramos.

TARIFA DE PATENTES.

Mercaderes ambulantes que recorran las ferias y mercados vendiendo sal en cantidad menor de 10 kilogramos, 10 escudos.

Capitanes ó patrones de buques que recorran los puertos é islas adyacentes vendiendo sal por su cuenta ó en comision, 40 escudos.

De órden de S. A. lo comunico á V. E. para los efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Diciembre de 1869.—Figueroa.—Sr. Director general de Contribuciones.

1869.—21 de Diciembre.—Orden adoptando varias resoluciones para facilitar el cumplimiento de la ley de 16 de Junio último, sobre desestanco de la sal.

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de la exposicion de V. I. exponiendo varias disposiciones encaminadas á facilitar el cumplimiento de la ley de 16 de Junio último, relativa al desestanco de la sal.

En su vista, y

Considerando que la Direccion general de Propiedades y Dere-



chos del Estado debe incautarse desde luego de las salinas de que ya se le ha pasado nota, y que por no estar en explotacion ni tener existencias de sal pueden inmediatamente devolverse á sus legítimos dueños, previo reconocimiento de su indubitable derecho, las que sean de propiedad particular, y venderse en pública licitacion las que sean de propiedad de la Hacienda:

Considerando que es necesario abastecer de sal los depósitos y alfo-
lles en la cantidad que durante el período que con especial prevision
fija la misma ley de desestanco, para evitar que el público carezca de
un artículo tan indispensable, en el caso de que la industria particu-
lar no acuda oportunamente á su provision, y que hasta que se veri-
fique dicho abastecimiento no puede hacerse la entrega de las salinas
á la expresada Direccion general de Propiedades para los efectos
prevenidos en la anterior ley:

Considerando que las sales que resulten sobrantes en las fábricas
despues de atendido el abastecimiento, deben venderse por ese Cen-
tro directivo, mediante que se trata de un artículo estancado hasta
ahora, cuyas condiciones conoce, como elaborado bajo su direccion,
que sabe ademas cuáles son las zonas ó puntos de España en que
puede ser más necesario y tener aceptacion más general, facilitando
de este modo su venta, y que sería embarazoso para la Direccion ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado hacerse cargo, custodiar
y enajenar estas sales:

Considerando que hasta que aquel caso llegue sería prematuro y
expuesto á error fijar el tipo de precio á que las ventas deben verifi-
carse, en razon á que habrán de tenerse en cuenta los que el artículo
tenga en el mercado y otras circunstancias especiales;

Y considerando, finalmente, que la entrega á la Direccion gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado de las salinas que hasta
ahora ha beneficiado la Hacienda debe hacerse con las formalidades
convenientes en estos casos;

S. A. el Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. I., se ha servido resolver:

1.º Que desde luego se incaute la Direccion general de Propie-
dades y Derechos del Estado de las salinas que, por no estar en ex-
plotacion ni tener existencias de sal, para surtir los almacenes y alfo-



lles, se han comprendido en la relacion pasada á la misma, para que inmediatamente se restituyan á sus dueños, si procediere, las que resulten ser de propiedad particular, y se midan todas las que pertenezcan á la Hacienda, de conformidad á las prescripciones de la ley.

2.º Que activando esa Direccion general cuanto sea posible la remesa á los depósitos y alfolíes del surtido de sal que determina el artículo 4.º de la ley de desestanco, se entreguen las demas salinas á la Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, á medida que vayan quedando libres y desembarazadas de las existencias que resulten sobrantes despues de cubierto el expresado surtido.

3.º Que hecho el abastecimiento de los depósitos y alfolíes, se vendan inmediatamente por esa Direccion general todas las sales que queden en las fábricas, en pública subasta, que se celebrará simultáneamente en esa misma Direccion y en las capitales de las provincias en que se hallen enclavadas las salinas, ó en otros puntos que por circunstancias especiales estime conveniente designar cuando el sobrante excediese de dos mil quintales, y hasta este número en la forma que ese mismo Centro determine.

4.º Que el tipo de precio para las subastas expresadas se fijará por este Ministerio en cada una que ocurra, á propuesta de esa Direccion, para lo cual se tendrán en cuenta los efectos que produzca el desestanco en los mercados, las demas circunstancias de localidad, calidad y aceptacion de la sal de cada salina, exceptuando los casos ya expresados, de que la cantidad de sal no pase de dos mil quintales, y en los cuales la Direccion verificará la subasta en la forma y tipo que considere más á propósito para obtener mejor resultado.

Y 5.º Que la entrega de las salinas la verifiquen empleados comisionados por esa Direccion general, á otros que designe la de Propiedades y Derechos del Estado, bajo doble inventario, en el que se especificarán é incluirán los edificios, terrenos, cotos, almacenes, norias, calentadores, eras ó vasos de cuaje, máquinas, artefactos, útiles, efectos, mobiliario de las oficinas, ornamentos, vasos sagrados y demas que contengan sus capillas, donde las hubiere, con todo cuanto más se hallase y sea de la pertenencia del Estado, cuyo doble inventario firmarán los comisionados con el Administrador de cada salina, el Oficial interventor de la misma y el respectivo Comandan-



te del Resguardo especial de Rentas, que concurrirán al acto de entrega, remitiéndose un ejemplar á cada Direccion para los efectos convenientes, y pudiendo los comisionados reservarse una copia autorizada por todos los asistentes, para su resguardo.

De órden de S. A. lo comunico á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Diciembre de 1869.—El Ministro de Hacienda, Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1869.—27 de Diciembre.—*Orden aprobando una Instruccion para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley de 16 de Junio último, relativa al desestanco de la sal.*

Ilmo. Sr.: El Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido aprobar la adjunta Instruccion para el cumplimiento de las disposiciones que contiene la ley de 16 de Junio del corriente año, relativa al desestanco de la sal.

De órden de S. A. lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 1869.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

INSTRUCCION

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA LEY DE 16 DE JUNIO ÚLTIMO, RELATIVA AL DESESTANCO DE LA SAL.

Artículo 1.º Las industrias de fabricacion y venta de la sal comun, podrán ejercerse libremente desde 1.º de Enero próximo. Los que á ella se dediquen deberán observar las reglas que al efecto prescriba la Direccion general de Contribuciones.

Art. 2.º La circulacion de la sal será libre por el interior del Reino, no debiendo oponerle en adelante impedimento alguno el cuerpo de Carabineros ni el Resguardo especial. Los deberes de esta fuerza quedan reducidos á redoblar su vigilancia para que no se extraiga sal



fraudulentamente de las fábricas, lagunas y espumeros del Estado, mientras no se vendan, aprehendiendo y entregando á los Tribunales para su castigo, á los que tal extraccion hicieren ó intentaren. Tampoco permitirán la elaboracion ni la extraccion de sal de las fábricas de particulares, cuyos dueños no acrediten con documento bastante, haberse colocado en situacion legal para ejercer tal industria.

Art. 3.º La sal comun puede exportarse libremente para el extranjero en buques de cualquier cabida por las Aduanas habilitadas para la exportacion general, con sujecion á las mismas formalidades que otro cualquier artículo de lícito comercio.

Art. 4.º La sal comun extranjera puede importarse por las Aduanas de primera y segunda clase, pagando los derechos de Arancel y cumpliendo lo ordenado para el comercio de importacion en las ordenanzas del Ramo.

Art. 5.º La sal del país y la extranjera, despues de pagado el derecho de importacion, pueden trasportarse por cabotaje de uno á otro punto de la Península é islas adyacentes, observando las reglas establecidas ó que se establecieren para esta clase de comercio.

Art. 6.º La Hacienda no fabricará ya sal, más que en las tres salinas de Torrevieja, Imon y los Alfaques, que por ahora se reserva el Estado.

Art. 7.º Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 5.º de la ley, seguirá la Hacienda vendiendo las sales de su propiedad durante el primer semestre del año próximo, en concurrencia con los particulares. Esta venta se hará solemnemente al por mayor en los alfolíes y al por menor en los estancos de tabacos, con sujecion á las reglas hoy vigentes, dando por terminadas como innecesarias todas las licencias expedidas á favor de las tiendas de abacería y otras.

Los Fieles y Administradores subalternos de Rentas estancadas, no podrán expender sal de propiedad particular, aunque se les concluyan las existencias de la Hacienda. Al que contraviniere á esta disposicion, se le separará inmediatamente de su empleo.

Art. 8.º El precio á que la Hacienda venderá su sal será el mismo al que hoy la vende respectivamente en los alfolíes y en los estancos, con arreglo al artículo 6.º de la ley de 15 de Julio de 1865, y tarifa aprobada por Real órden de 10 de Agosto de 1866, hasta tanto



que otra cosa disponga el Gobierno de S. A. el Regente del Reino en uso de la autorizacion que le concede el artículo 4.º de la ley, y en vista del efecto que en el mercado cause la concurrencia de la industria privada.

Art. 9.º Los particulares que compren sal á la Hacienda podrán trasportarla y revenderla; y si á sus fines conviniese, podrán exigir que se les expida un *vení* por el Administrador de la fábrica ó del alfolí donde hagan la compra.

Art. 10. Debiendo el Gobierno durante el primer semestre del año próximo proveer los depósitos y alfolies con el surtido ordinario, y un 20 por 100 más los de la region no salinera del Reino, la Direccion general de Rentas adoptará las medidas necesarias al efecto, y los Jefes de las Administraciones económicas observarán cuidadosamente la marcha del consumo, dando cuenta cada 15 dias á aquel Centro á fin de que pueda atenderse á cualquier necesidad que ocurra en el sentido.

Art. 11. Para que el Gobierno pueda tomar á su tiempo las resoluciones convenientes acerca del precio á que ha de vender las sales propias de la Hacienda, cuidarán muy especialmente los Jefes de las Administraciones económicas, por sí y por medio de sus subalternos, de tomar nota de los almacenes y expendedurías que se establezcan y abran en sus respectivos distritos, informándose, sin molestar al comercio, de la procedencia, calidad y cantidad de las sales que se vendan, y sobre todo del precio regulador que se establezca, dando cuenta de todo ello cada 15 dias á la Direccion general del ramo.

Art. 12. El Gobierno determinará la época y precio á que han de venderse las sales de las fábricas cuya explotacion conserva el Estado, y las existencias resultantes en las demas despues de proveer los depósitos y alfolies con el surtido de sal que previene el artículo 4.º de la ley de desestanco.

Art. 13. En las salinas de particulares, beneficiadas actualmente por la Hacienda, venderá esta en la forma establecida para las demas, las sales sobrantes, despues de atender al surtido de los alfolies de su dotacion; pero se liquidará y abonará su coste á los fabricantes, á los precios señalados y en el tiempo, modo y forma establecidos en las respectivas instrucciones y contratos vigentes.



Art. 14. La Hacienda seguirá vendiendo en Torrevieja sal para la exportacion á los precios y bajo las condiciones que hoy la vende, mientras otra cosa no se disponga. Los exportadores se proveerán de guías expedidas por el Administrador de la salina en la forma acostumbrada.

Art. 15. Se disolverán desde 1.º de Enero próximo las rondas volantes del Resguardo especial de Rentas Estancadas, pasando sus individuos á reforzar los destacamentos encargados de la custodia y defensa de las salinas, lagunas y espumeros, hasta que se resuelva sobre su ulterior empleo. Luego que tenga efecto esta disposicion, los comandantes remitirán á la Direccion general de Rentas un estado demostrativo de la nueva distribucion de la fuerza de su mando, con expresion del punto que custodie cada destacamento, y clase y número de individuos de que este se componga.

Art. 16. El Cuerpo de Carabineros y el Resguardo de Rentas estancadas impedirán el desembarque por las costas, y la introduccion por las fronteras del Reino de sales indígenas ó extranjeras, cuando una y otra operacion no hayan sido competentemente autorizadas por las Aduanas, procediendo en este caso á la detencion y entrega del género á la Junta administrativa de la provincia en que tenga efecto la aprehension, á fin de que determine lo que proceda con arreglo á las prescripciones del Real decreto de 20 de Junio de 1852.

Art. 17. Las corporaciones y particulares propietarios de salinas beneficiadas é inutilizadas actualmente por el Estado, deberán acudir, deduciendo el derecho que pueda asistirles para volver á posesionarse de ellas, á la Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, con el fin de que, consultados los títulos de propiedad que presentasen y los antecedentes que tenga la Administracion, resuelva el Gobierno de S. A. el Regente del Reino lo que proceda en justicia, de conformidad á lo prescrito en el párrafo segundo del art. 1.º de la antedicha ley.

Madrid 27 de Diciembre de 1869.—Lope Gisbert.

S. A. el Regente del Reino se ha servido aprobar esta Instrucion. Madrid 27 de Diciembre de 1869.—Fígueroa.



1870.—25 de Enero.—*Orden haciendo extensiva á las fábricas de Ibiza, Formentera y San Pedro del Pinatar, la autorizacion concedida á la de Torrevieja, para la venta de sal, verificándose sólo al precio de gracia para el extranjero y provincias de Ultramar.*

Ilmo. Sr.: Por el artículo 14 de la Instruccion aprobada en 27 de Diciembre último para el cumplimiento de la ley de desestanco de la sal, de 16 de Junio del año próximo pasado, se dispuso que la Hacienda siga vendiendo sal en Torrevieja para la exportacion á los precios y bajo las condiciones que anteriormente, mientras otra cosa no se disponga, proveyendo á los exportadores de las guias correspondientes, y S. A. el Regente Reino, de conformidad con lo propuesto por V. I., á consecuencia de consulta hecha por la Administracion principal de las salinas de las islas Baleares, se ha servido hacer extensiva aquella disposicion á las fábricas de Ibiza y Formentera en dichas islas y San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia, en las que tambien antes se vendia sal con aquel destino; debiendo hacerse la venta sólo al precio de gracia para el extranjero y provincias españolas de Ultramar, en la forma prescrita por la Real orden de 3 de Enero de 1868.

De orden de S. A. lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Enero de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—1.º de Febrero.—*Orden dictando reglas para la descarga de la sal y venta de este artículo en las salinas reservadas por el Estado.*

Ilmo. Sr.: Vista la consulta elevada á esa Direccion general por el Administrador de la Aduana de Vigo, sobre si en el caso de presentarse en aquel puerto algun buque con sal de Torrevieja, de tránsito para las Provincias Vascongadas, concederia la descarga del citado artículo si se solicitase por los dueños y consignatarios:

Considerando que en las salinas del citado punto sólo puede ven-



derse la sal por la Hacienda para la exportacion, segun dispone el artículo 14 de la Instruccion de 27 de Diciembre último:

Considerando que esta exportacion se entiende únicamente al extranjero y á las provincias de Ultramar, pues si bien podia antes extenderse tambien á las Vascongadas, en virtud del art. 14 de la Instruccion de 4 de Enero 1847, porque las circunstancias en este punto, respecto al resto de la nacion, de Guipúzcoa y de Vizcaya, donde por efecto de sus fueros se ejercia libremente el comercio de la sal, eran las mismas que las del extranjero; semejante asimilacion, que en el estanco nada más se fundaba y podia fundarse, cesó de hecho con la terminacion de aquel:

Considerando, sin embargo, que como no se dice esto de un modo terminante en la referida Instruccion de Diciembre, pudo de buena fé el Administrador de Torre vieja creerse autorizado para hacer la venta de la sal con destino á las Provincias Vascongadas:

Considerando que equivaliendo, segun queda manifestado, la exportacion á aquellas á la del extranjero, y previniéndose en la regla 26 del Arancel anterior, vigente en esta parte, que los géneros nacionales que se extraigan con destino á cualquier punto extranjero pueden traerse otra vez á los puertos de la península, previo el pago de los correspondientes derechos como si fuesen extranjeros, sólo es posible permitir el desembarque en Vigo, mediante este pago;

Y considerando que es indispensable dictar reglas claras y terminantes, que eviten en lo sucesivo dudas y perjuicios como los ocasionados con la conducta del referido Administrador de Torre vieja, quien en último término ha vendido la sal á un precio indebido;

S. A. el Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por V. I., se ha servido disponer:

1.º Que se manifieste al expresado funcionario el desagrado con que se ha visto su conducta en el caso de que se trata, encargándole tenga más celo por los intereses de la Hacienda.

2.º Que se permita á los consignatarios de Vigo y á cualquiera otros que se hallen en su caso, descargar sal de la clase de que queda hecho mérito, en aquel puerto ó en cualquiera otro de la Península, previo el pago de los derechos marcados en la partida 86 del Arancel vigente.



Y 3.º Que no se permita de ningun modo vender sal en las salinas reservadas por el Estado, más que para la exportacion al extranjero y á las provincias españolas de Ultramar.

De órden de S. A. lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 1.º de Febrero de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—29 de Marzo.—*Órden habilitando la Aduana de Puigcerdá, provincia de Gerona, para la importacion de sal del extranjero.*

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido á consecuencia de haberse presentado al despacho en la Aduana de Puigcerdá, provincia de Gerona, diez sacos de sal procedentes del extranjero:

Visto el artículo 4.º de la Instruccion de 27 de Diciembre de 1869, relativa al desestanco de la sal;

Y considerando las circunstancias excepcionales de Puigcerdá, aislado en la parte alta del Pirineo y falto de vías de comunicacion con el interior de la Nacion;

S. A. el Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. I., ha tenido á bien disponer que se habilite dicha Aduana para la importacion de sal del extranjero.

De órden de S. A. lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Marzo de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—11 de Abril.—*Órden aprobando la adjunta planta del personal de la salina de Torrevieja, y fijando la cantidad y clase de valores de las fianzas que han de prestar los empleados para garantir el desempeño de sus respectivos destinos.*

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de la exposicion de V. I., fecha 9 del actual, relativa á la conveniencia de



variar la organizacion de la salina de Torrevieja, provincia de Alicante, con objeto de dotarla de los elementos necesarios para establecer en ella la venta pública de sal por mayor y menor, con arreglo á lo prescrito en el art. 5.º de la ley de 16 de Junio del año próximo pasado; y conformándose S. A. con lo propuesto por V. I., se ha servido aprobar la adjunta planta importante 11.220 escudos, disponiendo que cualquiera que sea el destino definitivo que dé el Gobierno á la salina de los Alfaques, provincia de Tarragona, queden suprimidos en su personal, por innecesarios ahora, un fabricante pesador segundo, uno de los norieros ayudantes de pesadores, y los dos capataces pesadores, dotados respectivamente con 300 escudos anuales, cuya medida producirá una economía de 200 escudos á favor del Tesoro, con relacion á los 1.000 que se aumentan á la fábrica de Torrevieja. Al mismo tiempo S. A., de acuerdo con el parecer de V. I., se ha dignado mandar que las fianzas que deben prestar para garantir el desempeño de sus respectivos destinos, el Administrador, Guarda-Almacén, Interventor y Cajero de la citada salina, se fijen, conforme á lo prevenido en la Real orden de 5 de Junio de 1867, en las cantidades y clases de valores que siguen: la del Administrador en 8.000 escudos en metálico ó en valores públicos que deven-guen el interes de 6 por 100, ó 16.000 en los demas valores que gozan el interes de 5 por 100, ó 10.000 en fincas; y las del Interventor y Cajero respectivamente en las cantidades de 4.000, 8.000 ú 8.400 escudos, segun que se presten en metálico, valores ó fincas con arreglo á la designacion que antecede.

De orden de S. A. lo comunico á V. I. para su inteligencia y fines correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Abril de 1870.—Figueroa.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—20 de Abril.—*Orden aprobando las adjuntas reglas para la venta pública de sal, por mayor y menor, en las salinas de Torrevieja.*

Ilmo. Sr.: He dado cuenta al Regente del Reino de lo expuesto por esa Direccion genéral con fecha de ayer, relativamente al modo



y forma de establecer la venta pública de sal al por mayor y menor, en las salinas de Torrevieja, provincia de Alicante, en cumplimiento del precepto consignado en el art. 5.º de la ley de 16 de Junio último. En su virtud, y conformándose con lo propuesto por V. I., se ha servido S. A. aprobar las adjuntas reglas, á que deberá sujetarse la ejecucion del mencionado servicio, disponiendo al mismo tiempo:

Primero. Que la unidad de peso para la venta sea el quintal métrico.

Segundo. Que el minimum de la cantidad vendible, para su conduccion por tierra, sea de dos quintales métricos, y de diez el de la que se transporte por mar.

Tercero. Que el precio de cada quintal métrico de sal, sin lavar y lavada, indistintamente, se fije en 3 pesetas 50 céntimos, y el de la molida en 4 pesetas 50 céntimos.

Y cuarto. Que la venta empiece el día 1.º de Mayo próximo, tomando esa Direccion general las precauciones oportunas para asegurar la responsabilidad de los empleados de aquella fábrica, que en dicha fecha no tuviesen prestada fianza.

De orden de S. A. lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Abril de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

Reglas aprobadas por orden de S. A. el Regente del Reino, fecha de hoy, para la venta pública de sal al por mayor y menor en las salinas de Torrevieja, provincia de Alicante.

1.ª La Hacienda pública establece la venta de sal en las salinas de Torrevieja, provincia de Alicante, para el comercio de la Península é islas adyacentes.

2.ª La venta empezará á verificarse el día 1.º de Mayo próximo al por mayor y menor, segun lo prescrito en el art. 5.º de la ley de 16 de Junio de 1869. El minimum de la cantidad vendible, para su conduccion por tierra, será de dos quintales métricos, y de diez el de la que se transporte por mar.



3.^a El precio á que se vende la sal comun, sin lavar ó lavada, indistintamente, es el de 3 pesetas 50 céntimos por cada quintal métrico, fijado por orden de S. A. de esta fecha.

4.^a La sal molida que en la actualidad existe en las salinas, se vende al precio de 4 pesetas 50 céntimos quintal métrico, señalado asimismo en orden citada en la regla anterior.

5.^a Las sales se venden tal como se encuentran: las en grano en la era-cargadero, y la molida en los almacenes de las salinas. Los que pretendan comprarlas, podrán reconocerlas previamente, en la inteligencia de que despues de satisfacer la fábrica los pedidos de compras, no admitirá reclamacion ninguna sobre el estado y cualidades del género.

6.^a La demanda de sales se hará directamente al Administrador de las salinas, con expresion de los requisitos indicados en los pedidos impresos que se facilitarán gratis en la misma fábrica. Estos pedidos se extenderán con claridad y limpieza, no admitiéndose ninguno que contenga enmiendas ó textaduras, y serán escritos indispensablemente por los que hayan de recibir las sales, si bien, cuando lo hiciesen en representacion de otro, podrán expresar, si les conviene, el nombre y apellido del verdadero comprador.

7.^a El valor de las sales que comprendan los pedidos, se pagará en la Caja de las salinas, al contado y en monedas de oro ó plata precisamente. Hecho el pago, la Administracion de la fábrica expedirá el libramiento de venta contra el fiel de servicio, quien dispondrá se dé principio al peso y entrega de las sales tan luego como proceda, con arreglo al turno que se establezca, debiendo firmarse el recibo del género en aquel documento por los mismos que suscribiesen los pedidos.

8.^a Las operaciones de peso y entrega de sales, se verificarán de sol á sol, sin que durante este espacio de tiempo puedan interrumpirse por ningun concepto, salvo cuando concurren temporales de lluvia ó marejada, ó algun suceso imprevisto las impidiese, cuyo suceso deberá acreditar el Administrador de las salinas ante el Alcalde constitucional de Torreveja. Si á pesar de los temporales quisiese algun comprador continuar recibiendo las sales, los empleados de la fábrica no podrán oponerse á su entrega.



9.ª Las sales se despacharán por el orden de numeracion de los pedidos. El turno de despacho se establecerá diariamente por el Administrador de la fábrica, pasándolo en copia autorizada á los Fieles de ventas para que lo publiquen y cumplan con rigurosa exactitud.

10. El comprador que no se presente á hacerse cargo de las sales en el dia y hora que se le señalen, pasará á ser el último en el turno respectivo. Los empleados de la fábrica no permitirán, bajo su más estrecha responsabilidad, que se prefiera en la entrega de las sales á ningun comprador.

11. Las sales en grano se entregarán á los compradores en el peso de la era-cargadero, y la molida en el de los almacenes de la fábrica; siendo de su cuenta todos los gastos que se causen desde la extraccion del género del peso hasta dejarlo cargado en los buques, carros, caballerías ó cualquier otro medio de transporte que presenten.

12. Se pesarán y entregarán diariamente 300 quintales métricos de sal por lo ménos en cada uno de los pesos útiles de la fábrica; pero si por cualquiera accidente imprevisto que el Administrador de las salinas deberá justificar ante el Alcalde mencionado en la regla 8.ª, no pudiese despacharse toda aquella cantidad de sal, el comprador no tendrá derecho á reclamar indemnizacion de perjuicios por ningun concepto.

13. Los compradores recibirán las sales tal como vayan saliendo de los montones almiarados ó almacenados.

14. A medida que los Fieles de ventas satisfagan los libramientos de sal, cuidarán de devolverlos sin demora á la Administracion de las salinas, para que expida á cada comprador un *vendí* de la cantidad de aquel artículo que le haya sido entregada. Si la extraccion de la sal hubiese de hacerse por la vía marítima, el comprador deberá exhibir el *vendí* al tiempo de presentar en la Administracion de Aduanas de Torre vieja los documentos que se exigen por las Ordenanzas del ramo para la formacion del registro de cabotaje.

15. Despues de presentado un pedido de sal, no se permitirá su traspaso ó cesion, sean cualesquiera las causas que para ello se aleguen.

16. Ninguna partida de sal podrá pernoctar en las salinas, ni en su coto ó redonda, excepto el pueblo de Torre vieja.



17. Los compradores de sal no podrán impedir que el resguardo de las salinas, ó la Administracion de Aduanas de Torrevieja, por medio del Cuerpo de Carabineros ó de otros funcionarios que estime oportuno designar, intervenga las cargas, ni oponerse de ningun modo á que se establezcan sobrecargos en los buques en que se embarque aquel género, hasta que se den á la vela para el puerto de su destino.

Madrid 20 de Abril de 1870.—El Ministro de Hacienda, Figuerola.

1870.—3 de Mayo.—*Real orden declarando válido el recargo de 300 milésimas de escudo, impuesto por las Diputaciones provinciales á cada quintal de sal expendido por cuenta del Estado, durante el segundo semestre del año último.*

Excmo. Sr.: Vista la orden que con fecha 17 de Febrero último se ha servido V. E. comunicar á este Ministerio, respecto al recargo de 300 milésimas de escudo que las Diputaciones provinciales han exigido á cada quintal de sal comun que se haya expendido por cuenta del Estado:

Considerando si ha podido ó no válidamente exigirse el citado arbitrio durante el primer semestre del presente año económico, en cuya época ha seguido estancado dicho artículo y sujeto á la antigua legislación tributaria;

El Regente del Reino, á quien he dado cuenta de esta consulta, se ha servido disponer que se considere válido el mencionado impuesto de 300 milésimas en quintal de sal comun que se haya expendido en las provincias durante el segundo semestre del último año natural, puesto que es ya un hecho consumado que ha sido llevado á cabo en un período en que aún no regía la ley del desestanco.

De orden de S. A. lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1870.—Figuerola.—Sr. Ministro de la Gobernacion.



1870.—3 de Mayo.—*Orden declarando libres de penalidad las diferencias de más ó de ménos en los despachos de sal, siempre que aquellas no excedan del 5 por 100 de la cantidad declarada.*

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la Aduana de Santander, por no conformarse D. Tomás Wyldes con el pago de los derechos de Arancel de 1.322 kilogramos de sal que resultaron de ménos en el despacho de 30.481 que presentó al adeudo, con declaracion núm. 509 de este año:

Considerando que el cloruro de sódio es uno de los artículos más expuestos á sufrir alteracion en su peso, por las influencias atmosféricas, y principalmente en las conducciones por mar;

S. A. el Regente del Reino ha resuelto relevar al interesado de la pena que se le habia impuesto, y disponer, como regla general, que no se penen las diferencias de más ó de ménos en estos despachos, siempre que aquellas no excedan del 5 por 100 de la cantidad declarada.

De órden de S. A. lo digo á V. I. para su conocimiento y demas fines oportunos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—8 de Junio.—*Ley fijando el presupuesto de ingresos del Estado, para el año económico de 1870 á 71.*

Artículo 4.º Se autoriza al Ministro de Hacienda para enajenar en subasta pública las salinas de los Alfaques y de Imon, con arreglo á lo dispuesto en la ley de desestanco de la sal.

1870.—10 de Mayo.—*Orden disponiendo que los cargamentos completos de sal, puedan despacharse en uno ó más puertos habilitados con arreglo al artículo 13 de las Ordenanzas.*

Ilmo. Sr.: Visto que el Administrador de la Aduana de Valencia ha permitido á los buques españoles *San José y Teresa*, que llega-



ron á aquel puerto con cargamentos completos de sal, que siguieran á otros puertos á terminar la descarga, bajo las seguridades prevenidas en el artículo 13 de las Ordenanzas; S. A. el Regente del Reino se ha servido aprobar el proceder de dicho Jefe y disponer que los cargamentos completos de sal puedan despacharse en uno ó más puertos habilitados en los términos y bajo las reservas y formalidades contenidas en el artículo 13 de las Ordenanzas de la Renta.

De orden de S. A. lo digo á V. I. para su inteligencia y demas fines oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Mayo de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—10 de Junio.—*Orden disponiendo que para la tasacion de las salinas del Estado en aquellas provincias donde no haya Ingeniero industrial ó de minas que se encargue de dicho servicio, se nombre uno al efecto, el cual percibirá los derechos que se expresan.*

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino del expediente instruido por esa Direccion general sobre las dificultades que ha encontrado la Administracion económica de Albacete para el aprecio en venta de las salinas de aquella provincia, toda vez que no hay en ella Ingeniero de minas ni industrial que se encargue de este servicio; así como también sobre el modo y forma de abonar á los Ingenieros de minas los gastos y dietas que devenguen en tal comision:

Considerando que las tasaciones de las salinas mandadas vender por la ley del desestanco, de 16 de Junio de 1869, exigen la concurrencia de un perito especial, de la manera que se acordó tambien al tratarse del justiprecio de las fábricas de salitres y pólvora y de la mina de azufre de Hellin:

Considerando que es urgente adoptar una medida que sirva de regla, á fin de que no sufra dilaciones perjudiciales á la Hacienda pública, lo dispuesto en la mencionada ley de 16 de Junio del año próximo pasado, relativamente á la práctica de las diligencias de enajenacion de las fábricas de sal que pertenecen al Estado; S. A. ha



tenido á bien disponer que para las tasaciones de las citadas salinas se nombre un Ingeniero industrial ó de minas, ademas de concurrir al acto el perito ó peritos ordinarios que deben intervenir en el aprecio de todas las pertenencias que constituyan aquellas.

Al propio tiempo se ha servido resolver S. A., que al Ingeniero industrial que se encargue de las referidas tasaciones, se le abonen, por razon de ejercer libremente su profesion, los derechos del aprecio que ejecute, con arreglo á lo prevenido en las leyes desamortizadoras y segun lo determinan las tarifas aprobadas para estos casos, y que cuando la operacion de tasacion se encomiende á un Ingeniero de minas, se paguen á este por el Tesoro, solamente en concepto de anticipo, con cargo al capítulo 2.º, artículo 3.º, seccion 10.ª del presupuesto corriente, los gastos de ida y vuelta á las salinas y las dietas de tasacion que devenguen; pero á reserva de que al venderse aquellos establecimientos, reintegren los compradores al Tesoro público el importe de dichas dietas y gastos, á cuyo efecto se prevendrá á los Jefes de las Administraciones económicas que en el anuncio en venta de los referidos establecimientos, publiquen por medio de advertencia, que será obligacion del comprador reintegrar al Tesoro público, la cantidad que el Ingeniero de minas haya devengado por los gastos de transporte de ida y vuelta á la salina y dietas de la tasacion, sin perjuicio del pago á los demas peritos que concurren, cuyos derechos serán los marcados en las tarifas aprobadas para estos casos.

De órden de S. A. lo comunico á V. I. á los efectos consiguientes.
—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Junio de 1870.—
Figueroa.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado.

1870.—24 de Junio.—*Órden fijando el precio y condiciones para la venta de la sal en las salinas del Estado, con destino al extranjero y provincias españolas de Ultramar.*

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. A. el Regente del Reino de lo expuesto por esa Direccion general en 11 del corriente mes, demostrando la conveniencia de variar las condiciones, bajo las cuales se



verifica hoy en las salinas del Estado la venta de la sal para el extranjero y para las provincias españolas de Ultramar.

En su vista, y considerando que por la omnimoda libertad de que ahora goza la fabricacion, importacion y venta de la sal, en virtud de la ley de 16 de Junio del año último, han cesado las causas que pudieron dar lugar á los privilegios concedidos á la exportacion por la Real orden de 24 de Abril de 1820 y otras posteriores; y considerando que es preciso evitar la desnivelacion que hoy existe entre el precio de la sal para la exportacion, y el de la que se destina al consumo del país, puesto que en otro caso podrian cometerse abusos que vinieran á ocasionar grandes quebrantos á la Hacienda pública por una parte, y por otra á la industria y el comercio de la nacion, dignos por cierto de la proteccion del Gobierno; S. A. el Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido adoptar las disposiciones siguientes:

1.^a Que se fije en una peseta el precio de cada quintal métrico de sal comun, sin lavar y lavada indistintamente; que se venda para la exportacion al extranjero y posesiones españolas de Ultramar en la salina de Torrevieja, que se ha reservado el Estado segun la ley de 16 de Junio de 1869, y en las de Pinatar é Ibiza mientras no se enajenen.

2.^a Que la sal se entregue á los compradores en el peso de la encargadero, siendo de su cuenta todos los gastos que se causen desde la extraccion del género del mismo peso hasta dejarlo cargado en los buques en que deba verificarse la exportacion.

3.^a Que el pago de la sal se haga al contado, y en moneda de oro ó plata precisamente.

4.^a Que quede abolido el premio de 6 por 100 señalado á Capitanes de los buques extractores, por Real orden de 24 de Abril de 1820.

Y 5.^a Que estas disposiciones empiecen á regir el día 1.^o de Julio próximo, y se comuniquen al Sr. Ministro de Estado para que, por el mismo, se trascriban al Cuerpo consular en el extranjero, con encargo de que se les dé toda la mayor publicidad.

De orden de S. A. lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Junio de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.



1870.—25 de Junio.—*Orden fijando los precios á que se expendrán al por mayor, desde 1.º de Julio, las sales existentes en los depósitos y alfolíes del Estado.*

Ilmo. Sr.: Debiendo procederse á la venta de todas las sales existentes en los depósitos y alfolíes del Estado, segun lo prescrito en el art. 4.º de la ley de desestanco de 16 de Junio del año último; el Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido resolver que desde 1.º de Julio próximo se lleve á debido efecto aquella disposicion, vendiéndose las sales al por mayor en los expresados depósitos y alfolíes, á los precios siguientes:

ZONA SALINERA.—Primera division. Parte marítima: A dos pesetas quintal castellano en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castellon, Granada, Gerona, Huelva, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia é Islas Baleares.—*Segunda division.* Parte terrestre: A tres pesetas quintal castellano en las provincias de Avila, Badajoz, Cáceres, Ciudad-Real, Leon, Madrid, Orense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

De órden de S. A. lo comunico á V. I. para su inteligencia y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Junio de 1870.—Figueroa.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—5 de Julio.—*Orden disponiendo que se proceda á arrendamiento, en pública subasta, de la cosecha que en el año actual produzcan las fábricas de sal pertenecientes al Estado.*

No habiendo sido posible llevar á efecto la enajenacion de las fábricas de sal, prevenida por la ley de 16 de Junio del año último, ni siendo en la actualidad conveniente á los intereses del Estado verificarla hasta obtener en el año actual el producto de la cosecha de las mismas, á fin de compensar los gastos del personal encargado de la custodia y resguardo de dichos establecimientos; como Regente del Reino, y conformándome con lo que de acuerdo con el Consejo de



Ministros me ha propuesto el de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se procederá, por la Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, al arrendamiento en pública subasta de la cosecha que en el año actual puedan producir las fábricas de sal de que se ha incautado por virtud de la ley de 16 de Junio del año último. En atencion á lo avanzado de la estacion, la subasta se verificará á los diez dias de anunciada.

Art. 2.º Se tomará por tipo de produccion para el arrendamiento el número de quintales de sal que, por término medio, se haya obtenido en cada salina en el quinquenio de 1865 á 1869.

Art. 3.º El precio del arriendo será el importe de los quintales que se supongan de produccion, al tipo medio á que se venda en la provincia en que se halle situada la salina, deduciéndose del total del coste que por fabricacion tuvo al Estado cada quintal en el expresado quinquenio, y un 10 por 100 por razon de gastos de transporte y mermas.

Art. 4.º Si el arrendatario hiciese producir mayor número de quintales de sal que el que sirve de base para la subasta, quedará el exceso á su favor; pero no tendrá derecho á indemnizacion alguna, si la produccion no alcanzase á aquel número.

Art. 5.º Se comprenderán en el arriendo todos los edificios, terrenos, útiles de fabricacion y demas efectos necesarios para la explotacion, que de propiedad del Estado existan en los establecimientos, de los cuales se hará entrega al arrendatario bajo inventario, por la Administracion económica de la provincia respectiva, á satisfaccion de la cual prestará el arrendatario la correspondiente fianza.

Art. 6.º Se exceptúan de lo prevenido en el artículo anterior, el almacen ó almacenes de cada salina en que la Hacienda tenga existencias.

Art. 7.º El pago del arriendo se hará en dos plazos iguales, el primero al tiempo de otorgarse la escritura, y el segundo el dia 1.º de Octubre próximo.

Art. 8.º La duracion del arriendo, que sólo comprenderá la cosecha de sal del año actual, será hasta 31 de Diciembre próximo.

Art. 9.º Si en la primera subasta no hubiese postor, se procederá



á segunda con baja del 5 por 100 del tipo que como precio del arriendo haya servido para la primera, y en su caso á la tercera con otra baja igual á la hecha para la segunda. El plazo para estas subastas sólo será de cinco días entre el anuncio y el remate.

Art. 10. La Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado formulará los pliegos de condiciones y procederá á lo demas que corresponda para el cumplimiento de este decreto.

Dado en San Ildefonso á 5 de Julio de 1870.—Francisco Serrano.
—El Ministro de Hacienda, Laureano Figuerola.

1870.—28 de Julio.—*Orden suspendiendo hasta el 15 de Setiembre próximo la aplicacion de lo dispuesto en la de 24 de Junio último, acerca de la venta de sal para el extranjero.*

Ilmo. Sr.: S. A. el Regente del Reino, atendiendo á lo expuesto por el comercio extranjero que se dedica á la exportacion de sal, de las salinas habilitadas al efecto, se ha servido mandar que se suspenda hasta el 15 de Setiembre próximo la aplicacion de su orden de 24 de Junio último; siguiéndose entretanto para las ventas de sal al extranjero las reglas vigentes antes de la orden mencionada, excepto el pago de transporte desde la era-cargadero hasta el buque, que ha de ser de cuenta del cargador.

De orden de S. A. lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 28 de Julio de 1870.
—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—20 de Setiembre.—*Orden mandando que continúe en suspenso la ejecucion de una orden referente á las reglas que han de observarse para la venta y extraccion de sales de Torrevieja, San Pedro del Pinatar é Ibiza y Formentera.*

Ilmo. Sr.: S. A. el Regente del Reino se ha servido mandar que hasta 1.º de Noviembre próximo continúe en suspenso la ejecu-



cion de su orden de 24 de Junio de este año, referente á las reglas que en lo sucesivo han de observarse en las salinas de Torrevieja, San Pedro del Pinatar, é Ibiza y Formentera, para la venta y extraccion de sales al extranjero y posesiones de Ultramar; pero continuando el pago de trasporte desde la era-cargadero hasta el buque por cuenta del encargado, segun lo dispuesto en la anterior orden de suspension de 28 de Julio próximo pasado.

De orden de S. A. lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 20 de Setiembre de 1870.—Figueroa.—Sr. Director general de Rentas.

1870.—7 de Octubre.—*Orden modificando la de 10 de Junio último, relativa á las dietas y gastos que deben abonarse á los Ingenieros industriales nombrados para la tasacion de las salinas pertenecientes al Estado.*

Ilmo. Sr.: Enterado S. A. el Regente del Reino del expediente instruido por esa Direccion general sobre la modificacion de la orden de la Regencia, fecha 10 de Junio último, relativamente al abono de dietas á los Ingenieros industriales que se nombran para la tasacion de las salinas mandadas vender por la ley de 16 de Junio de 1869; y resultando que la citada orden dispone, que á los expresados Ingenieros se les abone por ejercer libremente su profesion los derechos del aprecio que ejecuten, con arreglo á lo prevenido en las leyes desamortizadoras, y segun las tarifas aprobadas para estos casos;

Resultando que invitados algunos de los Ingenieros de que se trata para que procediesen á tasar dichas salinas, no han podido verificarlo por la exígua cantidad que hubieran devengado con arreglo á las tarifas:

Considerando que, con efecto, existe notable desproporcion entre la recompensa que se ha señalado por este servicio á los Ingenieros de Minas y á los industriales, puesto que los primeros disfrutan haber del Estado, ademas de las dietas y gastos de viaje;

Considerando que aún resulta mayor, si se atiende á que las tarifas citadas no tienen aplicacion equitativa á las salinas, porque fijan la hectárea como tipo de unidad superficial, ni guardan relacion con



la importancia de los trabajos que deban ejecutarse para apreciar la bondad del mineral ó analizar las aguas que constituyen la riqueza de esta clase de fincas:

Considerando que por lo tanto no ofrecen ventaja alguna á los Ingenieros industriales, obligados á hacer mayores gastos, por lo mismo que no forman Cuerpo facultativo con sueldo fijo; y

Considerando que la equidad aconseja se les asimile en lo posible en estos casos, á los Ingenieros de Minas;

S. A. se ha servido aprobar la modificacion de la citada orden de 10 de Junio último, en la parte que se refiere á los derechos de tasacion de que se trata, en la forma siguiente:

1.º Los Ingenieros industriales nombrados para la tasacion de las minas que pertenecen al Estado, devengarán por razon de dietas 15 pesetas diarias, que son las que asigna á los Ingenieros primeros y segundos de minas el artículo 29 del reglamento aprobado por Real decreto de 1.º de Febrero de 1865.

2.º Devengarán ademas otras 5 pesetas como indemnizacion por la falta de sueldo fijo y demas gastos de análisis químicos, adquisicion de instrumentos, transporte de estos, etc., aparte de los viajes de ida y vuelta á la salina, que se abonarán lo mismo que á los Ingenieros de Minas.

3.º De dichas dietas y gastos se formará la oportuna cuenta justificada, cuidando de acreditar el dia que empiecen á devengarse y aquel en que deban terminar, por medio de certificacion del Jefe económico de la provincia en que radique la salina.

4.º El abono de estas cuentas se hará con aplicacion al presupuesto y demas términos que previene la orden de la Regencia de 10 de Junio de este año; y

5.º Los peritos Ingenieros en todos los casos acompañarán á las certificaciones de tasacion de salinas para la venta, copia autorizada de la cuenta de dietas y gastos, cuyo importe, despues de aprobada, se insertará en el anuncio de subasta.

De orden de S. A. lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Octubre de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado.



1870.—25 de Octubre.—*Orden prorogando hasta 1.º de Enero próximo la de 24 de Junio último, referente á las reglas que se han de observar en la fábrica de Torrevieja para la exportacion de sal.*

Ilmo. Sr.: S. A. el Regente del Reino se ha servido prorogar nuevamente hasta 1.º de Enero próximo el cumplimiento de su orden de 24 de Junio último, referente á las reglas que en lo sucesivo han de observarse en la fábrica de Torrevieja para la exportacion de sal al extranjero y posesiones españolas de Ultramar, pero á condicion de que ha de continuar á cargo de los exportadores el pago del transporte desde la era-cargadero hasta el buque, como se previene en las órdenes de 28 de Julio y 20 de Setiembre de este año.

De orden de S. A. lo digo á V. I. para los efectos correspondientes.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Octubre de 1870.—Figuerola.—Sr. Director general de Rentas.

1871.—3 de Enero.—*Real orden alterando ciertas reglas referentes á las ventas de sal al extranjero en la salina de Torrevieja.*

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey, en vista de lo expuesto por V. I. en 28 de Diciembre próximo pasado, se ha servido mandar que continúe en suspenso hasta nueva resolucion, la aplicacion de las reglas prefijadas en la orden de S. A. el Regente del Reino, en 24 de Junio último, siguiéndose entretanto para las ventas de sal al extranjero en la salina de Torrevieja, las que antes regían, excepto el pago del transporte desde la era-cargadero hasta el buque, que ha de ser de cuenta del cargador.—De Real orden, etc.—Moret.

1871.—18 de Enero.—*Real orden dictando varias disposiciones para la venta de las sales existentes en los alfolies y depósitos de la Península é Islas Baleares.*

Ilmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa Direccion general sobre la urgente necesidad de que se vendan las sales exis-



tentes en los alfolíes y depósitos de la Península é islas Baleares, con objeto de realizar en un corto plazo el capital que representan, desocupar los almacenes que están arrendados á particulares y suprimir el personal que corresponda, ahorrándose el Tesoro público el pago de los alquileres de aquellos y los sueldos de este;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido resolver:

1.º Que los Jefes de las Administraciones económicas, procedan inmediatamente á la venta de las existencias de sal que respectivamente resultan en los alfolíes y depósitos de cada provincia, ya sea por subasta pública ó por ajustes alzados en grandes ó pequeñas cantidades, segun la abundancia de sales de propiedad particular, dejando á su juicio la adopcion del medio que consideren más pronto y eficaz, al resultado que se desea.

2.º Que los mismos Jefes fijen el tipo de precio minimum á que en la provincia ó en cada localidad deben venderse las sales, en la inteligencia de que podrá ser 50 céntimos más bajo que el que por término medio tengan en el mercado las de la industria particular, si fuere necesario hacer esta rebaja para realizar inmediatamente la venta.

3.º Que en justificacion de todas las circunstancias que aconsejen la rebaja de precio que queda indicada, instruyan expediente dichos Jefes en vista de las notas de precios que les faciliten los almacenistas de sal y los Alcaldes de las respectivas localidades, cuyas notas se unirán al cuerpo expediente, para que puedan ser comprobadas en esa Direccion.

Y 4.º Que las Administraciones económicas dediquen todo su celo, inteligencia y cuidado á este importante asunto, con el fin de realizar las ventas en el menor tiempo posible, y con las mayores ventajas para el Estado.

De Real orden lo comunico á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Enero de 1871.—Moret.—Sr. Director general de Rentas.



1871.—17 de Febrero.—*Real orden haciendo extensivas las prescripciones de la del 18 de Enero último á las ventas de las sales de espuma, molida, purgante, misturada, bolas y ladrillos.*

Ilmo. Sr.: Con objeto de que puedan dictarse las reglas á que se ha de sujetar la justificacion de las ventas de sales existentes en los alfolíes y depósitos de la Península é islas Baleares que prescribe la Real orden de 18 de Enero último;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por V. I., se ha servido declarar que las disposiciones de la citada Real orden son extensivas á las ventas de las sales de espuma, molida, purgante, misturada, bolas y ladrillos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Febrero de 1871.—S. Moret.—Sr. Director general de Rentas.

1871.—26 de Febrero.—*Orden disponiendo que se publique con el carácter general para casos análogos, la resolucion que ha recaído en el expediente sobre concesion de una mina de sal, bajo el nombre de Enrique Tomás.*

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con ocasion de una consulta del Jefe de la Administracion económica de Barcelona sobre si las minas de sal concedidas con arreglo á la ley de minería, deben satisfacer el cánon que la misma establece por razon de superficie, y ademas la contribucion territorial correspondiente ó sólo esta última:

Considerando que por los artículos 1.º y 2.º de la ley de minas de 6 de Julio de 1859 reformada por la de 4 de Marzo de 1868, se dispone que son objeto especial del ramo, entre otras, las sustancias salinas, ya se presenten en capas, filones ó cualquiera otra forma de yacimiento, con tal que su disfrute exija un ordenado laboreo y que su propiedad pertenezca al Estado, sin que nadie pueda disponer de ellas sin concesion del Gobierno:

Considerando que el art. 13 de las mismas leyes determina que



constituye la pertenencia comun de una mina de sulfato de sosa y sal gema un sólido de base rectangular de 500 metros de largo y 300 de ancho, ó sean 150.000 metros en su totalidad; el artículo 80 señala á dichas pertenencias el cánón anual de 20 escudos por razon de superficie, y el 85 previene que la industria minera no puede ser recargada con otros impuestos fuera de los que en las citadas leyes se establecen:

Considerando que si bien, segun el artículo 30 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, parece que todas las minas y canteras están sujetas por el terreno que ocupan á la contribucion de inmuebles, no se refiere seguramente dicho artículo á las de que trata el 1.º de la ley de minas, sino á las del 3.º de la misma, ó sea á las producciones silíceas, calcáreas y demas sustancias que deben aplicarse á la construccion, á la agricultura ó á las artes, las cuales están declaradas por la precitada ley, de aprovechamiento comun cuando se hallen en terreno del Estado ó de los pueblos, y de explotacion particular, cuando en terreno de propiedad privada y exentas de las formalidades y cargas de la misma ley:

Considerando que aun cuando el espíritu del citado art. 30 del decreto fuese el de que las minas de todas clases contribuyeran por territorial, no podria aplicarse hoy á las comprendidas como las de que se trata en las prescripciones de la vigente ley de minas, por oponerse á ello la prohibicion que establece el referido artículo 85 de la misma, si bien pudiera tener aplicacion con referencia á las demas sustancias, que hallándose fuera de las condiciones mineras hayan de someterse á las reglas comunes en materia de impuestos:

Considerando, por último, que la ley de 16 de Junio de 1869 sobre desestanco de la sal, tampoco contiene disposicion alguna que se oponga á las consignadas en la ya citada del ramo de minas; este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por esa Direccion general, y con el dictámen de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, ha resuelto:

1.º Que la mina á que se refiere la consulta de la Administracion económica de Barcelona y todas las que se hayan registrado y concedido, y cuantas se registren y concedan por los trámites exigidos en la ley vigente de minas, con arreglo á las condiciones impuestas por



la misma, están sujetas al pago del cánón establecido en su artículo 80.

Y 2.º Que sólo las sustancias exceptuadas de las prescripciones mineras deben pagar la contribucion territorial, con arreglo al art. 30 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845.

Lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 1871.
—Moret.—Sr. Director general de Contribuciones.

1871.—9 de Agosto.—*Real orden fijando las reglas que se han de observar en la salina de Torrevieja para la venta de sus sales, régimen y gobierno de su administracion.*

Ilmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. I. en 24 de Julio próximo pasado relativamente al despacho y precio de las sales de la salina de Torrevieja y mejoras necesarias en su administracion:

Considerando las nuevas condiciones que tiene hoy en España la industria salinera, por efecto de la ley de desestanco de 16 de Junio de 1869:

Considerando la necesidad de asimilar en lo posible la venta de la sal de la fábrica de Torrevieja, única que la Hacienda explota, á las demas del Reino, tanto en los precios como en las condiciones, evitando así ciertos abusos que podian cometerse á la sombra de embarques simulados para el extranjero, con perjuicio de los intereses generales é industriales:

Considerando igualmente la precision de fijar la unidad del quintal métrico para todas las operaciones de dicha fábrica de Torrevieja, segun lo dispuesto por punto general:

Considerando la economía de simplificar la contabilidad del mismo establecimiento, y de que cesen de una vez para siempre los privilegios que gozaban antiguamente los cargadores para el extranjero de pagar á plazos, así como la bonificacion que se hacia á los Capitanes de los buques extractores, que hoy son insostenibles:

Considerando asimismo lo indispensable que es dictar algunas reglas sobre otros varios puntos importantes, ya en cuanto á la guar-



da y custodia de la salina de que se trata, y ya tambien respecto á las facultades y operaciones de su administracion, variada como lo ha sido últimamente su organizacion y manera de ser;

Y considerando, por último, que es preciso poner término á los vicios que el trascurso del tiempo y las circunstancias habian introducido;

Este Ministerio, de conformidad con el parecer de V. I., ha aprobado las siguientes reglas que en lo sucesivo se han de observar en la salina de Torrevieja para la venta de sus sales, régimen y gobierno de su administracion:

1.^a Se fija en una peseta y 25 céntimos y en una peseta, el precio respectivamente de cada quintal métrico de sal comun, lavada, y sin lavar, que se vende para el comercio de la Península é islas adyacentes en la salina de Torrevieja, que se ha reservado el Estado, segun la ley de 16 de Junio de 1869, y en una peseta y en 90 céntimos de peseta respectivamente el quintal métrico de dichas clases de sal, para la exportacion al extranjero y posesiones españolas de Ultramar.

2.^a El minimum de la cantidad vendible por tierra será de dos quintales métricos y de 10 por mar para el comercio de la Península é islas adyacentes. El de la que haya de exportarse al extranjero y posesiones españolas de Ultramar será de 100 quintales métricos.

3.^a La sal se entregará á los compradores en el peso de la encargadero, siendo de su cuenta todos los gastos que se causen desde la extraccion del género del mismo peso hasta dejarlo cargado en los medios de transporte que presenten.

4.^a La Administracion de la salina cuidará de formalizar y vigilar la ejecucion de un contrato ó concierto, que se estipulará con los dueños de las barcasas para poner la sal á bordo con los menores gastos posibles, que serán de cuenta de los compradores, los cuales no obstante podrán trasportar por sí ó por quien tenga por conveniente, el género desde la era cargadero al buque.

5.^a Los buques que por su calado puedan atracar á los muelles de la salina para recibir la sal podrán hacerlo, á no ser que el estado del mar lo impidiere.

6.^a La sal se entregará pesando por tandas en todos los pesos disponibles á la vez, y se embarcará por uno solo ó ambos muelles, si



así conviniese á la Administracion para activar el despacho de los cargamentos.

7.^a Las sales se venden tal como se encuentran en la era-cargadero. Los que pretendan comprarla, podrán reconocerla préviamente; en la inteligencia de que despues de satisfacer la fábrica los pedidos de compra, no admitirá reclamacion ninguna sobre el estado y cualidades del género.

8.^a Las operaciones de peso y entrega de sales se verificará de sol á sol, sin que durante este espacio de tiempo puedan interrumpirse por ningun concepto, salvo cuando ocurran temporales de lluvias ó marejada, ó algun suceso imprevisto que en realidad las impidiese.

9.^a Ninguna partida de sal podrá pernoctar en la salina ni en su coto ó redonda, excepto el pueblo de Torrevieja.

10. El pago de la sal se hará al contado y en monedas de oro ó plata precisamente, en la Caja de la salina, en la Administracion económica de Alicante ó en la Tesorería Central. En cualquiera de estos dos últimos casos se verificará la entrega del género en vista de la carta de pago correspondiente, y aviso por el correo.

11. Queda abolido el premio de 6 por 100 señalado á los Capitanes de los buques extractores por Real orden de 24 de Abril de 1820.

12. El turno de despacho se establecerá diariamente por la Administracion en vista de los pedidos cuyo importe haya ingresado en la Caja de la misma; pero considerando como si fuese una sola barcaza á cada buque que por razon de su calado atraque á los muelles, dándole por consiguiente de una vez todo el cargamento.

13. Si por razones atendibles, á juicio de la Administracion, un comprador dejare de tomar la sal en el turno que le corresponda con arreglo al número de su pedido, pasará á ser el último en el turno del día correspondiente.

14. La falúa que existe en el establecimiento se dotará con un cabo y cuatro individuos del Resguardo actual, que sean marineros, para que á las órdenes de la Administracion vigilen los muelles y andenes, las operaciones de carga, y con especialidad los buques de bahía para evitar trasbordos.

15. Los compradores de sal no podrán impedir que el Resguardo



de la salina ó la Administracion de Aduanas de Torrevieja, establezcan sobrecargos en los buques y se sellen las escotillas ínterin permanezcan en bahía con sal á bordo hasta que se den á la vela para el puerto de su destino, cuyo requisito cuidará de que se cumpla la Administracion de la salina en todo caso.

16. Se remitirán notas de los precios fijados á los Agentes consulares de España en el extranjero, para que por repetidos anuncios en los principales periódicos de las respectivas localidades, se les dé la mayor publicidad. Tambien se fijarán los precios en los sitios más públicos de la salina y Aduana de Torrevieja para conocimiento de los compradores.

17. La venta de sales para la Península é islas adyacentes, se verificará anotando en un libro talonario, que se llamará diario de ventas:

- 1.º El nombre, apellido y vecindad del comprador.
- 2.º La cantidad y clase de sal.
- 3.º El importe de la misma.
- 4.º El ingreso de esta en la Caja de la Administracion.
- Y 5.º La fecha.

Estos talones estarán numerados correlativamente y llevarán la firma del Administrador, con la toma de razon del Interventor, prohibiéndose expresamente que contengan raspaduras ó enmiendas. Cuando alguno se inutilice, se rayarán de alto á bajo, expresándose por nota la causa de la inutilizacion. Extendido el talon y consignados sus pormenores en la matriz, se entregará al comprador para que á su presentacion por el mismo en la era-cargadero procedan los Fieles de ventas á la entrega del género.

18. A medida que los Fieles satisfagan los talones, cuidarán de devolverlos requisitados á la Administracion de la salina para que expida un vendí á cada comprador.

19. Las ventas de sal para el extranjero y posesiones españolas de Ultramar se verificarán con las siguientes formalidades:

1.ª La demanda de sales se hará directamente al Administrador de la salina, con expresion de los requisitos indicados en los pedidos impresos, que se facilitarán gratis en la misma fábrica. Estos pedidos se extenderán con claridad y limpieza, no admitiéndose ninguno que contenga enmiendas ó testaduras, y serán suscritos indispensa-



blemente por los Capitanes ó patrones de los buques extranjeros, ó en su defecto por los consignatarios.

2.^a Hecho el pago del importe de la sal en la forma que determina la regla 10, la Administracion de la fábrica dispondrá se dé principio al peso y entrega del género con arreglo al turno que se establecerá.

3.^a Satisfechos los libramientos de sal, se devolverán inmediatamente á la Administracion de la salina para que expida las guias correspondientes.

20. El Administrador de la salina de Torre vieja, será el Jefe del Resguardo asignado á la misma por la órden de S. A. el Regente del Reino de 23 de Junio de 1870, asumiendo todas las atribuciones y deberes que al Comandante señala el Reglamento orgánico de 25 de Abril de 1858, mediante la supresion de este cargo dispuesta por Real órden de 29 de Marzo de este año.

21. Para ingresar en el Resguardo será condicion indispensable haber servido con buena nota en el Ejército, Guardia civil ó Carabineros.

22. Las vacantes que ocurran se proveerán por la Direccion general de Rentas previa propuesta del Administrador de las salinas, motivando igualmente las que haga cuando en interes del servicio sea necesario acordar la separacion de alguno de sus dependientes.

23. Durante la época de la elaboracion de sales, los cargos de la cantidad recolectada, se harán diariamente en la forma que hoy se verifica, por espuelas que contengan 30 kilogramos de peso de aquel artículo.

24. La Administracion de la salina remitirá en fin de cada semana á la Direccion general de Rentas un acta firmada por el Administrador, Interventor y Maestro de labores de los quintales de sal recolectados en cada día, con distincion de las clases, haciéndose constar tambien por los dos primeros funcionarios la circunstancia de quedar hecho el cargo de los mismos en los libros del establecimiento.

25. No se abonarán las faltas de sal por ningun concepto, salvo un caso de fuerza mayor inevitable, legalmente justificado.

26. Tampoco serán de abono en ningun tiempo, las entregas de sal á los vecinos de Torre vieja.



27. El acarreo de las sales desde los diques á la era-cargadero se verificará por quintales métricos, pesándose los carros conductores en básculas que se establecerán en aquel local.

28. Durante el tiempo del transporte de sales, llevará la Administracion y remitirá á la Direccion general de Rentas, una cuenta justificada por montones y clases de la sal acarreada, expresándose la cosecha de que proceda, cuando sean necesarios gastos de cava y otros, entendiéndose que se aumentarán al cargo de cada clase de sal los sobrantes que resulten al terminar el acarreo de cada monton.

29. Al cesar en sus destinos el Administrador é Interventor de la salina, se comprobarán las existencias de sales por medio de cubicacion, la cual se verificará por los empleados saliente y entrante ó por dos peritos, uno de cada parte; en caso de discordia, la dirimirá un tercero, designado por los interesados, ó por la Direccion de Rentas, sino se avinieren en el nombramiento. Si el Administrador ó Interventor cesante prefiriese la intervencion hasta la conclusion de las existencias, se establecerá sufragando todos los gastos el que la origine.

30. La Hacienda pública, y en su representacion la Direccion general de Rentas, tiene el derecho en cualquier tiempo y ocasion, de cubicar ó repesar las sales para la comprobacion de las existencias; en cuyo caso nombrará un perito facultativo y otro los empleados responsables, quienes practicarán la operacion que se ordene; y no resultando conformidad en la cubicacion, decidirá un tercero sobre la diferencia. El resultado de la cubicacion causará estado en los libros y cuentas de la salina, y llevará consigo la responsabilidad de las faltas que se descubran.

31. Se declaran en su fuerza y vigor las reglas de contabilidad comunicadas á la fábrica de Torre vieja en 25 de Abril del año próximo pasado, y la Instruccion de 4 de Enero de 1847, en cuanto no se oponga á las disposiciones que quedan expresadas, las cuales regirán desde 1.º de Setiembre próximo para la Península é islas adyacentes, y desde 1.º de Octubre para el extranjero y posesiones españolas de Ultramar.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes.
—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1871.—
Ruiz Gomez.—Sr. Director general de Rentas.



1871.—9 de Agosto.—*Real orden disponiendo que en la salina de Torre-
vieja se venda la sal de grumos á 4 pesetas el quintal métrico.*

Ilmo. Sr.: En vista de lo manifestado á esa Direccion general por el Administrador de la salina de Torrevieja, respecto á la escasa venta que en ella se nota de la sal de grumos, y de conformidad con lo propuesto en su consecuencia por V. I., ha acordado este Ministerio que en lo sucesivo se venda la expresada sal de grumos en dicha salina, al precio de 4 pesetas el quintal métrico.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.—
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1871.—
Ruiz Gomez.—Sr. Director general de Rentas.

1872.—20 de Abril.—*Orden modificando varias reglas de la orden de 9
de Agosto último, referentes á la venta de sales para el extranjero y pose-
siones de Ultramar, en la salina de Torrevieja, provincia de Alicante.*

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (q. D. g.), del expediente ins-
truido en esa Direccion general con motivo de las instancias eleva-
das á este Ministerio por el Ayuntamiento y comerciantes de la villa
de Torrevieja, provincia de Alicante, haciendo presente la conve-
niencia de modificar algunas de las reglas que marca la orden de 9
de Agosto del año próximo pasado referente á la venta de sales para
el extranjero y posesiones de Ultramar en la salina de dicho punto;
y S. M., conformándose con lo propuesto por V. E. en 24 de Marzo
último, se ha servido disponer:

1.º Que se modifique la regla 1.ª de las contenidas en la enun-
ciada orden rebajándose el precio de la sal que se expendia en la cita-
da salina para el extranjero y posesiones de Ultramar á 90 céntimos
de peseta el quintal métrico de la lavada, y á 75 el de la sin lavar.

2.º Que se reforme la regla 3.ª en el sentido de que no es obliga-
torio el peso de todas las partidas parciales de cada cargamento, sino
que puede hacerse uso de unos cajones ó canastillas de cabida de un
quintal castellano de sal, que siendo propiedad del comercio, estarán



sellados y custodiados por la Administracion de la fábrica; declarándose desde ahora que teniendo esta reforma por base la celeridad en el despacho, y pudiendo los empleados vigilar las conducciones que se verifiquen de aquella manera y confrontar su peso cuando lo crean conveniente, no será nunca motivo para disculpar las faltas en los cargos de la fábrica este nuevo método de entregar la sal á los compradores.

3.º Que se modifique tambien la regla 10 en el concepto de que no es necesario el previo pago de la sal para empezar la carga, sino que los Capitanes ó consignatarios podrán entregar *pagarés* á plazo menor que el que necesiten los buques para terminarla y hacerse á la mar; cuyos documentos han de ser á satisfaccion del Administrador é Interventor de la salina y bajo su responsabilidad; en la inteligencia de que no será despachado ningun buque por las oficinas de la Aduana y Capitanía del puerto, sin que previamente consignent bajo su firma el Administrador é Interventor de la salina haberse ingresado en metálico efectivo, el importe de la sal entregada; cuyas circunstancias habrán de consignarse en los pagarés, á fin de que los Consules consignatarios ó Capitanes de los buques, no puedan alegar en ningun tiempo daños ni perjuicios, si por falta de pago se detuviese la salida de algun buque.

Y 4.º Que estas disposiciones han de principiar á regir desde 1.º de Mayo próximo.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Abril de 1872.—Camacho.—Sr. Director general de Rentas.

1872.—10 de Agosto.—*Órden disponiendo que se permita conducir por cabotaje á la Fregeneda las sales de la provincia de Cádiz, que con este objeto lleguen de Oporto en bandera nacional, bajo las reglas que se expresan.*

Ilmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), con lo propuesto por V. I. en vista de la instancia presentada por D. Romualdo Robles, del comercio de Santander, ha tenido á bien disponer que



se permita conducir por cabotaje á la Fregeneda las sales de la provincia de Cádiz que con este objeto lleguen á Oporto en bandera nacional, bajo las reglas siguientes:

1.^a Los cargadores presentarán al Administrador de la Aduana de salida, facturas de cabotaje, en las que se hará constar la fábrica de que procede la sal, y ademas un escandallo de estas que se devolverá despues de comprobado con el cargo, y cerrado, para su entrega al Capitan del buque. Verificado el despacho y embarque con las formalidades establecidas en las Ordenanzas de Aduanas y asegurada la Administracion de las existencias del cargamento á bordo, cuya circunstancia se hará constar en las facturas por el funcionario que practique este servicio, se habilitará el buque de salida, y lo participará el Administrador de la Aduana al Cónsul de España en Oporto.

2.^a Tan luego como el buque llegue á Oporto, entregará su Capitan á dicho Cónsul las facturas de cabotaje y escandallo, y procederá á la descarga y almacenaje de la sal bajo la intervencion y reglas que dicte el mismo funcionario, sin perjuicio de las demas establecidas por las leyes de Portugal.

3.^a Para el reembarque de la sal con destino á la Fregeneda en los buques especiales de la navegacion del rio Duero, presentarán igualmente los remitentes al mencionado Cónsul nuevas facturas de cabotaje, cuyos impresos podrán obtener en aquel consulado, en las que se consignará el número y carpeta de las de referencia á que corresponda el cargo. El Cónsul adquirirá el conocimiento de haberse realizado este servicio; y por último autorizará la factura duplicada que entregará al Capitan, así como un escandallo del cargamento, para que sirvan de base al despacho en la Aduana de Fregeneda, á la que dará por el correo el oportuno aviso de salida del buque.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 10 de Agosto de 1872.—Ruiz Gomez.—Sr. Director general de Aduanas.



1872.—30 de Agosto.—*Real orden disponiendo que desde el día 1.º de Setiembre se fije el precio de la sal en grumos de la fábrica de Torrevieja, en la cantidad de 3 pesetas el quintal métrico.*

Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey con lo propuesto por esa Direccion general en 23 del corriente mes, se ha servido disponer que desde el día 1.º de Setiembre próximo venidero, el precio en venta de la sal en grumos de la fábrica de Torrevieja, sea el de 3 pesetas el quintal métrico, en vez de las 4 á que en la actualidad se expende.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 1872.—Ruiz Gomez.—Sr. Director general de Rentas.

1872.—17 de Setiembre.—*Real orden disponiendo que las sales resultantes en poder de los fomentadores en 31 de Marzo de este año, cuya inversion no se haya justificado, se paguen al precio de estanco.*

Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.), del expediente instruido en esa Direccion general, acerca del precio á que deben satisfacer los fomentadores de pesca y salazon, las existencias de sal que resultan en su poder de las recibidas del Estado, segun las cuentas especiales de cada uno;

Y considerando que la Real orden de 4 de Marzo de 1866, dispuso que los fomentadores que en el plazo de un año no justificasen la extraccion de las salazones hechas con la sal recibida, la pagasen al precio de estanco ó la devolvieran al Estado:

Considerando que por la regla 10 de la circular de esa Direccion general de 11 de Diciembre de 1869, quedaron obligados los referidos industriales á justificar la inversion de la sal existente en sus establecimientos en 31 del mismo mes, con arreglo á la legislacion del ramo:

Considerando que ha trascurrido con exceso el plazo de un año, que por equidad se amplió hasta 31 de Marzo último, sin que los fomentadores hayan presentado los documentos de justificacion exigidos;



S. M., conformándose con lo propuesto por ese Centro directivo y la Sección de Letrados de este Ministerio, se ha servido disponer, que las sales que resultaron en poder de los fomentadores de pesca y salazon en 31 de Marzo del año próximo anterior, y cuya inversión no se haya justificado debidamente, se paguen al precio de estanco, ó sea al de 13 pesetas el quintal castellano.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Setiembre de 1872.—Ruiz Gomez.—Sr. Director general de Rentas.

1873.—18 de Febrero.—*Orden del Gobierno de la República, disponiendo que se permita á los fomentadores de salazon de pesca, el embarque de sus productos en los puertos de Vicedo y Cillero con documentacion de la Aduana de Vivero.*

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa Direccion general á consecuencia de una instancia de D. Florentino Plá Sampedro, como representante de varios fomentadores de salazon en los puertos de Vicedo y Cillero, provincia de Lugo, en solicitud de que se les permita el embarque de los productos de su industria por dichos puertos sin necesidad de llevarlos á la Aduana de Vivero, en razon á los perjuicios que con este proceder se les ocasionan.

En su vista:

Resultando de los informes pedidos á la Administracion económica, á la principal de Aduanas, Junta de Agricultura, Industria y Comercio y Comandancia de Carabineros y de Marina de la provincia, que todos unánimes convienen en lo justo de la solicitud de los reclamantes:

Considerando que de tener que llevar los fomentadores los productos de su industria á la Aduana de Vivero, no admitiéndose como puertos directos de embarque á Vicedo y Cillero, se les irrogan perjuicios de tal consideracion, que imposibilitan el tráfico que tantos beneficios proporciona á los habitantes de aquella comarca:

Y considerando que para el reconocimiento del artículo de que se trata basta la inspeccion de los Carabineros, estando como está hoy



desestancada la sal, existiendo en ambos puertos fuerza de dicho cuerpo para vigilar las operaciones;

El Gobierno de la República ha resuelto, que se permita á los fomentadores de salazon de pesca el embarque de sus productos en los puertos de Vicedo y Cillero, con documentacion de la Aduana de Vivero é inspeccion del Cuerpo de Carabineros.

Lo digo á V. I. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Febrero de 1873.—Echegaray.—Sr. Director general de Aduanas.

1873.—15 de Abril.—*Orden del Gobierno de la República, habilitando los puertos denominados Ensenada de Morás ó Portiño, y la playa de Bureta, en la provincia de Lugo, para el desembarque por cabotaje de maderas, jarcias, breas, sales y demas artículos necesarios para la industria de salazon y pesca.*

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa Direccion general á consecuencia de dos instancias presentadas por D. Joaquin Muñiz y Rioboó y D. José María Muñiz, solicitando respectivamente que se habiliten la ensenada de *Portiño* de Morás y la playa de *Bureta*, en la provincia de Lugo, para el desembarque de los artículos necesarios para la industria de salazon y prensa de la pesca, así como tambien para el embarque y exportacion de los productos de esta misma industria:

Resultando de los informes pedidos á las corporaciones oficiales de la provincia perfecta conformidad en que puede accederse á lo solicitado sin que pueda perjudicarse al Tesoro:

Considerando que la industria de que se trata va en creciente desarrollo, siendo el sosten de los habitantes de aquel país:

Considerando que los puertos de Morás y Bureta, reunen las mejores condiciones para el embarque y desembarque, hallándose al pié establecidas las fábricas, lo cual facilita las operaciones sin necesidad de verificarlo en la Aduana de San Ciprian en la cual no siempre pueden arribar los buques;

Y considerando que en los dos mencionados puertos existen des-



tacamentos de Carabineros que pueden intervenir é inspeccionar las operaciones de carga y descarga de los artículos que por otra parte no necesitan de una inspeccion pericial;

El Gobierno de la República ha resuelto que se habiliten los puertos denominados *Esenada de Morás ó Portiño* y la playa de *Burela*, en la provincia de Lugo, para el desembarque por cabotaje de maderas, jarcias, breas, sales y demas artículos necesarios para la industria de la salazon y prensa de pesca; y para el embarque de los productos de esta misma industria con documentacion de la Aduana de San Ciprian y bajo la vigilancia del Cuerpo de Carabineros.

Lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Abril de 1873.—Tutau.—Señor Director general de Aduanas.

1873.—27 de Mayo.—*Orden dictando varias disposiciones relativas al pago de las sales existentes en poder de los fomentadores de pesca y salazon.*

Ilmo. Sr.: Enterado el Gobierno de la República de la consulta elevada por ese Centro directivo á este Ministerio, contraida á las reclamaciones de los fomentadores de pesca y salazon de la Coruña, y á la forma de resolverlas por una disposicion equitativa de carácter general que ponga término á las diferencias surgidas respecto del pago de la sal entregada por la Hacienda á aquellos industriales, con arreglo á las disposiciones vigentes hasta la fecha de la ley de desestanco de dicho artículo de 16 de Junio de 1869:

Resultando que por orden circular de esa Direccion general de 11 de Diciembre de 1869, se determinó que si los fomentadores de que se trata solicitasen hacerse cargo de la sal existente en sus establecimientos, se accediese á su instancia, obligándose á prestar nuevas garantías para responder del importe de la sal al precio de estanco y justificar su inversion con arreglo á la legislacion del ramo:

Resultando que en la generalidad de las provincias salazoneras, no surtió todos sus efectos la enunciada orden circular, por cuyo motivo esa Direccion general, inspirándose en sentimientos de equidad,



concedió á los fomentadores, por órden de 7 de Marzo de 1871, el plazo hasta el fin del propio mes, para presentar en las Administraciones económicas los documentos justificativos de las exportaciones, debiendo pagar en caso contrario las existencias que les resultarán á precio de estanco:

Resultando que transcurrido con exceso dicho plazo sin hacerse efectivos en la forma determinada todos los débitos por el concepto expresado, recayó la Real órden de 17 de Setiembre de 1872, contrada al objeto de apoyar los acuerdos de ese Centro directivo:

Resultando que habiendo sido objeto de reclamaciones por parte de varios fomentadores la enunciada Real órden, el Gobierno de la República por órden de 22 de Abril último, dispuso mantener su eficacia en los casos particulares reclamados; ordenando á la vez á esa Direccion general que, teniendo en cuenta las consideraciones de equidad y justicia que entrañan las reclamaciones presentadas, propusiera la forma de terminarlas por una disposicion de carácter general que dirimiera las dificultades surgidas respecto al pago de la sal, entregada á los fomentadores, con arreglo á las disposiciones que rigieron hasta la fecha de la ley de desestanco:

Vista la expresada ley y las disposiciones referentes al ramo de que se trata:

Considerando que á los fomentadores de pesca y salazon estaba reconocido el beneficio de recibir la sal al fiado y de pagar á 10 rs. la fanega la que invirtiesen en su industria y justificasen haber exportado al extranjero, islas adyacentes y posesiones de Ultramar, debiendo satisfacer la diferencia resultante en cuenta, al precio de estanco:

Considerando que la citada ley de desestanco vino á interrumpir las relaciones entre los fomentadores de sal y pesca y la Hacienda, y á determinar la liquidacion de la cuenta de la sal recibida por los mismos:

Considerando que despues del tiempo trascurrido y cuando las sales abundan en todos los mercados de la Península con notable baratura, la Hacienda experimentaria grandes dificultades y perjuicios en la venta, de la que por consecuencia de dicha liquidacion resulta existente en los respectivos establecimientos salazoneros:

Considerando que al modificar radicalmente dicha ley de desestanco las condiciones de la industria salazonera, han debido variar las



condiciones de existencia de los expresados establecimientos, en razon directa de la baratura del artículo; y que, por consiguiente, exigir el pago de las enunciadas existencias al precio de estanco, ó sea el de 13 pesetas el quintal, originaría honda perturbacion y riesgo de ruina en ese ramo de comercio en que libran su subsistencia infinidad de familias pobres:

Considerando ademas, que durante la época del estanco los ingresos por fomentadores á precio de 13 pesetas establecido por el mismo, fueron muy excepcionales y de escasa importancia, verificándose únicamente de ligeras diferencias en el peso y bonificacion de los productos exportados, porque todo se justificaba en los términos establecidos; y que si ahora en las circunstancias actuales se pretendiese hacer lo que entonces no tenia lugar, tal proceder, aunque legítimo, no dejaria de ser por extremo riguroso;

El Gobierno de la República, conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, ha tenido á bien disponer:

1.º Que las sales que figuran existentes sin justificar en poder de los fomentadores en 31 de Marzo de 1871, se satisfarán por los mismos industriales á razon de 2 pesetas 50 céntimos quintal castellano.

2.º Que el pago se verificará inmediatamente, entendiéndose caducada esta concesion si por parte de los fomentadores se solicitase espera ó próroga.

Y 3.º Que sólo en todos los descubiertos al precio establecido por quintal, la Administracion procederá á devolver por los trámites de reglamento las fianzas que tuvieren prestadas los fomentadores.

De orden del expresado Gobierno de la República lo digo á V. I., con devolucion del expediente, para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1873.—Tutau.—Sr. Director general de Rentas.

1874.—26 de Junio.—Decreto aprobando los presupuestos de 1874 á 1875.

Art. 13. Se restablece el impuesto indirecto sobre el consumo de las especies de comer, beber y arder, el cual se exigirá con arreglo á la tarifa y bases que comprende el Apéndice letra C.



En dicha tarifa se comprenderá un impuesto sobre la sal, consistente en 15 céntimos de peseta por kilogramo como derecho uniforme en todas las poblaciones de España ⁽¹⁾.

1874.—26 de Junio.—*Instrucción general para la administración y cobranza del Impuesto indirecto de Consumos* ⁽²⁾.

Art. 5.º Ninguna corporación, establecimiento, empresa, clase, ni individuo, podrá exceptuarse ni ser exceptuado del pago de esta contribución.

Art. 8.º Las especies gravadas que se inviertan como primeras materias en la elaboración de productos no comprendidos en la tarifa, pagarán los correspondientes derechos.

Cuando figuren en la tarifa así las primeras materias como los productos con ellas elaborados, la Administración podrá dejar en libertad á aquellas y exigir los derechos sobre estos ó vice-versa, procurando siempre en estos casos conciliar los intereses de la Hacienda con los industriales y fabriles.

Art. 12. En ningún caso se consentirá á los Ayuntamientos aumentar los derechos señalados á las especies, ni establecer reglas distintas que las de Instrucción; pero les será permitido disminuir el gravámen y prescindir de reglas fiscales en beneficio de la producción, del comercio y de la industria.

Art. 13. Tampoco les será permitido cobrar ni arrendar con separación los recargos, pues su recaudación se verificará siempre en unión con los derechos del Tesoro y por unos mismos empleados, á fin de evitar los dobles reconocimientos, molestias y vejámenes que al público se causarían.

⁽¹⁾ En la Base 4.ª para el impuesto de consumos, comprendida en el citado Apéndice letra C, se dice: «La sal, como renta estancada que fué, y no especie de consumo, no será gravada con ningún recargo, así como tampoco los cereales.»

⁽²⁾ Nos limitamos á consignar aquellos artículos que puedan tener una más directa é importante aplicación al impuesto sobre la sal.



Art. 14. La Hacienda misma utilizará la facultad de la venta exclusiva cuando administre los derechos de consumo ni cuando los arriende. Tampoco podrán hacerlo los Ayuntamientos, á los cuales no les será permitido en ningun caso recurrir á este medio para cubrir el importe de su encabezamiento.

Art. 45. Tambien se concederán depósitos domésticos, mientras la Administracion no pueda facilitar locales á propósito, á los comerciantes, tratantes y expendedores al por mayor en todas las poblaciones, con la sola excepcion de Madrid, siempre que paguen la contribucion de subsidio en el pueblo, bajo cualquiera de los tres conceptos expresados.

Art. 46. Los depósitos á que se refiere el artículo anterior están obligados:

1.º A introducir durante un año por cada una de las especies que los constituyan, cuando ménos las cantidades de adeudo siguientes:

De aceite, 2.500 kilogramos.

De vino y aguardiente, 3.500 litros.

De granos, 90 unidades de 100 kilogramos.

De sal, 2.500 kilogramos.

2.º A exportar ó extraer para otros pueblos, dentro del mismo plazo, la mitad al ménos de las especies que despachen.

3.º A no tener comunicacion alguna con el interior.

1874.—26 de Junio.—Decreto creando una Direccion de Impuestos indirectos dependiente del Ministerio de Hacienda.

Sr. Presidente: El presupuesto de ingresos aprobado para 1874-75, restablece varios impuestos y crea otros, cuya direccion y planteamiento requieren una accion rigurosa y constante y una actividad proporcionada á lo angustioso del corto plazo que falta para principiar el año económico en que han de regir.

Fundado en esta consideracion, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobacion de V. E. el siguiente proyecto de decreto:



DECRETO.

De acuerdo con el Consejo de Ministros y á propuesta del de Hacienda, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se crea una Direccion general de Impuestos indirectos dependiente del Ministerio de Hacienda, que constará de las plazas y asignaciones que expresa la adjunta planta.

Art. 2.º Este Centro directivo tendrá las mismas atribuciones generales que los demas del mismo Ministerio, y las especiales que las instrucciones y reglamentos le confieran.

Art. 3.º Será de su competencia la direccion y despacho de todos los asuntos referentes á los impuestos de consumos, sal, cereales y ventas; pero la confeccion y surtido á las expendedurias de los sellos con que han de satisfacerse el impuesto últimamente nombrado, continuará á cargo de la Direccion general de Rentas.

Art. 4.º Comprendido el crédito necesario para esta Direccion en el presupuesto de gastos del año próximo, los individuos que á la misma se destinen, no percibirán los haberes marcados en dicha planta, hasta el día 1.º de Julio en que principió el ejercicio del referido presupuesto.

Art. 5.º Los empleados del Cuerpo de Aduanas que habiendo pertenecido á la antigua Direccion de Impuestos indirectos, fueren designados para servir plazas en la nueva, continuarán perteneciendo al mismo Cuerpo en clase de supernumerarios, conservando los derechos que para el ascenso y demas efectos establece el reglamento, hasta que vuelvan á ocupar plazas en el ramo de Aduanas.

Madrid 26 de Junio de 1874.—Francisco Serrano.—El Ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho.

1874.—29 de Julio.—*Orden del Presidente del Poder Ejecutivo de la República, autorizando á los Ayuntamientos para la exaccion de derechos de la tarifa, sobre las sales entrojadas, y las demas especies comprendidas en ella.*

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por esa Direccion ge-



neral á consecuencia de una consulta del Ayuntamiento de Leon, sobre si las sales entrojadas antes de 1.º del actual, y aún no consumidas, han de tenerse en cuenta para adeudar segun tarifa circulada; y teniendo en cuenta que en el espíritu de la ley está que el gravámen impuesto sobre las especies señaladas en la tarifa, debe ser exigido sobre todas las que se consumian desde la fecha del planteamiento del impuesto;

El Presidente del Poder Ejecutivo de la República, de acuerdo con el parecer de esa Direccion general, ha acordado resolver que el Ayuntamiento de Leon puede exigir los derechos de la tarifa sobre las sales entrojadas, antes de 1.º del actual, aforando los puestos públicos y grandes depósitos cuando lo estime conveniente; y al propio tiempo, teniendo en cuenta el carácter de generalidad que debe entrañar esta medida, ha acordado tambien hacerla extensiva á los demas Ayuntamientos de la Nacion con respecto á aquella especie y las demas comprendidas en la tarifa.

De órden del referido Presidente lo digo á V. E. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1874.—Camacho.—Sr. Director general de Impuestos indirectos.

1875.—15 de Abril.—*Real órden exceptuando del impuesto de consumos á la sal que se emplea en la fabricacion de escabeches y conservas.*

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa Direccion general con motivo de una instancia presentada por D. Ramon Cajigal, en su nombre y en el de los fabricantes de escabeches de Santoña, alzándose de un acuerdo de la Administracion económica de Santander, por el que se dispone que satisfagan los derechos correspondientes á la sal que emplean en la industria á que se dedican;

Y considerando que con arreglo al párrafo 2.º del art. 8.º de la Instruccion debe ser libre la sal que se emplea en la fabricacion de los escabeches y conservas, puesto que estos dos artículos, una vez elaborados quedan sujetos al gravámen de tarifa en los puntos en que se verifique su consumo;



S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por V. E., ha acordado exceptuar del pago del impuesto de consumos la sal que se emplea en la fabricacion de escabeches y conservas.

Lo que de Real órden digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Abril de 1875.—Salaverría.—Sr. Director general de Impuestos.

1875.—17 de Abril.—*Real decreto autorizando al Gobierno para conceder á las Corporaciones municipales, por razon de sus encabezamientos, de los impuestos de consumos, cereales y sal en el presente año económico, las rebajas y moratorias que procedan.*

En atencion á las razones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno para conceder á las Corporaciones municipales, por razon de sus encabezamientos de los impuestos de consumos, cereales y sal en el presente año económico, las rebajas y moratorias que procedan segun los expedientes justificativos instruidos á virtud de las reclamaciones presentadas en las Administraciones económicas hasta la fecha de este decreto.

Art. 2.º El pago de los créditos de la Hacienda por los mismos impuestos, por el suprimido impuesto personal y por cualquier otro concepto, se admitirá á los Ayuntamientos deudores los créditos que las mismas corporaciones tengan á su favor por atrasos de sus derechos como partícipes de las rentas públicas, por intereses de sus inscripciones de Deuda consolidada al 3 por 100 devengados hasta fin de Junio de 1874, y por cualquier otro derecho á cargo del Tesoro.

Art. 3.º El Ministro de Hacienda queda encargado de la ejecucion del presente decreto, del cual dará oportunamente cuenta á las Córtes.

Dado en Palacio á 17 de Abril de 1875.—Alfonso.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.



1875.—8 de Mayo.—*Real decreto designando la tarifa que ha de regir en los encabezamientos que por impuesto de consumos hayan de celebrarse para el próximo y siguientes años económicos.*

En vista de lo que me ha expuesto el Ministro de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º En los encabezamientos que por el impuesto de consumos hayan de celebrarse con los Ayuntamientos para el próximo y siguientes años económicos, y en su defecto para la Administracion por cuenta del Estado, regirá la adjunta tarifa. Los derechos que en ella se señalan á la sal ⁽¹⁾ y á los cereales, podrán recargarse hasta igual cantidad para atender á los presupuestos provinciales y municipales.

Art. 2.º Los encabezamientos tendrán por bases el derecho que se señala á las respectivas especies, los habitantes de cada poblacion, los productos de la contribucion de consumos, en lo que se refiere á las especies gravadas en el año económico de 1867 á 1868, y por lo respectivo á los consumos de la sal y cereales, los determinados en el decreto de 26 de Junio de 1874, computados con arreglo á los derechos de la nueva tarifa.

Art. 3.º Se reformará en lo que fuere necesario la Instruccion general, fecha 1.º de Julio próximo pasado para la administracion y cobranza del impuesto de consumos, y el Gobierno dictará las demas disposiciones para la ejecucion de este decreto, del cual dará oportunamente cuenta á las Córtes.

Dado en Palacio á 8 de Mayo de 1875.—Alfonso.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

1875.—9 de Julio.—*Real orden resolviendo una solicitud de D. Francisco Cardoso Pinto, pidiendo se admitan por cabotaje en la Aduana de Frengeneda las sales de Torrevieja, de la provincia de Alicante.*

Ilmo. Señor: Habiendo acudido á este Ministerio D. Francisco

(1) Este derecho por lo que hace á la sal, es de 9 céntimos de peseta en toda España, sin distincion de poblacion, excepto Madrid.



Cardoso Pinto, del comercio de Lumbrales, Salamanca, solicitando se admitan por cabotaje en la Aduana de Fregeneda las sales de Torre vieja, de la provincia de Alicante, que por sus especiales condiciones son de las mejores de España, así como tambien de las demas de la Península, con las formalidades establecidas por Real orden de 10 de Agosto de 1872, para las sales de la provincia de Cádiz:

Considerando que aquella provincia se halla privada de adquirir las primeras por falta de vías de comunicacion por tierra:

Considerando que el permitirse lo que solicita el interesado sería beneficio para el Tesoro, y un modo eficaz de evitar el contrabando que se hace en aquella frontera:

Considerando que por la citada Real orden de 10 de Agosto de 1872, á instancia de D. Romualdo Robles, de Santander, se autorizó la admision para cabotaje en la Aduana de La Fregeneda, de sales de la provincia de Cádiz:

Considerando que por Real orden de 28 de Mayo último, se dispone que el trigo nacional conducido por el Duero desde la Fregeneda á Oporto, y desde este á otro de la Península, en bandera nacional, se considere como conducido de cabotaje:

Considerando como fundamento de tal medida la conveniencia de fomentar el transporte y comercio de los frutos nacionales;

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido mandar se hagan extensivos los efectos de la Real orden de 10 de Agosto de 1872, y las reglas establecidas en la misma, á las sales procedentes de Torre vieja y de cualquiera otra salina de España.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Julio de 1875.—Salaverría.—Sr. Director general de Rentas.

1876.—21 de Julio.—*Ley de presupuestos de 1876 á 1877.*

Art. 7.º Los actuales encabezamientos del impuesto de consumos serán obligatorios por dos años, aumentándose el importe total que hoy representan en la proporcion siguiente:



10 por 100 en las poblaciones que tengan hasta 5.000 habitantes.

15 por 100 en las de 5.001 á 20.000.

20 por 100 en las de 20.001 en adelante.

25 por 100 en las capitales de provincia y puertos habilitados.

.....
Para exigir los derechos de consumo, así en los pueblos encabezados como en los sujetos á arriendo ó administracion, regirá la tarifa adjunta núm. 1.º

Los derechos que señala á la sal y cereales podrán ser recargados hasta igual cantidad por los Ayuntamientos para cubrir sus atenciones ⁽¹⁾.

Art. 9.º Se autoriza al Gobierno:

.....
2.º Para arrendar en participacion y mediante pública subasta salinas de Torrevieja, asegurando el mayor producto que hayan ofrecido en años anteriores.

1876.—24 de Julio.—*Instruccion general para la administracion y cobranza del impuesto de consumos* ⁽²⁾.

Art. 11. Sobre las especies de la tarifa podrán imponerse recargos hasta el 100 por 100 de los derechos, con destino á cubrir atenciones municipales y provinciales.

Art. 12. Cuando por insuficiencia de los recargos máximos sobre las contribuciones de inmuebles, subsidio y consumos se solicitaren otros sobre especies ó artículos no comprendidos en la tarifa, de cualquiera clase que sean, serán oídas precisamente las Administraciones económicas, y las concesiones se harán por quien corresponda, previa conformidad del Ministerio de Hacienda.

(1) Los derechos que señala á la sal la tarifa núm. 1 son nueve céntimos de peseta por kilogramo, cualquiera que sea el número de habitantes ó la clase de poblacion.

(2) Unicamente incluimos los artículos no comprendidos en la Instruccion de 1875 ó los de esta misma que han sido modificados.



En estas concesiones se procurará evitar el doble gravámen de las especies que la industria invierta como primeras materias, y de los productos con ellas elaborados.

Art. 14. Se prohíbe absolutamente el arriendo especial de los recargos y de los arbitrios, con separacion de los derechos del Tesoro, aun cuando pretenda cubrirse bajo el concepto de arriendo, cesion ó traspaso de funciones interventoras.

Art. 81. Mientras la administracion no proporcione locales apropiados para constituir estos depósitos, deberá conceder los domésticos á los comerciantes, tratantes y especuladores al por mayor en todas las poblaciones del Reino, siempre que paguen la contribucion de subsidio bajo cualquiera de los tres conceptos expresados.

En el casco de Madrid no se concederán esta clase de depósitos; pero podrán ser autorizados en las afueras, respecto solamente de aquellas especies que el comercio ó la industria reciben con doble objeto de proveer al consumo de Madrid y al de las provincias limítrofes.

Art. 82. Los depósitos de dicha clase están obligados:

- 1.º A introducir, durante un año, 2.000 kilogramos ó litros, cuando ménos, por cada una de las especies que los constituyan.
- 2.º A exportar ó extraer para otros pueblos, dentro del mismo plazo, la mitad al ménos de las especies que despachen.
- 3.º A no tener comunicacion alguna interior con los puestos de venta al por menor.

Art. 213. Cuando los pueblos hagan efectivos sus cupos por repartimiento vecinal, servirán de bases para verificarle los siguientes tipos.

Los de sal comun no podrán estimarse ni en ménos de 2 ni en más de 6 kilogramos (por habitante).

Estos tipos podrán reducirse hasta la mitad ó aumentarse hasta el triple, para acomodar las cuotas individuales á las especiales circunstancias de las familias.

Art. 217. Ya se verifique el repartimiento por la totalidad del cupo de encabezamiento, ó sólo por déficit, se aumentará á su importe un 5 por 100 para suplir partidas fallidas.



1877.—10 de Abril.—*Real decreto disponiendo que procedan los municipios á hacer efectivos, en las arcas del Tesoro, sus débitos con la Hacienda por los cupos de consumos, cereales y sal del ejercicio corriente, y por los de los anteriores presupuestos.*

En atencion á las razones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Los municipios procederán á hacer efectivos, sin excusa alguna, en las arcas del Tesoro, sus débitos con la Hacienda por los cupos de consumos, cereales y sal del ejercicio corriente de 1876 á 1877; debiendo emplear la Administracion, para conseguirlo, los medios que le proporcionan los contratos celebrados con los mismos, y la Instruccion de 3 de Diciembre de 1869.

Art. 2.º Los débitos que por iguales conceptos tengan por los presupuestos de 1874 á 1875 y 1875 á 1876, los satisfarán entregando con la cuota corriente, á contar desde el presente mes, otra igual á cuenta de atrasos, hasta la total extincion de estos.

Art. 3.º A la menor falta de puntualidad que en lo sucesivo se observe en los pagos así ordenados, los Jefes económicos procederán desde luego, y sin promover consultas, á intervenir los productos de la recaudacion por consumos y á emplear los procedimientos ejecutivos que establece la Instruccion de 3 de Diciembre de 1869.

Art. 4.º Se tendrán por resueltas, con arreglo á este decreto, todas las reclamaciones que se hayan promovido y se hallen en tramitacion al tiempo de ser publicado, sobre concesion de prórogas ó moratorias para el pago de débitos por consumos, cereales y sal, correspondientes al ejercicio corriente y á los dos inmediatamente anteriores.

Dado en Palacio á 10 de Abril de 1877.—Alfonso.—El Ministro de Hacienda, José García Barzanallana.



1877.—19 de Abril.—*Real decreto modificando las bases para el arriendo de las salinas que administra el Estado.*

EXPOSICION.

Señor: Promulgada en 16 de Junio de 1869 la ley de 14 del propio mes y año, declarando libre la fabricacion y venta de la sal desde 1.º de Enero de 1870; y dictadas, por decreto de 5 de Julio siguiente, las reglas bajo las cuales debia el Estado contratar, en pública subasta, el arrendamiento de las salinas que la Hacienda mantuviera transitoriamente en administracion, ya por no haber sido resueltos los expedientes incoados por los que alegaron derechos á la propiedad de unas, ya por no haberse realizado la venta de otras, la experiencia ha demostrado que, ínterin no se modifiquen algunas de las indicadas reglas, faltas al parecer de estímulo para la colocacion de capitales, serán nulos como hasta aquí los esfuerzos que se hagan para obtener productos de las fincas de que se trata. Así lo prueba al ménos el hecho de que, no obstante haberse procurado durante los seis años transcurridos desde la publicacion de la referida ley el arrendamiento de las salinas que se encuentran en el caso antes mencionado, las subastas intentadas con este objeto hayan ofrecido las más veces un resultado absolutamente negativo.

Muy pocas son, sin embargo, pero importantes á juicio del Ministro que suscribe, las alteraciones que juzga necesario introducir en las bases que actualmente rigen para la ejecucion del servicio referido, y éstas se contraen á las condiciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 10.ª y 12.ª de los pliegos que hoy se observan para los arrendamientos.

Consisten las innovaciones en alterar el plazo que ha de mediar entre los anuncios y las subastas; en disponer que asista tambien al acto en la capital el Jefe de la Seccion de Propiedades de la Administracion económica de la provincia; en fijar el tipo que ha de servir de base por el precio medio de la unidad de peso en el mercado, haciendo rebajas que se consideran justas y prudentes, y graduándose por peritos el máximum de productos, probables en el período del arrendamiento, á fin de consignarla como punto de partida para el



mismo. Se establece tambien que la fianza pueda prestarse en valores públicos á los tipos fijados por el decreto de 29 de Agosto último, y que el arrendatario no entre á explotar la salina hasta que recaiga la aprobacion superior, se otorgue la correspondiente escritura y se verifique el pago del importe del primer plazo.

Creyendo conveniente las innovaciones de que se ha hecho mérito, el que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobacion de S. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 16 de Abril de 1877.—Señor: A L. R. P. de V. M., José García Barzanallana.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Hacienda, de conformidad con el dictámen de la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, y de acuerdo con el de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las bases para el arriendo de las salinas que administra el Estado, se modificarán estableciendo en el pliego de condiciones las alteraciones necesarias para hacer constar:

1.º El número de quintales de sal que los peritos calculen han de obtenerse durante el período por que se haga el arriendo.

2.º Que el plazo que ha de mediar entre el anuncio y la primera subasta, ha de ser de 20 días, y de 15 para cada una de las sucesivas.

3.º Que se ha de dar tambien publicidad al acto por medio de carteles fijados en los sitios públicos, en las poblaciones en que las subastas se celebren, debiendo asistir á estas en la capital el Jefe de la seccion de Propiedades de la Administracion económica.

4.º Que el tipo para la subasta se fije por el precio medio de la unidad de peso en el mercado, rebajando el coste de fabricacion en proporcion á la cifra con que resultó gravado cada quintal al Estado, el 10 por 100 por gastos de acarreo y mermas, y el 15 como beneficio industrial, gastos de administracion y otros que deben tenerse en cuenta.



5.º Que si la salina no produce, ó el contratista no extrae ó elabora la cantidad de sal calculada, estará obligado, no obstante, al pago de los quintales de dicho artículo en que se haya apreciado la produccion.

6.º Que la fianza que ha de prestar el contratista en garantía de los útiles y efectos que se le entreguen, podrá prestarse tambien en valores públicos, á los tipos establecidos por Real decreto de 29 de Agosto último ⁽¹⁾.

Y 7.º Que el arrendatario no podrá entrar en la explotacion de la salina hasta que recaiga la aprobacion superior correspondiente, que deberá dictarse dentro de los 20 dias siguientes al del remate, se otorgue la escritura de arriendo y se verifique el pago del importe del primer plazo.

Art. 2.º El decreto de 5 de Julio de 1870 se entiende modificado en cuanto sea contrario á lo que se establece en el artículo precedente.

Art. 3.º La Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, reformará y circulará el pliego de condiciones para el arriendo

(1) El decreto de 29 de Agosto de 1876 establecia lo siguiente:

Artículo 1.º El tipo para la admision de las fianzas que se ofrezcan en valores públicos para garantizar la gestion de los intereses de la Hacienda ó el cumplimiento de los contratos de servicios públicos, será el precio medio que dichos valores hayan tenido durante el mes anterior al en que se deba verificar el afianzamiento.

Art. 2.º Las fianzas que se presten en la forma prevenida en el artículo anterior, podrán revisarse á instancia del Estado, ó del particular ó funcionario que las haya prestado, siempre que habiendo trascurrido un año desde su otorgamiento, haya sufrido una variacion de 3 por 100 en su valor el papel tipo del 3 por 100 consolidado.

Art. 3.º Por los Ministerios respectivos se procederá á asegurar los intereses del Estado en los afianzamientos prestados por funcionarios que tengan anejo á su cargo el deber de hacerlo y sean de libre eleccion del Gobierno.

Art. 4.º Quedan derogadas las disposiciones dictadas anteriormente sobre el particular, en cuanto se opongan á lo mandado en este decreto.



de las salinas, introduciendo en el que hoy rije las variaciones que se consignan en el artículo 1.º de este decreto.

Dado en Palacio á diez y nueve de Abril de mil ochocientos setenta y siete.—Alfonso.—El Ministro de Hacienda, José García Barzanallana.

1877.—11 de Julio.—*Ley de presupuestos de 1877 á 1878.*

Artículo 47. En sustitucion del actual impuesto sobre el consumo de la sal, que se suprime á partir del 1.º de Julio de 1877, se establecen desde la misma fecha los dos siguientes: uno, exigible directamente de los Ayuntamientos, cuyo tipo de imposicion para determinar el cupo correspondiente á cada localidad, será una peseta por habitante; y otro, que se fija en la suma de 1.500.000 pesetas, repartibles entre todos los individuos que exploten salinas, minas y fábricas de sal, en proporcion á la que ordinariamente expendan para el consumo de la Península é islas adyacentes.

Art. 48. En equivalencia del gravámen que el artículo anterior impone á los Ayuntamientos, y que se calcula en 17 millones de pesetas, con arreglo á la poblacion actual, se concede á las referidas corporaciones el derecho de la exclusiva en la venta de la sal, pudiendo ejercitarlo directamente ó por medio de arrendamiento, si no prefiriesen recaudar este impuesto á la entrada de las poblaciones, ó por cualquier otro de los medios establecidos para la contribucion de consumos.

Art. 49. La Administracion de la Hacienda pública formará la estadística de la produccion ordinaria de sal con destino al consumo de la Península é Islas adyacentes, haciendo, con sujecion á ella, el repartimiento entre todos los mineros y fabricantes del cupo fijo de 1.500.000 pesetas, determinado por el art. 47; pudiendo, si lo considera conveniente, celebrar conciertos con los productores para el cobro del impuesto, y quedando autorizada para intervenir, en la forma que estime mejor, las fábricas y minas cuyos explotadores no crean justa la cantidad que se les imponga.

Art. 50. Así el impuesto á cobrar de los Ayuntamientos, como el



imputable á los explotadores, se cobrará por trimestres, siendo procedente la vía de apremio á los quince días del vencimiento.

Art. 51. Los depósitos de sal existentes hoy en las poblaciones, quedarán sujetos al aforo para someterlos al impuesto y á las disposiciones de esta ley.

Art. 52. Queda prohibida la explotacion de minas, fábricas y espumeros de sal y terrenos salobres, y el hacer venta alguna de dicho artículo, sin que previamente se justifique tener satisfecho al corriente el impuesto de fabricacion.

Los que falten á esta disposicion, serán considerados como defraudadores de la Hacienda pública.

Art. 53. Las salinas del litoral que no quieran ser incluidas en el millon y medio de pesetas repartibles entre los fabricantes, no podrán vender sal para el consumo, y de hacerlo quedarán sujetas á las penas impuestas á los defraudadores.

Art. 54. Las salinas de la nacion que se hallan en estado de venta, podran arrendarse, estableciendo como condicion precisa la obligacion del arrendatario á satisfacer el impuesto de fabricacion.

La cantidad que por este concepto se recaude, se rebajará proporcionalmente de la repartida á los demas productores.

Art. 55. La Hacienda pública concurrirá con los particulares á la venta al por mayor de la sal perteneciente al Estado en las salinas de Torre vieja, cuya explotacion conserva en cumplimiento del precepto consignado en el art. 5.º de la ley de 16 de Junio de 1869.

Los precios de venta se fijarán por los del mercado, así para la exportacion como para el consumo interior, teniendo en cuenta respecto de este último, el impuesto de fabricacion que se establece en esta ley.

Art. 56. Se autoriza al Gobierno para arrendar en participacion, y mediante pública subasta, las salinas de Torre vieja, asegurando el mayor producto que hayan ofrecido en años anteriores.

1878.—21 de Julio.—*Ley de presupuestos de 1878 á 1879.*

Artículo 13. Los débitos por consumos, cereales y sal, por el im-



puesto personal y por el 5 por 100 sobre presupuestos municipales, correspondientes á los años anteriores al de 1877 á 1878, se cobrarán en seis años, pagando los pueblos una sexta parte cada uno, pudiendo tambien compensar estos débitos con los créditos que les resulte contra el Estado por sus bienes de propios vendidos.

.....

Los atrasos por los impuestos de consumos, cereales y sal, correspondientes al año económico de 1877 á 1878, se cobrarán de los recursos é ingresos que tambien correspondan al mismo año; y si estos no alcanzan, se hará para cada uno de los Municipios en la forma debida un presupuesto adicional.

Art. 14. Los actuales encabezamientos de consumos, cereales y sal, se declaran permanentes, con los aumentos que en el año actual puedan haber aceptado los Municipios, y las bajas que la Hacienda haya acordado con arreglo á la Instruccion de consumos vigente.

Para imponer aumentos ú obtener bajas se instruirán expedientes justificativos de la pretension, la cual se resolverá con audiencia del Consejo de Estado en pleno, cuyo informe, con la Real orden resolutive, se publicará en la *Gaceta de Madrid*, sin cuya circunstancia no causará efecto.

Art. 15. A los Municipios que en el último censo general de 31 de Diciembre anterior resulten con más de 5.000 almas, que no se rigen por la primera base de poblacion de las que señala la tarifa vigente, se les modificará el encabezamiento al respecto de 6 pesetas por habitante, si no le satisficieren ya superior. Este tipo se considerará reducido á la mitad para las provincias de la Coruña, Orense, Pontevedra y Oviedo, y á la tercera parte para las de Lugo y Canarias.

Queda subsistente la autorizacion concedida por el art. 46 de la ley de presupuestos de 11 de Julio de 1877, entendiéndose que para hacerla extensiva al primer semestre de 1875 á 76, basta acreditar que los pueblos continuaron incomunicados con las autoridades legítimas por las fuerzas rebeldes, hasta el mes de Noviembre de 1875.



1880.—11 de Febrero.—*Proyecto de ley derogando las disposiciones de la ley de presupuestos de 1872, acerca de la exaccion del impuesto sobre las industrias de venta de sal comun ó purificada, de tabacos de todas clases procedentes de Ultramar, y de aceite mineral y gas-mille.*

Por la base 6.^a, apéndice letra B de la ley de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1872, se dispuso que se impusiesen y exigiesen, con separacion é independencia de toda otra cuota, modificando en esto el art. 33 del reglamento de 20 de Marzo de 1870, las que se hubiesen señalado por el mismo reglamento, ó posteriormente á las industrias de sal comun ó purificada, de tabacos de todas clases procedentes de Ultramar, y de aceite mineral y gas-mille.

Esta desviacion de los principios por que se ha regido entonces y ahora la contribucion industrial, obedecia á la necesidad evidente que sentia el Gobierno de sustituir de alguna manera el gran vacío que en sus recursos habia dejado la supresion del impuesto de consumos y el abandono del monopolio de la sal y del tabaco.

El restablecimiento de aquel impuesto, la vuelta al monopolio del tabaco y la creacion de diferentes gravámenes especiales sobre el consumo y fabricacion de la sal, hacen innecesario el que viene hoy todavía pesando sobre las industrias de venta de dicho artículo y de aceite mineral y gas-mille, permitiendo atender las fundadas quejas de los industriales, que reclaman salir de la situacion anormal en que los colocó la ley de 26 de Diciembre de 1872, agravada con la creacion de los nuevos impuestos.

Fundado en las breves consideraciones que preceden, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á los Cuerpos Colegisladores el siguiente

PROYECTO DE LEY.

Artículo único. Las industrias de sal comun ó purificada, y de aceite mineral y gas-mille, que por virtud de lo dispuesto en la base 6.^a, apéndice letra B de la ley de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1872, vienen satisfaciendo con separacion de toda otra cuota



las señaladas por dicho concepto, sólo satisfarán en adelante las que les correspondan, conforme á lo que se determina en el reglamento y tarifas vigentes de la contribucion industrial.

Madrid 13 de Febrero de 1880.—El Ministro de Hacienda, el Marqués de Orovio.

1880.—6 de Marzo.—Circular de la Direccion general de Impuestos, reproduciendo y ampliando las reglas contenidas en la de 25 de Marzo de 1878, á fin de prevenir y vencer las dificultades producidas en la recaudacion de los impuestos de consumos y cereales y sal.

«Perseverando esta Direccion general en el propósito de prevenir y vencer las dificultades que causa en la recaudacion de los impuestos de consumos y cereales y sal la negligencia de algunos Municipios en acordar los medios de satisfacerlos, á que se refiere el art. 186 de la Instruccion de 24 de Julio de 1878, considera conveniente recordar á V. S. para su puntual observancia y la de los Municipios, asociados y contribuyentes, las reglas contenidas en la circular de 25 de Marzo de 1878, reproduciéndolas y ampliándolas como sigue:

DEL IMPUESTO DE LA SAL.

62. Segun las reglas establecidas por Real orden de 14 de Julio de 1877, la cobranza de este impuesto puede obtenerse por los medios siguientes:

1.º Por Administracion municipal, ó sea exigiendo y cobrando á la entrada de la poblacion sobre cada 100 kilogramos de sal que se introduzcan con destino al consumo, el derecho que con arreglo á la autorizacion contenida en el precepto primero de la citada Real orden acuerde la Municipalidad.

2.º Por encabezamiento parcial con los tratantes en la especie, ó sea expendedores en la localidad y su término y consumidores al por mayor si estos adquieren la sal de fuera.

3.º Por arriendo, con libertad en las ventas, de los derechos se-



ñalados por el Ayuntamiento sobre dicho artículo con destino al consumo de la localidad.

4.º Por arriendo de dichos derechos con la facultad exclusiva en las ventas; y

5.º Por repartimiento vecinal de todo el cupo, ó del déficit, si le hubiera, por no haberse obtenido por concierto, arriendo ó administración municipal más que las dos terceras partes del señalamiento.

63. Atendida la semejanza del impuesto de la sal al de consumos y cereales, los Ayuntamientos acordarán con oportunidad, ó sea el 25 de este mes, los derechos que la sal haya de satisfacer en el próximo año económico; y si lo estiman conveniente, puede incorporarse el derecho que ha de pagar la sal á la tarifa de consumo y cereales, y administrar, concertar ó encabezar y arrendar sus derechos como otro artículo cualquiera de los comprendidos en dicha tarifa, si el Ayuntamiento no hiciese uso de la facultad exclusiva en las ventas.

64. No obstante la regla anterior, los Ayuntamientos menores de 5.000 almas que obtengan de las Diputaciones provinciales la facultad de la exclusiva, podrán incorporar al arriendo de los derechos de los artículos autorizados, el de la sal.

65. El repartimiento podrá verificarse, segun autoriza la Real órden de 27 de Enero último, juntamente y en el mismo reparto que se haga por consumos y cereales, empleando iguales procedimientos, verificándolo en los mismos plazos, los mismos encargados de la formacion del otro, con sólo poner la expresion adecuada en el encabezamiento y pié, y añadir una columna que diga *cuota de la sal*, y otra que totalice esta y la anterior de consumos y cereales, en esta forma: (*sigue el modelo*).

66. En lo relativo al reparto de la sal, deben seguirse los mismos procedimientos preceptuados por consumos y cereales, verificando el reparto segun el siguiente modelo: (*sigue el modelo*).

67. Aunque es potestativo en los Ayuntamientos formar un reparto por cada uno de los dos impuestos de consumos y cereales y de la sal, ó comprender los dos impuestos en un solo reparto, se les recomienda, como más económico y ménos trabajoso, la formacion de uno solo.

Esta Direccion general excusa encarecer á V. S. nuevamente la



necesidad de que se observen con exactitud las anteriores reglas, porque á su buen juicio deja el aprecio de lo mucho que con ellas se facilita la oportuna recaudacion, tendiendo á vencer las dificultades de localidad que repetidamente se ofrecen.

Del recibo de esta órden, y de haberla publicado en el *Boletín Oficial* de esa provincia, se servirá V. S. darme inmediatamente aviso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Marzo de 1880.—
Cárlos Grotta.—Sr. Jefe de la Administracion económica de la provincia de.....



APÉNDICE III.

ESTADO general de los productos de la renta de salinas desde 1482 hasta 1839 (1).

AÑOS.	PRODUCTO.		GASTOS.	
	Maravedises.		Maravedises.	
1482.....	3.213.171		»	
1504.....	2.846.087		»	
1577.....	93.000.000		»	
1607.....	93.000.000		»	
	Reales.	Maravedises.	Reales.	Maravedises.
1752 á 57.....	33.596.909	28	15.024.989	9
1787.....	55.408.934	»	21.918.643	»
1788 á 92.....	58.305.429	13	28.288.253	6
1793 á 97.....	71.820.270	7	32.051.650	20
1803 á 807.....	63.217.603	»	25.065.322	»
1814.....	60.916.298	»	24.348.838	»
1824.....	72.045.100	»	465.447	»
1825.....	76.496.113	»	634.405	»
1826.....	75.356.701	»	171.601	»
1829.....	77.637.391	10	»	»
1830.....	70.183.144	27	»	»
1831.....	67.875.439	13	»	»
1832.....	72.620.523	29	»	»
1833.....	68.916.291	1	»	»
1834.....	70.505.163	6	11.626.840	»
1835.....	59.275.433	31	14.498.246	31
1836.....	56.733.519	10	14.663.239	20
1837.....	43.810.455	26	14.392.734	27
1838.....	53.597.503	19	16.636.077	32
1839.....	57.063.841	5	»	»

(1) Tomamos estos datos de la interesante obra de D. José Lopez Juana Pinilla, *Biblioteca de Hacienda de España*.



APÉNDICE IV.

ESTADO de los valores de la renta de la sal en el año 1850.

ADMINISTRACIONES.	SAL.		PRECIO de venta.	VALOR. Rs. vn.	
	Fanegas de 112 libras.	Núm. de ladrillos			
Sal vendida en los alfolíes á precio de estanco..	Comun	1.726.235 87	"	Diferentes.	89.674.486 13
	Espuma	303 56	"	A 1 real libra.	33.992
	Purgante.....	327 85	"	Diferentes.	14.729
	Ladrillos	"	378	A 6 rs. uno.	2.278
	Descontado á conductores.....	4.077 1 8	"	Diferentes.	210.701 21
		1.730.944 5 8	378		89.936.117
Idem á precio de fábrica.....	Venta á ganaderos..	6.305	"	A 42 rs. fanega.	268.170
	Id. á fabricantes químicos	10.037 28	"	Diferentes.	124.811 14
	Id. á los de vidrio y loza.....	312	"	Idem.	3.744
Productos varios.....	Diferencia en las ventas por arrobas ...	"	"	"	"
	Entrega á fomentadores.....	192.213 44 5	"	A fiado.	"
	Cobrado á los mismos.....	"	"	"	"
	Multas á defraudadores.....	"	"	"	"
	Comisos	"	"	"	"
	Reintegros.....	"	"	"	"
	Rectificación de cuentas.....	"	"	"	"
		1.939.891 77 13	378		92.698.536 11
FÁBRICAS.					
—					
Sal vendida en las fábricas para extraer del reino.....	1.028.854 3	"	Diferentes.	1.714.958 17	
Varios productos.....	Venta de efectos inútiles y otros productos de fábricas.	"	"	"	48.130 19
	Arriendos de fincas..	"	"	"	30.099
		2.968.745 80 13	378	Total.....	94.491.724 13

APÉNDICE IV. bis

ESTADO de las ventas de sal por provincias en 1850.

PROVINCIAS.	FANEAS DE 112 LIBRAS.				VALORES. Reales vellon.
	Ventas en los alfolios.	Idem á ganaderos, fabricantes y fomentadores.	Idem al extranjero.	Número de ladri- nos.	
Albacete.	24.621 58	1.142 56	"	"	1.325.918 *
Alicante.	26.792 38	"	889.877	"	2.866.081 13
Almería.	22.355 104	"	"	"	1.162.508 6
Avila.	26.674 10	"	"	"	1.387.053 31
Badajoz.	35.869 42	92	"	"	1.867.475 17
Barcelona.	108.492	6.707	"	"	5.710.184 *
Búrgos.	37.266 18	"	"	"	1.937.840 11
Cáceres.	36.480 26	"	"	"	1.896.974 3
Cádiz.	33.365 38	5.789	"	"	1.831.785 17
Castellon de la Plana.	48.897 100	"	"	"	2.512.691 13
Ciudad-Real.	31.531 84	56	"	"	1.642.003 14
Córdoba.	46.727 67	"	"	"	2.430.297 31
Coruña.	94.510 81	78.910 70	"	"	5.680.227 4
Cuenca.	38.816 62	1.209	"	"	2.069.238 28
Gerona.	32.781 28	6.640 23 5	"	"	1.792.670 8
Granada.	49.686 8 8	50	"	"	2.585.774 30
Guadalajara.	29.176 41	5.734	"	"	1.602.541 31
Huelva.	15.310 28	30.683 84	"	"	1.473.876 14
Huesca.	39.212 65	76	"	"	2.043.806 27
Jaén.	33.495	323	"	"	1.755.306 *
Leon.	67.818 80	"	"	"	3.526.575 5
Lérida.	36.705 96	"	"	"	1.012.203 *
Logroño.	12.557 108 8	"	"	"	653.014 15
Lugo.	61.374 14	7.687	"	"	3.255.014 18
Madrid.	70.626 35	320 56	"	378	3.706.235 7
Málaga.	47.148 69	4.728 7	"	"	2.511.618 9
Murcia.	23.412 56	1.223	27.765	"	1.297.199 17
Orense.	56.581 94	"	"	"	2.912.265 12
Oviedo.	53.113 79	3.903	"	"	2.708.888 8
Palencia.	25.955 87	"	"	"	1.349.700 2
Pontevedra.	26.085 60	50.312	"	"	1.817.218 31
Salamanca.	40.495	"	"	"	2.105.740 *
Santander.	24.563 16	1.121	"	"	1.297.369 33
Segovia.	19.462 44	"	"	"	1.011.992 17
Sevilla.	56.012 32 12	"	"	"	2.914.199 5
Soria.	26.118 84 12	"	"	"	1.358.175 12
Tarragona.	34.232	"	"	"	1.780.064 *
Teruel.	21.741 18	1.837	"	"	1.207.695 4
Toledo.	41.404 84	163	"	"	2.316.102 25
Valencia.	56.342 62	205	"	"	2.938.422 21
Valladolid.	27.584	"	"	"	1.434.368 *
Zamora.	33.486 5	"	"	"	1.741.276 16
Zaragoza.	34.091 100	"	"	"	1.772.783 4
Islas Baleares.	18.846	"	101.212 3	"	1.179.057 30
	1.730.944 5 8	208.947 72 5	1.028.854 3	378	91.311.406 11
		2.968.745 80 13			
		Productos varios obtenidos en las fábricas y adminis- traciones.			150.318 2
					91.491.724 13

APÉNDICE V.

ESTADO de las toneladas métricas de sal entradas por cabotaje en los puertos de España, comparadas en el total de mercancías.

AÑOS.	TONELADAS DE 1.000 KILOGRAMOS.		RELACION de la sal con mercancías.	
	Sal.	Todas las mercancías.		
1864.....	42.891	835.805	5'13 por 100	Estanco.
1865.....	53.113	701.546	7'57 —	
1866.....	75.132	846.976	8'86 —	
1867.....	60.497	694.950	8'70 —	
1868.....	47.773	668.549	7'14 —	
1869.....	30.204	605.761	4'96 —	
Promedio...	309.610	4.353.587		Libre tráfico.
	51.601	725.597	7'11 por 100	
1870.....	382.701	947.866	40'37 por 100	
1871.....	226.735	929.505	24'39 —	
1872.....	338.726	1.042.244	32'49 —	
1873.....	216.287	961.831	22'48 —	
1874.....	303.755	983.120	30'80 —	
1875.....	249.707	1.055.246	23'40 —	
Promedio...	1.717.911	5.929.812		
	286.318	988.302	28'97 por 100	

APÉNDICE VI.

SAL exportada al extranjero por las Aduanas de la Península é Islas Baleares.

AÑOS.	TONELADAS de 1.000 kilogramos.	PESETAS.	
1864.....	194.076	3.754.360	} Estanco.
1865.....	134.336	2.600.060	
1866.....	177.108	2.614.295	
1867.....	185.484	2.363.077	
1868.....	195.106	1.899.295	
1869.....	237.007	2.177.020	
	1.123.117	15.408.107	} Libre tráfico.
Promedio.....	187.186	2.568.018	
1870.....	150.188	6.007.501	
1871.....	205.994	8.239.770	
1872.....	220.061	8.802.456	
1873.....	214.903	8.596.104	
1874.....	247.736	9.909.447	}
1875.....	269.778	6.506.233	
	1.308.660	48.061.511	
Promedio.....	218.110	6.010.252	



APÉNDICE VII.

ESTADO de la ganadería según el censo de 1865.

NÚMERO DE PROPIETARIOS DE GANADO							
	Caballar.	Mular.	Asnal.	Vacuno.		Lanar.	Cabrío.
De 1 cabeza.....	272.007	243.280	583.405	119.806	De 1 á 5 cabezas.....	187.391	147.676
De 2.....	70.774	185.429	215.884	255.736	De 5 á 10.....	124.560	53.381
De 3 á 5.....	28.750	70.320	58.387	238.535	De 10 á 20.....	106.451	39.833
De 5 á 10.....	7.114	15.537	6.952	101.748	De 20 á 50.....	96.219	26.076
De 10 en adelante.....	4.108	3.452	2.068	29.493	De 50 á 100.....	43.837	9.983
					De 100 en adelante.....	48.054	7.215
Número total de propietarios.	382.753	518.018	866.696	754.318		606.512	284.200

APÉNDICE VIII.

ESTADO de los gastos de fabricación de sal en el año de 1850 de la sal elaborada y el coste á que ha salido la fanega de 112 libras á pié de fábrica.

PROVINCIAS.	Sueldos de la Administración especial de las fábricas.	Ídem de los resguardos.	Asignación para gastos de escritorio.	Gastos ordinarios de elaboración.	Total de gastos.	Sal elaborada. Fanega de 112 libras.	Coste de cada fanega al pié de fábrica por término medio.
Albacete.....	60.288 29	72.306 16	3.374 25	46 284 11	181.424 13	35.539 91	3 33 $\frac{52}{100}$
Alicante.....	107.923 11	390.650 12	6.199 26	1.456.085 "	1.960.858 15	811.309 16	
Almería.....	27.315 31	32.403 20	1.424 31	246.769 10	307.913 24	44.466 12	
Barcelona.....	19.499 22	91.392 30	1.399 26	6.074 22	118.366 32	67.451 4 $\frac{1}{2}$	
Búrgos.....	91.747 14	73.842 06	6.233 04	762.229 27	915.319 33	159.375 4 $\frac{1}{2}$	
Cádiz.....	138.133 17	748.857 26	7.482 33	400.156 33	1.294.591 07	406.668 110	
Córdoba.....	60.139 28	176.153 05	5.399 25	43.201 27	284.894 17	36.022 10	
Cuenca.....	81.905 12	118.400 32	6.499 02	117.236 09	324.041 21	57.796 53	
Granada.....	71.789 09	95.632 31	6.507 16	64.377 10	238.306 32	39.442 50	
Guadalajara.....	133.450 03	108.855 04	7.599 30	183.862 07	424.883 28	176.185 4 $\frac{1}{2}$	
Huesca.....	43.401 08	162.002 32	5.416 14	64.395 16	275.217 02	33.125 36	
Jaén.....	99.719 04	126.744 23	7.699 01	63.244 14	297.407 08	41.978 71	
Lérida.....	18.196 01	54.854 12	1.349 17	128.913 25	203.313 21	19.183 "	
Madrid.....	104.474 14	86.237 "	9.700 "	59.064 24	259.476 04	79.959 90	
Murcia.....	114.025 13	246.977 21	6.898 26	127.412 08	495.314 "	21.681 67	
Santander.....	15.140 08	54.226 05	966 20	44.998 "	115.330 33	6.684 "	
Sevilla.....	81.022 04	180.045 22	6.782 16	115.428 15	383.278 23	25.955 106	
Tarragona.....	45.098 13	100.161 09	2.566 19	856.027 02	1.003.853 09	199.250 "	
Teruel.....	69.348 28	79.993 30	5.899 14	26.201 17	181.443 21	23.309 109	
Valencia.....	16.316 25	146.452 06	900 "	36.304 15	199.973 12	12.505 109	
Valladolid.....	"	7.900 14	"	2.868 "	10.768 14	765 109	
Zaragoza.....	45.675 04	288.378 "	4.499 22	82.564 07	421.116 33	47.711 05	
Baleares.....	49.354 20	24.546 03	1.375 "	195.705 22	288.721 11	189.009 72	
TOTALES.....	1.493.965 12	3.485.015 19	106.174 27	5.129.406 15	10.185.816 05	2.535.377 90	



APÉNDICE IX.

CUADRO de sueldos y gratificaciones del Resguardo de salinas, conforme al Reglamento de 1858.

Número	CLASES.	Haber anual.	Su importe.	Gratificación anual para caballo.	Su importe.	Gastos de escritorio anual.	Su importe.	TOTAL general.
2	Comandantes de 1. ^a ...	16.000	32.000	1.825	3.650	900	1.800	37.450
13	Idem id. de 2. ^a	12.000	156.000	Id.	23.725	700	9.100	188.825
6	Idem de 3. ^a	10.000	60.000	Id.	10.950	500	3.000	73.950
6	Idem de 4. ^a	8.000	48.000	Id.	10.950	300	1.800	60.750
3	Idem segundos.....	8.000	24.000	Id.	5.475	"	"	29.475
22	Sargentos	5.000	110.000	"	"	"	"	110.000
68	Cabos de infantería...	4.000	272.000	"	"	"	"	272.000
189	Dependientes id. de 1. ^a	3.285	620.000	"	"	"	"	620.865
960	Idem id. de 2. ^a	2.920	2.803.200	"	"	"	"	2.803.200
3	Cabos de caballería...	4.000	12.000	1.825	5.475	"	"	17.475
4	Dependientes de 1. ^a ...	3.285	13.140	Id.	7.300	"	"	20.440
12	Idem id. de 2. ^a	2.920	35.040	Id.	21.900	"	"	56.940
10	Patrones	5.000	50.000	"	"	"	"	50.000
9	Sota-patrones.....	4.000	36.000	"	"	"	"	36.000
15	Marineros de 1. ^a	3.285	49.275	"	"	"	"	49.275
86	Idem de 2. ^a	2.920	251.120	"	"	"	"	251.120
1.408		"	4.572.640	"	89.425	"	15.700	4.677.765

RESÚMEN GENERAL.

Sueldos.....	4.572.640	} 4.677.765
Gratificaciones de caballo	89.425	
Escritorio	15.700	



APÉNDICE X.

CUADRO orgánico del resguardo de salinas con arreglo al Reglamento de 1858.

PROVINCIAS.	COMANDANCIAS.	CLASES.	PERSONAL.												TOTAL.	
			COMAN- DANTES.		INFANTERÍA.				CABALLERÍA.			MAR.				
			Jefes.	Segundos.	Sargentos.	Cabos.	Dependientes de 1. ^a	De 2. ^a	Cabos.	Dependientes de 1. ^a	De 2. ^a	Patrones.	Sota-patro- nes.	Dependientes de 1. ^a		De 2. ^a
Alicante....	Torre vieja....	1. ^a	1	1	1	5	20	100	1	1	3	1	9	1	3	138
Cádiz.....	San Fernando	Id.	1	1	1	6	20	130	1	1	3	6	9	10	64	253
Búrgos....	Poza.....	2. ^a	1	1	1	3	6	24	1	1	3	1	1	1	1	35
Córdoba....	Duernas....	Id.	1	1	1	3	7	40	1	1	3	1	1	1	1	52
Cuenca....	Minglanilla..	Id.	1	1	1	1	5	25	1	1	3	1	1	1	1	33
Granada....	Loja.....	Id.	1	1	1	3	5	31	1	1	3	1	1	1	1	41
Guadalajara.	Imon.....	Id.	1	1	1	4	6	35	1	1	3	1	1	1	1	47
Jaen.....	Don Benito..	Id.	1	1	1	3	7	40	1	1	3	1	1	1	1	52
Huesca....	Naval.....	Id.	1	1	1	3	12	60	1	1	3	1	1	1	1	77
Madrid....	Espartinas...	Id.	1	1	1	3	5	24	1	1	3	1	1	1	1	34
Málaga....	Fuente piedra.	Id.	1	1	1	2	5	34	1	2	6	1	1	1	1	52
Murcia....	Sangonera....	Id.	1	1	1	5	12	62	1	1	3	1	1	1	1	81
Sevilla....	La Torre....	Id.	1	1	1	3	7	44	1	1	3	1	1	1	1	56
Tarragona..	Alfaques....	Id.	1	1	1	1	6	22	1	1	3	1	1	1	3	36
Zaragoza...	Remolinos...	Id.	1	1	1	4	16	82	1	1	3	1	1	1	1	105
Albacete....	Pinilla.....	3. ^a	1	1	1	2	5	19	1	1	3	1	1	1	1	28
Almería....	Roquetas....	Id.	1	1	1	1	6	12	1	1	3	1	1	1	1	21
Barcelona...	Cardona....	Id.	1	1	1	1	5	19	1	1	3	1	1	1	1	27
Pontevedra..	Pontevedra..	Id.	1	1	1	1	4	20	1	1	3	1	1	1	1	27
Teruel.....	Arcos.....	Id.	1	1	1	3	5	20	1	1	3	1	1	1	1	30
Valencia....	Manuel.....	Id.	1	1	1	1	6	30	1	1	3	1	1	1	1	39
Baleares....	Ibiza.....	4. ^a	1	1	1	1	3	12	1	1	3	1	1	1	2	22
Huelva.....	Huelva.....	Id.	1	1	1	1	2	6	1	1	3	1	1	2	14	27
Lérida.....	Gerrí.....	Id.	1	1	1	1	4	12	1	1	3	1	1	1	1	18
Logroño....	Logroño....	Id.	1	1	1	2	4	20	1	1	3	1	1	1	1	27
Santander...	Cabezón....	Id.	1	1	1	2	3	12	1	1	3	1	1	1	1	18
Toledo.....	Quero.....	Id.	1	1	1	2	2	14	1	1	3	1	1	1	1	19
RESGUARDOS ESPECIALES.																
Castellón....	»	»	»	»	»	1	1	7	»	»	»	»	»	»	»	9
Palencia....	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2
Valladolid...	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2
			27	3	22	68	189	960	3	4	12	10	9	15	86	1.408

RESÚMEN.

Comandantes-Jefes.....	27
Segundos comandantes.....	3
Sargentos.....	22
Cabos.....	71
Patrones.....	10
Sota-patrones.....	9
Dependientes de 1. ^a	208
Dependientes de 2. ^a	1.058



ÍNDICE.

	Páginas.
PRÓLOGO.	I
CAPÍTULO PRIMERO.—Necesidad de conocer los antecedentes de la legislación relativa á la industria salinera.—Legislación romana.—Estado del derecho hasta D. Alfonso X.—Derecho de Partidas.—Leyes dictadas por Alfonso XI y sus inmediatos sucesores.—Reforma introducida por los Reyes Católicos.—Indicaciones sobre el derecho vigente en Aragon.	3
CAPÍTULO II.—Exámen de las Pragmáticas de Felipe II.—Establecimiento del estanco.—El Consejo de la sal.—Nuevas y onerosas cargas que se imponen sobre este artículo: reclamaciones que suscitan y obstáculos que crean.—El sistema de acopios.—Recargos y derechos establecidos sobre el precio de la sal: dificultades con que tropiezan.—Sistema seguido en la administración de la renta de la sal hasta principios del presente siglo.—Proyecto de desestanco de 1820.—Exámen de las disposiciones dictadas desde esta fecha hasta 1855.—Nuevo proyecto de desestanco.—Exposición detallada de las disposiciones dadas hasta 1869.—Indicaciones sobre la historia de la legislación relativa á la industria salinera de Ultramar.	27
CAPÍTULO III.—Proyecto de desestanco de 1869.—Discusión del mismo en el Congreso.—Ley de 16 de Junio de 1869.—Exámen detallado de las disposiciones dictadas hasta 1877.—Tentativa de reestanco en este último año.—Disposiciones posteriores hasta fin de 1879.	101
CAPÍTULO IV.—Síntesis de los capítulos precedentes.—Resultados producidos por la ley de desestanco y las disposiciones posteriores.—Criterio bajo que debe estudiarse esta materia.—Relaciones entre la nueva legislación, el precio del producto y los intereses fiscales.—Influencia de aquella en el consumo.—Desarrollo del comercio de cabotage y de la industria de acarreo.—Beneficiosos resultados para la ganadería, salazones y otras industrias que consumen sal.—Fomento de este ramo de la minería.—El nuevo derecho y el contrabando.—Resultados poco favorables de algunas disposiciones posteriores á la ley de desestanco.	141
CAPÍTULO V.—Régimen legal de la industria salinera.—Cuál es el más conveniente á la misma.—Forma en que debe plantearse el problema.—Exámen de la cuestión en el orden de los principios, en armonía con el concepto del Estado.—Investigación dentro	



de ese mismo orden de la procedencia del reestanco.—Consideracion especial del estanco relativamente á la materia penal.—Conclusion en favor del sistema de libertad.	155
CAPÍTULO VI.—Régimen económico de la industria salinera.—Estudio del estanco con relacion á los principios de la concurrencia y del interes personal.—Comprobacion de nuestra doctrina por el testimonio de algunos escritores.—Exposicion y examen de los funestos resultados que en el orden económico produce el estanco.	169
CAPÍTULO VII.—Continuacion del estudio sobre el régimen económico de la industria salinera.—Determinacion del régimen que se debiera establecer supuestos los anteriores precedentes.—Diferentes tendencias que se notan en el derecho positivo y en los escritores de distintos países.—Sistema de absoluta libertad.—Sistema que defiende la posibilidad, procedencia y justicia de un aumento indefinido del impuesto: examen de la teoría de la desaparicion del impuesto por la division del mismo.—Nuestra opinion sobre el régimen que debiera establecerse.	181
CAPÍTULO VIII.—Régimen administrativo de la industria salinera.—Importancia de la cuestion y forma en que debe plantearse.—Datos que suministra para la resolucion del problema el estudio histórico de nuestra legislacion relativa á la industria salinera.—Relacion que debe existir entre el régimen legal y económico y el administrativo.—Exámen del sistema de encabezamientos.—Necesidad de un régimen administrativo estable.—La concurrencia del Estado con los particulares y la venta de las salinas que conserva el mismo en sus relaciones con el régimen administrativo.	205

APÉNDICES.

APÉNDICE I.—Real Cédula de Felipe III de 1609.	219
APÉNDICE II.—Coleccion legislativa de la industria salinera libre.	221
APÉNDICE III.—Estado general de los productos de la renta de salinas desde 1482 hasta 1839.	300
APÉNDICE IV.—Estado de los valores de la renta de la sal en el año 1850.	301
APÉNDICE IV (<i>bis</i>).—Estado de las ventas de sal por provincias en 1850.	302
APÉNDICE V.—Estado de las toneladas métricas de sal entradas por cabotaje en los puertos de España, comparadas en el total de mercancías.	303
APÉNDICE VI.—Sal exportada al extranjero por las Aduanas de la Península é Islas Baleares.	304
APÉNDICE VII.—Estado de la ganadería segun el censo de 1865.	305
APÉNDICE VIII.—Estado de los gastos de fabricacion de sal en el año de 1850 de la sal elaborada y el coste á que ha salido la fanega de 112 libras á pié de fábrica.	306
APÉNDICE IX.—Cuadro de sueldos y gratificaciones del Resguardo de salinas, conforme al Reglamento de 1858.	307
APÉNDICE X.—Cuadro orgánico del resguardo de salinas con arreglo al Reglamento de 1858.	308



ERRATAS IMPORTANTES.

PÁGINA.	LÍNEA.	DICE.	DEBE DECIR.
4	14	atravesará	atravesarán
5	32	ni	in
Id.	33	adeptum	ademptum
7	26	codem	codem
Id.	27	præbendum	præbendum
Id.	Id.	locaverun	locaverunt
Id.	28	consoribus	censoribus
Id.	30	oucratas	oneratas
Id.	31	Satinatoris	Salinatoris
17	17	el	el daño
23	16	incurria	incurriaa
25	3	ventas	rentas
51	3 y 4	necesitasen	necesitase
55	10	que de	de
61	20	años	año
83	13	formalizara	formalizaran
90	última	Lículo	Sículo
120	16	unos	uno
157	2	en ellos	de ello
Id.	12	moción	noción
183	4	restablecerlos	restablecerlo
187	1	asimismo	á mi mismo
192	15	ignoran	ignoran
194	4	admiten	admite
199	13	de	de los
207	21 y 22	rebajase	rebajasen
210	3	lo	la
211	14	una	esa







